

Observatorio Social de América Latina

■ I. La refundación conservadora del capitalismo latinoamericano

Las transformaciones económicas y sociales ocurridas en nuestra región desde mediados de los años setenta, inspiradas en las recomendaciones del Consenso de Washington, han alterado radicalmente la fisonomía del capitalismo latinoamericano. Tanto en sus variantes “democráticas” como en sus vertientes despóticas la aplicación de las políticas neoliberales dio origen a una serie de resultados llamados a ejercer una profunda y duradera influencia en nuestras sociedades. Señalemos apenas algunos de las más importantes. Por una parte, la detención del moderadísimo avance que desde los años de la posguerra se registraba en la reducción de la pobreza y la extensión de un conjunto de derechos económicos y sociales a amplios sectores de las clases y capas populares, todo lo cual implicaba una cierta democratización de la estructura social y una vocación modernizante que, más allá de sus estrechos límites, se proponía constituir un mercado interno dinámico mediante la integración subordinada de las clases populares al mercado y al estado. Por la otra, y como resultado tanto de esa reversión tendencial como de la virulencia del impulso reactivo, las políticas neoliberales terminaron produciendo una verdadera refundación reaccionaria de las sociedades latinoamericanas. Las manifestaciones más sobresalientes de este proceso son la espectacular concentración de la riqueza y el empobrecimiento generalizado de los asalariados y las masas populares, fenómenos éstos que no dejan de asombrar por su magnitud aún en un continente como el nuestro, con una larga historia de explotación y opresión y unánimemente considerado como el más desigual del planeta. Por último, esta preocupante involución tuvo lugar en contextos políticos signados sea por dificultosos –inestables, precarios, imperfectos– procesos de transición democrática como por lentos y complicados procesos de desmoronamiento y desarticulación de regímenes autoritarios. Esta desafortunada coincidencia entre advenimiento de la democracia y aplicación a mansalva de programas ortodoxos de ajuste neoliberal, que elevaron a niveles sin precedentes la proporción de los “condenados de la tierra” en esta parte del mundo, marca una vez más el desfavorable contraste entre los procesos de reconstrucción democrática en Europa y América Latina. Si en el viejo continente ésta significó la simultánea adquisición de derechos políticos y económico-sociales, lo que se tradujo en un rápido mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares, en la experiencia latinoamericana las restricciones que el neoliberalismo le impuso hizo que la ciudadanía política resultante de la transición democrática fuese acompañada por una implacable “desciudadanización económica y social”. Si el auge de las ideas neoliberales, expresión de la hegemonía del capital financiero a escala global, llevó a los consolidados capitalismos democráticos europeos a recortar significativamente los derechos ciudadanos, en nuestro continente los efectos fueron sencillamente devastadores, comprometiéndolo muy gravemente la legitimidad de las incipientes democracias de la región.

Como no podía ser de otra manera, estas transformaciones económicas fueron acompañadas por un sistemático ataque, fundamentado en los principios filosóficos del individualismo liberal, hacia las organizaciones populares –principalmente los sindicatos pero también partidos políticos y movimientos sociales– y hacia todo tipo de estrategia colectiva de lucha por el bienestar. El “sálvese quien pueda” fue elevado al rango de suprema virtud pública por el darwinismo social de mercado, con sus consiguientes impactos desintegradores del tejido social.

De ahí el fervor con que los más diversos gobiernos de nuestra región, deseosos de probar con sus políticas su incondicional adhesión al dogma dominante, se lanzaron a la tarea de suprimir conquistas sociales como la negociación salarial colectiva; o a debilitar las estructuras sindicales; o a privatizar empresas y servicios públicos mediante lo cual se transfirieron al ámbito privado activos creados por el ahorro nacional, o se mercantizaron viejos derechos y prestaciones sociales, lo cual provocó la supeditación del destino de millones de personas a la lógica destructiva de los mercados.

Contrariamente al imaginario difundido por la ideología liberal y los medios de comunicación de masa, estos brutales procesos de concentración y transferencia de recursos, no ocurrieron sin intensos conflictos sociales. El carácter regresivo de esta recomposición del capitalismo latinoamericano produjo innumerables protestas, cuyos orígenes, características y resultados fueron muy diversos. La protesta social no ha dejado de estar presente en el mapa continental a lo largo de todos estos años. En los últimos dos años, como producto del deterioro de la situación social y como consecuencia de los efectos locales de la crisis financiera mundial, la resistencia social a las políticas neoliberales se ha manifestado cada vez con mayor intensidad. Sucintamente y a modo de ejemplo podemos citar algunos casos relevantes y heterogéneos en su origen y desarrollo: el surgimiento y la vigencia del zapatismo en Chiapas; la lucha del Movimiento Sin Tierra y de los sindicatos en Brasil; la experiencia de El Barzón en México; la prolongada protesta de los maestros de la educación pública en Argentina materializada en la Carpa Blanca y, en ese mismo país, las innumerables huelgas contra la privatización de las empresas públicas; la huelga general en Colombia en septiembre de 1999 convocada por los sindicatos a favor de una moratoria de la deuda externa nacional; el paro nacional de abril de 1999 en Perú en protesta por la falta de empleo y la falta de democracia, contra el modelo económico y contra la reelección de Alberto Fujimori; la prolongada huelga de los estudiantes de la UNAM en México contra los aranceles universitarios; las huelgas de transporte público en Ecuador en 1999; la protesta popular en Paraguay luego del asesinato del Vicepresidente en 1999; las protestas de los organismos de Derechos Humanos en Chile a favor del enjuiciamiento de Augusto Pinochet; las luchas contra la privatización de los servicios eléctricos en Costa Rica; las movilizaciones en defensa de la empresa estatal de teléfonos en Puerto Rico; las violentas protestas de los empleados estatales en Corrientes o de los desocupados en Neuquén y Jujuy en Argentina; y la masiva protesta popular ecuatoriana encabezada por la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) contra la política económica y la propuesta de dolarización que culminara, provisoriamente, con la destitución del Presidente Jamil Mahuad.

Esta somera enumeración da cuenta de la relevancia que conserva el conflicto social en América Latina. Simultáneamente también remite al carácter diversificado, disperso de la conflictividad social. En este sentido es evidente que, producto de las transformaciones sociales a las que asistimos, las manifestaciones del conflicto social están mutando. La diversidad y complejidad de los mismos no significa, sin embargo, que el conflicto laboral “fordista”, basado en torno al trabajo asalariado –salarios, empleo, condiciones de trabajo, etc.– haya desaparecido. Perdió la centralidad sociológica y simbólica característica de la época anterior, pero pese a ello su gravitación en nuestros países es aún muy importante. De ahí que las movilizaciones colectivas provocadas como respuesta a las “reformas orientadas al mercado” constituyan un eje novedoso de la conflictividad actual, irreductible a las formas clásicas del conflicto social de la etapa anterior. Están ligadas, entre otros, a la reestructuración del estado, de la escuela, de los sistemas de la salud, de la seguridad social, y muchos otros aspectos de la vida económica y social. Se producen principalmente porque, según nuestro punto de vista, los capitalismo democráticos “realmente existentes” en América Latina han sistemáticamente desoído las demandas ciudadanas, desdeñado la satisfacción de los intereses populares, y achicado los espacios democráticos de deliberación y discusión sobre la cosa pública. La confrontación y el debate públicos, cuando existen, no tienen mayor incidencia en la formulación de políticas públicas regidas exclusivamente por la extorsión de los mercados y la obsesión neoliberal del equilibrio fiscal. La voz del demos se escucha muy débil y espaciadamente, mien-

tras que el vorzarrón de los mercados concita la inmediata y solícita atención de los gobiernos. George Soros lo declaró más de una vez: los mercados votan todos los días, el pueblo cada dos años, cuando puede votar.

■ II. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y los nuevos desafíos al pensamiento crítico

La creación del Observatorio Social de América Latina, OSAL, tiene como objetivo fundamental aportar elementos para una reflexión crítica, histórico-estructural, sobre las nuevas realidades del capitalismo latinoamericano y, especialmente, sobre las diversas formas que asume el antagonismo social en nuestras sociedades. En la base de este mandato existe la constatación de que las ciencias sociales de la región, al menos en sus vertientes dominantes, han abandonado la vocación crítica que las caracterizara en los años sesenta y setenta. Esto no sólo constituye un problema político sumamente significativo, toda vez que priva a nuestras sociedades de los insumos intelectuales que necesariamente requiere la formulación de toda política dirigida a construir sociedades más justas y libres. Es, al mismo tiempo, una lamentable regresión intelectual porque una tal abdicación del pensamiento crítico rara vez se ha traducido en buena ciencia social. El abandono de ese “compromiso”, para utilizar un término muy frecuentado en otras épocas, de las ciencias sociales con nuestras lacerantes realidades nacionales lejos de ser un índice de “profesionalismo” o de rigurosidad científica ha sido más que nada una muestra de la capitulación ideológica del *mainstream* de las ciencias sociales ante el “pensamiento único”, y de su tácita aceptación de un proyecto que las convierte en meras técnicas de gerenciamiento social en épocas de crisis.

Con el lanzamiento del OSAL el Consejo quiere contribuir a la renovación del pensamiento social de nuestra región, promoviendo un debate entre los académicos y entre éstos y los representantes de las organizaciones y movimientos sociales del área tendiente a reconstituir el pensamiento crítico que tan magníficos frutos diera en el pasado. En dicho sentido no se plantea tan sólo como una “base de datos” que facilite el seguimiento de la evolución social de América Latina y el Caribe sino que aspira a constituirse como una plataforma que estimule la reflexión histórico-estructural sobre las tendencias y los rasgos definitorios de la fase actual del capitalismo latinoamericano y sobre los caminos alternativos para superar la crisis que hoy nos agobia.

La creación del OSAL ha sido producto de una iniciativa que, en respuesta a reiteradas inquietudes y peticiones formuladas por diversos centros e investigadores pertenecientes a nuestra red, la Secretaría Ejecutiva presentara ante la Asamblea General de CLACSO reunida en la ciudad de Recife, Brasil, entre el 22 y 23 de Noviembre de 1999. En dicha oportunidad el órgano superior de gobierno del Consejo manifestó su entusiasta aprobación del proyecto y encomendó a la Secretaría Ejecutiva completar la elaboración del mismo y acelerar su puesta en marcha. Las orientaciones generales del OSAL y sus contenidos fueron finalmente aprobados por el Comité Directivo de CLACSO en su 60º período de sesiones, reunido en Buenos Aires entre el 25 y el 28 de Abril de 2000. Por la filosofía que lo inspira y por su metodología de trabajo el OSAL es un desafío colectivo para construir una verdadera red de trabajo del conjunto de los investigadores y centros miembros de CLACSO.

El OSAL permitirá, en consecuencia, poder contar con un registro permanente de información relativa a la evolución de la situación social en los países de América Latina y el Caribe, tema muy imperfectamente cubierto por los grandes medios de comunicación de masa y progresivamente “invisibilizado” ante los ojos de los estudiosos. Especial atención será dedicada al seguimiento de los conflictos y protestas sociales; la evolución de los movimientos sociales del continente y las transformaciones legales de los sistemas de protección social y laboral de todos los países de la región. Por otro lado, en el marco de este programa se promo-

verá la realización de actividades académicas destinadas a reflexionar sobre las “grandes tendencias” y las similitudes y diferencias que se pueden encontrar en las protestas sociales en Latinoamérica y en otras latitudes. Dos serán los vehículos principales del OSAL: en primer lugar, la publicación que el lector tiene ahora en sus manos; en segundo término, la elaboración de una página en la Internet para hacer accesibles sus contenidos a un público muchísimo más amplio.

Cada número del OSAL contará con las siguientes secciones: en primer lugar, un análisis del o los casos más significativos de conflicto social registrados en la región. En esta oportunidad hemos seleccionado la revuelta indígena de enero de 2000 en Ecuador y la prolongada huelga estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México. Destacados especialistas latinoamericanos aportarán, como lo hacen en este número, sus análisis para el esclarecimiento de las raíces de estos conflictos y el mejor conocimiento de su desenvolvimiento y resolución. En segundo lugar habrá una sección en donde se compilan algunos de los principales documentos producidos por los actores de los conflictos analizados. En tercer término hemos creído oportuno incluir una sección dedicada a la presentación de aportes teóricos de especial interés para el estudio de los temas prioritarios para el OSAL. En este caso contamos con tres trabajos: uno de Ellen Meiksins Wood; otro de Rene Mouriaux y Sophie Beroud y, finalmente, un tercero a cargo de Hugo Zemelman. Una cuarta y última sección del OSAL está constituida por la cronología del conflicto social en la región. En el presente número se ofrece una correspondiente a diez países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Perú.

Quisiéramos, por último, agradecer a todos aquellos que hicieron posible la publicación de este primer número del OSAL: Clara Algranati, Liliana Demirdjian y Fabiana Werthein, de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO quienes tuvieron a su cargo el relevamiento de los datos incorporados a la cronología, al igual que Gabriel Vitullo, de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Brasil; Mario Unda, del centro de investigaciones CIUDAD, de Quito, Ecuador y María Celia Cotarelo, del PIMSA, Buenos Aires, Argentina. También quisiéramos expresar nuestra gratitud a Augusto Barrera Guarderas, Ana Esther Ceceña, Alejandra Ciriza, Pablo Dávalos, al Equipo de Coyuntura –y especialmente al Dr. Francisco Rohn Dávila– del CAAPde Quito; Pablo González Casanova, Pablo Ospina, Franklin Ramírez Gallagos y Raquel Sosa Elizaga por sus enriquecedores análisis de los conflictos sociales en Ecuador y México. Lo mismo cabe señalar en relación a Sophie Beraud, Ellen Meiksins Wood, René Mouriaux y Hugo Zemelman, por habernos permitido contar con sus trabajos en la sección Debates del OSAL. Vayan también nuestros agradecimientos para los colegas de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO: Florencia Vergara por su colaboración en la identificación de valiosas fuentes de información; Sabrina González por su ayuda en todas las etapas de la preparación de este primer número del OSAL; a María Inés Gómez, Bettina Levy y Andrea Vlahusic, por su eficaz cooperación en la revisión del texto final; a Florencia Enghel, por su labor editorial, y a Jorge Fraga, por la ímproba tarea de producir editorialmente el OSAL, desde su diseño hasta su composición final. Finalmente, queremos dejar muy explícitamente sentado nuestro agradecimiento a los Directores de los Centros Miembros, reunidos en la Asamblea General del Consejo, y a los integrantes del Comité Directivo por la confianza que depositaron en esta Secretaría Ejecutiva para hacer posible la creación del OSAL. Haremos todos los esfuerzos que sean necesarios para que ese gesto se vea adecuadamente correspondido.

Buenos Aires, 13 de Junio de 2000.

Análisis de casos

Ecuador y México



a presente sección se propone convocar la reflexión de investigadores sociales de Latinoamérica alrededor de algunos de los principales conflictos sociales acontecidos en la región durante el período considerado.

En una primera instancia, los artículos de Alejandra Ciriza, Augusto Barreira Guardera, Franklin Ramírez Gallegos, del Equipo de Coyuntura del CAAP, Pablo Dávalos, Pablo Ospina abordan desde distintas perspectivas, a veces complementarias, otras encontradas, el conflicto en torno a la revuelta indígena en Ecuador de enero de 2000 que puso fin al gobierno del presidente Jamil Mahuad y la intrincada trama de hechos que culminaron con la asunción del hasta entonces vicepresidente Gustavo Noboa.

Estos trabajos no solo ofrecen una narrativa de los sucesos ocurridos sino que, además, se internan en un análisis de las transformaciones y experiencias del movimiento indígena así como de las complejas interrelaciones entre los distintos sectores sociales y políticos involucrados en la crisis, explorando tanto sus causas profundas como las implicancias de la resolución de la misma.

En un segundo término, Pablo González Casanova, Ana Esther Ceceña, Rael Sosa Elizaga, reflexionan sobre la larga huelga estudiantil en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) iniciada en abril de 1999 y que culminara violentamente con el ingreso de la policía federal preventiva a los predios universitarios en febrero de 2000.

Los autores encaran sus análisis desde perspectivas que reconstruyen el complejo derrotero de una huelga que, por su intensidad y duración, conmovió profundamente a la sociedad y la política mexicana.

Las razones estructurales de la protesta estudiantil inscrita en la ofensiva neoliberal; el cuestionamiento sobre el carácter democrático de las prácticas institucionales prevaletentes en la UNAM; las causas de la radicalidad de la protesta y de las formas particulares que esta asumió, así como el debate abierto sobre la eficacia o legitimidad de la dirección del conflicto, son examinados y diferencialmente evaluados por los autores, todo lo cual termina enriqueciendo nuestra comprensión de la crisis.

Finalmente, cabe señalar que a continuación de la sección Debates, bajo el título de Documentos del Conflicto se incluye una selección de distintos manifiestos y declaraciones de diferentes organizaciones sociales protagonistas de los mismos.

21 de enero del 2000 ¿Golpe de estado o revuelta india en el Ecuador?

Por Alejandra Ciriza*

Este será el intento de narrar, pero también de ensayar una interpretación provisoria, marcada seguramente por mis propias preocupaciones, de los acontecimientos que tuve la rara oportunidad de presenciar en Quito el 21 de enero de 2000, cuando una gigantesca movilización india puso fin al gobierno de Jamil Mahuad para instalar un triunvirato de breve existencia que daría lugar, en un lapso menor a las 24 horas, a la restauración en el poder del partido gobernante, aunque esta vez bajo la figura del vicepresidente de Mahuad, el guayaquileño Gustavo Noboa.

Así dichas las cosas puede sonar a uno más de esos acontecimientos propios de la historia agitada de nuestros países, proveedores sistemáticos de incidentes sorprendentes, pintorescos, cuando no escandalosamente irregulares.

La “irregularidad” de lo que se ha dado en llamar el levantamiento indígena del 21 de enero consiste en que se trató de la primera vez en la historia del Ecuador en que una wipala, erigida en el emblema de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ondeaba en el palacio de Carondelet (el barón ilustrado que en el siglo XVIII se encargara de poner en marcha la modernización borbónica). En la sede de la antigua Real Audiencia de Quito, un maravilloso edificio del siglo XVIII, de cara a una plaza donde se eleva el monumento a los héroes del 10 de agosto, una multitud bizarra entonaba el himno nacional del Ecuador después de haber derrocado al presidente Mahuad.

Sin embargo ese breve instante de fulgor, ese fagonazo de expectativas que florecían en los rostros cansados de miles de indios y manifestantes fatigados tras un tenso día de avances y retrocesos por las callejuelas de Quito, de una jornada de tirante espera durante la cual se sucedieron desde un cerco al Congreso hasta una marcha de indios trotando calle arriba, con sus ropas étnicas, su música, sus guaguas y sus wipalas por la calle Guayaquil, rumbo a la plaza; desde un ejército amenazante exhibiendo las armas que fueran a la guerra con Perú hasta una columna de jóvenes oficiales atravesando como un extraño río verde las entrañas de la multitud, que se abría a su paso. Ese instante, digo, constituye a mi entender un momento de condensación entre el pasado y el presente, uno de esos momentos estelares de la historia que quizás merezca



ser nombrado de una manera distinta. Tal vez porque no puedo evitar pensar que la forma bajo la cual un acontecimiento se inscribe en la memoria lo delimita en su significación para nosotros y para otros.

■ 1. Los acontecimientos

Sé que no es posible, pero si lo fuera, ésta busca ser casi una descripción de los acontecimientos, una crónica apenas, lo más ordenada posible de los sucesos de esa jornada densa, tan difícil de interpretar, que tuviera lugar el 21 de enero. Si tenemos que remitirnos a los antecedentes inmediatos del llamado levantamiento indígena de enero los hallamos en la dolarización propuesta por Mahuad apenas 10 días antes. La dolarización de la economía del país implicaba fijar un tipo de cambio para el dólar de 25000 sucres por dólar, en un país en el cual el salario mínimo trepa apenas a los 53 dólares, mientras el precio de la canasta familiar ronda los 200 dólares, en un país donde la subocupación es cercana al 60%, en un país donde el descrédito de los políticos, esa casta que juega su propio juego ajeno a los avatares y necesidades de la mayoría, es enorme. La respuesta no se hizo esperar y la CONAIE anunció la toma de Quito para el 15 de ese mes. Y no sólo eso, convocó a la constitución del Parlamento de los Pueblos del Ecuador, que resolvió la salida de todos los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, acusados de ser responsables directos de la crisis, la corrupción y el caos generalizados.

Mahuad no fue menos contundente: decretó la vigencia de la Ley de Seguridad Nacional y ordenó el despliegue de 100.000 efectivos entre policías y fuerzas armadas a nivel nacional. Para impedir la llegada de los indios a Quito el gobierno montó un impresionante dispositivo represivo: las fuerzas de seguridad, desplegadas en la panamericana, que une de norte a sur el país y cruza la zona de la sierra, habitada mayoritariamente por diversas etnias indias, realizaron una serie de operativos denominados de "control". Sin ningún tapujo los medios de comunicación indicaban el mecanismo usado por los militares: detener los colectivos de transporte público interprovincial, hacer descender a los ciudadanos para revisar si llevaban armas y si el usuario resultaba ser indio, separarlo de inmediato. Es decir: como en otros países latinoamericanos la portación de rostro aindiado es, en el Ecuador, un delito: sólo por el hecho de ser indios los usuarios eran obligados a descender y regresar a pie a su comunidad de origen. El temor desatado por el anuncio de marchar hacia la capital realizado por la CONAIE operaba, sin dudas, como justificativo, pero a la vez mostraba con crudeza la persistencia del racismo más desembozado.

Sin embargo los indios llegaron a Quito sorteando las carreteras bloqueadas, llegaron en pequeños grupos, las mujeres con sus guaguas, con sus bultos, con sus ropas, llegaron con su música y su lengua y se instalaron en el Agora, pacientes y persistentes como la lluvia que cubría la ciudad. El presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, declaraba el 18 de enero que "El actual levantamiento indígena es progresivo y de resistencia. Puede durar semanas o meses, si hemos resistido quinientos ocho años en condiciones de exclusión y adversidad podemos resistir aquí el tiempo que sea necesario: con frío o sin frío, comidos o con hambre aquí permaneceremos hasta que el problema se resuelva".

El 20 de enero unos 5.000 manifestantes indígenas, llegados a Quito a comienzos de la semana exigiendo la renuncia de Mahuad, del Congreso y de los tribunales, ingresaron al edificio de la legislatura. Contra lo que el previo despliegue de tropas y la represión en las carreteras podría haber hecho prever, los soldados armados que custodiaban el edificio legislativo no resistieron a la marea humana de indígenas.

Vargas, acompañado por un coronel del ejército, Lucio Gutiérrez, apareció en el podio del congreso. Se anunció entonces la instalación de un "Parlamento de los Pueblos del Ecuador". A continuación se leyó una resolución anunciando la formación de una Junta de Gobierno de Salvación Nacional, formada por el propio coronel Gutiérrez, Antonio Vargas y el ex presidente de la Corte Suprema, Carlos Solórzano.

Sin embargo hacia el anochecer del 21, el triunvirato que

saludó a la multitud desde del balcón de Carondelet ya no incluía a Gutiérrez, sino al general Carlos Mendoza Poveda, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Los acontecimientos se sucedieron con asombrosa velocidad. En la madrugada del 22 de enero Mendoza renunció al triunvirato, pronunciándose a favor de una solución jurídica constitucional a la crisis ecuatoriana. Su renuncia abrió el camino para la sucesión del ex vicepresidente de la República, Dr. Gustavo Noboa Bejarano.

"La 'irregularidad' de lo que se ha dado en llamar el levantamiento indígena del 21 de enero consiste en que se trató de la primera vez en la historia del Ecuador en que una wipala, erigida en el emblema de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ondeaba en el palacio de Carondelet."

Mientras Vargas aseguró que el Gral. Carlos Mendoza Poveda, los traicionó cuando renunció a la Junta Cívica; Mendoza, en cambio, dijo que se trataba simplemente de evitar el resquebrajamiento de la cadena de mandos en el ejército y de tomar las precauciones para impedir un po-

sible derramamiento de sangre.

Poco a poco Quito volvía a la normalidad. El parque El Arbolito y otros sectores de la ciudad, donde se habían hospedado los indígenas, fueron lentamente desocupados. En un ambiente incierto, cargado de inquietud, los indios iniciaron una despaciosa retirada hacia sus comunidades de origen.

Tras la desintegración de la llamada Junta de Salvación Nacional, luego de la dimisión del Gral. Carlos Mendoza Poveda, el Dr. Gustavo Noboa Bejarano asumió la Presidencia de la República con la anuencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional. Bajo la promesa de sostener la dolarización decretada por su antecesor, y apoyado por el Congreso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, Noboa se hacía cargo de la presidencia de la república.

■ 2. Un intento de interpretación

El levantamiento del 21 de enero se presenta, desde mi punto de vista como una suerte de nudo gordiano, como el cruce de un conjunto de procesos diferenciales que remite a una serie de lecturas posibles a la luz de los dilemas políticos actuales.

Por una parte el acontecimiento se produce en un momento de la historia de Ecuador y de América Latina toda en el que la forma dominante de organización política es la democracia.

Por la otra el breve chispazo encarnado en la revuelta del 21 de enero remite a la cuestión de la forma de inscrip-

Ecuador.

ción de estos acontecimientos en la memoria. ¿Cómo significar un suceso intempestivo? ¿Qué relación tiene el levantamiento con la historia previa del movimiento indio en el Ecuador y la célebre, aunque hoy olvidada, cuestión de la revolución?

Finalmente, ¿son los indios, en cuanto sujetos portadores de demandas específicas, la encarnación de un nuevo proyecto político?

2. 1. El 21 de enero como golpe de estado

Por una parte, indudablemente, la forma de lectura que predominó en los medios de comunicación masiva, tanto nacionales como internacionales, así como la cadena de reacciones en el nivel internacional, apuntó a la cuestión de la democracia. En primer lugar, se dijo, se trata de un golpe de estado, de una maniobra de destitución, de las que abundan en la historia del Ecuador. Es fácil recordar que también (pero no sólo) Abdalá Bucaram fue destituido (tras una serie de movilizaciones populares) por el Congreso Nacional en febrero de 1997 y sustituido por Fabián Alarcón, presidente del Congreso Nacional en ese momento. El acontecimiento queda entonces inscrito en la serie de las fallas de las instituciones democráticas propias de nuestros países.

Una serie de factores confluyen para justificar esta interpretación: en primer lugar el hecho de que el movimiento fuera apoyado por los mandos medios del ejército en un país en el cual los militares tienen un fuerte poder de arbitraje en los conflictos políticos (no hay que olvidar que el propio Mahuad había intentado, poco tiempo, antes, un "fujimorazo", frustrado precisamente a causa de no haber logrado el apoyo del ejército). El hecho, además, de que la mayor parte de los apoyos institucionales con los que contó el movimiento indio se ligaran al ejército y a la iglesia remite a una forma de interpretación de lo político por lo menos escasamente moderna.

Desde el punto de vista de la institucionalidad democrática el 21 de enero es la fecha de un levantamiento popular, con apoyo del ejército, que implicó un resquebrajamiento en la continuidad democrática del Ecuador y mostró el exiguo respeto que, en nuestros bárbaros países, se tiene hacia los procedimientos formales de la democracia. Y no se trata sólo de una ironía. Efectivamente, una de las fuertes dificultades de las democracias latinoamericanas reside en la escasa capacidad de arbitraje de las instituciones estatales, supuesto que en algún punto el estado represente de algún modo los intereses generales. Coto de caza de los dueños del capital finan-

ciero, el estado ecuatoriano muestra una enorme fragilidad tanto frente a las presiones de los organismos internacionales como frente a las fracciones más concentradas del capital.

Por otra parte, efectivamente, la democracia contempla mecanismos de legitimación del ejercicio de la autoridad que no fueron tenidos en cuenta por los actores del proceso del 21 de enero. El Parlamento del Pueblo del Ecuador resolvió la cesación de los tres poderes del estado republicano sin atenderse a ninguna formalidad procedimental. Hasta tal punto es así que incluso la escasa representación que el movimiento indio tenía en el parlamento, los seis diputados de Pachakuti, incluida Nina Pacari (vicepresidenta del Congreso) vieron desfondarse la fuente de legitimidad de su función de representación en un clima sumamente confuso. Es decir: evidentemente no había formas, o éstas se desbordaron, de canalización institucional de las demandas del movimiento indio.

En un contexto de debate en el cual la aplicación de recetas fondomonetaristas, el aumento del endeudamiento externo y la aplicación de medidas financieras para controlar las economías devastadas de nuestros países constituye el sentido común dominante no es de extrañar que el reclamo de las masas indias suene intempestivo.

En un contexto de debate en el cual el supuesto es que es posible el establecimiento de consensos entre actores sociales con posibilidades semejantes a acceder al uso de la palabra pública, la irrupción de los indios en el escenario, haciendo gala de cuán poco de democracia, ciudadanía y consenso es posible en nuestros países, constituye por lo menos un síntoma a partir del cual habrá tal vez que revisar cuál sea la significación de las democracias establecidas."

“En un contexto de debate en el cual el supuesto es que es posible el establecimiento de consensos entre actores sociales con posibilidades semejantes a acceder al uso de la palabra pública, la irrupción de los indios en el escenario, haciendo gala de cuán poco de democracia, ciudadanía y consenso es posible en nuestros países, constituye por lo menos un síntoma a partir del cual habrá tal vez que revisar cuál sea la significación de las democracias establecidas.”

posible en nuestros países, constituye por lo menos un síntoma a partir del cual habrá tal vez que revisar cuál sea la significación de las democracias establecidas. Atítulo simplemente indicativo recuérdese la referencia a los procedimientos llevados a cabo por el ejército sólo días antes de la revuelta.

2.2. Levantamiento, sublevación, revuelta. Acontecimiento y memoria histórica

Un acontecimiento se inscribe en la memoria no sólo de quienes son sus casuales espectadores, sino que procede de la memoria de quienes lo protagonizan, de sus aprendizajes, de sus experiencias.

El 21 de enero y las jornadas anteriores circulaban en boca de mis amigos y amigas ecuatorianas con un nombre por lo menos curioso: la sublevación, el levantamiento indígena. Palabras cargadas de connotaciones, palabras que remiten a los tiempos quietos de la Colonia, cuando las sublevaciones indias marcaban una breve discontinuidad en el tiempo pretendidamente homogéneo de la dominación. Levantamientos y sublevaciones finalizados en descuartizamientos, brutales

procedimientos represivos, deportaciones masivas: ruidosas derrotas rápidamente olvidadas. En pocas palabras: la eterna compulsión a perder de los vencidos de la historia.

Quisiera, precisamente por esto, y a pesar del sabor amargo de derrota que finalmente dejaron los acontecimientos del 21 de enero, indicar los lazos que unen este acontecimiento con la historia a la vez que marcarlo en su radical singularidad.

Por una parte creo indispensable una breve referencia a la CONAIE, erigida en protagonista central de la jornada; por la otra a la genealogía que los propios indios adscriben a sus revueltas.

En cuanto a la CONAIE, se trata de una organización política, con un alto poder de convocatoria que reivindica la existencia de una especificidad de los indios en cuanto sujeto político. Ello ha conducido a la Confederación a encabezar una serie de reivindicaciones inmediatas, como por ejemplo el control del comercio de artesanías o mayor presupuesto para la enseñanza bilingüe, pero también a la formulación de demandas de mayor envergadura política, como la declaración del estado ecuatoriano como estado plurinacional, o la entrega de tierras y legalización de territorios de las nacionalidades.

Es interesante señalar, además, que el proceso de conformación de la CONAIE ha posibilitado la recuperación de la memoria histórica de los indios. En un libro de autoría colectiva, *Las Nacionalidades Indígenas en el Ecuador* presentado como herramienta de reflexión política, se hace memoria de levantamientos y sublevaciones indígenas desde la colonia hasta nuestros días. Desfilan los nombres de Rumiñahui, Fernando Daquilema, Alejo Sáenz, la historia del concertaje y de la larga y conflictiva relación con la iglesia católica, los hitos en la historia del siglo XX, la articulación con los partidos de izquierda y las centrales obreras, la prolongada lucha de los indios por la tenencia de la tierra que desembocara en el proceso de reforma iniciado en 1964. Desde la perspectiva del movimiento indígena sublevaciones y levantamientos constituyen la respuesta específica ante las diversas formas de dominación ejercida sobre ellos. Una respuesta en cuanto indios.

Por la otra el acontecimiento, el 21 de enero. Obviamente no es una revolución, no al menos en el sentido clásico de la palabra, “un acontecimiento comprimido en el tiempo, llevado a cabo en forma consciente por sujetos colectivos que produce una transformación estructural en las relaciones sociales existentes”, sin embargo puede inscribirse en la larga genealogía de otras formas de protesta popular.

Hace muchos años, leyendo un texto de Edward Thompson fui aprendiendo que, bajo formas políticas de antiguo régimen, la multitud era depositaria de experiencias de protesta y contestación, aún cuando no existieran intenciones polí-

ticas claras y articuladas. Desde los motines de subsistencia en tiempos de escasez hasta los levantamientos, los sectores populares han tenido y tienen formas de manifestar su descontento con la distribución de la riqueza, las desigualdades e injusticias de la sociedad, formas, en definitiva de “helar la sangre de los ricos”, como dice Thompson. Algo en este orden aconteció en las jornadas de Quito cuando los indios, para escándalo de bien pensantes y civilizados consensualistas hicieron bailar al son de su música a desprevenidos transeúntes. Algo en este orden ocurre cuando los indios mismos recuerdan la genealogía de levantamientos y sublevaciones que sustenta, desde el fondo de los tiempos de la colonia, sus heterodoxas prácticas de rebelión y protesta.

Sin embargo algo disuena en la idea de inscribir en el presente las formas de protesta de la colonia. Tal vez porque las formas de protestar, la significación de los actos de rebelión dependen del conjunto particular de relaciones sociales en los que se inscriben. La revuelta de Quito, desde mi punto de vista obedece a una genealogía colonial, muy probablemente debido a lo extraordinariamente larga que puede llegar a ser la memoria entre los sectores populares, pero constituye un tipo de acción ligado a intereses políticos conscientes aun cuando no sea posible estipular un proyecto preciso de transformación de la sociedad. En ese sentido es discontinua respecto de los levantamientos y sublevaciones de los tiempos coloniales e incluso del siglo XIX.

El movimiento indio se ha transformado profundamente a partir de la creación de la CONAIE, que a partir de 1986 aglutina a dos organizaciones regionales: ECUARUNARI, de la Sierra y CONFENAIE, de la Amazonia. Se trata de la confluencia de dos organizaciones heterogéneas, con tradiciones políticas diversas. Los indios de la sierra ligados a las luchas por la Reforma Agraria durante las décadas del 50 y del 60, los de la Amazonia organizados bajo el auspicio de las misiones religiosas católicas de los años 60. En lo político esto implicaba dos líneas, una clasista y la otra etnicista, una ligada a la lucha contra el latifundio, la otra a la defensa de sus “culturas ancestrales”.

En buena medida la posibilidad de conformar la CONAIE es el resultado de la decantación de una serie de procesos iniciados con la primera y segunda reforma agraria, a los que se suma la oficialización del sistema de educación bilingüe intercultural en 1988. En 1964 el estado impulsa la reforma agraria. Sin embargo las pequeñas parcelas asignadas a los campesinos están en el páramo, y los campesinos no recibieron apoyo para producir. Es decir: la modernización capitalista del agro profundizó el deterioro de las condiciones de vida de los campesinos multiplicando el minifundio y acelerando el éxodo a las ciudades.

El signo de la segunda reforma era parcialmente distinto. Impulsada por el gobierno de Rodríguez Lara buscaba transformar los aspectos más retrógrados de la estructura latifundista ecuatoriana. Si bien el gobierno se limitó a la rea-

lización de una política de desarrollo del capitalismo en el campo, y apenas afectó el 0.73% del total de las tierras cultivables en el país, la reforma creó las condiciones para el surgimiento de una élite campesina económicamente fuerte que fue la que, a la larga, tuvo capacidad para canalizar el descontento de la población campesina.

El 4 de junio de 1990, durante la presidencia de Rodrigo Borja, estalla un levantamiento indio. Se trataba de una acción que buscaba afirmar ante la sociedad ecuatoriana la existencia de un colectivo con características culturales propias. Bajo la consigna *Ñaupaman rishun* (Vamos adelante, debemos ir adelante en quichua) los indios irrumpieron en la escena política ecuatoriana. El 21 de enero de 2000 finalmente protagonizaron una revuelta de honda significación política y simbólica. Por primera vez en la historia del Ecuador una wipala, símbolo del movimiento, ondeaba en Carondelet. Por escasas 24 horas, es verdad.

2.3. Indios y proyecto político

Para muchos los indios constituyen la conciencia moral del Ecuador. Para otros se trata de uno más de los fundamentalismos hoy en boga que sustituyen, en estos tiempos de desconcierto y desindustrialización acelerada, incluso para los países centrales, a los sujetos clásicos de la política.

Por una parte es evidente que el proyecto político de la CONAIE dista de ser nítido. Sus alianzas, fundamentalmente aquellas con los cuadros medios del ejército, permitieron la lectura de la revuelta en términos de un vulgar golpe de estado. Asimismo fue evidente la ausencia de una propuesta clara (tanto en términos políticos como económicos) en el transcurso de los acontecimientos.

Por otra parte se revelaron incapaces de sopesar la relación de fuerzas, no sólo con sus presuntos aliados, que hicieron las opciones posibles para una institución que, como el ejército, tiene, más allá de la buena voluntad de algunos de sus miembros (supuesto que no hubiera ninguna razón para poner en duda su buena fe) la función de establecer el orden y controlar la seguridad en una formación social, tal como claramente lo mostraron en los días previos al 21; sino en el contexto internacional y nacional. La reacción no se hizo esperar y el Ecuador, si la Junta persistía, amenazaba con convertirse en un país aislado.

Tampoco fue posible establecer una relación orgánica con los intelectuales de izquierda, muchos de ellos alarmados ante el tono fundamentalista que se desprendía de las consignas y resoluciones tomadas por el Parlamento de los Pueblos del Ecuador: la cesación de los tres poderes, el sistema de alianzas.

En cuanto a la idea de los indios como conciencia moral, ella no deja de resonar, al menos para mis oídos, a uno de los términos bajo los cuales se suele presentar para los intelectuales

la cuestión de los sectores populares: el fantasma del populismo asoma en la idea de un portador de la conciencia ética, prístino y virginal, procedente del fondo de los tiempos, portador de los intereses de todos por cuanto no se halla contaminado de las impurezas con que los avatares de la historia y la política han ido marcando a los demás sujetos. Riesgo mucho mayor cuando se trata de indios. No sólo ellos pueden ser acusados de soñar con el imposible retorno del mítico Tawantisuyo. Muchos sueñan con ser a su vez, si no los protagonistas al menos los portavoces, intérpretes privilegiados e invitados de honor.

Es decir, creo que la suerte de los indios es la de los sectores populares en general, la de los subalternos, sean ellos mujeres, excluidos, pobres: o bien se construyen propuestas que tengan en cuenta las condiciones actuales de existencia en toda su complejidad y abstracción, incluidos los términos de negociación y conflicto posibles bajo regímenes de "democracia capitalista", o bien el riesgo del fundamentalismo y de concepciones corporativas de la acción política continuará amenazándolos.

Sin embargo, y para concluir, el 21 de enero de 2000 una revuelta india tuvo la potencia suficiente para poner a los indios en el centro de la escena política. Una wipala ondeaba majestuosa en Carondelet tras una jornada de avances y retrocesos. Una multitud cansada y resplandeciente, de cara al pasado y al presente terminaba con el gobierno de Mahuad. Una multitud de indios y de no tan indios, una multitud de sujetos subalternos hacían escuchar, desde lo más profundo del pasado histórico su malestar, indignación y protesta. Lo hacían como los hombres y las mujeres hacemos la historia, sin saber que la hacemos. Hollaban con sus pies cansados y sus pieles impuras el sueño inmutable de dominio de las clases dominantes. Irrumpían bajo el cielo libre de la historia en ese instante magnífico e inolvidable en el que es posible redimir el pasado de derrotas, humillaciones y dolor de esos que no hemos dejado de ser un espectro amenazante para el sueño de los poderosos.

Hacia atrás, pero también hacia delante. *Ñaupaman Rishun*.

■ Notas

- Licenciada en Filosofía de Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. Profesora de enseñanza media y superior de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. Doctora en filosofía. Profesora adjunta en la Cátedra de Epistemología de las Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la U.N.C.

Ecuador, o cuando la crisis se hace cotidiana

Reflexiones sobre los episodios del
21 y 22 de enero de 2000

Por Augusto Barrera Guarderas*

El ciclo de inestabilidad política y de deterioro económico, en que está enfrascado el Ecuador en los últimos tres años, parece contradecir la tendencia de normalización democrática por la que América Latina ha transitado en las últimas décadas. Este texto se propone realizar un acercamiento a los hechos ocurridos en el Ecuador entre el 21 y 22 de enero de 2000, en el marco de un análisis del proceso político de aplicación de las reformas neoliberales en el país. Por lo mismo, antes que un análisis exhaustivo del evento, se privilegia una visión panorámica de la trama de conflictos de la sociedad ecuatoriana y de los actores que los activan y despliegan¹.



11

■ Los hechos²

El 5 de febrero de 1997 una gran movilización social desencadenó la caída del ex presidente Bucaram. A menos de 3 años de aquel episodio, el 21 de enero del año en curso, Jamil Mahuad, uno de los artífices de la caída del “bucaramato”, debió correr suerte parecida: salió camuflado por la cochera del Palacio de Carondelet una vez que las FFAA le invitaban a “abandonar el cargo”³. Pocas horas antes una multitud de indígenas y campesinos apoyados por oficiales jóvenes del ejército habían ocupado el Palacio Legislativo y la Corte Suprema de Justicia. Conocido el “abandono del cargo” de Mahuad, marcharon a Carondelet a consagrar la instalación de una Junta de Salvación Nacional cuya composición fue negociada con la cúpula militar.

Después de tres horas, el Comandante General de las FFAA y miembro de la recién instaurada Junta, se retractó de su participación, dejando sin piso al fugaz gobierno que no alcanzó a nombrar ni su propio secretario. El Alto Mando Militar retomó el control de la situación y posesionó en la madrugada del 22 de enero a Gustavo Noboa (vicepresidente de la fórmula de Mahuad), como Presidente Constitucional de la República en las instalaciones del Ministerio de Defensa.

Los indígenas y campesinos, entre indignados por la “traición” y agotados por una extenuante jornada, que llevaba ya una semana, emprendieron el “retorno” de Quito a sus comunidades rurales. Prometieron volver. Algunos de los oficiales⁴ que protagonizaron la asonada fueron tomados prisioneros en los días siguientes, mientras que, una vez controlada la situación, el Congreso Nacional “ratificó” la constitucionalidad del nuevo Presidente en medio de grandilocuentes discursos a favor de la democracia.

Las cámaras de empresarios que habían guardado un prudente silencio público durante los acontecimientos, calificaron a aquella noche de una pesadilla. Con evidentes expresiones de complacencia y alivio, respaldaron a Noboa, condenaron a Mahuad y a los “golpistas” y exigieron desde el arranque de la nueva administración, apretar el programa de reformas y “mantener la democracia”.

A dos meses del nuevo gobierno, se alista una nueva oleada de protestas⁵. La inflación alcanza el 35% en los tres primeros meses de 2000, y las estimaciones oficiales pronostican que al final del año bordeará el 45% (¡en dólares!)⁶. La mayoría parlamentaria con la que el nuevo gobierno ha podido pasar el nuevo paquete legal, es exactamente la misma que apoyó y sostuvo al gobierno de Mahuad.

El mes de julio se presenta desde ya, como un nuevo momento de tensiones. Un paquete de alzas de servicios y tarifas está anunciado para entonces. La sensación en el país es que nuevamente “algo pasará...”.

■ La trama y los actores del conflicto

Los años setenta se caracterizaron en Ecuador, por un intento desarrollista de industrialización sustitutiva (ISI) de la mano de dictaduras militares. Los ochenta, con el retorno a la democracia (1979), se abren con un breve período que vincula los últimos estertores de una estrategia de desarrollo nacional con una tibia modernización de las instituciones políticas que habría de durar poco. A partir de 1982 con la crisis de la deuda externa, el país se habituó a una lógica de crisis - ajuste que recuerda la imagen de una banda sinfín. Este camino largo y tortuoso de puesta en escena del neoliberalismo ha estado plagado de marchas y contramarchas que no han logrado configurar una “racionalidad de mercado”.

Las evaluaciones de desempeño de los procesos de reforma institucional y económica, colocan al Ecuador en el grupo más bajo titulado como de reformas incompletas o parciales, o de países reformadores lentos⁷. Es ciertamente muy poco lo que – aun en los parámetros del imaginario neoliberal – puede mostrarse como saldo “a favor” de estos veinte años. La particularidad que aquí se sugiere para el caso ecuatoriano, no desconoce el carácter complejo, conflictivo y multiterminado de los procesos de reforma en los países de América Latina, pero advierte que, a diferencia de la mayor parte de ellos, en Ecuador no hay un punto razonablemente conclusivo en el que operen nuevas formas de acumulación, se establezca el régimen político y decurran modalidades de gestión institucional inscritas en un paradigma neoliberal.

En lo que sigue se formulan algunas ideas para explicar el caos institucional al que ha llegado el país; se apela para ello, a una mirada que va más allá del plano de los rendimientos y las destrezas gubernamentales⁸ y que, más bien, hace relación a tres factores vinculados a la “matriz de poder social”⁹: a) el tipo de conformación de las clases dominantes y su relación con el estado; b) el papel arbitral de las FFAA y c) la existencia de un activo y beligerante movimiento social.

a) La lógica rentista y el estado patrimonialista

Las condiciones sobre las que se intentó aplicar las políticas neoliberales en el Ecuador, distan mucho de las de una economía moderna e industrial, que supuestamente debió haber emergido del modelo de desarrollismo anterior. La estructura productiva ecuatoriana es altamente segmentada, con un sector moderno débil y dependiente del mercado externo y de múltiples formas de subvención estatal. La lógica de acumulación se ha caracterizado por un fuerte sentido “rentista”, es decir de consecución de ganancia sin incrementos de productividad y de usufructo de los recursos estatales para su reproducción. La fatal especialización primario-agroexportadora, conduce además a una situación de permanente vulnerabilidad de la economía¹⁰.

Durante los sesenta y setenta, los grupos de poder que amasaron sus fortunas en el modelo primario exportador (en la hacienda, en la agroexportación y en la banca), diversificaron sus intereses a la manufactura y servicios y lograron imponer mecanismos de transferencia del ingreso petrolero (vía créditos preferenciales, protección arancelaria, control de la divisa, endeudamiento interno y externo). Bajo la nueva modalidad de liberalización y globalización, los esfuerzos principales no han estado orientados al incremento de la productividad, la eficiencia y la competencia, sino al reforzamiento de condiciones de producción monopólicas y oligopólicas, la transferencia de activos estatales a

manos privadas y la aplicación de nuevos subsidios¹¹, que han concluido en la implementación de una modalidad de “reprimarización modernizada” (Acosta, 1997).

En suma, pese al discurso anti-estatal de los empresarios, el control del Estado ha sido y es un

factor determinante en la lógica de la acumulación. La lucha política por el control de un estado prebendalista, ha imposibilitado la aspiración de autonomizar las esferas política y económica, como si se tratasen de conjuntos institucionales “guiados por sus propias lógicas y ceñidos a sus respectivas reglas de conducta”, (CORDES, 1999:311).

Los más grandes grupos económicos han impulsado discursivamente el proceso de reformas pro mercado, pero no han logrado constituir su propia unidad alrededor de este proyecto. Sus fracturas regionales, sus proveniencias y articulaciones internacionales distintas, su marcado carácter oligárquico, su forma de relación patrimonial con el estado, han colocado en primer plano a lo largo de estas dos décadas, sus disputas corporativas. No hay traspíe en las reformas legales o en procesos de privatización abortados que no

“En suma, pese al discurso anti-estatal de los empresarios, el control del Estado ha sido y es un factor determinante en la lógica de la acumulación. La lucha política por el control de un estado prebendalista, ha imposibilitado la aspiración de autonomizar las esferas política y económica”

tengan detrás encarnadas disputas interburguesas. Parece claro que en el Ecuador no ocurre ese proceso simultáneo de “desestructuración” del antiguo patrón de desarrollo y sus correspondientes actores y de “estructuración, gestación y afianzamiento de nuevos polos dinámicos en torno de los que se organiza la inserción parcial de los países al sistema económico global”(Torre, 1998:125)¹². El libre mercado en la práctica del neoliberalismo local juega como un dispositivo discursivo para recomponer lógicas monopólicas u oligopólicas privadas.

Sometido a esta disputa, el Estado no ha podido constituir una institucionalidad por encima de los intereses particulares y de los antagonismos sociales; que ordene las relaciones de los agentes económicos y la distribución de la riqueza social. La constante ha sido la des-institucionalización y la discontinuidad de las políticas de los sucesivos gobiernos, explicable desde las contingencias y los intereses de los grupos que captaron el control del estado¹³. Aquello que en la sociología ecuatoriana contemporánea ha sido tratado como bloqueo institucional es, en cierto modo, un subproducto de los fenómenos descritos.

Inscritos en esa (ir)racionalidad económica, buena parte de los partidos políticos dejan de ser mediadores entre el estado y la sociedad, constructores de ciudadanía -o cualquier definición habitual en la ciencia política-; adoptan más bien el rol de “formas empresariales” en las cuales perviven los sentidos oligárquicos y en no pocas ocasiones cuasi mafiosos de agrupación de intereses corporativos. La corrupción -en el sentido más amplio- se convierte en un atributo asociado al patrimonialismo, con lo que el círculo de la pervisión del sistema político queda cerrado. El ejemplo de Mahuad es paradigmático: un candidato financiado por banqueros -en una campaña insolentemente millonaria- que, una vez llegado al poder como presidente, congela el 70% del monto de los depósitos de los ahorristas para salvar “el sistema financiero”¹⁴.

A todo ello habría que sumar el deterioro espeluznante de las condiciones de vida de la población. Un informe del Banco Mundial (1999) que evalúa el impacto de la crisis entre 1995 y 1999 revela que el número de indigentes aumentó en 12 puntos porcentuales en ese período, situándose en el 49%; la participación del quintil más pobre en el total del consumo decreció de 5,3% en 1995 a 4,3% en 1999; la desocupación casi se duplicó llegando al 17%¹⁷. La canasta básica estimada a marzo de este año es de 200 dólares, mientras el salario mínimo no llega a 60 dólares men-

suales. Cifras de organismos oficiales hablan de que el 70% de la población ecuatoriana está debajo de la línea de pobreza.

Es obvio que habría de esperar como resultado una profunda crisis de legitimidad. El Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, la Función Judicial y los partidos políticos tienen, de modo sostenido en la última década, niveles de confianza y aceptación sumamente bajos. Los datos disponibles muestran que no sólo existe un patrón cíclico propio de las dinámicas de desgaste de los gobiernos, sino que hay evidencias de una insatisfacción profunda y acumulativa frente a toda la institucionalidad.¹⁶

b) El papel arbitral de las FFAA

Presionadas por el conflicto con Perú, verdadero trauma nacional desde los años cuarenta, las FFAA desarrollaron su propia doctrina de defensa y seguridad nacional. Si de partida hay recelos con los civiles y afanes tutelares, la constatación de semejante cuadro de las élites políticas y económicas, fueron asumidas por la institución militar como un dato clave para asegurar su autonomía institucional.

Nociones como las de “poder nacional”, “desarrollo”, “soberanía y unidad nacional” han configurado un núcleo

“Inscritos en esa (ir)racionalidad económica, buena parte de los partidos políticos dejan de ser mediadores entre el estado y la sociedad, constructores de ciudadanía -o cualquier definición habitual en la ciencia política-; adoptan más bien el rol de “formas empresariales” en las cuales perviven los sentidos oligárquicos y en no pocas ocasiones cuasi mafiosos de agrupación de intereses corporativos.”

duro en el imaginario militar¹⁷. La idea básica es que un país pequeño y pobre como el Ecuador, debe compensar sus limitaciones impulsando el desarrollo, evitando la radicalización y el desbordamiento de sus conflictos y preservando una relativa paz social. Desde esa ideología, las FFAA ecuatorianas han asumido

un papel arbitral, en el sentido más amplio y cotidiano del término, es decir, no solo en los momentos picos de las crisis -tal como el caso de las caídas de Mahuad o de Bucaram-, sino en buena parte de la diaria conflictividad social de los últimos años¹⁸.

La firma de los Tratados de paz con el Perú efectuada a fines de 1998, el énfasis anti-estatista de las políticas económicas (que atacan la participación de las FFAA en la actividad productiva), la escasez presupuestaria que impacta en los programas cívico militares y en el mismo funcionamiento operativo y la actual problemática de las autonomías puesta en escena por la oligarquía guayaquileña¹⁹, son elementos que configuran un exigente escenario de redefinición de las misiones militares y tensionan su unidad doctrinaria. A ello se suman las exigencias de la geopolítica regio-

nal, que adquiere una dinámica inusitada con la activa estrategia norteamericana expresada en el Plan Colombia. De hecho en ese libretto, Ecuador y su ejército cumplen un papel importante evidenciado ya con la instalación de la Base Militar de Manta²⁰.

La condensación de estos factores internos y externos, no deja de ser traumática en las FFAA. Hay preguntas que han rondado sistemáticamente las intervenciones de los coroneles insurrectos y que son puestas a modo de legitimación de su acción: ¿Qué sentido tiene el estado nacional una vez que él mismo abandona responsabilidades como la política monetaria con la dolarización? ¿Qué significa unidad y desarrollo nacional en épocas de globalización?, ¿Tiene sentido “sostener” una democracia corrupta, a costa de emplear la institución militar en la represión a un movimiento de protesta con amplio respaldo social? ¿Cabe involucrarse en el conflicto colombiano a costa de extender una situación de violencia fratricida? Aun está por hacerse un trabajo más riguroso de investigación de la génesis y desarrollo del movimiento de insurrectos, pero parece bastante claro que, al menos, la estructura de oportunidades para la sublevación, se presenta de cuerpo entero.

c) La presencia de un movimiento social beligerante

Para quienes han seguido de cerca la conflictividad social ecuatoriana, no es ninguna novedad el protagonismo y la fuerza movilizadora y expresiva del movimiento indígena y campesino y de la coalición que se ha logrado constituir en torno a él. Ya en 1990, el país vio con asombro cómo varios cientos de miles de indígenas paralizaron las vías y las principales ciudades del país en demanda por la solución de más de un centenar de conflictos de tierras. De entonces acá, en medio de los conflictos de las élites, el deterioro dramático de las condiciones de vida de la población y la pérdida de legitimidad del sistema político, el movimiento indígena ha transitado por una dinámica de universalización de sus demandas, de aprendizaje de repertorios, de creación de nuevos marcos para su acción, de fortalecimiento de sus estructuras de movilización y de impulso a una alianza social²⁰.

A lo largo de la década la lógica general del movimiento indígena, así como de otros actores sociales fue combinar la acción en la “arena institucional”, con la movilización y presión social²¹. Por ello su participación en los hechos del 21 de enero fue vista por algunos analistas como un extravío del libretto y eventualmente como una hipoteca

del capital político y social logrado. La apuesta por “el golpismo” en una alianza militar debilitaría, según este argumento, las credenciales democráticas del movimiento. Qui-

zás estas observaciones sean ciertas en un contexto de transición y afianzamiento de la democracia, o desde una perspectiva normativa que aspira a construir democracia desde la sociedad civil. Pero no parece que estas razones sean contundentes para la dirigencia indígena por el

momento. Aunque efectivamente el levantamiento indio y campesino de enero, activa y aviva el inveterado racismo de un segmento de la sociedad, cuenta a la vez con un apoyo muy amplio; expresiones como “los indios han sacado la cara por todos” repetidas una y otra vez durante estas semanas demuestran que el punto de referencia de la acción indígena-campesina fue ponerse a tono con el amplísimo deseo de derrocar a Mahuad²³.

■ La crisis permanece instalada²⁴

A pesar de las lecturas endémicamente “optimistas” que reivindican para el campo popular la caída de Mahuad –tal como lo hicieron con Bucaram-, este escrito intenta concluir que en los hechos y su desenlace convergieron varios factores, de los cuales, el retiro de apoyo de las clases dominantes y el papel arbitral de las FFAA fueron los decisivos para el derrocamiento y la salida “semi-constitucional” de la crisis. Los grupos de poder sacrificaron a Mahuad para sostener un programa basado en la dolarización.

No cabe duda que en la conciencia de los actores involucrados en la rebelión del 21 de enero aparece la idea de haber podido “ir más allá”. La revocatoria del mandato de Jamil Mahuad y la conformación de un gobierno popular, así haya sido por pocas horas, aparecen como los logros más visibles. Sin embargo, ese confuso haber “ido más allá”, corre el riesgo de quedarse en una lectura en “clave golpista”.

Parece ser más adecuado recuperar el hecho de que la rebelión del 21 de enero puso sobre el tapete de la discusión, de modo dramático, el tipo de democracia y el modelo económico. El conflicto entre legalidad y legitimidad, entre la soberanía popular y los procedimientos democráticos, entre las desgastadas formas de representación político-electoral y las peligrosas expresiones de representación corporativa, son algunos puntos de una intrincada agenda de transformación democrática que interpela a todos los actores.

“Parece ser más adecuado recuperar el hecho de que la rebelión del 21 de enero puso sobre el tapete de la discusión, de modo dramático, el tipo de democracia y el modelo económico. El conflicto entre legalidad y legitimidad, entre la soberanía popular y los procedimientos democráticos, entre las desgastadas formas de representación político-electoral y las peligrosas expresiones de representación corporativa”.

Desafortunadamente, no es seguro que esta agenda, -que se ha dado en llamar “las lecciones del 21”-, sea apropiada por los sectores dominantes. Ya muchos de sus voceros se han atrincherado en la defensa de las dimensiones más instrumentales y menos sustantivas de la democracia, haciendo tabla rasa de la necesidad de democratizar el estado, ampliar su nivel de representatividad política, recuperar nuevos nexos de sentido entre estado y sociedad e incorporar una imprescindible dimensión ética.

Pero también se abren grandes interrogantes para el movimiento social: ¿el levantamiento de enero está inscrito en una visión estratégica de largo plazo del movimiento indígena y social del país o representó una aventura “putchista”?; ¿faltó simplemente “poder militar”?; ¿cuál es la viabilidad de “esta vía” en el mundo actual?. El peligro inmediato es que cada acción colectiva tenga, en la mente de sus gestores, la reedición de los hechos analizados y que, en ese eterno inmediatismo, se pierda la perspectiva de transformaciones profundas que suponen el concurso de gran parte de la sociedad.

Las preguntas adquieren urgencia y sentido si se parte de que los resultados de las luchas se plasman en las relaciones de fuerzas resultantes y en los efectos en las políticas públicas. Y, desde esta perspectiva, el balance del 21 de enero no puede ser halagüeño. El contenido del programa del gobierno de Noboa y la composición de su gabinete dejan el sabor de una “derrota programática”²⁵.

El punto central de la agenda de Noboa es la aplicación de la Ley de Reactivación y Transformación Económica, aprobada por el Congreso hace unos días. La ley contiene varios aspectos: a) abre nuevas oportunidades de privatización de algunas empresas estatales; b) consagra la transferencia del costo de la crisis financiera al Estado a través, entre otros mecanismos, de la reestructuración de los pasivos de los bancos en una cifra que asciende a los tres mil millones de dólares²⁵; c) pone en vigencia un inédito programa de dolarización, que consiste en la utilización del dólar norteamericano como la moneda de uso corriente para los intercambios comerciales y financieros, partiendo de la fijación de un tipo de conversión de 25.000 sucres por un dólar.

En la práctica esto implica la sustitución del sucre como moneda de uso corriente, los ajustes de las tarifas de los servicios públicos a precios internacionales, la eliminación del rol del Banco Central como emisor de moneda nacional y fundamentalmente la extrema vulnerabilidad del aparato productivo a las fluctuaciones de precios y demanda en el mercado internacional.

Los factores estructurales que posibilitaron el 21 de enero están allí. Aquello no significa que automáticamente se produzcan situaciones similares, sobre todo cuando efectivamente hay un despliegue por parte del gobierno actual

por desactivar algunos puntos explosivos como la amnistía a los insurrectos, el diálogo con los indígenas y la apelación a la unidad de las cámaras tras el plan de dolarización. Otro de los esfuerzos centrales es la “sensibilización” a los organismos multilaterales en busca de un acuerdo con fondos frescos. Paradójica y trágicamente el “nuevo papel” del Ecuador en el conflicto regional puede ser una oportunidad para llamar la atención y conseguir auxilio.

La crisis no está resuelta, se ha instalado en la cotidianidad de nuestras vidas, y al parecer, para largo rato.

■ Bibliografía citada

Acosta, Alberto, “Algunos elementos para repensar el futuro de la economía ecuatoriana”, en *Revista Economía y Política*. Epoca II No.2. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Cuenca. 1997.

Barrera, Augusto, “Notas sobre la economía política de la reforma neoliberal en América Latina...y la necesidad de una agenda para el futuro”, en *Revista Economía y Política*. Epoca II No.5. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Cuenca. 1999.

CORDES (Corporación de Estudios para el Desarrollo), *La ruta de la gobernabilidad. Informe final del proyecto CORDES-Gobernabilidad*. CORDES-AECI, Quito, 1999.

Larrea, Carlos, “Ajuste estructural, distribución del ingreso y empleo en el Ecuador”, en *Revista Economía y Humanismo* Año II No 2, Revista del Instituto de Investigaciones Económicas PUCE, Quito, 1997.

Líderes Semanario de Economía y Negocios. No. 117, 17 de enero 2000, Quito.

Lora, Eduardo, “Una década de reformas estructurales en América Latina: Qué se ha reformado y cómo medirlo”, en *Pensamiento Iberoamericano*. Volumen Extraordinario. 1998. AECI-BID, Madrid, 1998.

Lucas, Kintto, *La rebelión de los indios*, Abya Yala, Quito, 2000.

Naín, Moisés, *Instituciones: El eslabón perdido en las reformas económicas de América Latina* (documento mimeografiado), Banco Mundial, Bogotá, 1994.

Quintero, Rafael, *El alzamiento popular del 21 de enero y sus consecuencias para la democracia en el Ecuador*. (mimeo). Ponencia presentada en el VI Congreso Nacional de Sociología y Ciencias Políticas. Guayaquil, 2000.

Revista Vistazo Nos. 771, 772, 779, 780, Guayaquil.

Revista Gestión, No. 69, marzo 2000, Quito.

Torre, Juan Carlos, *El proceso político de las reformas en América Latina*. Paidós. Buenos Aires, 1998.

Notas

* Investigador del Centro de Investigaciones CIUDAD. Quito. Agradezco los comentarios de Marc Saint-Upery y las reflexiones compartidas con algunos de los protagonistas.

1. En esta misma publicación aparece el trabajo de Franklin Ramírez, que bien puede complementar esta perspectiva.
2. La descripción de los hechos se apoya en notas de prensa de los periódicos: El Comercio, Hoy y El Universo, en la revista Vistazo, así como el reciente trabajo de Kintto Lucas (2000).
3. La semántica de los hechos es un verdadero campo de disputa interpretativa: "sublevación, rebelión o levantamiento indígena militar"; "golpe de estado"; "sucesión constitucional" y hasta "sucesión semi-constitucional" (en tanto Mahuad jamás renunció formalmente al cargo).
4. Se estima que participaron aproximadamente 510 oficiales, desde coroneles hasta tenientes, en la ocupación del Palacio Legislativo. Alrededor de 100 enfrentaban posteriormente algún nivel de sindicación en los juicios, (Revista Vistazo, 779, 780).
5. El 11 y 12 de abril se desarrolló un paro convocado por la Confederación de Afiliados al Seguro Social Campesino (CONFUNASSC) en rechazo a la nueva Ley de Seguridad Social. En esa misma semana trabajadores públicos ocuparon varias dependencias gubernamentales en rechazo al incremento salarial de 10 (diez) dólares propuesto por el Gobierno.
6. La estimación la hizo el Gerente del Banco Central del Ecuador, bajo el supuesto que la economía esté totalmente dolarizada a fines de año. Declaraciones aparecidas en la Revista Gestión, marzo 2000.
7. Al respecto ver: Lora, Eduardo (1998); y, Edwards, Sebastián, Crisis y reforma en América Latina, Emecé editores. Buenos Aires, 1997, citado en CORDES (1999).
8. Al respecto ver: Naím M. (1994); Torre (1998), CORDES (1999); Barrera (1999).
9. Se utiliza el concepto de Offe, Caluss. *Contradicciones del Estado de Bienestar*. Alianza Editorial. México.1990.
10. "Los ingresos de las exportaciones del Ecuador han sido afectados dramáticamente por el deterioro de los términos de intercambio desde 1982. Pese a la expansión de su volumen, su poder adquisitivo se mantiene bajo" (Larrea, 1997:48).
11. El Estado ecuatoriano asumió durante los años 1983, 1984 y 1987, la deuda externa asumida por agentes económicos privados. La "sucretización", así como el actual proceso de salvataje bancario son dos factores decisivos en el descalabro actual de la economía.
12. La idea corresponde a Alvaro Díaz, citado por Torre, J.C. (1998).
13. Las conclusiones a las que arriba De Janvry son lapidarias: "Los grupos de interés están sumamente divididos, sus demandas son muy parroquiales, preocupándose muy poco por cooperar en el logro de ganancias sociales netas" (De Janvry et al. *The political feasibility of adjustment in Ecuador and Venezuela*), citado en Larrea (1997).
14. Infortunadamente no es un caso aislado: Dahik (vicepresidente de Durán Ballén), es reo de la justicia; Abdalá Bucaram disfruta de su condición de prófugo en Panamá; Alarcón (presidente interino entre 1997 y 1998) estuvo en prisión.
15. El Informe del Banco Mundial "Ecuador: crisis, poverty and social services", del 17 de diciembre de 1999, fue hecho público por el semanario Líderes 117.
16. El Congreso Nacional tiene apenas el 8% de aceptación ciudadana antes y después de los acontecimientos del 21 de enero. La confianza en la justicia y el sistema policial es otro de los puntos críticos y a la vez más explicables: hay 21 banqueros procesados y, a excepción de uno, prófugos por violar leyes del sistema financiero. El Comercio, 8 de abril del 2000. pp A1.
17. Al respecto: Moncayo, Paco. *Fuerzas armadas y sociedad*. Corporación Editora Nacional. Quito. 1995.

18. Casi no hay problemáticas que no hayan pasado de algún modo por "manos militares" en algún momento de su tratamiento o resolución: desde la cuestión indígena hasta la reubicación de los comerciantes minoristas en las zonas céntricas de Guayaquil.

19. La crisis bancaria adquirió claros rasgos regionalistas en la medida en que la mayor parte de los bancos quebrados tenían asiento en la ciudad de Guayaquil. Ello ha activado la demanda de los sectores empresariales, ampliamente apoyada por la población de las provincias costeñas, de modificar el modelo de estado unitario y optar por un autonómico. Los alcances de las propuestas autonomistas bordean en algunos casos una cuasi independencia del estado central.

20. Desde finales de 1999, por pedido de la administración Clinton y anuencia del gobierno de Mahuad, está instalada en la costera ciudad de Manta, una base militar norteamericana de apoyo logístico al trabajo de inteligencia aérea en contra del narcotráfico colombiano. Datos de prensa indican la presencia de unos 200 efectivos militares norteamericanos.

21. El núcleo duro de la alianza social lo constituyen la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), la CONFUNASSC (Confederación de afiliados al Seguro social campesino), la CMS (Coordinadora de Movimientos Sociales), que reúne a sindicalistas públicos y grupos urbanos. En ciertos momentos se han sumado los transportistas, los pequeños comerciantes, el magisterio y aun algunos empresarios pequeños y medianos quebrados por sus deudas o por el congelamiento de sus cuentas.

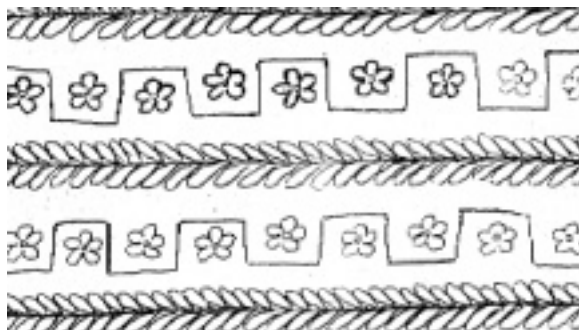
22. Hitos en este recorrido son la negociación de una nueva Ley Agraria con el levantamiento de 1994, la formación del Movimiento Pachakutik Nuevo País, la participación en la Asamblea Nacional Constituyente de 1997.

23. En las encuestas publicadas por los medios de comunicación el 92% de los ecuatorianos estaba por la salida de Mahuad. Para cuando se escribe esta nota (abril de 2000), el 69% de la población no está de acuerdo con los juicios a los indígenas y el 66% está a favor de otorgar la amnistía a los coroneles insurrectos (Diario HOY. Jueves 13 de abril. Pp A1-A3).

24. En esta parte se retoman ideas de Barrera, A. Unda, M. "Balance del 21 de enero y perspectivas", publicado por el Boletín ICCI. Marzo 2000.

25. Algunos dirigentes sociales han acuñado la fórmula: "triunfo político y derrota programática" para referirse a los resultados del 21 de enero.

26. Un informe de auditorías internacionales, publicado hace pocos días, pone al descubierto a los mayores deudores de la banca privada. El monto al que asciende la cartera de estos bancos es de tres mil millones de dólares (cifra cercana al Presupuesto General del Estado para este año 2000). En la lista de los 50 mayores deudores constan los "propios ex banqueros, varios diputados, altas autoridades económicas y poderosos empresarios" (Vistazo 783, abril 2000)



El 21 de enero del 2000

Por Franklin Ramírez Gallegos*

Por paradójicos y confusos que aún se presenten ante la opinión pública los sucesos del 21 de enero del 2000 -calificados como 'Golpe de Estado' o como destitución popular del presidente Jamil Mahuad resuelta de forma 'para-constitucional' con la sucesión del Vicepresidente Gustavo Noboa- resulta plausible situarlos como una suerte de "filtro condensador" de una situación de profundo malestar de amplias capas de la población civil ante la crisis sistémica del país. Tanto el derrocamiento de Mahuad como los motivos y formas con que fue destituido constituyen claras evidencias de la violencia, ineficiencia y corrupción de esquemas de conducción económica aplicados indiscriminadamente en sociedades estructuralmente heterogéneas¹ y desiguales², con escasos niveles de estabilidad política³ y, sobre todo, con pocos mecanismos de participación democrática en la toma de decisión sobre las reformas estatales.

En lo que sigue exploro los siguientes campos analíticos que explican y han sido activados en torno del movimiento indígena-militar de enero del 2000: a) las relaciones entre la inconsistencia del modelo neo-liberal y la actuación del Estado, b) la fragilidad de la democracia y c) la emergencia de un nuevo campo ético-político en donde los movimientos sociales han levantado una crítica exhaustiva del orden de dominación imperante.

■ 1. La gestión política del neoliberalismo: la dolarización

En este acápite pongo en evidencia las relaciones entre la gestión política de la crisis económica del país y el derrocamiento de Mahuad. Las referencias a la coyuntura económica de su período no deben ser tomadas como características exclusivas de su mandato sino como señales del modo de conducción del desarrollo nacional durante el ciclo neo-liberal.

Luego de quince años de iniciado el ajuste de la economía, la reducción del Estado, las privatizaciones y la pulverización de las políticas sociales redistributivas, los logros del esquema de desarrollo son escasos. La deuda externa asciende a 14 millones de dólares, equiparable al PIB del país; para atender al pago de esta deuda el Estado ha dedicado el



40% de su presupuesto, monto que contrasta groseramente con el 13 dedicado a educación y el 3 dedicado a salud. A pesar de ello, o precisamente por ello, la inflación superó el 60% en 1999 mientras la economía se contrajo en un 7,3%, el déficit fiscal subió al 5.4% del PIB y el sucre (moneda nacional) pasó de cotizarse en 5.000 por dólar USA en agosto de 1998 a 25.000 por dólar en enero del 2000, cifra con la que se decretó la dolarización.

¿Cómo se arribó a tal punto de recesión? La crisis económica ecuatoriana no es principalmente un efecto de fuerzas impersonales -distorsiones del sistema financiero global o de los precios internacionales- sino de una particular dinámica política que ha derivado en la total captura del Estado por intereses privados, particulares y corporativos. Grupos sociales concretos han deteriorado la economía nacional en un largo y sostenido proceso de aniquilamiento del Estado como espacio de representación pública⁴.

A partir de esta idea se entienden los motivos por los que los principales actores de la revuelta interpelaron al Estado: "...lo que hemos dicho a todos es que como ecuatorianos hagamos la unidad para un cambio total de Gobierno. No queremos al Parlamento corrupto. La Corte [de justicia] debe disolverse. Todo eso hemos hablado con claridad, pero con el pueblo", declaró⁵ Antonio Vargas, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) antes de la revuelta.

Desde 1999 se perfilaron los mecanismos de conducción económica que aplicaría el gobierno nacional. Para este y para el FMI, los problemas fundamentales de la coyuntura económica eran la fragilidad del sector financiero y la debilidad fiscal, en medio de un sistema tributario comple-

tamente arbitrario. Por ello, el gobierno decidió no poner ningún límite en la ayuda para los bancos en problemas⁶. El crédito interno neto desde el Estado al sistema financiero se expandió en forma inusitada: hasta agosto de 1999 el total de recursos canalizados a los bancos supera los 1.400 millones de dólares⁷.

Para este “salvataje bancario” se creó la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) cuyo fin es el de administrar los bancos quebrados. Entonces emergió a la luz pública un engranaje de gestión bancaria “ilegal”: créditos a empresas pertenecientes a los mismos grupos económicos propietarios de los bancos sin respaldo financiero que sustente tales adjudicaciones (“préstamos vinculados”), y otros procedimientos francamente reñidos con la ley. La laxitud de las normas y la incapacidad y complicidad de las autoridades de control financiero contribuyeron a la extensión de la crisis.

En marzo de 1999 Mahuad decretó un feriado bancario y el congelamiento parcial de los depósitos que los ciudadanos tenían en entidades financieras; a la vez el Banco Central inició una política monetaria expansiva para posibilitar la devolución de los depósitos retenidos. La política monetaria se limitaba entonces a evitar que se desmorone el sistema financiero. Tales procedimientos, aprobados de forma apresurada, y sin sustento técnico, posibilitaron salvar a los banqueros de instituciones ya en saneamiento, eximiéndolos de asumir los costos de su gestión dispendiosa y corrupta.

Los elementos señalados, se suman a las fuertes presiones sobre el tipo de cambio y una tendencia a la desintermediación financiera para evitar la carga del impuesto de 1% a la circulación de capitales (decretado desde enero de 1999)⁸. Así, entre un riesgo sistémico en las entidades financieras, y la probabilidad de presiones cambiarias e inflacionarias descontroladas, el gobierno optó por la recesión a partir de la congelación de depósitos. Asumía de esta forma que la reducción generalizada del ritmo de actividad, la paralización de la inversión, el cierre total o parcial de empresas y el crecimiento del desempleo, podían ser manejados como males menores. En suma se privilegió el desarrollo del sistema financiero en detrimento del sector productivo. Cuando meses más tarde el único banquero enjuiciado, Fernando Aspiazú, denunció que los 3.1 millones de dólares que él había donado para la campaña electoral del partido de Mahuad habían sido mal utilizados, se evidenciaron las razones de la política financiera del régimen.

En septiembre del mismo año, el gobierno anunció que no iba a pagar los 50 millones de dólares de su deuda en Bo-

“Se hace presente entonces una lógica corporativa de presión-negociación de casi todas las políticas fundamentales de asignación de recursos públicos. Tales presiones se resuelven, por la vía de una distribución corrupta de los mismos, que progresivamente han moldeado la figura de un estado patrimonialista, profundamente oligárquico y corrupto”

nos Brady, ello sumado a la continua postergación de la firma de la “carta de intención”⁹ con el FMI -cuya concreción hubiera permitido el arribo de capitales frescos al país- y a la incesante emisión monetaria¹⁰ producto del salvataje bancario, degeneraron

en la desconfianza total de los agentes económicos, en la incubación de las condiciones para una macrodevaluación, y sobre todo en la pérdida de respaldo político al presidente.

Enero del 2000 se inicia, entonces, con una situación económica incontrolable y con la pulverización casi total de la legitimidad del gobierno de Mahuad. Así, días antes de anunciar la dolarización el propio presidente calificaba a esta medida literalmente de “salto al vacío”, pero cuando la estabilidad política siguió desgastándose -ya se había anunciado un nuevo levantamiento indígena-, Mahuad asumió la medida sin ninguna planificación operativa y en contra de la opinión de muchos funcionarios del propio gobierno y de técnicos del Banco Central¹¹. La dolarización fue entonces más un salvavidas político que el resultado de algún tipo de construcción técnica para resolver la crisis económica.

La dolarización generó un efecto político de re-articulación de los sectores empresariales, financieros, y de los partidos de centro-derecha y derecha en torno de la propuesta presidencial¹¹. Lo que no había podido concretarse durante el período de gobierno por la vía de una concertación dialógica para generar un núcleo de intersección hegemónica de intereses, sucede como consecuencia no-intencionada de la dolarización. En cualquier caso, esta rearticulación evidencia que tales sectores ven en esta medida la posibilidad de destrabar las privatizaciones y la flexibilización laboral, y asegurar el equilibrio fiscal, en suma, radicalizar el modelo neoliberal.

De este relato sobre los sucesos que condujeron a la dolarización se pueden extraer algunas conclusiones, y entender los nodos problemáticos activados por la revuelta del 21 de enero: se evidencian los nexos estables, regulares e institucionalizados entre las principales élites políticas, ciertas entidades claves del Estado y el capital financiero, se trata de acuerdos “oligárquico-mafiosos” que, en este caso, han ocasionado que el Estado, y en consecuencia la población, asuman los perjuicios de la crisis bancaria.

Se hace presente entonces una lógica corporativa de presión-negociación de casi todas las políticas fundamentales de asignación de recursos públicos. Tales presiones se resuelven, por la vía de una distribución corrupta de los mismos, que progresivamente han moldeado la figura de un estado patrimonialista, profundamente oligárquico y corrupto¹³.

Además, el proceso de modernización del Estado nacional lleva una década de evolución y permanente bloque: el tránsito del Estado desarrollista interventor hacia el hasta hoy inexistente Estado “mínimo” neoliberal no se ha estabilizado y el resultado final es un profundo debilitamiento del mismo. De su proceso de reforma han surgido un mosaico de enclaves institucionales que operan sin lineamientos articuladores generales, con la excepción de las organizaciones encargadas del control macroeconómico por la necesidad de garantizar un rendimiento estable de la economía nacional en su inserción en la economía global¹⁴.

■ 2. Democracia y nuevo campo ético-político

En esta parte del análisis sostengo que el tipo de configuración social que se ha producido en torno a la gestión estatal de la crisis ha redundado en una escasísima capacidad de legitimación de la norma, de las instituciones y de los actores clave del régimen democrático. Los sucesos del 21 de enero y sobre todo la forma en que los principales sujetos del conflicto político han interpretado sus acciones evidencian, además de un malestar profundo respecto a la cualidad corrupta y excluyente del sistema, la insuficiencia de prácticas procedimentales, o puramente formales de la democracia y la necesidad de densificar tal sistema político en términos de una búsqueda de justicia e igualdad sociales.

Es de uso común entre politólogos y académicos nacionales¹⁵ -al igual que entre sectores tecnocráticos- interpretar la política en general, y los sucesos del 21 de enero, en una perspectiva procedimental bajo la figura conceptual de “crisis de gobernabilidad” entendida estrechamente como el inadecuado funcionamiento y articulación de las instituciones que conforman el poder gubernamental. Sin embargo, aún en las vertientes institucionalistas se plantea una lectura más amplia: contar con ciertos atributos de la democracia que vayan más allá de fórmulas de equilibrio y estabilidad del régimen político, la legitimidad, el imperio medianamente universal de la ley, la utilización de las instituciones para fines colectivos, la existencia de condiciones equitativas de competencia electoral, y una capacidad de representación de los sectores sociales en el Estado. Ninguna de éstas han sido características de la “democracia ecuatoriana”, por ello las respuestas a cuestiones como ¿por qué a un sector significativo de la sociedad se le ocurrió dar un ‘golpe’?, o ¿por qué el 80% de la población estaba de acuerdo con que el Congreso se disuelva, el 92% aspiraba a que el presidente Mahuad sea destituido, y la gran mayoría prefiere incluso una dictadura?¹⁶, implican una interpelación abierta a los modos de concreción de la pragmática democrática, es decir, al imperio de la corrupción y la impunidad, a la protección del Estado a las élites económicas, al constante deterioro de las condiciones de vida de la mayoría.

Por ello quisiera sostener que la articulación entre el movimiento indígena y los mandos medios del Ejército puede ser la expresión de una coalición coyuntural, anti-oligárquica en la que se intersectan dos conjuntos de reivindicaciones: repudio del deterioro de las condiciones de vida de las clases medias y bajas de la sociedad y una cierta idea de “limpieza ética” de la política. Documento esta afirmación.

El anuncio de la dolarización (9 de enero) logró una mejoría en la imagen de Mahuad, el reclamo indígena de todos modos empezó el 15 de enero, con la convocatoria a los denominados Parlamentos del Pueblo en cada provincia del país. Indígenas y otros sectores sociales se reunían para plantear reivindicaciones respecto del deterioro de la calidad de vida y para consolidar un Parlamento Popular Nacional. Simultáneamente la dirigencia indígena mantenía reuniones con el alto mando militar en las que se planteó la disolución y revocatoria del mandato a los tres poderes del Estado. Así los indígenas empezaron un nuevo levantamiento y marcha a la capital de la República, sede de los tres poderes del Estado y para la noche del jueves 20 de enero ya existían unos nueve mil que habían rodeado el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. En la mañana del viernes 21 ingresaron al Congreso Nacional de la mano de oficiales y tropa del Ejército. Las motivaciones de cada uno de los protagonistas del evento pueden dar luces para entender esta articulación.

En el lado militar, el 7 de enero, el Consejo de Generales pidió al Presidente que además de lo previsto anuncie al país que se va a extraditar a los banqueros prófugos, que serán incautados sus bienes, que se detendrá la corrupción en las aduanas, y que habrá políticas adecuadas en petróleo y modernización. En su anuncio Mahuad no incluyó nada de esto, habló sólo de dolarización y de cambio de ministros. Al día siguiente, en una sesión de Gabinete, el Ministro de Defensa, un general retirado, reclamó la omisión de los pedidos militares, el Ministro de Agricultura lo apoyó. Dos días después, ambos fueron los únicos removidos. Esta crónica¹⁷ permite evidenciar que en la visión de las Fuerzas Armadas existe un profundo malestar frente al intolerable nivel de corrupción visibilizado en el manejo de la crisis bancaria, y una fuerte desconfianza con respecto al proceso de modernización económica del país¹⁸.

El cabecilla del levantamiento militar, Coronel Lucio Gutiérrez señaló meses antes del movimiento, “establezcamos una estrategia institucional para de una manera firme convertirnos en los guardianes de los dineros del país, en fiscalizadores de los malos políticos y ecuatorianos corruptos”. Rechazó el acuerdo de paz con el Perú, pidió que se considere la posibilidad de que el Ministro de Defensa sea una autoridad civil, y que se mejore el bienestar de los soldados, pues Mahuad había realizado un incremento de sueldos en una escala considerada en medios militares como injusta¹⁹.

Las implicaciones materiales de la sublevación de los mandos medios del Ejército son claras: la crisis económica incidió directamente en el bienestar material de los miembros de las Fuerzas Armadas, sobre todo en los oficiales de menor rango, situación que se vería agravada con el proceso de la dolarización. La articulación con el movimiento indígena, el segmento más vulnerable de la población ecuatoriana (96% de los indígenas es pobre)²⁰, puede ser leída entonces como una manifestación inter-clasista para proponer nuevas formas de entender los vínculos entre democracia y justicia social.

Emerge así un relato en que los tres grandes fracasos del sistema son la extrema desigualdad social, el estancamiento económico persistente y el deterioro de la integración social por el aumento de la corrupción y la inseguridad social. En suma, además de que en el Ecuador cualquier apelación procedimental y formal de la democracia dista de ser una forma regular y extendida de relacionamiento político -las reglas del juego democrático son sistemáticamente atropelladas, la intervención militar es una prueba de ello- cada vez existe mayor urgencia por desplazar el tema de las variables democráticas mínimas -elecciones, derechos políticos, libertad de opinión e información- hacia aquel de una “democracia substantiva”.

Por todo esto, con los sucesos del 21 de enero incluidos, es posible hablar de la emergencia, formación y consolidación de un nuevo campo “ético político”, fijado en torno al problema de la corrupción. Desde el derrocamiento de Abdalá Bucaram en 1997, se ha venido instituyendo una crítica global al orden de dominación imperante a partir de originales significaciones éticas y políticas. Las relaciones entre élites políticas y élites económicas, cristalizadas en un tipo de Estado corporativizado y patrimonialista, empiezan a ser tematizadas como principal nudo explicativo de la actual crisis económica de la nación y de las formas en que el sistema neoliberal ha entrado en vigencia. El tema de la sanción a la corrupción aparece, así, como un punto articulador en torno al cual convergen diferentes actores sociales y políticos del país (indígenas, fuerzas armadas, iglesia, movimientos juveniles, de mujeres) para construir una condena de amplio alcance al sistema político y económico: nociones como las de “Estado-oligárquico-mafioso” o “Democracia Corrupta” evidencian la conjugación de variables éticas, clasistas y políticas en la construcción de explicaciones sobre el momento histórico y sobre posibles alternativas a tal ordenamiento.

■ 3. Apuntes conclusivos

Las señales que dejan los sucesos del 21 de enero al sistema democrático son alarmantes. Resulta preocupante que los movimientos sociales agrupados en torno al movimiento indígena hayan efectuado una vinculación político-mili-

tar con las Fuerzas Armadas para posicionar sus intereses particulares en la esfera pública. En lugar de afinar una estrategia dialógica de más amplia base -el apoyo de las clases medias urbanas a la revuelta fue casi nulo- se apostó a los actores militares, que si bien tienen una alta legitimidad en el espacio nacional²¹ no constituyen el mecanismo político adecuado para crear un nuevo ordenamiento democrático. El hecho de que las reglas de juego democráticas sean violadas sistemáticamente por el Estado y las élites económicas y desvirtuadas por la tremenda desigualdad social no significa que no puede haber ninguna regla de juego mientras los sectores contra-hegemónicos no estén en el poder.

Del mismo modo se pudo constatar que en el país la democracia formal se mantuvo, no porque se haya institucionalizado o porque amplios sectores de la población y las élites políticas la hayan defendido, sino porque las dictaduras no son bien vistas en el sistema internacional contemporáneo²² y porque en las instancias finales de la destitución, hubo una fractura dentro de las Fuerzas Armadas que se resolvió por la preeminencia institucional de los altos mandos (los generales jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas) sobre los coroneles líderes de la revuelta. Parte de la precariedad de la democracia ecuatoriana reside, entonces, en que en ella los militares tienen todavía la función interna de recurso último de poder para resolver las crisis de vacío de autoridad²³.

Con todo esto, no se puede asegurar que en el futuro vuelva a imperar el orden y la estabilidad políticas. Las perspectivas económicas de la dolarización permiten prever incluso una nueva ola de intensas protestas sociales. Queda para el debate público global la necesidad de pensar en las repercusiones que la situación ecuatoriana, sumada a la cada vez más peligrosa internacionalización militar del conflicto colombiano y a la inestabilidad política de la Venezuela de Chávez puedan tener en la estabilidad política de la región andina.

■ Bibliografía General

Barrera, Augusto, Gallegos R. Franklin y Rodríguez, Lourdes, *Ecuador: un modelo para (des)armar. Descentralización, disparidades regionales y modo de desarrollo*, Abya-Yala, Quito, 2000.

Burbano Felipe, Rowland Michel, *Pugna de Poderes*, Cordes, Quito, 1998.

Dimint, Ruth (editora), *Control Civil y Fuerzas Armadas en las nuevas democracias latinoamericanas*, Universidad Torcuato di Tella, Buenos Aires, 2000.

Echeverría, Julio, *La democracia bloqueada*, Eskéletra, Quito, 1997.

Pachano, Simón, *Democracia sin sociedad*, ILDIS, Quito, 1996.

Notas

* Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Postgrado en Relaciones Internacionales y Sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO y en la Universidade Estadual de Campinas-Brasil ; Investigador Asociado del Instituto de Estudios Ecuatorianos.

1. Las dimensiones de la heterogeneidad estructural en la economía ecuatoriana aparecen como consecuencia de una particular configuración histórica y espacial que ha producido una "escisión de carácter estructural que ha dado como resultado [...] la existencia de por lo menos cinco segmentos productivos: Segmento Petrolero, Urbano Moderno, Rural Moderno, Urbano Tradicional y Rural Tradicional los estratos se distinguen cualitativa y cuantitativamente, tanto por los montos y tipos de producción que generan y del empleo que otorgan como por las abismales diferencias tecnológicas...y en consecuencia, por sus variados niveles de productividad e ingreso..." (Schuldt, en Augusto Barrera, et. al, "Ecuador un modelo para (des)armar", Quito, enero 2000).

2. En el Ecuador, el Coeficiente de Gini (medida estadística que varía entre 0 y 1 y expresa la desigualdad en la distribución del consumo per cápita de los hogares, y muestra mayor desigualdad mientras se aproxima a 1 y corresponde a 0 en el caso hipotético de una distribución totalmente equitativa) ha evolucionado así en los últimos cinco años: en 1995, 0.43, en 1998, 0.47, y en 1999, 0.48. (cf. Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, SIISE, 1995, 1998, 1999).

3. La precariedad de la norma constitucional y la perentoriedad de los acuerdos políticos se observa en que: desde 1996 al 2000 el país ha visto suceder a cinco gobernantes (cuatro presidentes y una junta cívico-militar); dos Presidentes elegidos en sufragios generales han sido destituidos (en 1997, Abdalá Bucaram y en el 2000, Jamil Mahuad), un Vicepresidente y un Ministro de Gobierno enjuiciados por corrupción (Alberto Dahik en 1995 y César Verduga en 1998. Los dos se encuentran auto-exilados). A ello deben sumarse numerosas amenazas de golpe de estado y frecuentes pugnas entre los principales poderes del Estado (cf. "La pugna de poderes en el Ecuador", José Sánchez-Parga, 1998; Revista VISTAZO #779, Febrero 3-2000).

4. Cf. "El Ecuador en erupción", José María Tortosa, Le Monde Diplomatique, febrero 2000.

5. Cf. "ELGOLPE", Revista Vistazo #779, Febrero 2000.

6. En esta misma línea se condujeron los diferentes gobiernos desde mediados de los noventa: en 1996 se gastaron miles de millones de dólares para tratar de salvar al Banco Continental, cuyos propietarios se exilaron en Miami dejando al Estado los costos de la crisis (cf. Ecuador DEBATE #47, agosto de 1999).

7. Cf. "Coyuntura Nacional: se profundizan la recesión y la incertidumbre", Marco ROMERO, Ecuador DEBATE #47, agosto de 1999.

8. La estructura del sistema fiscal se deterioró por completo con la introducción de este impuesto -considerado totalmente anti-técnico incluso por el FMI- en sustitución del impuesto a la renta. Situación en extremo paradójica: uno de los países más desiguales de la región de sechó uno de los pocos recursos redistributivos, el impuesto a la renta, que los gobiernos tienen para enfrentar sus necesidades fiscales. (cf. Romero, 1999).

9. Ecuador ha firmado 8 cartas de intención con el FMI entre 1983 y 1994, éstas se han convertido en un verdadero círculo perverso de ajuste, recaída y nuevo ajuste, con un retroceso real de la situación del país.

10. Según la Revista Gestión (#67, enero del 2000), la tasa de crecimiento anual de la emisión monetaria fue de 152 por ciento, superior a la de noviembre de 1999 (143 por ciento), a pesar incluso de que las autoridades habían ofrecido al FMI que sería menor del 110 por ciento.

11. CORDES [Corporación de Estudios para el Desarrollo], organismo presidido por el doctor Oswaldo Hurtado Larrea, ex presidente de la República y coideario de Mahuad, afirma que se trató de una "mo-

vida política y sin preparación técnica". (cf. Alberto Acosta, "La Trampa de la Dolarización", en DOLARIZACION, Informe urgente, enero 2000).

12. A dos días de anunciada la dolarización la imagen de Mahuad mejoró, además de ello el Partido Social Cristiano, el Partido Roldosista Ecuatoriano, el Frente Radical Alfariista y la Democracia Popular, partido de gobierno, anunciaron el apoyo legislativo a la propuesta, con lo cual su viabilidad política estaba asegurada. Del mismo modo las Cámaras de Empresarios y Pequeños Industriales consintieron con la medida, (cf. Revista Gestión #67, Revista Vistazo #667).

13. Cf. Augusto Barrera, Franklin R. Gallegos y Lourdes Rodríguez, "Elementos para el análisis institucional del Estado", en *Ecuador un modelo para (des)armar*, Quito, 2000.

14. Una de las pocas políticas de Estado sostenidas por todos los gobiernos nacionales desde el retorno a la institucionalidad democrática en 1979 es la gestión del servicio a la deuda externa con miras al cumplimiento cabal de las obligaciones. (Cf. Barrera, Ramírez, Rodríguez, Ibid. 2000).

15. Cf. Pachano, 1996; Echeverría, 1997; Sánchez-Parga, 1998; Burbano-Rowland, 1998.

16. Cf. "Elementos Iniciales para un balance del levantamiento del 21 de enero", Mario Unda y Augusto Barrera, Documento de Internet, Febrero-2000-

17. Cf. Revista VISTAZO, #779, Febrero 2000.

18. En efecto, es reconocido por los especialistas en el tema que "las actualmente dominantes ideas del neoliberalismo y la globalización carecen de eco en los cuarteles. El personal militar ecuatoriano sigue aferrado al desarrollismo estatista, a la teoría de la dependencia, a cierto anti-imperialismo nacionalista y a ciertos conceptos de la teoría de la modernización keynesiana..." (Cf. Fernando Bustamante, "Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas y la coyuntura política-social de fin de siglo", en *Control Civil y Fuerzas Armadas en las nuevas democracias latinoamericanas*, Ruth Dimint, editora, Buenos Aires, 1999).

19. Cf. "Rebeldes con causa", Mariana Neira, Revista VISTAZO, febrero-2000.

20. Cf. Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, en base a la Encuesta de Condiciones de Vida, 1999.

21. Diversas encuestas han señalado que entre el común de la población son las Fuerzas Armadas y la Iglesia los dos únicos grupos dentro de las élites dirigentes de la sociedad ecuatoriana que gozan de una alta cuota de prestigio (Cf. José Sánchez-Parga, "Fuerzas Armadas, Desarrollo y Democracia", 1996).

22. El General Mendoza, uno de los integrantes del triunvirato cívico-militar que destituyó a Mahuad, confirmó que retiró su apoyo al levantamiento luego de hablar con algunos funcionarios americanos, con el jefe del Comando Sur de los EE.UU y con Peter Romero, Sub Secretario de Asuntos Americanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Todos le habrían comunicado la situación de aislamiento en que quedaría el país si se consolidaba el triunvirato. (Cf. Revista VISTAZO, #779, Febrero 2000).

23. En el derrocamiento de Abdalá Bucaram en 1997, las Fuerzas Armadas dirimieron finalmente quién sería el sucesor constitucional del presidente depuesto (cf., Bustamante, "Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas y la coyuntura política-social de fin de siglo", 1999).



Ecuador, enero 21: de la movilización indígena al golpe militar

Por Equipo de Coyuntura
(Centro Andino de Acción Popular)

Ni fue traición, ni fue derrota, ni fue triunfo; sino todo lo contrario. Suena a absurdo si se juzga por los “significantes” en los que concluyó el hecho. Se reforzó la derecha y ganó el proyecto oligárquico menos modernizador, asumiendo que la dolarización es irreversible.

L

o ocurrido el 21 de enero en Ecuador fue un drama en dos actos: uno público y popular, el de **la movilización indígena y el golpe militar**, transmitido casi en su totalidad por la televisión; y otro previamente preparado y dirigido entre bastidores por los políticos y sectores dirigentes y de partidos: **el derrocamiento del Presidente y la sucesión presidencial**.

Los estudios clásicos (E. Hobsbawn, B. Porshnev)¹ no han sido muy precisos al distinguir conceptualmente un **levantamiento** y una **movilización**. De acuerdo a investigaciones antropológicas y etnohistóricas, como las de S. Moreno, para el caso ecuatoriano y de Silvia Rivera para Bolivia,² en el área andina los **levantamientos** indígenas se caracterizan por ser una masiva **reacción** contra un estado de dominación y explotación acumuladas, que se desencadena a partir de un determinado incidente, y cuya finalidad consiste en enfrentar los poderes instituidos por medio de una manifestación violenta para impugnar el *orden establecido*. Las **rebeliones** tendrían un carácter más político, convirtiendo el levantamiento en un intento por derrocar los *poderes establecidos*. El levantamiento indígena tiene por sí mismo un efecto organizador limitado a la misma acción, es productor de su propia conducción y dirigencia, portador de cambios inmediatos, y tiene una especificidad social y étnica, excluyente de alianzas interclasistas.

La **movilización**, por el contrario, es la actuación de un movimiento ya organizado, que cuenta con una dirigencia, la cual planifica y conduce la acción, en la que los elementos **reactivos** se encuentran supeditados a los reivindicativos e incluso a los propositivos, y donde los discursos tien-



den a sobreponerse a la acción. La movilización es un arma de lucha a disposición de las organizaciones, y tiende más al fortalecimiento de éstas que al del mismo movimiento social, y los cambios que persigue se plantean a nivel social y en términos mediatos.

El indígena, como todo movimiento social, se encontraría sujeto a una contradictoria tensión de afirmar con mayor fuerza su especificidad étnica, a costa de reducir su eficiencia social, o bien de ampliar esta eficiencia en la sociedad en base de alianzas interclasistas con otros movimientos sociales pero en detrimento de su propia especificidad étnica. Si bien el movimiento indígena siempre estuvo atravesado por esta doble dinámica de su *forma étnica* y de su *forma clase*, algunas de sus organizaciones adoptaron de manera preferente la forma clasista (*ECUARUNARI*), mientras que otras ejercieron más bien su forma étnica (*OPIP*, *FOIN*, *Shuar*), o bien todas oscilaron entre períodos y episodios más o menos clasistas y étnicos, o bien combinaron ambas estrategias.

Sin embargo, nunca como en la movilización de enero del 2000 el movimiento indígena había entablado una aso-

ciación tan diversa y heterogénea: desde los tres más poderosos gremios públicos (petroleros, educadores, IESS), y organizaciones barriales vinculados por medio de sus dirigentes a clientelas políticas, hasta los mandos medios militares, pasando por partidos de la más variada composición. Pero esta conformación interclasista tan heteróclita, la larga preparación y planificación de una movilización tan anunciada, su distante conducción desde otros sectores, todo ello sirvió para que el movimiento indígena, más que parte de una movilización se convirtiera en la fuerza de choque de otros movimientos y fuerzas sociales sin la capacidad movilizadora de los indígenas, que de presionar por la renuncia del Presidente con la toma del Congreso, desembocaron en una toma étnico/cívico/militar del poder, que dio lugar a un derrocamiento del Presidente y a una sucesión presidencial.

Si bien los indígenas fueron los protagonistas en el escenario de la movilización, su participación no fue decisoria a la hora de la producción de los discursos y las decisiones. De hecho, nunca el movimiento indígena y sus dirigentes habían enunciado discursos, denuncias y reclamaciones tan ajenos a sus intereses y necesidades específicas. De regreso a sus comunidades los indígenas de Cotopaxi, de donde procedía el mayor contingente de los movilizados, eran muy conscientes de no haber ganado nada en el *happening*, al que les habían conducido a participar.

En el análisis del hecho y sus resultados, se observa que se combinaron tanto elementos previamente programados con otros más espontáneos, demuestra no sólo las recíprocas manipulaciones de las fuerzas políticas comprometidas en la movilización, sino que puso además de relieve la gran separación entre las reivindicaciones socio-económicas y las políticas; nunca fue tan esquizofrénica la distancia entre lo poco que se defendía y lo mucho que se atacaba. Lo que mejor revelaba el tenor de discursos con propuestas tan destructivas era la situación de una sociedad desesperada, porque no puede estar peor de como actualmente está, pero que al mismo tiempo tiene pánico ante cualquier cambio, que no sea también desesperado.

Una de las instituciones que sufren una profunda transformación es la comunidad indígena. Son cada vez mayores los signos de privatización en ella. Estamos ante serios conflictos de reprocesamiento de la relación individuos-comunidad, comunidad-familias. Esta tensión adquiere caracteres de violencia interna, en un espacio-territorio que cada vez se asemeja más al paisaje de villas miseria y menos al romántico entorno de lo campesino. Una situación muy compleja y peligrosa. La comunidad, dicho de otro modo,

el poder campesino comunal, tiende a buscar respuestas campesinistas, de desarrollo comunal. Los comuneros individuos, con escasos lazos de relación con la tierra, con cierta escolaridad, a veces profesionales, buscan participar, no ser marginados, del mercado capitalista, volviéndolo quizá más humano, menos concentrador. Por ello su reminiscencia a los años 70 del estado desarrollista que permitió alguna movilidad social, impulsado por la dictadura militar que gobernara entre el '72 y el '79.

A diferencia de los más tradicionales levantamientos y aún movilizaciones indígenas, los cuales siempre habían respondido a una dinámica que desde la exclusión se orientaba hacia una mayor participación e integración en la sociedad, la movilización de enero parecía responder a una dinámica inversa: orientándose de la integración (por muy precaria que ésta sea) hacia formas de exclusión socio-política (por muy desesperadas o aventureras que parezcan). Fue muy elocuente la constante demanda de un "parlamento popular" o la pública renuncia por escrito de algunos diputados a su representación parlamentaria.

A falta de impugnaciones directas, y de un discurso capaz de dar coherencia a fuerzas tan dispares, se adoptaron slogans de una gran carga simbólica, normativa y emotiva: la lucha contra la corrupción, contra la pobreza. Esto pone de manifiesto un problema de fondo, ya planteado

“En el análisis del hecho y sus resultados, se observa que se combinaron tanto elementos previamente programados con otros más espontáneos, demuestra no sólo las recíprocas manipulaciones de las fuerzas políticas comprometidas en la movilización, sino que puso además de relieve la gran separación entre las reivindicaciones socio-económicas y las políticas; nunca fue tan esquizofrénica la distancia entre lo poco que se defendía y lo mucho que se atacaba”

por Touraine³: en Ecuador, como en otros países latinoamericanos se acusa un gran déficit de producción ideológica. Las diferencias económicas, las desigualdades sociales, étnicas y regionales, toda esta heterogeneidad, que la política lejos de soldar o atenuar contribuye a radicalizar, obstaculiza cualquier **producción ideológica**, de ideas y valores, capaz de representar el sistema de relaciones sociales al interior de la sociedad y la idea que esta sociedad hace de sí misma. A falta de una producción ideológica se ha generado una intensa **producción doctrinaria**, excesivamente normativa, de contenidos mágico-simbólicos, pero con muy bajo nivel de racionalización. Esto hace que cada vez entendamos menos lo que nos pasa, y que los análisis políticos se vuelvan moralistas y pontificales.

Esto mismo da lugar a otro fenómeno que la movilización de enero puso de manifiesto: las luchas sociales enfrentan actores sociales antagonistas, pero al mismo tiempo confrontan versiones o propuestas diferentes de los "intereses compartidos" o del "bien común" o del "desarrollo colectivo", en un mismo proyecto de sociedad. El problema en Ecuador es que resulta muy difícil integrar estos componentes en luchas sociales, donde cualquier posibilidad o

la
movilización
indígena

alternativa es objeto de ataque y de rechazo por unos y por otros, donde todo desune, muy poco puede ser compartido y casi nada es percibido o vivido como interés común. Todo en los discursos de la movilización se volvía objeto de rechazo y de condena: desde el Presidente de la República hasta la Corte Suprema de Justicia, pasando por el Congreso; todo debía ser objeto de directa cooptación o participación popular. Esto patentizó la movilización de enero, y en tal sentido no fue casual que mientras en Quito se consumaba el golpe para derrocar al Presidente en Guayaquil se preparaba una consulta para legitimar la autonomía provincial. Mientras que en Quito, los protagonistas de la movilización se dirigían a tomarse el palacio de gobierno, otros se manifestaban en contra en la avenida de los Shyris.

Todo en los discursos se volvió objeto de rechazo y de condena: hasta la misma Constitución aprobada hacía año y medio por una Asamblea surgida de elecciones populares y de una consulta plebiscitaria. Y como para nada parecen haber servido la Asamblea Constituyente y el previo Referéndum hacía sólo dos años, vuelven a sonar nuevas demandas plebiscitarias y el obsesivo pedido de "revocación del mandato".

La movilización del 21 de enero fue otro climax de una costumbre que se está volviendo cada vez más peligrosa, en el ambiente de crisis por la que atraviesa el país desde hace unos años: las tomas masivas de las calles por fuerzas sociales y políticas de la más diversa índole, en las más insólitas circunstancias. Hemos presenciado multitudes manifestándose a favor de un banquero y pocas semanas después las mismas multitudes se manifestaban por las mismas calles, pidiendo la cabeza de aquel banquero ya en la cárcel.

Dentro de esta enmarañada trama, y más decisiva que la participación del movimiento indígena ha sido la participación militar, pues sin ésta el acontecimiento no hubiera tenido los efectos logrados. Intervinieron un sistema de elementos: a) la crisis institucional que supone la *reconversión* de unas FFAA, que parecen no haber procesado suficientemente su sentido histórico de defender la frontera contra el Perú, tras la firma de paz; b) el venezolano *síndrome Chavez*, significa una reconversión político mesiánica (salvífica) de las FFAA en una época de crisis; de hecho no es casual que sean los coroneles "héroes de Cenepa" los que protagonizan el golpe y que dos ex-generales diputados (Yandún y Moncayo) apoyen la rebelión; c) porque una crisis intrainstitucional había doblemente segmentado las FFAA: entre el ejército (de extracción más serrana) respecto de las otras ramas, marina y aviación más adscritas a la costa; y entre el escalafón de los jóvenes coroneles y los comandantes y generales, ya que la crisis económica afectó de manera muy directa el régimen salarial sobre todo de los mandos medios, y que en los últimos meses había provocado fuertes tensiones internas; d) la ideología castrense siempre "al servicio de la patria" justificaba la participación mi-

litar en una movilización contra el Presidente, al que la gran mayoría de la opinión pública nacional responsabilizaba de llevar al país a la bancarrota; e) en los últimos años el ejército, por una decisión institucional completamente autónoma, había ampliado e incrementado sus actividades en el desarrollo social del país, y particularmente entre las comunidades campesinas e indígenas, captando una gran adhesión entre dicha población; f) de hecho, la ayuda militar para la llegada de los indígenas a Quito sobre todo en su toma del Congreso y el final asedio al Palacio de Gobierno ha quedado suficientemente demostrada.

Si las FFAA ecuatorianas nunca han sido pretorianas, en la medida que no han ejercido su poder tras el trono, lo acontecido el 21 de enero del 2000, exactamente lo mismo que ocurrió el 6 de febrero de 1997, demuestra que en Ecuador no hay democracia sin el soporte de las FFAA.

■ Notas

1. *Rebeldes y Primitivos*, Ariel, Barcelona, 1968. *Los levantamientos populares en Francia en el siglo XIII*, Siglo XXI, México, 1972.
2. Segundo Moreno y Sublevaciones Indígenas en la Real Audiencia de Quito desde comienzos del Siglo XVIII hasta finales de la Colonia, 4ta. Edición PUCE, 1995, Quito. Silvia Rivera, *Oprimidos pero no vencidos, Luchas del Campesinado Aymara y quechua de Bolivia, 1900-1950*, UNRIS, Ginebra, 1986.
3. Ver al respecto: A. Touraine: *La palabra y la Sangre: política y Sociedad en América Latina*, Paris, 1988.



Ecuador: las transformaciones políticas del movimiento indígena ecuatoriano¹

Por Pablo Dávalos*

Los acontecimientos del 21 de enero del 2000, por los cuales el movimiento indígena ecuatoriano, en una alianza con militares de rango medio, logran destituir al presidente demócrata-cristiano, Jamil Mahuad, y constituyen un efímero gobierno de “Salvación Nacional”, han colocado al movimiento indígena como uno de los actores políticos más importantes de la actual coyuntura. La importancia política actual del movimiento indígena, no implica necesariamente que la sociedad ecuatoriana, conozca las dinámicas, los procesos y las formas organizativas de los indios. Más bien al contrario, la sociedad expresa un temor ante la emergencia de un actor social y político al que por mucho tiempo se lo había despreciado e, incluso, siempre había sido indiferente para el poder.

Ante la insurgencia del movimiento indígena, las respuestas han variado entre el discurso del paternalismo y de la condescendencia, que se corresponde a un discurso de la compasión, y en el cual perviven intactos el racismo y la prepotencia (“el reclamo indígena es justo, siempre han sido los preteridos de la sociedad, pero...”, “los indígenas han sido manipulados por los militares...”, etc.), hasta un discurso claramente oficialista, que excluye la posibilidad de abrir el espacio de lo social hacia nuevas formas de participación y de acción, y que condena enérgicamente la acción política del movimiento indígena como “golpismo”, “aventurismo”, etc.

La acción de enero es parte de un complejo proceso político interno del movimiento indígena ecuatoriano, que comprende a todo lo largo de la década de los ‘90 una serie de transformaciones cualitativas, tanto en su discurso cuanto en sus formas organizativas. Estas profundas transformaciones van emergiendo hacia la sociedad, y su punto de inflexión puede establecerse a partir del levantamiento indígena de 1990, que incorporó a los indígenas como un poderoso actor social en el escenario nacional.

De este levantamiento hasta la participación política en 1996, a través de la creación del movimiento político Pa-



chakutik, el movimiento indígena ecuatoriano cambia los ejes fundamentales de su discurso: de la lucha por la tierra, que caracterizó las reivindicaciones del movimiento indígena durante la mayor parte de los años 50-80, a la lucha por la plurinacionalidad, es decir, el cuestionamiento a la estructura jurídica del Estado, marcan una importante transformación cualitativa.

Sin embargo, el levantamiento de enero del 2,000, que parece cerrar un ciclo de transformaciones políticas del movimiento indígena, se caracteriza por realizar una crítica radical al Estado, que no había estado presente en los levantamientos anteriores más que a nivel retórico. En efecto, el pedido de disolución de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial), y la creación de un gobierno de “Salvación Nacional”, en el cual los indígenas tendrían una directa participación, dentro de las propuestas históricas del movimiento indígena (la lucha por la tierra, la plurinacionalidad), se constituye como una ruptura con respecto a las demandas anteriores, y al mismo tiempo inaugura una dimensión nueva dentro de las dinámicas organizativas, aquella del poder.

Pero, aquello que otorga un cariz diferente a la propuesta de crítica radical al Estado, e incluso la crítica radical al proyecto de “democracia” que pretende imponerse desde el Estado y desde las élites, es su efectiva puesta en práctica en la coyuntura de enero del 2000. Los indígenas logran una

alianza estratégica con militares de rango medio, que transforma radicalmente el panorama político del Ecuador y que cuestiona severamente los límites de la democracia formal.

Empero, esta transformación cualitativa plantea una multitud de nuevos problemas, tanto en la formación de discursos, cuanto en la adecuación de las estrategias organizativas. El panorama es aún incierto, pero es indudable la fuerza y el peso actual que tienen las organizaciones indígenas dentro del país.

■ Las demandas por la plurinacionalidad en los noventa

La lucha por la plurinacionalidad es la lucha por el reconocimiento a la diversidad, por el derecho a existir y convivir en la diferencia fundamental frente al proyecto de la modernidad y frente a la expansión del capitalismo. La plurinacionalidad es el eje estratégico a partir del cual el movimiento indígena articula su discurso, sus prácticas, y sus organizaciones, frente a la sociedad, durante la década de los noventa.

La plurinacionalidad implica el respeto a la diferencia. De hecho, el Ecuador se ha estructurado como una sociedad marcadamente racista, autoritaria, intolerante e inequitativa. Dentro de los imaginarios creados por los discursos de poder, lo indígena remite a una simbología de la derrota, de la humillación y del fracaso. La sociedad ecuatoriana se niega a verse en el espejo de su historia, niega sus raíces indígenas, y una de las formas de esa negación es la indiferencia y el desprecio hacia todo el universo simbólico de lo indígena.

Es natural, entonces, que la lucha por la plurinacionalidad afecte la formación de los imaginarios sociales y las construcciones simbólicas elaboradas por el poder sobre lo indígena, y afecte también a la estructura misma del poder. Más allá de atacar una parte de la estructura económica, como fue el caso de la lucha por la tierra durante el período 1950-1980, la plurinacionalidad extiende las posibilidades de acción social del movimiento indígena hacia otros aspectos, como la educación intercultural bilingüe, el sistema de salud indígena, la reconstitución de los pueblos originarios, etc.

Pero la lucha por la pluriculturalidad se articula también como una lucha política. Dos eventos son claves dentro de este proceso, por una parte la ratificación, en 1997, por parte del Congreso Nacional del Ecuador, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y, de

“Pero la lucha por la pluriculturalidad se articula también como una lucha política. Dos eventos son claves dentro de este proceso, por una parte la ratificación, en 1997, por parte del Congreso Nacional del Ecuador, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y, de otra parte, la conformación de la Constituyente de 1998 que reconoce la existencia de los Derechos Colectivos para los pueblos indígenas.”

otra parte, la conformación de la Constituyente de 1998 que reconoce la existencia de los Derechos Colectivos para los pueblos indígenas.

Esto marca una transformación cualitativa, no sólo en el campo

discursivo de las demandas del movimiento indígena, sino que, además, expresa un complejo y profundo proceso de politización, en el cual las organizaciones indígenas agrupadas al interior de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), se van constituyendo como un sujeto político con indudable trascendencia para incidir en la política nacional.

La incorporación de la figura de los “Derechos Colectivos”, dentro de la Constitución vigente, plantea varios problemas que aún no han sido definidos, ni por el movimiento indígena, ni por la sociedad en su conjunto, entre ellos podrían resaltarse, por ejemplo: la armonización con las leyes existentes, los mecanismos de su puesta en práctica, la definición deontológica del sujeto de los Derechos Colectivos, etc.

La incorporación de los “Derechos Colectivos” de los pueblos indígenas en la constitucionalidad vigente, pone al desnudo, asimismo, los límites entre el discurso de la democracia y su práctica efectiva. Hasta el presente, la democracia, tal como se ha venido imponiendo, no ha representado ningún avance ni en las condiciones de vida ni en el reconocimiento de la sociedad a lo indígena. Las leyes aprobadas se han convertido en letra muerta cuando se trata de cambiar profundamente la estructura de poder. El movimiento indígena comprueba a lo largo de la década de los noventa, las limitaciones que tiene la propuesta de la plurinacionalidad. Es en este contexto que habría que considerar la coyuntura de 1999, como un período en el cual se van redefiniendo las relaciones del movimiento indígena con respecto a sus ejes de acción, sus relaciones con la estructura de poder, al tiempo que se va vislumbrando la emergencia de nuevas propuestas y de nuevos ejes estratégicos.

■ Los levantamientos indígenas en el período 1999

A pesar de las declaratorias de plurinacionalidad del Estado Ecuatoriano, la exclusión, la marginación y la pobreza de los indígenas (cerca del 40% de la población nacional), son evidentes. A la exclusión económica, se añade la exclusión social y la exclusión política. Es precisamente en contra de un modelo excluyente en lo económico y en lo

político que se realiza el levantamiento indígena del mes de marzo de 1999. En esta ocasión, los indígenas logran la constitución de “mesas de diálogo” con el régimen, para resolver un conjunto de problemas sociales y económicos de la población indígena y no indígena. A pesar de los compromisos adquiridos por el gobierno de la Democracia Popular, en estas “mesas de diálogo”, la falta de voluntad política del régimen para lograr acuerdos, deslegitima estas “mesas de diálogo”, y cierra la posibilidad de utilizar al diálogo como vía para superar los conflictos.

En efecto, a pesar de que el gobierno había manifestado su compromiso por adoptar una política social y revisar los programas de ajuste; cuatro meses después, el régimen demócrata-cristiano, decide la aplicación de un duro paquete de ajuste económico que contempla, entre otras medidas económicas, la elevación de los combustibles, entre ellos el gas de uso doméstico, la congelación de salarios, y la eliminación total de subsidios sociales.

Frente a la aplicación de este paquete de ajuste económico, el movimiento indígena realiza su segundo levantamiento durante el mes de julio de 1999, y, en alianza con otros sectores sociales, entre ellos los taxistas, se logra, finalmente, la revisión del ajuste: el precio de los combustibles y del gas doméstico se congelan por un año, además de arrancar al gobierno la promesa de iniciar políticas sociales.

El período que va de julio a diciembre está caracterizado por el intento del régimen demócrata-cristiano de recomponer su fuerza política, lograr acuerdos a nivel parlamentario que le den viabilidad a su propuesta de privatización de los sectores estratégicos de la economía, y neutralizar la capacidad de movilización de los movimientos sociales, entre ellos, al movimiento indígena.

El levantamiento de marzo, como aquel de julio, se corresponden a una lógica imperante en la acción política de los movimientos sociales del Ecuador, aquella de constituirse en un contrapoder lo suficientemente fuerte que pueda limitar eficazmente la capacidad de maniobra del régimen. Dentro de esa lógica, la movilización social, debe dar la fuerza necesaria a las propuestas realizadas, y éstas, generalmente, buscan maximizarse con el propósito de abrir un abanico de opciones dentro de las estrategias de negociación.

Las “mesas de diálogo”, en el mes de marzo, así como la revisión y congelamiento del precio de los combustibles, en el mes de julio, son los acuerdos que permiten medir la fuerza organizativa, de movilización y de negociación, de los actores socia-

les ante el poder político. En ambas circunstancias, el horizonte de expectativas políticas del movimiento social se amplía, y se logran acuerdos estratégicos entre diferentes actores sociales, además de que las bases, sobre todo del movimiento indígena, se politizan rápidamente. Sus estructuras organizativas se adecuan de manera flexible a los momentos políticos existentes.

Los levantamientos de marzo y julio del '99, contribuyen a fortalecer políticamente al movimiento indígena, al tiempo que desgastan y debilitan al régimen demócrata cristiano. Sin mayor capacidad de maniobra, el gobierno se ve obligado a incumplir su programa de ajuste neoliberal. Por vez primera, se declara una moratoria unilateral de la deuda externa. De otra parte, la debilidad política del gobierno le impide avanzar en su propuesta de privatización de las empresas del sector público.

Es en este contexto, de fragilidad política, que el régimen decide por una apuesta desesperada que le posibilite reconfigurar su poder político. Esa apuesta es el anuncio formal de la dolarización de la economía ecuatoriana. Así, la dolarización otorga un horizonte de recomposición a las élites. Es ese el contexto en el cual se estructuran las nuevas demandas del movimiento indígena ecuatoriano, y su transformación más profunda, aquella que otorga, por vez primera en su historia reciente, una visión de poder.

■ La disolución de los tres poderes del Estado: una crítica radical a la “democracia” formal

Mientras que el discurso político del movimiento indígena se situaba en lo reivindicativo (la lucha por la tierra o la lucha por la pluriculturalidad del Estado), en el levantamiento indígena de enero del 2000, el discurso del movimiento indígena es básicamente político: su demanda es la disolución de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y la conformación de un nuevo gobierno con nuevas estructuras de poder.

Es un discurso nuevo, que empieza recién a configurarse y que implica una profunda transformación política del movimiento indígena ecuatoriano. De hecho, éste se constituye ahora no solamente como sujeto político sino como opción de poder. Es decir, cambia los ejes que habían direccionado, hasta el momento, su lucha, y en el cual es el poder político el nuevo eje central de su propuesta. Para una sociedad tan cerrada y tan racista como la ecuatoriana ello implica un cambio radical

“Los levantamientos de marzo y julio del ‘99, contribuyen a fortalecer políticamente al movimiento indígena, al tiempo que desgastan y debilitan al régimen demócrata cristiano. Sin mayor capacidad de maniobra, el gobierno se ve obligado a incumplir su programa de ajuste neoliberal.”

en la percepción y en el imaginario social que existe sobre los indígenas.

El movimiento indígena ecuatoriano acompaña a su crítica radical a la estructura política del Estado, con una propuesta de construcción de un poder alternativo a través de la constitución y conformación a todos los niveles de la sociedad de los Parlamentos Populares. Los Parlamentos Populares son verdaderas Asambleas del Pueblo, de carácter abierto, de delegación por la vía de la extensa red de organizaciones populares existentes en el Ecuador. Son una especie de reconstitución del ágora griega, el espacio en el cual el pueblo discute directamente sus problemas sin necesidad de la delegación oficiosa a través del voto y de todo el aparato electoral. Los delegados a las Asambleas Populares, o Parlamentos, llegan directamente desde sus espacios organizativos, y discuten propuestas que ya habían sido debatidas en sus organizaciones de base.

De hecho, las organizaciones de la sociedad civil recogen la iniciativa lanzada por el movimiento indígena y constituyen los Parlamentos del Pueblo a nivel local, provincial y, finalmente, a nivel nacional. Para las primeras semanas del mes de enero del 2000, se logra constituir por vez primera el Parlamento de los Pueblos del Ecuador, como un nuevo espacio político. Es desde la constitución de este espacio político que el movimiento indígena busca legitimar sus propuestas de disolución de los tres poderes del Estado Ecuatoriano y la creación de un nuevo gobierno.

Empero de ello: ¿cómo estructura organizativamente el movimiento indígena su propuesta de disolución de los tres poderes del Estado? ¿Que direccionalidad política para el conjunto del movimiento indígena se desprende de esta nueva propuesta? ¿Qué consecuencias tiene la crítica radical a todo un proyecto político que nace con la misma Modernidad? ¿Cómo asume la sociedad ecuatoriana esta crítica al carácter mismo del Estado? ¿Qué acciones políticas se dan en función de este pronunciamiento? ¿Qué estrategias a futuro pueden establecerse que no impliquen un desgaste del movimiento indígena? ¿Qué políticas de alianzas desarrollar en ese contexto? ¿Cómo atravesar la frontera hacia lo estrictamente político sin provocar fracturas en lo organizativo? ¿Qué propuestas, qué alternativas, qué programas, qué discursos van a sustentar esta transición política?

■ La dialéctica del poder

La lógica del movimiento social, y entre ellos el movimiento indígena, ha sido la de constituirse como un contrapoder lo suficientemente fuerte que pueda constituirse en un límite real y efectivo a las pretensiones del poder. Dentro de la lógica del contrapoder se desarrollan acciones de organización y movilización. Los paros, las huelgas, los levantamientos, las sublevaciones, son estrategias de movilización por las cuales el movimiento social busca oponerse al poder. Es en función de esa lógica que se estructuran los discursos, las estrategias, las negociaciones, las formas organizativas.

Por su parte, la estructura del poder desarrolla varias dimensiones al interior de la sociedad. Una de ellas es la institucional, es decir, la codificación dentro de un conjunto de reglas, tradiciones y normas, de las actividades sociales. Dentro de la institucionalidad se inscribe la política y sus instituciones. También existe otra dimensión básica de la

estructura de poder y que tiene una gran fuerza en contextos de democracia formal y es la de la constitucionalidad, es decir, la legitimación jurídica y política, a través de un conjunto de normas básicas que regulan la acción social y política. Dentro de esas fronteras es permitida la acción social, la acción política y aquella jurídica. Fuera de ella nada es permitido.



El movimiento social, por su parte, se mueve fuera de estos espacios. Es precisamente en virtud de esta fractura que se conformó el Movimiento Pachakutik, como una opción de lucha dentro de espacios que son ajenos a las dinámicas del movimiento social. Yes justamente a partir de esta experiencia electoral que se pueden comprobar una serie de limitaciones que el movimiento social no ha podido superar: la carencia de procesos de ciudadanía en amplias capas de la población, sobre todo en las poblaciones indígenas del sector rural, la falta de recursos para acceder masivamente a los medios de comunicación, la inexperiencia en el manejo electoral e institucional, la falta de visión en la política de alianzas, la falta de credibilidad de sus propuestas, etc.

Es por ello que el planteamiento de la CONAIE, de disolución de los tres poderes del Estado y la conformación de un nuevo gobierno, rompe con las prácticas del movimiento social e instaura una nueva visión dentro del movimiento social ecuatoriano, aquella del poder. Esta ruptura se da sin que existan procesos previos de transformación orga-

nizativa interna a través de la discusión, debate y reflexión de esta nueva propuesta, y procesos de conformación de nuevos discursos y nuevas prácticas organizativas. De hecho, el movimiento social se plantea el problema del poder, desde la misma lógica y la misma dinámica con la que se había consolidado como contrapoder.

Ello implica una serie de rupturas que conllevan el riesgo de fracturar seriamente la cohesión organizativa y de movilización del movimiento social, pero al mismo tiempo, otorga una dimensión nueva dentro del horizonte de sus expectativas. Constituirse como poder implica la convicción de cambiar al país. Pero este cambio debe adecuarse a la realidad. Para ello se necesitan otro tipo de lógicas que aquellas del contrapoder y que le han dado una gran preeminencia al movimiento social. Ahí radica el reto fundamental del movimiento social ecuatoriano y, a su interior, del movimiento indígena.

Cambiar de lógica significa desarrollar propuestas incluyentes y horizontes de acción que sean creíbles por el resto de la sociedad. Pero, dentro de esa dialéctica de las sociedades, asumir la lógica del poder puede implicar la destrucción de la experiencia ganada como contrapoder. Es decir, ese acumulado histórico de huelgas, paros nacionales, levantamientos y sublevaciones indígenas, puede revelarse contraproducente para dirigir, gestionar, negociar y administrar los espacios institucionales y políticos de la sociedad.

Cuando el movimiento indígena criticó, y con justa razón, a los tres poderes del Estado, y pidió un cambio radical del quehacer político, tuvo una amplia aceptación en la sociedad y su propuesta fue legítima, hasta ahí actuaba como el referente más legítimo del contrapoder social; pero cuando pasó a la acción y con un grupo de militares jóvenes intentó convertirse en gobierno, paradójicamente, su propuesta perdió legitimidad y credibilidad social. Para afirmarse como poder, el movimiento social habría necesitado controlar, dispersar o destruir las formas de resistencia y las formas de contrapoder que se habrían generado contra su gobierno. Y ello, porque su acción como poder no estuvo mediada por un proceso previo de discusión, transformación interna y formación de nuevas lógicas de acción.

Toda resistencia al poder es legítima, por ello el poder busca desarrollar un abanico de posibilidades que le permitan legitimarse sin llegar al extremo de la violencia permanente. Desde las formas más fenoménicas como la violencia, el dinero, las instituciones, o el control de los medios de comunicación, hasta las formas más elaboradas como la formación de consensos, el control disciplinario, la economía política del cuerpo humano, etc., el poder es una vasta y compleja red de relaciones sociales, y en la cual todos los seres humanos que viven en una sociedad están sumergidos y son parte de él.

Es dentro de esta red de poderes que se desarrollan resistencias, obstáculos, frenos, desviaciones a la imposición del poder. Estas estrategias de contrapoder están en toda la sociedad. A nivel más general, la organización y conducción política de estas manifestaciones de contrapoder recogen, viabilizan y conducen esas resistencias al poder en un proyecto único de contrapoder social. Durante la década de los ochenta, fueron los sindicatos quienes dieron conducción política a las resistencias contra el poder. Su fracaso fue el fracaso de una concepción política del mundo. Durante la década de los noventa, es el movimiento indígena quien recoge y conduce las resistencias al poder. Hasta ahora, éste se ha convertido en el referente social más importante, y justamente por ello, es necesario que el movimiento indígena reflexione desde sus espacios organizativos sobre su futuro político de convertirse en opción de poder, porque de ello dependerá la historia política futura del país.

El reto del movimiento indígena es complejo, y las disyuntivas que se le presentan vuelven más problemática la decisión. Si el movimiento indígena, conjuntamente con los movimientos sociales del Ecuador, optan por convertirse en una opción real y factible de poder, deben cambiar la lógica de acción con la que han construido hasta ahora su historia de resistencia y organización. Deben comprender que las fronteras de su acción política rebasan con mucho aquellas fronteras geográficas del Ecuador, y que sus consecuencias serán mundiales. Pero el riesgo está, precisamente, en poner en juego todo un acumulado histórico. Las decisiones dependen de la sabiduría y de la paciencia de los pueblos del Ecuador. Tienen a su favor el hecho de haber resistido por más de cinco siglos la brutal imposición del poder.

■ Nota

*Miembro del Consejo Editorial del Boletín del ICCI (Instituto Científico de Culturas Indígenas-Ecuador) "Rimai".

1. Este artículo fue extraído del Boletín del ICCI, N° 11, año 2, Febrero del 2000



La vuelta a un día de ochenta mundos

Por Pablo Ospina*

Es completamente cierto, y así lo prueba la historia, que en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez

Max Weber¹

■ “El final”

Una vuelta a ese día de otro mundo

El día viernes 21 de enero a las 15h Jamil Mahuad, entonces Presidente del Ecuador, anunció que no renunciaría. Lo ratificó en la mañana del día sábado 22, cuando ya todas las cartas estaban echadas. Con ello proclamó al mundo que su “abandono” del cargo fue forzado y ratificó de esta forma, simbólicamente, la tan temida ruptura del orden constitucional. Esa madrugada, durante tres horas, pareció dibujarse el perfil de un triunvirato civil y militar, pero no se mantuvo. Lo sucedió Gustavo Noboa, entonces vicepresidente, tal como lo habían venido pidiendo varios dirigentes políticos, desde Rodrigo Borja hasta los dirigentes del Partido Social Cristiano pasando por el propio Oswaldo Hurtado, su coideario y fundador del partido de gobierno. Una salida radicalmente distinta a la buscada por los movimientos sociales y la CONAIE, que pedían la disolución de los tres poderes y su sustitución por un gobierno popular y militar, sustentado en los “Parlamentos Populares”, sede de las decisiones consideradas legítimas.

Cuando conocemos el resultado final de un suceso, solemos interpretar su desarrollo y su origen basados en ese conocimiento. Pero hay que recordar que en su momento los actores desconocían el desenlace final de sus acciones. Sus actos no están informados por ese porvenir todavía incierto. Ese futuro que es aún un proyecto, una intención inacabada. Y este resultado parece favorable a la derecha política ecuatoriana². Gustavo Noboa representa un puente indiscutible con los sectores empresariales costeños, ligados al Partido Social Cristiano (PSC), principal exponente de la tendencia en Ecuador. Ratificó, apenas posesionado, la con-



tinuidad de la dolarización anunciada por su antecesor dos semanas atrás. Todo anuncia que buscará terminar de aplicar, con mejor suerte, las postergadas políticas de ajuste que se han aplicado en el resto de América Latina.

A la vista de tales resultados inmediatos tenemos tendencia a considerar que fue una salida planificada, una hábil maniobra política para forzar la renuncia de un Presidente incómodo e inepto que obstaculizaba, en lugar de facilitar, las políticas de ajuste. Se podría llevar el análisis más lejos: el movimiento social que derrocó a Mahuad podría haber sido un simple peón del PSC o de la cúpula militar que buscaba la renuncia de Mahuad y la sucesión constitucional como medio de encontrar una salida a la crisis.

La práctica de la política es algo distinto. Los dirigentes se mueven en las coyunturas críticas al azar de acontecimientos que nunca controlan del todo y en medio de procesos que eluden la planificación. Al final ni el resultado ni el proceso se parecen a lo que imaginaron³. La derecha quería efectivamente la sucesión presidencial, pero en un ambiente de calma y tranquilidad ciudadanas. La sucesión podía incluso ser concebida como una forma de lograr, al menos temporalmente, esa calma. Controlar la agitación social

y lograr un nuevo acuerdo de gobierno para la aplicación de las tan retrasadas políticas de ajuste. De ninguna manera buscaron, planificaron o desearon un movimiento indígena intransigente y radical; mucho menos un movimiento capaz de influenciar o movilizar a un sector tan vasto de mandos medios del ejército (más de 200 oficiales y mandos medios se encuentran sindicados en los juicios posteriores). De ninguna manera les resultaba conveniente una combinación explosiva de capacidad de movilización social y prestigio moral de que dispone el movimiento indio; con la influencia política de sus demandas en un factor de poder tan importante como las Fuerzas Armadas.

La cúpula militar, por su parte, ha sido acusada de buscar la destitución del Presidente de la República motivada por factores como la inconformidad con el arreglo fronterizo (algo planteado reiteradamente por Jamil Mahuad y por una parte de la prensa peruana); con el manejo torpe y vacilante de las autonomías (una acusación sostenida el día domingo 23 de enero por los dirigentes social cristianos de la costa, radicalmente opuestos a la rebelión); con la reducción del presupuesto militar (algo avanzado por las propias cúpulas militares y por algunos de los sublevados); y con la delirante protección oficial a la corrupción de la banca (el principal tema del discurso público de los sublevados)⁴. Otro elemento mencionado: el acuerdo político entre Mahuad y el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), del ex - presidente Abdalá Bucaram, que incluía (al parecer) su regreso al país desde su exilio en Panamá. Semejante acuerdo levantaba escudos en el PSC y en las propias FF.AA. Aunque estas razones tienen seguramente algo de cierto (y todo parece indicar la existencia de un movimiento interno de disconformidad en los mandos medios conocido y tolerado por la cúpula militar), se puede presumir que los altos mandos militares no querían una fractura institucional de las proporciones alcanzadas en ese viernes interminable. El resultado final tampoco fue de su agrado.

Las polémicas posteriores y las mutuas acusaciones entre funcionarios del gobierno de Mahuad y miembros de la cúpula militar revelan parte de la situación interna y permiten hacer algunas interpretaciones⁵. En estas polémicas han intervenido los generales José Gallardo (ex - Ministro de Defensa), Carlos Mendoza (ex - Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Ministro de Defensa encargado durante la crisis), Vladimiro Alvarez Grau (ex - ministro de Gobierno), Benjamín Ortiz (ex - canciller), Francisco Huerta Montalvo (actual ministro de Gobierno de No-boia) y el General Telmo Sandoval (ex - Comandante en Je-

fe del Ejército y actual Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas). Al parecer a fines de diciembre e inicios de enero Gallardo y Mahuad habrían buscado promover (o al menos considerado la posibilidad de realizar) un “autogolpe” de Estado para dar una salida a la crisis política. Estos intentos realizados en medio de la creciente inconformidad en el seno del ejército serían la explicación de la forzada renuncia de Gallardo y su sustitución por Mendoza en el Ministerio de Defensa. Varias intervenciones parecen corroborar lo que fue un fuerte rumor en su momento. Es evidente que el intento, si existió, era inviable. Incluso si las Fuerzas Armadas hubieran consentido, la falta de credibilidad y la debilidad de Mahuad eran tales que toda salida al “impasse” político creado por la disolución del Congreso habría llevado a una dura resistencia al golpe de mano y a la rápida destitución del Presidente, que tampoco hubiese obtenido apoyo popular en nuevas elecciones parlamentarias. El general José Gallardo y Vladimiro Alvarez, por su parte, acusaron a Carlos Mendoza y a Telmo Sandoval de haber sido parte del complot golpista desde un inicio, o al menos, de haber protegido con su complicidad, a los coroneles agitadores⁶.

“La derecha quería efectivamente la sucesión presidencial, pero en un ambiente de calma y tranquilidad ciudadanas. La sucesión podía incluso ser concebida como una forma de lograr, al menos temporalmente, esa calma.”

Con estos datos podemos hacer algunas hipótesis sobre la posición de los altos mandos en la rebelión. En primer lugar existe una vieja y creciente relación entre las FF.AA y las organizaciones indígenas desde el levantamiento de junio de 1990. Los lazos se han ido reforzando

una vez que los mandos militares superaron el viejo temor respecto a las implicaciones que para la “unidad nacional” podía tener la reivindicación “plurinacional” indígena. La base de estas relaciones es, por un lado, la simpatía que generan las organizaciones indígenas y sus demandas. Por otro, un común malestar por los efectos de las políticas de ajuste estructural en el debilitamiento del Estado, en particular con la posible privatización del sector energético. En efecto, las Fuerzas Armadas ecuatorianas han estado tradicionalmente comprometidas, desde la revolución juliana de 1925, con un modelo de desarrollo donde destaca el rol relevante del Estado como motor y director del proceso⁷.

En segundo lugar, la insatisfacción en el seno de los mandos medios del ejército debió ser compartida en grados diversos por la propia cúpula militar. De hecho, es muy probable que la actitud “contemplativa” ante los signos de rebeldía de estos oficiales medios, que cada vez eran más visibles (como aquellas reuniones de la oficialidad media reseñadas por las notas de prensa, las cartas hechas públicas donde habrían solicitado el recambio presidencial); haya sido la única postura “viable” ante la magnitud de la insatis-

facción. Para desactivar la insatisfacción no era posible una actitud “enérgica” (como la disponibilidad o la exclusión de los oficiales dirigentes), que habría llevado tal vez a un conflicto inmanejable en el Ejército. Ante ello la cúpula probablemente optó por

“Es la movilización indígena y social y el alzamiento de los oficiales jóvenes lo que dio su forma definitiva a la sucesión presidencial. Ambos procesos no fueron alentados ni por la cúpula militar ni por la derecha política, que también se vio sorprendida por el desenlace de los acontecimientos.”

un camino conciliatorio que a la larga se mostró inviable. Es altamente probable que la opción de la renuncia del Presidente haya sido entonces contemplada por la cúpula militar como un camino para *evitar* tanto la ruptura institucional interna (algo que finalmente ocurrió muy a su pesar) como el hundimiento del país en el “caos”. Sabemos ahora, en efecto, que en diciembre la cúpula militar había ya mencionado al Presidente Mahuad la posibilidad de la sucesión presidencial. La renuncia del Presidente permitía salvar ese difícil juego de equilibrios inestables y brindar una salida institucional a la crisis política. Lo seguro es que el alto mando militar nunca quiso ni pudo promover un alzamiento militar como el que finalmente ocurrió. Pero tampoco estaba en posición de reprimirlo violentamente o sofocarlo.

Es la movilización indígena y social y el alzamiento de los oficiales jóvenes lo que dio su forma definitiva a la sucesión presidencial. Ambos procesos no fueron alentados ni por la cúpula militar ni por la derecha política, que también se vio sorprendida por el desenlace de los acontecimientos. En efecto, las consecuencias de la rebelión del 21 de enero sobre la institución armada y la dimensión de la influencia social y moral de las organizaciones indígenas son resultados claramente indeseados por ambos sectores.

¿Cuál fue la lógica que explica la política y las consignas de este movimiento popular? La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) venían proponiendo desde diciembre la destitución de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso Nacional y del Ejecutivo en pleno. Ya entonces la consigna parecía muy ambiciosa y condenada al aislamiento. Pero era una consigna anclada en la experiencia reciente de los resultados de la movilización que en febrero de 1997 destituyó al Presidente Abdalá Bucaram. Resonaba como un eco sordo en todos los discursos el temor a una repetición de febrero. En esa ocasión la movilización social, conducida por los mismos actores, se había resuelto en los espacios institucionales formales. Se había buscado darle una forma “legal” al proceso de destitución⁸. Los dirigentes de las bases indígenas y sociales desconfiaban de la posibilidad de cumplir sus objetivos en cualquier de esos espacios. Apostaron entonces a su capacidad de movilización y a una alianza posible con sectores radicalizados e igualmente indignados, de la oficialidad joven de las Fuerzas Armadas. Quienes conocen de cerca las organi-

zaciones indígenas saben que no se trató de una posición alentada por la dirigencia nacional del movimiento. Los dirigentes fueron literalmente “arrastrados” hacia posturas radicales por la indignación de esas mayorías arrojadas a la miseria más indignante

y que se encuentran en el límite de su resistencia física y social.

Pero explicarse el origen de la consigna no es hacerla más viable. En la práctica ella era tres veces imposible. Primero, sobrestimó la capacidad de movilización propia. Segundo, sobrestimó el posible compromiso político del Ejército. Finalmente, como resultado, fue incapaz de reconocer las debilidades estructurales que asediaban a los conjurados: la debilidad regional y la debilidad internacional.

La movilización fue fuerte, pero careció del respaldo masivo de los sectores urbanos y medios que había caracterizado al movimiento tres años antes. Esto podía advertirse desde diciembre, pero fue inmediatamente perceptible luego del anuncio de la dolarización, el 10 de enero del nuevo siglo. A inicios de año todo parecía perdido para Mahuad. La discusión no era si el Presidente caía o no sino con qué fórmula se lo sustituiría. Existían básicamente tres opciones: el Partido Social Cristiano abogaba por una renuncia del Presidente de la República que permitiera la sucesión del Presidente del Congreso. Puesto que le resultaba difícil hallar la fórmula legal para hacerlo terminó optando por una sucesión del vicepresidente, con quien podría llegar a un acuerdo⁹. La segunda era la promovida por los movimientos sociales y la CONAIE: la formación de un gobierno popular, con sustento militar, luego de la renuncia o disolución del poder ejecutivo, legislativo y judicial. La tercera era un autogolpe de Mahuad; solución mencionada durante los días iniciales de enero y confirmada luego de la crisis por las declaraciones públicas del general Mendoza. Las dos últimas eran las de menor viabilidad política.

El anuncio de la dolarización cambió momentáneamente las piezas del tablero. El anuncio contradecía el propio juicio anterior del Presidente y el juicio de muchos de los técnicos del Banco Central y del Presidente de su Directorio. Todo indica que se trató de una maniobra improvisada para mantenerse en el cargo¹⁰. Pero el precio es muy alto para el futuro: una “*fuite en avant*” radical del proceso de ajuste estructural¹¹. Mahuad desconcierta al país: la dolarización parece permitirle recomponer el bloque de poder, parece darle “aire” al gobierno y reconstruir su perdida relación amorosa con la prensa quiteña. Además, el anuncio de la dolarización tiene un efecto “estabilizador” sobre el tipo de cambio y las tasas de interés y con ello generó un efecto

“desmovilizador” en especial sobre las clases medias de las principales ciudades. Este sector se mantuvo “a la expectativa” de lo que pudiera ocurrir. Junto a ello se lanzó una campaña de información y propaganda sobre el desastre de “volver atrás”. Se juega con el miedo a la hiperinflación¹².

Ante este sorpresivo y radical anuncio, la dirigencia social es incapaz de cambiar la táctica ni la consigna de la movilización. Sigue apostando a una salida propia que no signifique una repetición del 5 de febrero. La memoria está muy fresca. La inflexibilidad tiene todo el aspecto de ser dictada por un análisis insuficiente. Pero en realidad la apariencia es falsa: auténticamente las bases presionan a los dirigentes para evitar todo tipo de negociación. Se admite y se confía en el poderío de la propia fuerza de movilización. Algunos confían también en los lazos con el ejército y su posible compromiso con un cambio radical. En algunos la confianza es ciega. En otros acecha la duda, pero para ambos grupos la vuelta atrás parece imposible. Todo cambio en la voz de orden se asemeja a una traición. No se encuentra (¿no se busca?) una fórmula alternativa para enfrentar la nueva coyuntura política creada por el discurso presidencial del 10 de enero. El resultado es que cuando se desató la movilización final, ésta creció continuamente sin llegar a ser masiva. La falta de apoyo activo a la protesta, a pesar del prestigio del movimiento indígena e incluso de la simpatía existente, desplazó toda la resolución de la crisis, más claramente aún que pocos días antes, a la intervención de las Fuerzas Armadas.

Pero allí también, la CONAIE y la Coordinadora de Movimientos Sociales sobrestimaron su capacidad de decisión. Un compromiso decidido con un nuevo orden era imposible para las Fuerzas Armadas al menos por tres razones. La primera y más conocida, el aislamiento internacional de semejante gobierno popular. Esto es algo que llegó a ser decisivo en los momentos cruciales de la crisis, como lo dejan entrever las declaraciones del alto mando y del general Mendoza. La segunda era la ruptura regional evidenciada por un movimiento que careció de cualquier sustento costero. Semejante aventura amenazaba una guerra civil, o, como anunció León Febres Cordero, líder social cristiano y Alcalde de Guayaquil, en los momentos culminantes de ese inagotable día viernes, la secesión de Guayaquil. La tercera era el enorme riesgo institucional para las Fuerzas Armadas de hacerse cargo del país en las desastrosas condiciones económicas en las cuales semejante gobierno hubiera recibido la nación. Por lo demás, un giro radical de la política económica y una alianza fuerte con el movimiento indígena para formar un gobierno popular está muy lejos de despertar el consenso uná-

me de los militares ecuatorianos, por mucho malestar que haya despertado la crisis económica, la indignación por la complicidad gubernamental con el atraco bancario y el desastroso manejo de los últimos gobiernos¹³.

Al margen del malestar interno, del eventual compromiso de algunos oficiales y de la simpatía que las organizaciones indígenas y sus dirigentes pudieran despertar; el movimiento pidió demasiado a las Fuerzas Armadas o incluso a sus sectores más radicales. Tal vez un análisis sereno de los principales dirigentes lo hubiera reconocido en los momentos más decisivos. Pero en condiciones de rebelión social, la audacia supera la previsión, los participantes recuperan su capacidad de soñar despiertos y los sectores más desamparados, quienes no tienen nada que perder, son capaces de arrastrar tras de sí a las dirigencias vacilantes. El optimismo de la voluntad engeguece en esos instantes difíciles, el rigor pesimista de la inteligencia¹⁴.

El día jueves 20 de enero, el cerco al Congreso que habían hecho los manifestantes se radicaliza por la intervención de las bases indígenas de la provincia de Cotopaxi. El viernes 21, mediante un golpe de audacia fuerzan el cerco militar y con la ayuda de los militares acantonados en la zona, ocupan el edificio del Congreso Nacional, la Contraloría y la Corte Suprema de Justicia. A mediodía, las Fuerzas Armadas le piden al Presidente de la República su renuncia como una fórmula para hacer viable una salida constitucional a la crisis. Al hacerlo, al pedir públicamente la renuncia de su Comandante en Jefe, han violado de facto la Constitución. Mahuad impide el maquillaje institucional cuando en horas de la tarde se niega a renunciar.

■ “El comienzo” Una vuelta al mundo de ese día

Por segunda vez en tres años un movimiento popular provoca la caída de un Presidente electo en las urnas. La violencia ha estado prácticamente ausente de ambos episodios. Ambos combinaron una movilización social, indígena y popular con una especie de “arbitraje” militar. Ambos se desplegaron en una sociedad corroída por una crisis económica interminable y por el desprestigio del régimen político y sus representantes. ¿Qué pasó y dejó de pasar para que todo se repita?

La victoria de Abdalá Bucaram en 1996 estuvo precedida por un hecho importante para el régimen político: la entrada en la escena electoral de las organizaciones indígenas. Su salida, en 1997, fue seguida de un proceso de cam-

“Por segunda vez en tres años un movimiento popular provoca la caída de un Presidente electo en las urnas. La violencia ha estado prácticamente ausente de ambos episodios. Ambos combinaron una movilización social, indígena y popular con una especie de “arbitraje” militar. Ambos se desplegaron en una sociedad corroída por una crisis económica interminable y por el desprestigio del régimen político y sus representantes. “

bios institucionales notables y de la redacción de una nueva Constitución en donde se recogieron muchas reivindicaciones de participación política y consagración de derechos sociales y colectivos¹⁵. Al mismo tiempo, como si no fuera contradictorio, la Constitución reforzó los poderes presidenciales y limitó la capacidad de fiscalización e intervención del Congreso Nacional en la política económica. Fue la propuesta aprobada para salir al paso del dilema de la “governabilidad”, donde residía supuestamente la causa de los males nacionales: la incapacidad de llegar a acuerdos, el “canibalismo político”, la miopía de la clase política¹⁶.

El enigma se vuelve entonces más profundo. La crisis se perpetúa a pesar de estar viviendo desde 1995 un proceso doble de “ingreso” de sectores marginados en el régimen político, de inclusión de muchas de sus demandas en el ordenamiento jurídico nacional, y de reforzamiento de las provisiones políticas y jurídicas que permiten al Presidente de la República manejar la política económica sin las incómodas interferencias del Congreso¹⁷.

En realidad, “la calentura no está en las sábanas”. Mi hipótesis es que el Ecuador no vive una crisis de gobernabilidad. Es falsa la imagen de un país y una “clase política” encerrada en sí misma, incapaz de negociar, agazapada en el autoritarismo y los intereses de grupo. Esta generación de políticos, en la misma tradición de sus antecesores, vive, por el contrario, de una larga historia de negociaciones. Exactamente a la inversa de esa imagen “canibalística” de las dirigencias políticas¹⁸, incapaces de conseguir acuerdos, creo que tenemos un régimen político habituado a negociar todo. Prácticamente nada es lo suficientemente sagrado para escapar a una negociación política en Ecuador. Durante décadas esos mismos políticos, que se quejan de la falta de gobernabilidad, han alabado la tradición “pacifista” del país pero nunca la han relacionado con la flexibilidad del régimen político y su tradición negociadora. ¿Cómo explicar de otra forma la falta de conflictos abiertos, de luchas radicales, de guerras civiles, de desangramientos fratricidas? El caso es más sorprendente cuando comparamos este país con sus vecinos inmediatos, sumidos en espirales de violencia y autoritarismo sangriento. Las estructuras sociales y las exclusiones estructurales en Ecuador son seculares y no muy diferentes de las existentes en el resto del continente. Y sin embargo, de su vida política ha estado ausente la violencia más descarnada. Ecuador ha sido un país que ha exhibido una “clase política” maestra en el arte de la negociación y la flexibilidad¹⁹. Nótese que la legislación sorprendentemente liberal y progresista del Ecuador ha sido aprobada muchas veces por partidos adscritos a la derecha política. La propia Constitución de 1998 es un buen ejemplo: la mayoría de constituyentes pertenecían al Partido Social Cristiano y a la Democracia Popular. Tenemos, pues, una clase dominante sorprendentemente dispuesta a aceptar cambios en sus sistemas de dominación y muy particularmente en su régimen político. No son necesarias grandes guerras ni des-

garramientos sangrientos para aceptarlo. Las transformaciones legales se aceptan al comienzo, no al final de un proceso de cambio.

Para muestra, un botón. Durante las horas difíciles del día viernes 21 de enero, el general Carlos Mendoza recibió una llamada indignada desde Estados Unidos. ¿Cómo era posible que se le pidiera al Presidente Constitucional de la República la renuncia cuando ni siquiera había regimientos sublevados, no se había disparado un tiro y ninguna gota de sangre había corrido por las calles? Para ciertas tradiciones políticas, pedir la renuncia del Comandante en Jefe es el extremo de los extremos, cuando ya sólo quedan entre manos salidas desesperadas. En Ecuador parecía más fácil sacrificar al Presidente que aceptar un conflicto irreparablemente violento. El general dice haber respondido que “ellos” (los norteamericanos) no entienden al Ecuador. Lo que estamos tratando, habría dicho, es precisamente evitar un derramamiento de sangre²⁰.

¿Cuál es el origen, algo extraño, de este comportamiento inusual? Solo propongo dos hipótesis preliminares. El Ecuador es un país cuyas clases dominantes han tenido que acostumbrarse a una negociación permanente de sus cuotas de dominación. La fractura regional, la casi inexistencia de clases hegemónicas a nivel nacional, las ha llevado a hacer de la negociación entre sí, la condición de su supervivencia y del manejo unificado del Estado. Pero además, la renta petrolera, que desde 1972 alimentó la autonomía estatal, ofreció una base para negociar sin perder. La distribución de las rentas estatales se convirtió en la materia de la negociación pero también en la condición de posibilidad de un reparto donde cada cual pudiera tener su “pequeña satisfacción” (la frase pertenece a Bustamante 1997) sin arrancársela al vecino. El modelo de Estado petrolero confirmó una tendencia histórica y se adaptó a una vieja tradición política.

La segunda hipótesis es que esta extraordinaria flexibilidad del Estado y del sistema político para “mutar” y adaptarse ante nuestros ojos, ese “camaleonismo” que hemos analizado a lo largo de estas páginas, parece haber nacido, sorpresivamente, de una debilidad más antigua y más hon-



da. En efecto, la sorprendente liberalidad y modernidad del sistema político para aceptar rápidamente ciertas demandas sociales que en otros países han desgarrado a sociedades enteras por décadas de enfrentamientos, le permite al Estado mutar y con ello hacer un acto de legitimación. Pero muta sin cambiar porque sus actos no son capaces de transformar a fondo el mundo de la vida. Los resortes del poder y del orden social se le escapan en muchos sentidos. El Estado ha buscado insistentemente extender su autoridad sobre todo el territorio y sobre todos sus habitantes. Lo ha hecho con toda la fuerza de un gigantesco presupuesto, mayor que el de cualquier actor aislado o asociado dentro de sus fronteras; lo ha hecho con la cobertura de un aparato administrativo que extendió sus redes hasta los sitios más apartados del país; con una extensión inédita de la prestación de servicios sociales a la población ecuatoriana. Pero las lógicas de funcionamiento social todavía le son ajenas. Todavía existe, al menos parcialmente, un país “real” distante de los formalismos legales; la ley (es decir, el Estado convertido en texto) no ha hecho carne en sus sujetos, no ha ingresado en sus hábitos, no se ha vuelto un factor incorporado en sus reacciones más espontáneas.

La fortaleza del Estado ecuatoriano deriva, pues, de su debilidad. De que es incapaz de controlar y dirigir los resortes de la vida social. Pero deriva también de la creencia que tienen los actores en su poder. Más precisamente, de la aspiración social, del deseo que tienen de que alguien controle de verdad, el rumbo de la vida. Sostengo que esta idea de un agente racional que conduce los hilos de la historia podría ser una infiltración profunda de la modernidad en la vida de los actores sociales, pero creo que tiene seguramente raíces más antiguas y más variadas. Puede rastrearse ya, de algún modo, en el viejo legalismo de las comunidades indígenas que resistían la sumisión al régimen colonial. Pero es claro que todos los actores reclaman hoy en día transformaciones legales al Estado cuando quieren darle a sus aspiraciones una forma colectiva y racional. Ese es el referente de todos quienes se vieron convocados y transformados por el proyecto de 1978; es el espacio omnipresente de una aspiración moderna: la de contar con un agente racional capaz de ordenar y ejecutar. Pero referirse al Estado es referirse también al proyecto modernizador en un sentido más profundo y secular: el de una voluntad social concentrada. El de la idea de que “alguien” dirige de verdad y que hacer una ley es dictar la voluntad soberana de la voluntad social. Los hombres tienen en la voluntad, uno de los resortes que mueven al mundo.

“Ami modo de ver, la crisis política del Ecuador es una crisis de aplicación del ajuste estructural. La llamaremos “crisis de legitimidad”. Empezó a resultar irresistible desde 1995, pero sus manifestaciones vienen acumulándose desde 1982. Ocurre que el ajuste exige un manejo autoritario de la política.”

Pero los actores son conscientes de la ilusión. Viven en ella y la tienen incrustada lo suficientemente profundo para que aparezca cada vez que convierten sus necesidades y sus difusas aspiraciones en un reclamo. Pero en el fondo de quienes actúan y negocian en la escena pública, así como de quienes manejan los hilos del régimen político y viven en sus intersticios; la debilidad estructural del Estado ecuatoriano salta a la vista. De esta manera se explica su extraor-

dinaria flexibilidad y su simultánea capacidad para seguir siendo el mismo. Ningún actor está dispuesto a jugarse por entero en la demanda al Estado porque éste no siempre (o casi nunca) es capaz de resolver el problema planteado. Toda demanda puede negociarse en el sistema político sin desgarraduras por-

que de todas formas deberá negociarse de nuevo, luego, en los espacios curvilíneos de la vida diaria. Todo se negocia en el sistema político en realidad porque nada se negocia allí en verdad²¹.

Pero estas explicaciones sólo nos ayudan a entender cómo fue posible el extraño desenlace en ese profético día viernes. Nos aclara cómo un movimiento popular fue capaz, otra vez, de destituir a un Presidente sin pagar la cuota de sangre de todas las revoluciones. Pero no nos explica por qué la crisis fue posible, por qué se resquebrajó el bloque de poder. Nos aclara el desenlace pero no nos dice nada sobre la naturaleza de la crisis política.

A mi modo de ver, la crisis política del Ecuador es una crisis de aplicación del ajuste estructural. La llamaremos “crisis de legitimidad”. Empezó a resultar irresistible desde 1995, pero sus manifestaciones vienen acumulándose desde 1982. Ocurre que *el ajuste exige un manejo autoritario de la política*. El ajuste no se negocia. No funciona si no se acepta en todas sus formas y consecuencias. No hay “políticas de ajuste a medias”. El ajuste es un “paquete” completo, compacto, calcado para todas las enfermedades de nuestro tiempo. Pero el Ecuador no tiene entre sus tradiciones la aceptación de esas salidas absolutas. Esto no quiere decir que sus clases dominantes no puedan crear esa nueva tradición y que la ausencia en el pasado de los horrores de una violencia política desenfrenada, la impidan para siempre en el futuro. Pero ocurre que hasta ahora su sistema político no ha sido capaz de procesar ese modelo autoritario que está obligado a aplicar desde hace 15 años.

En efecto, el modelo de ajuste, suponiendo que sus promesas de crecimiento y felicidad general fuesen ciertas, sólo ve frutos a mediano y largo plazo. A corto plazo genera incertidumbre, temor, causa pérdidas de empleo, crea rece-

sión. A corto plazo hay quiebras de empresas, sometimiento a fuerzas externas que las empresas locales no pueden resistir. A corto plazo sólo sobreviven los grandes, los vinculados a los mercados externos, los sectores “competitivos”. A corto plazo la resistencia civil es enorme. El país no puede aceptar esos sacrificios de corto plazo en nombre de la salvación futura. Los partidarios del ajuste deben imponerlo con mano dura, tal como lo han hecho en todos los países de América Latina. Pero la tradición negociadora de las clases dominantes del Ecuador se estrella contra esas salidas tecnocráticas y autoritarias. Se encuentra atada de manos ante la quiebra del Estado, el fin de la bonanza petrolera y la imposibilidad de negociar “pequeñas satisfacciones” entre élites locales, regionales y organizaciones sociales cada vez más poderosas y exigentes. No se aceptan las políticas de ajuste porque en el pasado siempre han sido sometidas a negociaciones parciales. Como resultado, en un ambiente hostil y desconocido, el régimen pierde legitimidad.

Así, pues, la crisis no está en la falta de acuerdos de gobernabilidad sino en el desajuste de las políticas de ajuste con el tradicional modelo de gobernabilidad ecuatoriana. Esas “salidas a medias”, esos acuerdos lentos, esos avances por caminos retorcidos, esa tradición andina de chaquiñanes indirectos, se acopla mal a las recetas económicas de los yuppies egresados de las escuelas de Chicago. Este régimen político y esta gobernabilidad ecuatoriana no han podido resolver las más infames exclusiones estructurales de la so-

ciudad. Al contrario, las mantiene y las reproduce. Pero, al mismo tiempo, puede mostrar también los éxitos de una historia flexible que ha eludido hasta ahora los enfrentamientos extremos.

El movimiento del 21 de enero es parte de esta historia y esta tradición. Es un suceso atacado por los voceros de la “opinión pública”. Se ha dicho que afecta “nuestra imagen internacional”, que confirma la anarquía en la que vivimos, que resalta la inmadurez de nuestra vida política. Yo quiero levantar acta, para terminar, y en contra de esas voces autorizadas, de las tradiciones democráticas que este movimiento encarna. Encarna la rebelión contra un ajuste impuesto y contra sus consecuencias. Encarna también la audacia de quienes no tenían nada que perder y decidieron actuar sin cálculo estratégico pero con razón y autoridad moral. Jamil Mahuad apuntó al mejor valor del movimiento cuando fustigaba sus consecuencias horas después de que ese viernes hubiera concluido al fin: ¿qué futuro le espera, decía, al Ecuador, cuando el Presidente llega a ser un rehén de los movimientos sociales? Reivindico ese valor de la democracia: todo Presidente es responsable de sus actos y “prisionero” de la sociedad a la que se debe. No puede actuar en la impunidad. Una sociedad movilizada es la mejor garantía de una sociedad democrática. Pero el Ecuador no es una sociedad democrática, aunque siga buscando tercamente lo imposible, una y otra vez.



■ Notas

* Investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos, Quito, Ecuador.

1. Max Weber. 1972. La política como vocación. En Max Weber. *El político y el científico*. 3era edición. F. Rubio Llorente (trad.). Introducción de R. Aron. Madrid: Alianza Editorial. El libro de Bolsillo. p.178.

2. Usamos las etiquetas “derecha” o “izquierda” por comodidad expositiva (se entiende clara y rápidamente a lo que me estoy refiriendo) y porque guardan significados fuertemente arraigados en nuestra cultura política.

3. Como diría William Morris, socialista inglés del siglo pasado: “Examiné todas estas cosas, y cómo los hombres luchan y pierden la batalla, y aquello por lo que lucharon tiene lugar pese a su derrota, y cuando llega resulta ser distinto a lo que ellos proponían bajo otro nombre” .

4. En la “Carta de Intención” firmada con el FMI en abril de este año, el gobierno reconoce haber invertido hasta ahora 1.400 millones de dólares en el salvataje bancario. En ese mismo documento (párrafo 41) estima que el costo fiscal de la crisis financiera llegará a 2.960 millones de dólares en emisiones de bonos, transferencias en efectivo y en intereses (esto es, el 26,4% del PIB).

5. Ver al respecto las notas periodísticas aparecidas en el diario El Comercio, de los días sábado 22 y domingo 23 de enero de 2000; y sobre todo, la serie de entregas sobre la crisis que se publicaron a partir del 19 de marzo.

6. Siguiendo las notas de prensa, cuando Mahuad recibió la solicitud de renuncia que el Alto Mando le hacía, ese tenso mediodía del 21 de enero, inmediatamente le reprochó a Mendoza el no haber tomado las medidas necesarias contra el coronel Lucio Gutiérrez (cabeza visible de la rebelión de coroneles) a pesar de haber sido advertido semanas atrás.

7. Las referencias a una “nueva revolución juliana” hechas por el coronel Lucio Gutiérrez está llena de paralelismos: el poder ilimitado de la banca en la economía y la política nacional, la insurrección de los mandos medios, el carácter “serrano” de la base social del movimiento, entre otros. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas, por lo demás, han estado comprometidas en las principales transformaciones modernizadoras del siglo XX: la revolución juliana de 1925, la Reforma Agraria de 1964 y la modernización reciente durante los años setenta. En todas ellas el rol del Estado ha sido relevante.

8. Los intentos por “disimular” legalmente estas sucesiones incómodas no las hacen menos ilegales.

9. En el mes de diciembre hubo polémicas públicas sobre este tema entre Gustavo Noboa y el líder socialcristiano Jaime Nebot.

10. Algo también ampliamente reconocido por los analistas económicos internacionales (ver los resúmenes de algunos de estos análisis en Líderes. Semanario de Economía y Negocios. Año 2 No. 118. 24 de enero de 2000, Quito, pp, 7-9). La carta de renuncia de Pablo Better, ex Presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador, opuesto a la medida, confirma que la decisión fue improvisada.

11. La dolarización es un esquema monetario tan rígido y económicamente tan inviable en una economía y una situación como la ecuatoriana, que es probable que finalmente se busque algún camino intermedio para lograr el verdadero propósito: profundizar las políticas de ajuste (Ver Alberto Acosta. 2000. La trampa de la dolarización. Mitos y realidades para la reflexión. En A. Acosta y J. Juncosa (comps.). *Dolarización. Informe Urgente*. Quito: ILDIS/Abya-Yala/UPS. p. 14-7).

12. El discurso del “único camino posible” fue usado y abudado por Mahuad, en muchas materias en las que finalmente dio marcha atrás (como la Ley de la AGD o el impuesto del 1% a la circulación de capitales).

13. La ruptura institucional pareció afectar, por lo demás, solamente al Ejército. La Fuerza Aérea y la Marina no dieron señales públicas de adhesión al movimiento.

14. La frase, retomada de los Cuadernos de la Cárcel, de Antonio Gramsci, se atribuye generalmente a Romain Rolland y representaba, para el pensador y político italiano, la esencia de la militancia revolucionaria: “pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad”

15. La Constitución de 1998, tal vez la más progresista de la historia ecuatoriana, incluye, entre otras disposiciones, la posibilidad de la revocatoria del mandato de varios de los funcionarios electos, la posibilidad de convocar a consultas populares (nacionales o subnacionales) por iniciativa ciudadana, incluye derechos colectivos de pueblos indígenas, afroecuatorianos, así como radicales provisiones para la descentralización y las autonomías étnicas.

16. El argumento ha sido repetido incansablemente a lo largo de la década en círculos académicos y políticos. El más importante exponente de esta visión de las cosas ha sido Oswaldo Hurtado, ex presidente, fundador del partido de gobierno, la Democracia Popular (Democracia Cristiana) y ex Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la

Constitución de 1998. De hecho, en su discurso inaugural ante la Asamblea, Hurtado insistió en este diagnóstico de la política y la economía nacional. No debe olvidarse que el propio Hurtado fue también miembro de la “Comisión de Constitución”, que en 1977 y 1978, previo al fin de la dictadura, redactó la Constitución anterior.

17. Algunas de las provisiones destinadas a asegurar la “governabilidad” son: sólo el Presidente tiene iniciativa legislativa en materia tributaria, de gasto público y de división político-administrativa del país, autonomía del Banco Central, imposibilidad del Congreso de destituir a los ministros, ratificación del sistema electoral de mayorías simples para la distribución de puestos en las elecciones pluripersonales (diputados y miembros de gobiernos seccionales).

18. La expresión “canibalismo político” se hizo famosa durante la defensa del destituido vicepresidente Alberto Dahik a fines de 1995.

19. De hecho, la capacidad de gobernar negociando en el Ecuador viene desde muy lejos. Muestras de esta flexibilidad del Ecuador son el laicismo (desde inicios de siglo), la educación pública, el voto femenino (desde 1929), la legalización de la unión libre (1982), la despenalización de la homosexualidad (1997). El origen e inspiración de esta idea puede encontrarse en Fernando Bustamante. 1997. Una aproximación a los problemas de la gobernabilidad y la democracia en el Ecuador de fin de milenio. En Ecuador Debate. No. 42 Quito: CAAP. Diciembre.

20. El mismo horror al conflicto armado entre militares ecuatorianos apareció en muchos episodios anteriores, como la sublevación de Frank Vargas Pazzos en marzo de 1986 o de los comandos que en 1997 secuestraron al entonces Presidente León Febres Cordero. Las referencias a la anécdota provienen del relato de los acontecimientos preparado por el diario El Comercio, de Quito, a fines de marzo. La fuente es presumiblemente el propio general Mendoza.

21. Las ideas expresadas en los últimos tres párrafos han sido desarrolladas en dos textos anteriores, a los que remito al lector interesado. Pablo Ospina. 1999. “Reflexiones sobre el transformismo. Movilización indígena y régimen político en Ecuador”. Quito: FLACSO. En prensa (Memorias del Seminario sobre Movimientos Sociales en los países Andinos, noviembre; y 1998. “La deriva de una promesa. Democracia y Modernización en el Ecuador 1978-1998”. Quito: Inédito.



El conflicto de la UNAM: una historia inconclusa

Por Pablo González Casanova*

D

El 20 de abril de 1999 el Consejo General de Huelga decretó el paro en la UNAM en repudio al aumento de cuotas que aprobó en una sesión el Consejo Universitario. La sesión se celebró fuera del recinto habitual y con la ausencia de varios consejeros que se quejarían de haber sido desinformados sobre el lugar y hora en que debían reunirse. 28 de ellos protestaron en documento firmado “porque se violó el derecho a discutir sobre los puntos de la convocatoria, y pusieron en tela de juicio la legalidad de los acuerdos”. El aumento de cuotas acabó con el carácter “casi” gratuito de una Universidad cuya colegiatura era de “veinte centavos” en pesos reales de 1966,¹ equivalente a dos centavos de dólar. La nueva colegiatura para estudios profesionales se fijó en 1360 pesos nominales (equivalentes a 120 dólares anuales), suma que las autoridades consideraban muy modesta, y que imponían con lo que creyeron un paliativo: que los aumentos no se aplicarían a quienes ya estuvieran estudiando en la universidad, sino nada más a los que en el futuro se inscribieran en ella.

En su lógica pragmática, las autoridades no concibieron las inmensas repercusiones que tendría la pérdida de legitimidad proveniente de una votación que gran parte de la comunidad universitaria calificaría de manipulada. No imaginaron tampoco la resistencia gigantesca y tenaz a que se enfrentaría un aumento que ellas consideraban bajísimo en comparación con los “estándares” de Estados Unidos y muchos otros países. No pensaron que la “opción racional” de quienes ya eran estudiantes de la Universidad consistiría en identificarse con quienes todavía no lo eran. La lógica pragmática de las autoridades no funcionó. A pocos días, miles de estudiantes se apoderaron de los distintos campus y escuelas de una de las más grandes universidades del mundo. Se quedaron en ellos 297 días, hasta que el 6 de febrero del siguiente año, aproximadamente 2500 policías entrenados como fuerza especial por los militares tomaron ciudad universitaria, sin que se reportara ningún muerto o herido.

La revuelta de los estudiantes de la UNAM tuvo una fase de ascenso en que obtuvieron innumerables concesiones de las autoridades empezando por una propuesta del Rector en la que éste dio marcha atrás y aceptó que las cuotas tuvieran carácter voluntario: el Consejo General de Huelga consideró la oferta engañosa y limitada, pues aparte de no declarar expresamente la gratuidad de la enseñanza no atendía una serie de

peticiones que dieran garantías a los estudiantes acusados, y que resolvieran los graves problemas de la educación superior en materia de democratización, cobertura y gratuidad. Muchas instancias mediadoras fallaron, algunas de antiguos dirigentes estudiantiles hoy miembros del PRD (Partido de la Revolución Democrática), otras de profesores eméritos apoyados por una parte importante de sus colegas y de la comunidad universitaria. El rector se vio obligado a hacer una nueva concesión: aceptar un diálogo directo y público, que originalmente había rechazado, con transmisión de las sesiones por Radio Universidad. El diálogo mostró enormes dificultades para avanzar. Los representantes de las autoridades se presentaron sin propuestas que significaran un cambio de políticas concretas. En cuanto a los delegados estudiantiles eran relevados de una sesión a otra y no sólo se engolosinaban en el uso de la palabra, sino aprovechaban el micrófono para dirigirse a los radioescuchas más que a los mensajeros de la rectoría. Es más, de manera casi natural los estudiantes representaron el teatro político que habían aprendido de sus mayores, y en su comportamiento mostraron desplantes y gestos de soberbia que parecían excesivos hasta para algunos de sus más radicales simpatizantes. El Rector pasó a la ofensiva y amenazó con usar “la fuerza de la ley”. Pronto lo apoyó el Presidente de la República quien lanzó un ultimátum a los estudiantes para que reabrieran la universidad. Sin embargo el movimiento contra el uso de la llamada “violencia legal” logró imponerse. Presidente y Rector se vieron en la necesidad de convocar nuevamente a una solución dialogada. Las fuerzas de derecha más agresivas se sintieron burladas, y calmarlas resultó imposible para el propio Rector a quien llegaron a faltarle al respeto. Al mismo tiempo los avances del diálogo parecieron pobrísimos y todo derivó en la renuncia y sustitución del rector. El ministro de salud, antiguo director de la Facultad de Medicina, abandonó el cargo que ocupaba y pasó a la Rectoría. La Junta de Go-



peticiones que dieran garantías a los estudiantes acusados, y que resolvieran los graves problemas de la educación superior en materia de democratización, cobertura y gratuidad. Muchas instancias mediadoras fallaron, algunas de antiguos dirigentes estudiantiles hoy miembros del PRD (Partido de la Revolución Democrática), otras de profesores eméritos apoyados por una parte importante de sus colegas y de la comunidad universitaria. El rector se vio obligado a hacer una nueva concesión: aceptar un diálogo directo y público, que originalmente había rechazado, con transmisión de las sesiones por Radio Universidad. El diálogo mostró enormes dificultades para avanzar. Los representantes de las autoridades se presentaron sin propuestas que significaran un cambio de políticas concretas. En cuanto a los delegados estudiantiles eran relevados de una sesión a otra y no sólo se engolosinaban en el uso de la palabra, sino aprovechaban el micrófono para dirigirse a los radioescuchas más que a los mensajeros de la rectoría. Es más, de manera casi natural los estudiantes representaron el teatro político que habían aprendido de sus mayores, y en su comportamiento mostraron desplantes y gestos de soberbia que parecían excesivos hasta para algunos de sus más radicales simpatizantes. El Rector pasó a la ofensiva y amenazó con usar “la fuerza de la ley”. Pronto lo apoyó el Presidente de la República quien lanzó un ultimátum a los estudiantes para que reabrieran la universidad. Sin embargo el movimiento contra el uso de la llamada “violencia legal” logró imponerse. Presidente y Rector se vieron en la necesidad de convocar nuevamente a una solución dialogada. Las fuerzas de derecha más agresivas se sintieron burladas, y calmarlas resultó imposible para el propio Rector a quien llegaron a faltarle al respeto. Al mismo tiempo los avances del diálogo parecieron pobrísimos y todo derivó en la renuncia y sustitución del rector. El ministro de salud, antiguo director de la Facultad de Medicina, abandonó el cargo que ocupaba y pasó a la Rectoría. La Junta de Go-

bierno de la Universidad no tardó ni una semana en nombrarlo con el argumento de que era muy peligroso dejar un largo tiempo a la Universidad sin Rector. Los estudiantes consideraron la rapidez de la Junta como una prueba más de su falta de autonomía: y que el elegido era “el rector del Presidente”; sólo parecieron reconocer que era un político más avezado que el anterior.

Durante ese tiempo se habían agudizado una serie de luchas en el seno del Consejo General de Huelga y también en el de las autoridades universitarias y sus órganos colegiados. En cada parte las luchas internas se daban entre moderados y duros. En el CGH se distinguían las categorías de “los moderados” y “los ultras”. Entre las autoridades había algunas corrientes más inclinadas a la negociación y otras que insistían, con distintos tonos y argumentos, en el uso de la “fuerza legal” y en “la recuperación del estado de derecho”. Enfrentamientos y acercamientos entre las dos partes daban un carácter irregular al conflicto, con vaivenes de aliento y desaliento, con momentos en que predominaba la negociación y otros en que la represión cobraba la delantera, todo entre variantes contradictorias en cuanto al uso de la persuasión, la intimidación, el reproche o la sanción.

Desde los inicios del conflicto éste se fue complicando. La llamada comunidad universitaria se dividió entre los partidarios del rector y los del Consejo General de Huelga. Aunque pronto aparecieron grupos de mediación y algunos de ellos lograron cierto apoyo, todos los aspirantes a mediadores sufrieron embates que anularon finalmente sus esfuerzos. El conflicto también se complicó por ser un año de elecciones para la Presidencia de la República y para el Congreso de la Unión. El partido oficial, el de centro derecha y el de centro izquierda lanzaron acusaciones contra sus respectivos opositores. Los acusaron de querer manipular la universidad para ganarse a los estudiantes, o de buscar que estuviera cerrada hasta después del dos de julio, una vez que se hubiera decidido la sucesión. Las acusaciones se volvieron más agrias, al ser Cuauhtémoc Cárdenas candidato de la izquierda a la presidencia y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y al enfrentarlo sus críticos al dilema de tolerar el desorden de manifestaciones y marchas que cerraban calles, avenidas y plazas, o de usar la fuerza pública para poner un alto a los desmanes, en cuyo caso se ganaría el resentimiento de sus propios partidarios, lo que de hecho ocurrió con una intervención policíaca en la que numerosos huelguistas fueron humillados.

Entre otros actores muy importantes que entraron en escena se encontraron las organizaciones patronales que llegaron a exigir hasta el cierre de la UNAM, así como núcleos considerables de la clase media alta que hicieron manifestaciones de automóviles con luces encendidas y zumbidos de bocinas, y a

los que acompañaron damas o “mujeres vestidas de blanco” y abogados celeberrimos. Frente a todos ellos marcharon y se manifestaron varias organizaciones de pobladores urbanos, de movimientos populares y de sindicatos obreros, con no pocos padres de familia que habían sido huelguistas en 1968 y que tenían a sus hijos entre los paristas del ‘99.

Los medios electrónicos se apoderaron de la escena; con la gran prensa empezaron a tomar iniciativas para participar en la construcción del conflicto real a través de noticias, comentarios e imágenes que lo animaban.

Los gobernantes de carne y hueso tuvieron su parte. Las declaraciones del presidente Zedillo y de otros altos funcionarios, ora amenazadoras, ora conciliadoras, a menudo se interpretaron en relación con los proyectos privatizadores de la educación y la electricidad, y llevaron a reparar en los funcionarios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que en declaraciones sucesivas exigían al gobierno acelerar el paso en la privatización de la industria eléctrica.

El empleo de grupos de choque (acusados de “porros”), el de servicios de espionaje (acusados de “orejas”) y el de “agentes provocadores” (disfrazados de “ultras”) fue motivo de múltiples enojos entre los paristas, mientras la presencia de agentes de las organizaciones rebeldes del Ejército Popu-

lar Revolucionario y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue denunciada por los partidarios de las autoridades o por las autoridades mismas. A la gran variedad de actores y de luchas se añadieron cambios continuos en los enfrentamientos y los acercamientos. El uso del diálogo y la búsqueda de consensos pa-

recieron siempre encontrar obstáculos insuperables.

El nuevo rector inició un proceso de conciliación en el que involucró no sólo a los directores, sino al Consejo Universitario, a los profesores, los estudiantes y el personal administrativo. Su meta pareció consistir en convencerlos que el único camino para la solución era dialogar, conceder todo lo que no afectara los valores académicos y aceptar la necesidad de una profunda reforma universitaria. Al mismo tiempo, el nuevo rector reactivó el diálogo con el CGH y preparó un plebiscito en el que también participara el estudiantado, el profesorado y el personal administrativo. En el plebiscito una altísima proporción de los universitarios –sobre todo del personal académico– aprobó el fin de la huelga así como las propuestas de rectoría para derogar el reglamento que había aumentado las cuotas, para suspender las relaciones de la UNAM con un instituto extrauniversitario encargado de realizar los exámenes de admisión, para organizar un programa de regularización de cursos y para realizar un congreso universitario que decidiera sobre otras demandas, incluida la

“Entre otros actores muy importantes que entraron en escena se encontraron las organizaciones patronales que llegaron a exigir hasta el cierre de la UNAM, así como núcleos considerables de la clase media alta que hicieron manifestaciones de automóviles con luces encendidas y zumbidos de bocinas, y a los que acompañaron damas o “mujeres vestidas de blanco” y abogados celeberrimos.”

reestructuración de la UNAM. La propuesta del rector -convalecida por el Consejo Universitario- hacía suyo el compromiso de retirar las acusaciones contra estudiantes paristas. El CGH contestó con una consulta abierta en la que según declaró participaron medio millón de personas que votaron contra la propuesta del rector. En el interior del CGH triunfaron las corrientes llamadas “ultras” cuya base ideológica pareció menos clara que su resentimiento social y que un autoritarismo y voluntarismo profundos vinculados a agresiones verbales y físicas contra quienes no los seguían. Persuadidos de representar esencialmente los intereses de la base, muchos activistas “ultras” dejaron de consultar y atender a la base que se alejaba de ellos y que no se sentía representada por ellos. Su proyecto democrático se vino abajo. Los “moderados” del CGH también perdieron. Perdieron igualmente los simpatizantes de los partidos de izquierda y de los movimientos insurgentes como el EZLN que les pidieron aceptar los triunfos obtenidos y continuar la lucha en el seno del Congreso Universitario, una vez reabierta la Universidad.

Ya desde mediados de noviembre el subcomandante Marcos le había dicho a un grupo de paristas que habían ido a visitarlo: Yo los quiero un chingo a todos ustedes y siempre los vamos a apoyar hasta el fin, pero deben dejar de actuar con la vieja práctica política de no escuchar y de cerrarse al diálogo... deben permitir las opiniones divergentes y no reprimir a los estudiantes que opinan de diferente manera” (El Día, 24/1/2000). Todo fue inútil. El viejo modo de hacer política autoritaria prevaleció. Como haría ver más tarde Octavio Rodríguez Araujo: los activistas “exigieron que se les tomara en cuenta como si tuvieran la representación de estudiantes y académicos. Exigieron que se respetara su forma de organización no organizada. Ellos en cambio no respetaron otras formas de organización de estudiantes, académicos y administrativos. No quisieron darse cuenta que muchos universitarios que al principio simpatizaron con ellos ahora los repudiaban o ya no se sentían representados por ellos” (cf. Octavio Rodríguez Araujo. “Sumar y no restar”. La Jornada, 9/3/2000).

Siguió el paro. En la “opinión pública”, entre los televidentes y lectores de periódicos, universitarios y no universitarios, empezaron a cobrar autoridad creciente quienes clamaban por el uso de la “violencia legal”. El 1º de febrero hubo un enfrentamiento entre paristas y antiparistas en una escuela. El saldo fue de 37 heridos y 248 detenidos. El 4 de febrero se reunieron los paristas con el rector sin que llegaran a ningún acuerdo. Aquellas autoridades universitarias inclinadas a hacer respetar el estado de derecho por la fuerza pública y a acudir a las instancias legales correspondientes se volvieron mayoritarias y manifestaron su posición cada vez más abiertamente.

El 6 de febrero la fuerza pública tomó ciudad universitaria y otras instalaciones. La reanudación de clases se hizo con más de mil paristas presos, muchos de los cuales fueron poco a poco liberados. Frente a la rectoría se instalaron grupos de padres de familia que pidieron la libertad de sus hijos. Levantaron tres cruces, en las que cada día se crucificaban simbólicamente tres hombres o mujeres, en un acto de protesta profano y macabro. Varios manifestantes se sacaron sangre de las venas y con ella escribieron en las paredes: Libertad a nuestros hijos. Libertad a los estudiantes. Libertad a los presos políticos. En casi toda la universidad surgieron agresiones verbales y a veces físicas mientras seguían las movilizaciones políticas y las gestiones legales para la liberación de los presos.

La lucha por la explicación de lo ocurrido continuaría entre descalificaciones y legitimaciones contundentes, y bajo supuestos que en sí mismos son parte del enredo. Entre ellos anda la sospecha de que todo el paro fue planeado para demostrar la ingobernabilidad de la universidad, e iniciar la reforma neoliberal y privatizadora de la educación superior en México precisamente por el cordón más fuerte del sistema: la UNAM. Pero si esa sospecha es discutible, y si a ella fácilmente puede oponerse un estilo de actuar que corrige sus políticas cuando los efectos

no esperados son adversos, no cabe duda que a partir de algunos hechos se puede profundizar en el problema de la privatización del sistema educativo y en sus efectos buscados y no buscados. Así, no cabe duda que un diálogo en que la autoridad constantemente irrita y calma, intimida y atrae, castiga y perdona a su opositor, es un diálogo en que la autoridad

es víctima de un final represivo. Pensar en un amplio diálogo universitario con estudiantes presos o indiciados pareció como abrir la puerta a un futuro ilusorio y en realidad inestable y autodestructivo de la universidad. De todos modos a poco de regresar a sus actividades (entre la liberación de la inmensa mayoría de los estudiantes presos, manifestaciones, paros, y nuevos motivos de conflicto como cuando en la Semana Santa el Rector pidió que la policía cuidara las instalaciones universitarias), en medio de hechos tan encontrados, el diálogo entre autoridades y huelguistas se reanudó, y por momentos pareció mostrar un trato más cortés en los participantes y ciertas posibilidades de acuerdos.

En cualquier caso, una inmensa tristeza acompañó la alegría de la reapertura de la universidad, con la conciencia de una seria amenaza a la Universidad Nacional mientras continúe el proyecto de privatización de la educación superior, un proyecto auspiciado por el Banco Mundial, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la Asociación Patronal de la República Mexicana y altos funcionarios del gobierno de México, un gobierno éste que se encuentra por cier-

“Así, no cabe duda que un diálogo en que la autoridad constantemente irrita y calma, intimida y atrae, castiga y perdona a su opositor, es un diálogo en que la autoridad, o se reserva un final represivo, o provoca un final represivo o es víctima de un final represivo.”

to, incluso a principios del siglo XXI, a la cabeza de la ortodoxia neoliberal. (cf. Pablo González Casanova. "Neoliberalismo y Universidad. Un análisis documentado". De próxima publicación). El peligro pareció confirmarse no sólo con el grave conflicto sino con tendencias cada vez más conocidas, como la disminución de recursos federales para la educación superior y los planes nacionales y mundiales para la privatización y comercialización de la enseñanza.

La información ocultada y negada sobre la creciente baja de subsidios gubernamentales a las universidades no impidió realizar cálculos reveladores. Si se analiza bien la información disponible se advierte la sistemática caída del subsidio federal a la educación superior. Como porcentaje del PIB, el subsidio pasó del módico 0.84% en 1994 al 0.54% en el año 2,000. Como parte del total del subsidio federal pasó de ser el 28% en 1987 a sólo el 15.00% en el 2,000. La caída del subsidio federal se refleja todavía más en los gastos por alumno en la educación superior: si en 1977 eran de \$ 20.560 en el 2000 sólo llegaban a 13.972, a pesos constantes de este último año. (Vid. José Gandarilla. "Sobre algunos cálculos del subsidio a la educación superior. Errores y omisiones". En preparación). País de jóvenes excluidos y empobrecidos, sólo unos cuantos que son excepción, van a universidades públicas y privadas, éstas necesariamente elitistas y aún más excluyentes, y aquellas seriamente afectadas y amenazadas en sus funciones e incluso en su sentido público y nacional.

Mucho de lo ocurrido se explica por una política de educación con pobreza, y por una política de educación para aceptar "disciplinado" el empobrecimiento de uno mismo y de los demás. Ya lo dijo Carlos Monsivais en su carta al Rector de la UNAM a raíz de la toma de ciudad universitaria por las fuerzas especiales: "Una recuperación punitiva no es, ciertamente, una devolución universitaria, y de eso se trató: de señalar la majestuosidad del poder, de darle una lección perdurable a los jóvenes, tan arrogantes y desafiantes..." Y más lejos añade: "Quiso ganar, y lo consiguió por un breve lapso, la derecha satisfecha de su pedagogía del escarmiento" (La Jornada, 10/2/2000).

Por su parte Sergio Zermeño en un artículo titulado "UNAM: vigilar y castigar" escribió: "Muchos universitarios nos hemos cansado de repetir que este no es el camino, que en realidad con el empleo ilegítimo del plebiscito y de los medios, se ha querido eludir el núcleo central de este movimiento que es, por enésima vez lo decimos: la lucha por un mejor subsidio a la educación superior para que sea posible de esa manera, elevar la calidad de la enseñanza y ampliar un poco la matrícula..." Y él mismo agrega: "Todo ello ha de acompañarse, por razones elementales de justicia social, con la gratuidad de todas las modalidades de la educación pública..." (La Jornada, 9/3/2000).

Si no se responde con hechos y palabras a esas dos demandas: el derecho expreso constitucional y real a la educación superior pública y gratuita, y mayores recursos para educar mejor a un mayor número de estudiantes, la solución de

fondo no se alcanzará y, por supuesto, si esos problemas se resuelven, será necesario plantear otros, como la democratización de las universidades que al mismo tiempo limite el autoritarismo y logre altos niveles académicos, y como la democratización del país que haga efectivo el camino a la justicia social y la paz; pero todos esos problemas exigen una base política, social, cultural y económica que el neoliberalismo se niega a forjar.

En cuanto a la búsqueda de una alternativa pensamos que se debe basar en los significados teóricos y prácticos del movimiento, y, con ellos, en la precisión de un proyecto de reforma universitaria que alcance grandes consensos en torno al derecho universal a la educación, que reestructure el sistema educativo a todos los niveles, combinando los métodos clásicos y electrónicos de la educación, y articulando una red de redes de instituciones públicas y privadas de investigación, enseñanza y difusión de las ciencias y las humanidades, de las artes y las técnicas, a fin de impartir, como es perfectamente posible en nuestro tiempo, mejor educación para más. (vid. Pablo González Casanova, "Educación para todos". La Vasiija, año 2, Vol. 2, No. 4, enero-abril de 1999, México, pp. 22-42). Ese proyecto implica también la democratización de la enseñanza universitaria y del país, y una redefinición de la democracia y del conocimiento como poder; del poder no sólo como estado y mercado, sino como estado y como sociedad, muy desigual, injusta e inequitativa, es decir, como estado y como sociedad que plantean la necesidad de una ética política basada en la fuerza de las organizaciones democráticas de estudiantes, profesores, trabajadores, pobladores urbanos y rurales, pueblos indígenas... Que esa redefinición entrañe luchas de la más variada intensidad y magnitud por la defensa y ampliación de los servicios públicos y los recursos nacionales -incluido el conocimiento y la educación superiores- es indudable. No se trata de problemas que en la correlación de fuerzas actual vayan a resolver los expertos. La contribución de los expertos podrá ser importante pero la solución más profunda sólo se dará con la construcción de las fuerzas sociales y políticas que en la Universidad y el país permitan alcanzar esos objetivos. Sin duda allí se encuentra el verdadero problema pedagógico.

■ Notas

* Ex Rector y Catedrático de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

1. Desde 1948 no se había hecho ningún aumento significativo. Sólo en 1966 se había aprobado una cuota por exámenes extraordinarios.

Rebelión en la UNAM

Por Ana Esther Ceceña*

■ El contexto social

La reorganización capitalista ocurrida en el último cuarto del siglo XX modificó profundamente todas las dimensiones de la vida social. Los jóvenes nacidos durante esos años han tenido que aprender a vivir en un clima de desposesión paulatina pero ineludible, en el que, a pesar de la precarización material generalizada en amplios sectores de la población, la parte más agresiva concierne al despojo de identidades y a la pérdida de sentido de pertenencia.

Efectivamente, sociedades como la mexicana, “tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”, confrontan cotidiana y permanentemente la polarización de la riqueza y el desarrollo mundiales de manera visible. En estos veinticinco años las condiciones de vida de la población se han deprimido al punto de ser reconocidas con preocupación por el Banco Mundial, la CEPAL y las más importantes organizaciones empresariales del país. De acuerdo con la CEPAL, el 25 % de los pobres de América Latina se encuentran en México¹ país paradójicamente miembro de la OCDE y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Según el Banco Mundial el 57 % del empleo en México es informal, cuyo crecimiento, para colmo del absurdo, justifica el descenso en las tasas de desempleo².

La reorganización de la economía mundial, en la que México se ha insertado ciertamente dentro de su polo más dinámico, crea virtualidades de bonanza sobre realidades de depredación social y ecológica sin precedentes.

En un país de jóvenes como México, en que el 71 % de la población es menor de 34 años y el 56 % menor de 24³, el deterioro social tiene inmediatas repercusiones no sólo en los niveles de nutrición, escolaridad y morbilidad, sino también, y ésa quizá es la parte más dañina, en los imaginarios de una población que crece con la certeza de su inutilidad, de su impotencia y de que su existencia en este planeta es un exceso. El 56 % de la población actual nació y creció en pleno proceso de configuración neoliberal de la sociedad, con todas las carencias y recortes que eso implica y, como sabemos, si alguien ha sido especialmente tocado por estos nuevos horizontes de la modernidad son los diferentes, los insumisos (activos o pasivos), los excluidos por el pensamiento y la realidad únicos, y entre ellos, particularmente, los pueblos indios y los jóvenes.



La Universidad pública y autónoma, en este contexto, representa el espacio de libertad de pensamiento abierto en la revuelta estudiantil de 1968 y que en los otros ámbitos de la sociedad se cierra en la medida en que el Estado se torna más autoritario o se somete más a los designios del mercado. La autonomía universitaria, si bien nunca ha llegado al nivel de designación de autoridades o determinación del presupuesto, ha sido hasta ahora el mecanismo de preservación del espíritu crítico y de la libertad de discernimiento de la sociedad. La libre circulación de ideas y conocimientos, insoslayable para la construcción de la soberanía cultural, mientras más se difunden las relaciones de mercado más se restringe a los ámbitos universitarios. Sin embargo, la elitización de la Universidad y su sometimiento a las reglas del mercado cancela la autonomía del pensamiento, de la confrontación de ideas, de la discrepancia científica y elimina uno de los pocos espacios críticos que permitieron, entre otros, parar la guerra fratricida en 1994 y abrir nuevas posibilidades a la democracia y a la política.

La defensa de la autonomía universitaria es la defensa del espíritu crítico de la sociedad. Los estudiantes que protagonizan el actual movimiento lo tienen muy claro, a pesar de su escasa experiencia política que se circunscribe, en lo esencial, a tres fuentes: la memoria del movimiento antecesor de 1986-87⁴, la propuesta ética política del zapatismo y la experiencia de exclusión a la que los ha sometido el neoliberalismo.

El movimiento estudiantil actual tiene características novedosas con respecto a los otros de este siglo y en muchos sentidos cercanas al movimiento zapatista del EZLN. Las grandes transformaciones sociales inducidas por la reestructuración capitalista de fines de siglo lo colocan en el umbral de un nuevo ciclo de movilizaciones y revueltas so-

ciales, aunque con fuertes reminiscencias del pasado. Se trata de un movimiento que no termina de definirse todavía, que está en proceso de formación y que todavía no sabe explicarse, ni ante sí mismo, ni ante el mundo, pero que ha empezado a trazar, sin duda, un camino propio. Esto es lo que intentaré abordar, muy brevemente, en este artículo.

“Inmediatamente después de aprobar la transformación de la quiebra bancaria (aproximadamente 60 mil millones de dólares en ese momento) en deuda pública⁷, contraviniendo los pronunciamientos en contra de la mayoría de los sectores de la sociedad, el Rector de la UNAM anuncia un posible aumento de cuotas por insuficiencia presupuestal.”

y utopías. Es decir, el espacio de la resistencia simbólica y de la crítica civilizacional, así como de la creación de discursos científicos específicos.

La reconceptualización de la educación y del lugar y función de la Uni-

versidad dentro de la sociedad mexicana, en correspondencia con el proceso de concentración de la riqueza y el poder, y con el resto de las iniciativas privatizadoras, no suscitó una amplia discusión nacional, como debería haber sido en un caso como éste, sino que fue producto de una decisión de Estado adoptada en connivencia con los organismos internacionales que diseñan la política mundial⁶.

Inmediatamente después de aprobar la transformación de la quiebra bancaria (aproximadamente 60 mil millones de dólares en ese momento) en deuda pública⁷, contraviniendo los pronunciamientos en contra de la mayoría de los sectores de la sociedad, el Rector de la UNAM anuncia un posible aumento de cuotas por insuficiencia presupuestal.

A pesar de las protestas estudiantiles el Rector presenta su propuesta de Reglamento General de Pagos (RGP) el 11 de febrero de 1999. La comunidad estudiantil empieza a reunirse y a realizar manifestaciones públicas en contra del RGP y convoca al Rector a un debate público que éste nunca aceptó.

La modificación al RGP ha simbolizado en la Universidad la conculcación de la educación como derecho ya que le introduce un sesgo patrimonialista. Sin embargo, tan lamentable como la modificación al RGP fue su procedimiento de aprobación.

El Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad, aprueba la medida el 15 de marzo, en una sesión irregular⁸ en la que se obstaculiza la participación de los representantes disidentes en vez de escuchar e incorporar sus argumentos, provocando la visibilización de la incapacidad de esta instancia para recoger el sentir de la comunidad funcionando como su caja de resonancia. El Consejo Universitario quedó evidenciado como un instrumento de las autoridades y no como un espacio de síntesis de las diferentes posiciones de la comunidad.

A partir de ese momento hay una especie de murmullo creciente en la comunidad universitaria. Los estudiantes se agrupan poco a poco ante el desconcierto de quienes los caracterizaban como generación X, víctima del posmodernismo y la fragmentación⁹.

■ El movimiento estudiantil de 1999-2000

La generación de estudiantes que lleva adelante la revuelta por el derecho de todos a la educación en la Universidad Nacional Autónoma de México creció, como diría Alfredo Velarde⁵, ya no en la crisis sino en el desastre. Es justamente la generación sin horizontes creada por el neoliberalismo y que repentinamente empieza a recobrar su historia, su conciencia de ciudadanía, de patria y de clase, todo junto.

Los detonadores

La Universidad pública en México es una de las instituciones emblemáticas de la soberanía popular sobre las que fue construida la Nación. Más allá de la discusión jurídica sobre el contenido del artículo 3º de la Constitución, que asienta que “toda la educación que imparta el Estado será gratuita”, la educación fue una de las conquistas sociales emanadas de la Revolución mexicana y, en esa medida, constituye uno de los pilares del imaginario popular.

Sin embargo, en la medida en que el avance del neoliberalismo transformaba los sistemas de producción y las modalidades generales de organización social, propiciaba una reestructuración de las relaciones de clase, de los contenidos mismos de las clases y de sus fronteras, que modificaron los imperativos, la lógica y los canales de la legitimación. Los fundamentos y modalidades del poder se transformaron provocando una obsolescencia de los equilibrios o pactos sociales precedentes.

La omnipresencia del mercado tiende a convertir derechos en servicios, transformando su sentido político comunitario en elemento individual de mercadeo. De este modo, la educación pierde su vínculo con la historia viva de un pueblo en movimiento, deja de ser el mecanismo de recreación colectiva de la cultura y de la capacidad científica. El lugar donde las clases conviven y entrelazan sus concepciones de futuro y, por tanto, el espacio donde se teje el tiempo largo de la historia: el espacio de creación de horizontes

Rebelión!

Los académicos, sustancia corpórea de la Universidad, se manifiestan con cierta ambigüedad demostrando hasta dónde las políticas parceladoras y productivistas del neoliberalismo habían cambiado el mapa universitario. No obstante, muchos, se pronuncian abiertamente contra la reforma.

Los órganos de gobierno universitarios minimizan los llamados a transparentar los procedimientos y generalizar la discusión. La única participación admitida de la comunidad sería la que pudiera expresarse a través de los propios órganos de gobierno que estaban siendo cuestionados.

Los estudiantes, en cambio, tomando la iniciativa organizan una amplia consulta sobre el RGP y la defensa de la gratuidad¹⁰, adoptando los nuevos usos políticos introducidos por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional¹¹, y logran una votación de cien mil personas, tercera parte de la comunidad, pronunciándose por la defensa de la Universidad pública y gratuita.

Dos días antes del estallido de la huelga, que pocos creían posible incluidos los estudiantes que la impulsaban, los funcionarios universitarios y el propio Rector rechazaban la posibilidad de un acuerdo y manifestaban que había que prepararse para una huelga larga. Así, la mayor y más importante Universidad del país entra en huelga el 20 de abril de 1999, después de realizar consultas al efecto en las Facultades y Escuelas. Los estudiantes se constituyen en Consejo General de Huelga (CGH) en una magna asamblea ese mismo día.

Un movimiento de nuevo tipo

Los protagonistas del movimiento estudiantil son en su mayoría jóvenes entre 17 y 24 años, con muy poca experiencia política, con signos de identidad contradictorios que provienen tanto de la incredulidad que desata la caída del muro de Berlín y del esfuerzo neoliberal por borrar cualquier trazo de memoria histórica, como de las referencias a asideros teóricos muy viejos combinados, y en ocasiones reñidos, con los nuevos horizontes trazados por el movimiento zapatista.

El colectivo que se reúne en el CGH es, sin embargo, sumamente diverso. A lo largo de sus 12 meses de existencia ha albergado militantes del PRD, integrantes de corrientes radicales más o menos antiguas dentro de la UNAM, y un gran conjunto de estudiantes sin partido, sin corriente, y

con un enorme rechazo por esas formas organizativas y por los procedimientos de decisión que les son propios.

Para este colectivo los procedimientos son tan importantes como los contenidos. No es posible exigir democracia si no se practica, y los mecanismos de decisión son fundamentales en una huelga que, si bien fue ganada en votaciones, no provenía de una organización previa que la sustentara. Por esta razón, y por la desconfianza que caracteriza a esta generación, las decisiones eran procesadas en las asambleas locales implantándose un sistema que impedía que llegaran a la plenaria del CGH si no habían reunido un consenso mínimo de 19 escuelas. Primero era necesario construir ese consenso y sólo después, si reunían la aprobación de entre 19 y 28 escuelas podían ser objeto de discusión y votación en el CGH. Las propuestas con amplio reconocimiento, aprobadas por 29 asambleas locales, ya no se sometían a discusión sino que eran aprobadas automáticamente por el órgano central. Es decir, se intentó construir un método de decisión que eliminara los liderazgos personalizados o los acuerdos de corrientes y que permitiera expresarse a la mayoría de los participantes en el movimiento y que impidiera revertir en la plenaria las decisiones adoptadas por la base.

“La falta de cabezas visibles y delimitables dentro del movimiento y la imposibilidad de los líderes de desligarse del mandato de sus colectivos, y realizar acuerdos en petit comité, fue el eje de definición más importante de este movimiento.”

Así también, un procedimiento similar fue impulsado en algunas facultades buscando crear las condiciones de construcción de consensos y no de mayorías. La experiencia consistió en una discusión en varios niveles, a partir

de la formación de lo que llamaron grupos de afinidad, que permitían trabajar en pequeños grupos independientes simultáneamente y verter los consensos particulares en la asamblea para ahí discutir hasta alcanzar una decisión construida colectivamente¹².

Por supuesto este procedimiento es contrario a los tiempos y estilos acostumbrados por la política cupular y fue, al mismo tiempo, argumento de crítica por parte de autoridades, medios de comunicación y algunos sectores de intelectuales y razón de la permanencia del CGH como instancia representativa después de un año, a pesar de todas sus diferencias internas, expresadas agresivamente en algunas ocasiones¹³.

La falta de cabezas visibles y delimitables dentro del movimiento y la imposibilidad de los líderes de desligarse del mandato de sus colectivos, y realizar acuerdos en petit comité, fue el eje de definición más importante de este movimiento. Su horizontalidad y la revocabilidad de cualquiera que se apartara de las normas y decisiones del conjunto. La más clara expresión de esto fue el nombramiento de una

comisión de ciento veinte miembros rotativos para presentar trece por vez en la mesa de diálogo con las autoridades; la comisión estaba compuesta por un número fijo de representantes de cada dependencia pero que a su vez podían ser alternativamente distintas personas nombradas por su asamblea. Es decir, la revocabilidad garantizaba en todo momento la autenticidad de la representación.

En esta novedosa forma de organización estriba gran parte de la fuerza y perspectiva de permanencia y desarrollo del movimiento surgido en la Universidad. Su trabajo de base, invisible y cotidiano que construye tejidos profundos ha logrado una cohesión sorprendente y una efectiva unidad en la diferencia. Sin embargo, esta misma dinámica ha sido, paradójicamente, uno de los terrenos de vulnerabilidad y distorsión del movimiento en el corto plazo; es decir, es un método de trabajo colectivo que implica respuestas lentas y muy consensuadas a acciones que generalmente son inmediatas y, por otro lado, es un procedimiento que en algunos momentos, a partir del control de algunas asambleas locales, bloqueaba iniciativas y decisiones importantes provocando la confusión que fue tan bien aprovechada por los medios de comunicación y que alejó a algunos estudiantes de las asambleas, aunque no, por lo menos no en la mayoría de los casos, del movimiento¹⁴.

La incompreensión

Muchos de los estudiantes que hicieron el movimiento, además de jóvenes, provienen de un entorno social conflictivo y difícil. Las condiciones de pauperización, aumento de la delincuencia y violencia doméstica y callejera que se han ido asentando en la ciudad de México son parte de su cotidianidad.

El 74 % de los padres de los alumnos que pasan del bachillerato de la UNAM hacia el nivel superior básico son asalariados, vendedores ambulantes o dueños de negocios pequeños (tipo miscelánea o boliche); el 45 % tiene nivel máximo de primaria, un 21.7 % adicional tienen nivel secundaria (66.7 % entre las dos) y sólo el 19.3 % tienen licenciatura y posgrado. El 65.6 % de las madres tiene un nivel de escolaridad máximo de primaria (de las cuales el 6.7 % no tiene ninguna instrucción) y otro 19.4 % llega hasta secundaria. Con licenciatura o posgrado sólo es el 5.4 %. El 12.5 % de estas madres son trabajadoras domésticas, el 38.25 % no tiene empleo remunerado y el 42.33 % es asalariada¹⁵.

La situación socioeconómica de los estudiantes es reflejo de las condiciones que priman en el país. El bajo nivel de escolaridad es indicador de la precariedad de condiciones materiales y culturales en las que se desenvuelven más de la mitad de los jóvenes universitarios, muchos de los cuales son protagonistas de este movimiento en contra del

despojo de las pocas expectativas que albergaban de mejoramiento de su condición social.

Esa precariedad cultural, que en su paso por la Universidad intentan remontar, es la que el neoliberalismo ha ido sembrando en el conjunto social. La rebelión estudiantil por la educación gratuita, por eso, es una rebelión desde las profundidades de la sociedad ampliamente compartida por los sectores populares. No requiere mayor explicación frente a la clase trabajadora, pero no logra ser comprendida por sectores de mayores ingresos, relativamente privilegiados.

Es cierto que esta misma composición del estudiantado ha hecho muy difícil su comunicación con una parte importante de la sociedad que de diversas maneras representa la autoridad, las instituciones, el poder o la generación de los padres. Todo aquello que los oprime y les impide expresarse, formular sus propias interpretaciones y construir sus propios caminos. La rebelión es simultáneamente contra los acuerdos del gobierno mexicano con el Banco Mundial para elitizar la educación¹⁶ y contra el sistema que los ahoga, contra los mayores y su autoritarismo, contra un mundo que, recordando la célebre frase del presidente Carlos Salinas, "ni los ve, ni los oye".

Este movimiento estudiantil tendrá que aprender no sólo a crearse un espacio propio sino a mantenerlo estableciendo una relación respetuosa con el conjunto social. Ha sido un movimiento con grandes dificultades, ¿cuál no lo es?, pero la defensa de la soberanía cultural y educativa de la nación que han llevado adelante estos jóvenes, en contra del rechazo y desprecio de muchos de sus profesores, en contra de un Estado que los encarcela y los golpea, y a pesar de no lograr siempre explicarse a sí mismos es un llamado a la conciencia ética, histórica y moral de la sociedad y un indicador de que la exclusión promovida por los grandes poderes mundiales tiene remedio en los sujetos colectivos que empiezan a brotar por todos los rincones.

El conocimiento que es generado por la sociedad no puede ser privatizado, nos pertenece a todos.



Notas

* Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Directora de la revista Chiapas.

1. José Antonio Ocampo, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, afirmó que “hay ahora en América Latina 200 millones de pobres _casi 25 % se localiza en México- y 80 millones por debajo de la línea de pobreza”. *La Jornada*, México, 3 de abril de 2000.

2. Esta información es analizada con detenimiento en la ponencia “Modernización neoliberal en México. Nueva valoración del territorio y sus recursos”, presentada en el seminario *El ajuste estructural en América Latina. Costos sociales y alternativas* organizado por el Grupo de Trabajo sobre Economía Internacional de CLACSO en diciembre de 1999.

3. En 1990 el 75 % de la población tenía menos de 34 años y el 60 % menos de 24. Pirámide de población trabajada con datos de INEGI, XI Censo general de población y vivienda, México, 1992 y Encuesta nacional de la dinámica demográfica, México, 1999.

4. Este movimiento se levantó, como el actual, en contra de la reforma al Reglamento General de Pagos, por la autonomía universitaria y por el incremento en el presupuesto a la educación. Detuvo la reforma al Reglamento y ganó la posibilidad de discutir los problemas universitarios en un Congreso. Los liderazgos personales, la manera como finaliza la movilización y los procedimientos y resultados del Congreso realizado tres años después son ahora fuertemente cuestionados por amplios sectores de la comunidad universitaria, comenzando por el propio CGH.

5. “...se trata de un movimiento plebeyo que surge alentado por la “generación del desastre”, que ha llegado tarde a todo, y que no tiene nada que perder en un contexto sociológico de creciente marginalidad social que nada les ofrece, pero que sí, en cambio, les pretende oponer el arrebato adicional del derecho social de acceso a la educación en sus niveles superiores, en un contexto en el cual la movilidad social ha quedado prácticamente cancelada”. Alfredo Velarde, profesor de la Facultad de Economía y asesor del CGH, en entrevista con Ana Esther Ceceña.

6. Se pueden consultar al respecto los documentos *Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción* y *Marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la educación superior* de UNESCO, 1998; *Exámenes de las políticas nacionales de educación*. México. Educación superior de la OCDE, París, 1997; *La educación superior hacia el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo* de ANUIES, México, 1999.

7. La aprobación en la Cámara de Diputados ocurre el 12 de diciembre de 1998. Ver *Crónica del movimiento estudiantil* en <http://cienciasenhuelga.pagina.de>

8. xxxver LJ del 16 de marzoxxx

9. “La juventud estudiantil del CGH, en tanto que parte componente de una generación que se resistió a la indiferencia social que los adultos les prescribieron al definirlos como la “generación X”, ha logrado advertir que la naturaleza de la

crisis contemporánea no es sólo económica, política, social o cultural, sino que es, indudablemente, una crisis civilizatoria signada por el vaciamiento de sentido para la vida humana, propio de la sociedad industrial capitalista.” Alfredo Velarde, en entrevista con Ana Esther Ceceña.

10. Cien mil participantes.

11. El 21 de marzo de 1999 se realiza una consulta nacional sobre el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno mexicano y el EZLN en la que participan tres millones de personas, a pesar de la desmovilización que representaba en ese momento la atención del problema universitario. Cabe decir que esta consulta había sido anunciada con anterioridad a la iniciativa del RGP.

12. Éste fue el método de trabajo adoptado por la Facultad de Química y permitió al movimiento mantener el respeto de toda la comunidad hasta ahora. Como demostración cabe mencionar que el Director de esta Facultad, amigo personal y muy cercano al Rector Francisco Barnés, hizo una aportación monetaria para pagar las fianzas de los estudiantes detenidos el día de la entrada de la policía militar en la Universidad.

13. Particularmente los medios de comunicación contribuyeron a exacerbar los ánimos dentro del CGH y a difundir una imagen de barbarie que no tenía nada que ver con la sustancia y realidad cotidiana del movimiento.

14. Efectivamente, como producto de la inconformidad con asambleas demasiado largas (una de ellas llegó a durar 36 horas) y donde las discusiones eran difíciles en algunos momentos por la polarización de posiciones, muchos estudiantes se retiraron de ellas pero nunca faltaban a las marchas, que se han mantenido numerosas a lo largo de los doce meses, y siempre se reivindicaron como parte del CGH.

15. Cálculos realizados a partir de las estadísticas oficiales de la UNAM. <http://www.estadistica.unam.mx>.

16. Ver el Reporte n° 17174-ME del Banco Mundial, de junio de 1998.



Crisis y reforma universitaria en México

Por Raquel Sosa Elizaga*

La mayor universidad pública mexicana ha sufrido en los últimos años una doble agresión: la que proviene del envejecimiento de una normatividad establecida hace más de cincuenta años, y la que procede de la decisión gubernamental de imponer políticas “de ajuste” a todas las instituciones públicas de educación superior. La normatividad aprobada en 1945 impone a una institución que se ha multiplicado decenas de veces y diversificado intensamente desde entonces, rígidas estructuras de gobierno, disfuncionales condiciones de trabajo, y una incapacidad generalizada de las autoridades para atender demandas de la comunidad. Por su parte, las políticas neoliberales implementadas durante los últimos quince años distorsionaron la orientación social y el sentido crítico de la producción, enseñanza y difusión del conocimiento que se realiza en esa casa de estudios.

El envejecimiento de la normatividad universitaria se muestra dramáticamente en el hecho de que dieciséis personas (el rector y los integrantes de la junta de gobierno) toman las decisiones fundamentales que rigen a la UNAM sin tomar en absoluto en cuenta a una comunidad constituida por casi cuatrocientas mil personas.¹ Mas tal envejecimiento se muestra también en el sentido cualitativo, ya que al Consejo Universitario² se han sobrepuesto las coordinaciones de la investigación científica y humanística, con sus respectivos consejos técnicos, cuatro consejos académicos de área, el consejo del bachillerato, y el consejo de difusión cultural³, que invaden sus funciones académicas, sin que a ellas corresponda autoridad para tomar las decisiones que remitan a su ámbito.

Los continuos parches que ha sufrido la legislación no han sido obstáculo para que se conserve en lo fundamental una estructura vertical, en la que las autoridades detentan la facultad de decisión, a la vez que disponen de amplios y discrecionales espacios para el ejercicio presupuestal y la aplicación de políticas académicas, mientras que estudiantes, profesores y trabajadores tienen reducidos espacios de participación en los asuntos de su competencia.⁴

Ello favorece indudablemente el que haya podido imponerse en la Universidad una política de “ajuste” acorde a



la dispuesta por el gobierno federal, sin que los integrantes de la comunidad tuvieran canales institucionales para expresar su inconformidad. Para dar sólo un ejemplo, de acuerdo a datos emitidos por las autoridades universitarias, para el ciclo escolar de 1999 solicitaron 29.983 estudiantes su ingreso a carreras del área de ciencias sociales en la UNAM, pero sólo fueron admitidos 2.265.⁵ Y este dato no es poco significativo, ya que de acuerdo a informaciones de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el área de ciencias sociales atiende al 44% de la matrícula universitaria actual.⁶

La población en edades de 20 a 24 años se calcula para el año 2.000 en 9.854.065 en el país. De ella, apenas 1.883.000 jóvenes (el 17%) tendrá acceso a la educación superior, lo que coloca a México entre los países que menos porcentaje de estudiantes de estas edades atiende en el nivel superior, comparado con el 36.2% en Argentina, el 28.2% en Chile, el 29.4% en Uruguay, el 60.2% en EE.UU y el 69.2% en Canadá.⁷

Si analizamos el financiamiento a la educación superior, encontramos, de acuerdo a la propia ANUIES, que el porcentaje de gasto federal destinado a este fin se ha reducido en 10% en los últimos diez años. Alcanza en 1999 a 11.811.147.000 pesos, lo que representa, según ANUIES, el 0.37% del PIB, mientras que la Presidencia de la República lo ubica en el 0.49%.⁹ Este decrecimiento contrasta extraordinariamente con la multiplicación del presupuesto destinado a la seguridad pública en el mismo período, en que pasó de 1.228,4 a 30.540,4 millones de pesos, para no mencionar

el presupuesto destinado a la conversión de deuda privada en deuda pública, aprobado por el Congreso en 1998, y que sólo en el presupuesto de egresos del 2.000 suma 59.300 millones de pesos.¹⁰

Semejantes desequilibrios no pueden sino resultar en una crisis, que se ha producido ya en la Universidad, y de dimensiones más vastas de lo imaginable.

La rebelión de los excluidos

Las medidas aplicadas a lo largo de estos años sobre las universidades públicas partían del supuesto de que los estudiantes, trabajadores, maestros e investigadores de las mismas acatarían sin discusión el “nuevo proyecto de Universidad”. Con una soberbia inigualable, las autoridades universitarias ni siquiera se dieron a la tarea de difundir sus planes al interior de sus comunidades. Las referencias públicas que de ellos llegaron a hacerse en la prensa se producían invariablemente a partir de la inauguración de algún evento de la ANUIES, integrada fundamentalmente por rectores de universidades públicas y privadas.

El conocimiento de los programas del Banco Mundial sobre la educación, particularmente la educación superior, permitió a muchos investigadores procesar el sentido del debate cerrado que se producía entre autoridades de las universidades, y señalar los rasgos compartidos de semejante proyecto, no sólo en México, sino en América Latina. No obstante, mucho tiempo transcurrió entre estos primeros esfuerzos y el que se produjera una resistencia colectiva a las medidas implementadas.

Sucesivos movimientos universitarios en contra de la pretensión de realizar reformas para restringir el acceso e incrementar los pagos a los estudiantes universitarios se produjeron entre los años de 1986 y 1995. El de mayores proporciones fue, indudablemente, el que se suscitó a raíz de la aprobación por el Consejo Universitario de un Reglamento de Pagos que imponía por primera vez tarifas medidas en salarios mínimos a los estudiantes de la UNAM. La huelga de los estudiantes, que duró poco más de un mes, dio lugar a un Congreso Universitario en 1990. Este rechazó por mayoría las reformas al *Reglamento General de Pagos*, pero fue incapaz de avanzar en soluciones de largo plazo en relación a problemas relacionados con la estructura y funcionamiento de la Universidad.

En adelante, otra forma de resistencia habría de presentarse, y fue la que se expresó en medidas de restricción de la matrícula universitaria. Fueron los estudiantes excluidos de la Universidad quienes señalaron con más crudeza los ya perceptibles efectos de un programa en marcha. La reforma de la Universidad se había llevado a cabo de manera silenciosa, pero implacable. Si la visibilidad de los movimientos de excluidos fue menor a lo largo de la década de los noventa, la acumulación de rezagos y la aplicación de nuevas medidas con la creación del Centro Nacional de Evaluación en 1993 fue el punto de partida de una crisis de mayores proporciones.

Las universidades públicas habían conformado una empresa privada a cuyo cargo estarían todos los exámenes de ingreso y egreso de los niveles medio-superior y superior, imponiendo –por encima de las comunidades universitarias– esquemas de cuantificación y calificación del conocimiento adquirido en las escuelas, interviniendo en la selección de los planteles a que se adscribiría a los estudiantes, y en definitiva, sentando las bases para una homogeneización de los procesos de formación a partir de las exigencias planteadas al mercado de trabajo por el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica.

“La exclusión se volvió entonces un hecho escandaloso e inadmisibles, no sólo para estudiantes que veían violentadas sus posibilidades de acceder a la Universidad, sino por padres de familia cuya única esperanza de que sus hijos remontaran el drama del desempleo, la delincuencia o la drogadicción era su acceso a la educación.”

A la fecha, dicha empresa ha llevado a cabo más de dos millones y medio de exámenes en 19 universidades del país, y dominaba, hasta diciembre de 1999, el conjunto de las opciones educativas públicas de nivel medio-superior y superior en el Valle de México.¹¹ La exclusión se volvió entonces un hecho escandaloso e inadmisibles, no sólo para estudiantes que veían violentadas sus posibilidades de acceder a la Universidad, sino por padres de familia cuya única esperanza de que sus hijos remontaran el drama del desempleo, la delincuencia o la drogadicción era su acceso a la educación.

Todo sumado, cuando el rector de la UNAM convocó en marzo de 1999 a una reunión prácticamente clandestina del Consejo Universitario para aprobar un nuevo *Reglamento General de Pagos* a semejanza del rechazado desde 1986, los excluidos se manifestaron masivamente en contra de la medida y vincularon de manera inédita en la historia de esa casa de estudios la restricción a la matrícula, la exclusión por motivos económicos de los estudiantes, y la arbitrariedad de las autoridades. Esta sería la puesta en evidencia más dramática e importante del proyecto neoliberal que se hubiera producido en institución social alguna.

La huelga universitaria y la seguridad pública

El conflicto universitario devino en un asunto de seguridad pública desde el estallido de la huelga el 20 de abril de 1999. Las autoridades de la UNAM y las federales integraron entonces expedientes penales para los participantes identificados en el movimiento. Se activó también un sistema de vigilancia y espionaje sobre las actividades que ocurrían en el campus universitario, operado por la Dirección General de Servicios a la Comunidad y el cuerpo de “Auxilio UNAM”, que fue denunciado por los propios estudiantes en el mes de mayo. La aprehensión de más de mil estudiantes durante la toma policíaca de las instalaciones universitarias, y la persecución de decenas de otros cuatrocientos con órdenes de aprehensión en las semanas subsiguientes a la toma es evidencia de una estrategia de las autoridades, que es la del país, de criminalizar la protesta social para impedir cambios en las estructuras de gobierno.

La represión al movimiento estudiantil tiene como fundamento los cambios en la concepción y los mecanismos de seguridad pública que se establecieron a partir de la rebelión de los indígenas chiapanecos en 1994. Fue en abril de ese mismo año que se establecieron las *Bases para la creación de un sistema nacional de seguridad pública* que puso en manos de un Consejo encabezado por el Secretario de Gobernación la facultad de constituir y controlar mediante la elaboración de un registro nacional de información de personas sospechosas, así como de la disponibilidad de armamentos y fuerzas de seguridad públicas y privadas, todas las actividades relativas al mantenimiento del orden público.

“La indiferenciación de la protesta social respecto a la verdadera delincuencia organizada (la que comete actos de narcotráfico, lavado de divisas, secuestros y corrupción) no sólo abre la puerta para la penalización de la inteligencia crítica, sino que establece la negación por principio del cuestionamiento a la acción del Estado por parte de los ciudadanos.”

En 1996, el Congreso aprobó la *Ley contra la delincuencia organizada*, que establece como tal “cuando tres o más personas se reúnen para organizar actos de violencia física o moral”, y como primer delito así calificado, el de *terrorismo* -del que serían acusados los estudiantes universitarios presos en febrero del 2000. Como corolario a todas estas iniciativas, el poder ejecutivo federal instituyó en abril de 1999 la *Policía Federal Preventiva*, un cuerpo dirigido por un coronel del ejército y en el que participan más de 5000 efectivos de las fuerzas armadas y que tiene la facultad de procesar información, investigar y aún detener a todo sospechoso de cometer delito en todo el territorio nacional.

Semejante aparato de seguridad pública, puesto al servicio del ejecutivo, no sólo violenta la división de poderes y anula en los hechos la función del Ministerio Público, establecidos en la Constitución, sino que amenaza con convertir en “delincuencia organizada” toda expresión de la li-

bre asociación de los ciudadanos en el país, especialmente si para ello utilizan formas de organización permanente, en particular, la inteligencia.

La indiferenciación de la protesta social con respecto a la verdadera delincuencia organizada (la que comete actos de narcotráfico, lavado de divisas, secuestros y corrupción) no sólo abre la puerta para la penalización de la inteligencia crítica, sino que establece la negación *por principio* del cuestionamiento a la acción del Estado por parte de los ciudadanos.

Estas características son comunes a las estructuras de seguridad pública que sobrevivieron a guerras y dictaduras en Centroamérica y el Cono Sur, y no resulta una coincidencia que se aplicaran en México por primera vez para reprimir a los estudiantes de la UNAM. La conversión “legal” de los estudiantes en delincuentes organizados constituyó, por lo demás, el argumento principal para postergar de manera indefinida el diálogo sobre sus demandas, y abrir paso a una reforma verdadera de la Universidad.

Los agravios pendientes

A lo largo de los casi diez meses de huelga universitaria, todos los sectores universitarios hubieron de manifestarse, pero por primera vez en muchos años, algo semejante

ocurrió en el país. El conflicto de la UNAM se convirtió en el más grave del país, tanto por su dimensión política, como por el hecho de que ocurriera poco antes del inicio de un proceso electoral federal, precisamente en la capital y sede de los poderes.

Los universitarios todos nos vimos enfrentados a una polarización sin precedentes. El tibio intercambio anterior entre académicos de posturas diversas, la suave inercia y la aplicación de presiones tan constantes como incontestadas de las autoridades de la Universidad más grande del país dieron lugar a un feroz enfrentamiento y polarización cuyas consecuencias son aún hoy impredecibles.

Esta situación afectó particularmente a muchos intelectuales ubicados en la izquierda durante años, sin haber probado relación crítica alguna con los movimientos sociales de la última década, intocados en su prestigio y en su posición se vieron cercados por un movimiento cada vez más exigente, más intolerante con sus adversarios, y menos dispuesto a transigir que lo que ninguno de ellos lo había estado jamás. La denuncia de la falta de democracia al interior del movimiento estudiantil, promovida por muchos de ellos, quienes sucesiva y fallidamente intentaron ser interlo-

cutores, mediadores, jueces y maestros de este movimiento de excluidos fue incorporada de manera perversa a la prueba que las autoridades pretendían dar sobre la imposibilidad de relación alguna con quienes fueron desde el primer momento calificados como vándalos y transgresores.

En los hechos, toda opción de negociación, de concesión y de “regreso a la normalidad” se vio rebasada por la potencia de una masa que exigía diálogo al Rector, pero pasó a considerar a los “moderados” como parte del sistema. No obstante, la terquedad de los excluidos les otorgó, por fin ante la historia, la cualidad de una defensa ética, de una transigencia en la defensa de los derechos sociales como no había ocurrido más que con los zapatistas en Chiapas.

Los partidos políticos, el gobierno, las organizaciones empresariales y, desde luego los medios de comunicación hicieron su parte en la creación de una barrera infranqueable entre los *nechos*, “ultras y megaultras” jóvenes universitarios que no han cesado de repetir una y otra vez sus puntos de pliego petitorio, y la necesidad de una “estabilidad política” a toda costa, que permitiera sin pena ni gloria avanzar de lleno en el proceso electoral y dar lugar a una transición más, semejante a todas las anteriores. Que todo cambiara, pero por favor, que todo siguiera igual. Muy escasas voces se alzaron en contra de la intransigencia del *status quo* y, en todo caso, no lograron detener la campaña desatada contra los estudiantes, ni el uso de la fuerza pública para aplastar al movimiento.

Los capítulos que siguen

Después de la entrada de la Policía Federal Preventiva a la UNAM el 10 de febrero, con la aprehensión de más de mil estudiantes y la persecución de varios centenares más, no ha ocurrido sino un recrudescimiento del conflicto, en condiciones más oscuras e inciertas que antes, pero de proporciones no menos dramáticas.

La Universidad dejó de ser, tal vez por mucho tiempo, el territorio en que decisiones tomadas por la autoridad podían pasar incontestadas, y reformas aplicadas sin discusión. La polarización producida por el conflicto permanece como señal de alarma en todas las entidades académicas, y la tregua tiene fronteras muy poco precisas en cada espacio, por lo que se rompe cotidianamente. Los excluidos no han logrado hasta ahora sino detener, con el costo de su libertad y de un tiempo cada vez más largo de enfrentamientos y desgaste, las medidas más agresivas de las autoridades. Estas, a su vez, no han renunciado a su programa de reforma, y ahora confían en que el aparato de seguridad pública les otorgue un control sobre la comunidad que no les ha dado la política de desacreditación y empujamiento de su adversario, implementada por el gobierno federal a lo largo de estos seis años en Chiapas.

La Universidad de todos y para todos, la aplicación de derechos sociales, y el derecho a disentir están en duda todavía y nadie puede afirmar que haya avanzado un ápice más de lo establecido en esa Ley Orgánica universitaria aprobada por el Congreso de la Unión en 1945. La violencia dejó ya muchos saldos que en sí mismos se convierten en afrentas para el futuro. La reforma universitaria que deseamos muchos, la que establezca la equidad, la gratuidad, el derecho de todos a influir en las decisiones que se toman en nuestro nombre, la rendición de cuentas de las autoridades y un diálogo libre, crítico y verdadero, está aún por verse. La otra, la que conocimos en estos años neoliberales, está parcialmente paralizada, pero acecha desde la oscuridad y se protege con la fuerza pública. Sólo la continuidad de la lucha de los excluidos, su moral de resistencia, y la explotación de un horizonte de visibilidad en que la crisis los colocó puede determinar que se hunda en el fango de la historia.

■ Notas

* Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ex presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) y ex Directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

1. El Artículo 6º de la *Ley Orgánica de la UNAM* otorga a la Junta de Gobierno la facultad de nombrar al Rector, conocer de su renuncia, o removerlo por causa grave, lo que se apreciará “discrecionalmente”. Asimismo, la Junta nombra a directores de facultades, escuelas e institutos, designa a los integrantes del patronato universitario, resuelve cuando el rector vete acuerdos del Consejo Universitario y resuelve conflictos que surjan entre autoridades. Por su parte, el Artículo 91 del *Estatuto General de la UNAM* establece que el rector “sólo será responsable” ante la junta de gobierno.”

2. Según el artículo 7 de la citada *Ley Orgánica*, el Consejo está constituido por el rector, los directores de facultades, escuelas o institutos, un representante profesor y un estudiante por escuela o facultad, un representante de los centros de extensión y un representante de los trabajadores. Sus facultades son, de acuerdo al Artículo 8 de la misma *Ley* expedir todas las normas y disposiciones generales, y conocer de asuntos que le sean sometidos.

3. Véanse los Artículos 9 y 12 del *Estatuto General* (modificado el primero en 20 ocasiones desde 1948), los Artículos 2 y 3 transitorios de septiembre de 1991, los 21 y 22 transitorios de 1997, y los 1 y 2 transitorios de 1993, todos del mismo *Estatuto*.

4. En el Consejo Universitario, hay 25 representantes de los profesores, 24 de los estudiantes, mientras que los representantes de las autoridades suman 65. Los consejos técnicos de escuelas y facultades se integran con un representante profesor por especialidad y dos representantes estudiantes por todos los alumnos. Véanse Artículos 7, 8 y 9. 12 de la *Ley Orgánica*. Los consejos técnicos de la investigación científica y de humanidades incluyen un representante profesor por cada instituto y centro, mientras que los consejos de área incluyen la representación de un profesor y un estudiante por escuela y un profesor por centro o instituto. Véanse los Artículos 46, 47, 51, 54-C y D.99; 5 y 23 transitorios de diciembre de 1997; y 3 transitorio de mayo de 1993, del *Estatuto General*.

5. *La Jornada*, 19 de marzo del 2000.

6. *Programa estratégico de desarrollo de la educación superior*, abril de 1999, p. 36).

7. *Ibid.*, p. 19.

8. *Ibid.*, p. 85.

9. Anexo 5, *Ibid.* Véase también Ernesto Zedillo, *V Informe de Gobierno*.

10. Datos del propio informe de gobierno y de *La Jornada*, 12 de noviembre de 1999.

11. Sobre la organización y funcionamiento del CENEVAL véanse, entre otros, los trabajos de Guillermo Villaseñor, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Las autoridades de la UNAM suspendieron temporalmente sus vínculos con este organismo en enero de 1999.

Documentos del Conflicto

Ecuador y México

Boletín para la prensa internacional

■ La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE Quito 16 de enero de 2000

El Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador, constituido democráticamente con la participación de 21 Parlamentos Provinciales innumerables parlamentos comunales, cantonales y barriales ha asumido directamente el ejercicio de la soberanía nacional para salvar a la República del Ecuador de su disolución nacional iniciada con la decisión de Jamil Mahuad de renunciar a la soberanía monetaria anunciado la sustitución del sucre, nuestro histórico signo monetario, por el dólar.

La decisión de dolarizar la economía es el último ataque en contra de la economía del pueblo y del aparato productivo del país que ejecuta Mahuad con el siniestro propósito de proteger a una corrupta bancocracia en quiebra y transformarle al Ecuador en un enclave de la especulación financiera y el lavado de narcodólares.

La dolarización implica la destrucción del aparato productivo, la quiebra de la industria y la pérdida de cientos de miles de empleo, la expropiación progresiva de las pequeñas parcelas de tierra de los indígenas y campesinos del país.

Este esquema colonial es inaplicable pues el ingreso de divisas representa apenas el 15% del Producto Interno Bruto, en consecuencia la obsesión de Mahuad contiene la reducción a la asfixia del aparato productivo.

Después de una cadena sucesiva de levantamientos indígenas, paros campesinos y huelgas generales de trabajadores ninguna de sus legítimas aspiraciones ha sido atendida ni resuelta, por el contrario se han intensificado sus programas de privatización de la industria petrolera, de la seguridad social, de la telefonía y la electricidad y su orientación a la destrucción de los derechos de los indígenas, campesinos y trabajadores. Se han congelado los depósitos en los bancos y se ha propuesto su devolución en 10 años, en tanto se han destinado miles de millones de dólares a la piratería de los banqueros.

En esta situación el Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador ha convocado a un Encuentro Nacional en Defensa de la Soberanía, para sustituir a Mahuad y a los poderes legislativo y judicial e instalar el ejercicio soberano del poder por el pueblo y a fundar un Estado Plurinacional que elimine definitivamente la opresión secular de la mayoritaria población indígena.

El Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador convoca a todas las organizaciones de los pueblos del mundo, a todo ciudadano del mundo a solidarizarse y defender activamente el derecho legítimo de los pueblos del Ecuador a ejercer directamente su soberanía, demandando a la fuerza pública del Ecuador que observe ese ejercicio de la soberanía por el pueblo, que no reprima las movilizaciones pacíficas de millones de ecuatorianos y se subordine a la legítima soberanía que radica en el pueblo. Igualmente les exhortamos a reconocer la legitimidad plena del Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador y a demandar a los gobiernos de los países su reconocimiento inmediato.

Atentamente

Antonio Vargas
Presidente del Parlamento Nacional
de los Pueblos del Ecuador

Boletín de Prensa

■ Ecuador un país de volcanes y de un pueblo digno y rebelde, el pueblo dijo basta de tanta corrupción y pobreza... y estalló Quito, 21 de enero del 2000

Comunicado al pueblo del Ecuador y a los pueblos del mundo.

hermanos, hermanas:

La dura jornada de lucha emprendida durante más de una década, las constantes movilizaciones, marchas, levantamientos, paros, caminatas, foros, encuentros, asambleas, seminarios, abonan el camino de la lucha por una sociedad justa y con oportunidades para todos y todas. No cabe duda que el gigantesco esfuerzo del pueblo, sus lágrimas y la sangre de los hombres y mujeres, gente que ha entregado su vida, por días mejores tenía que producirse una transformación social de esta manera, un pueblo en levantamiento, millones de gentes en las carreteras, exigiendo el más elemental derecho de todo ser humano, el derecho a una vida digna, defendiendo su Seguro Social Campesino, exigiendo atención a sus necesidades, impidiendo que se rifen el Petróleo, la electricidad, las telecomunicaciones. los dineros del pueblo.

Ahora, cuando el pueblo hace escuchar su voz, en cada calle, en las carreteras, en las plazas y esta voz cada día toma fuerza y la fuerza de esa voz trasciende los paramos, las montañas y se hace eco en las ciudades, y los churos, las huipalas los ponchos toman forma de pueblo, para exigir la renuncia de todos quienes han sido causantes de la profunda crisis económica y social de nuestra patria.

El pueblo en esta jornada ha expresado su decisión, construir una verdadera democracia, desterrar del país la corrupción, instaurar una economía solidaria, más humana, más digna para todos y todas, el pueblo se ha pronunciado y ha dicho basta, es ahora o nunca de parir una nueva patria para el nuevo milenio, siempre todo parto es doloroso, pero es germen para una nueva vida.

Hoy pedimos a los pueblos del mundo, a los gobiernos hermanos, que respeten y apoyen la decisión soberana de millones de ecuatorianos, queremos tener la oportunidad y el derecho de construir una patria digna y soberana. Pedimos que se manifiesten con acciones solidarias en respaldo de esta causa que es justa y es democrática.

Directiva Nacional
Comité de Prensa

El movimiento Pachakutik al país

Quito, 26 de enero de 2000

Consideramos necesario explicar la rebelión y los motivos que nos condujeron el 21 de enero a establecer una Junta de Salvación Nacional, la cual sería traicionada a unas pocas horas por una mañosa cúpula militar:

El infame proceso de empobrecimiento al cual nos llevó el Dr. Jamil Mahuad, se evidencia en la masiva emigración de compatriotas (y no son pocos los muertos por ello), en el indignante número de mendigos, en el alarmante crecimiento de la delincuencia. Toda esta realidad obedece al capricho del Dr. Mahuad de gobernar y amparar a un grupo de banqueros corruptos los cuales se llevaron casi dos reservas monetarias internacionales sin responder con sus bienes ni ninguna de sus empresas vinculadas.

El gobernar para algunos banqueros corruptos llevó a que se congelen los depósitos de miles de ecuatorianos, se provocó que miles de ecuatorianos pierdan sus ahorros de toda la vida y que todos paguemos esa ineficiencia y pillería a través de una inflación galopante. Pillería que se quiso culminar con un proceso de dolarización y privatización que acabe de una vez con el patrimonio y soberanía ecuatoriana.

Todo este proceso no se podía dar sin la complicidad del Congreso ni de la Corte Suprema de Justicia. Es claro que las leyes (ya que así lo quieren los diputados demócrata populares, socialcristianos, roldosistas, etc.) no permiten que los banqueros corruptos respondan con sus bienes el desfaldo hecho a los ecuatorianos. Es claro que no se quiere poner un alto a las costosísimas campañas electorales y que no se quiere hacer transparente el proceso eleccionario: Aspiazú dio tres millones de dólares ¿Cuánto más recibió el binomio Mahuad - Noboa de los banqueros para su campaña presidencial? ¿Podremos saberlo? ¿Cómo confiar en una Justicia en cuya cabeza está el principal acusado del festín del petróleo de los años setenta?

Es claro que la corrupción está enraizada en todo el poder actual. Es por esto que los movimientos sociales e indígenas no podíamos quedarnos callados e indolentes. No pudimos callarnos ante el sufrimiento de nuestras familias.

Por eso salimos pacíficamente a cambiar la corrupción enquistada en el poder. Por eso se nos unieron sectores militares y policiales, de la iglesia, comerciantes minoristas, estudiantes, ciudadanos comunes. Nunca logramos un acuerdo social tan amplio y tan democrático. Por eso estuvimos más de una semana masivamente en las calles y carreteras.

Por todo esto establecimos una Junta de Salvación Nacional, la cual podía acabar de tajo con la corrupción de los poderosos y establecer un modelo de desarrollo que acabe con la indignante pobreza, pero que lamentablemente fue traicionada por una mañosa cúpula militar. Se hizo una traición a la honestidad y no a los sectores populares que simplemente canalizamos el descontento.

Nos han acusado de quebrar el orden constitucional pero debemos aclarar que no fuimos los únicos: Hubo un intento de autogolpe de Mahuad, según confesión del general Mendoza. Hubo un congelamiento inconstitucional de los depósitos de los ecuatorianos. Hubo una constitucional consulta de la autonomía en Guayas.

No quisimos repetir el error del 5 de febrero de 1997 cuando tras la salida de Bucaram entregamos al Congreso Nacional nuestra lucha, el cual dio una cura peor a la enfermedad: Alarcón preso por corrupto.

Recordemos que frente al régimen de Mahuad agotamos todos los mecanismos y espacios de negociación. Pero todos los acuerdos fueron rotos, como el de julio del 98 cuando luego del levantamiento indígena planteamos mesas serias de negociación.

Frente a nuestros diputados en el Congreso Nacional les decimos que por el momento continúen, es un espacio legítimamente ganado. Los diputados son un espacio de vocería pública, están en un espacio de discusión pese a que están en minoría numérica. Los gobernantes mantienen el mismo programa necesitamos estar en la lucha, si hubieran cambiado no los necesitaríamos.

■ Posición frente al nuevo gobierno:

Consulta popular

El nuevo gobierno entra por la tranquera, lo lógico hubiera sido que el Congreso ratifique a Mahuad. Tenemos reparos a que pueda enrumbar al país. No obstante, una vez que se retiró el proyecto "Trolebús" Estamos abiertos al diálogo siempre y cuando se debatan las propuestas de fondo que hemos planteado en los siguientes temas:

- Reforma política
 - Privatizaciones
 - Dolarización
 - Políticas Sociales
 - Deuda externa
- Este debate debe ser real y debemos evitar las componendas por lo cual pedimos una

CONSULTA POPULAR.

El Movimiento Pachakutik destaca la actitud del pueblo y lo llama a mantenerse vigilante y organizado a través de Los Parlamentos Populares y demás formas organizativas.

Miguel Lluco
Coordinador Nacional del Pachakutik

Primer Manifiesto a la Nación

■ Consejo General de Huelga Jueves 25 de marzo de 1999.

En los últimos años el gobierno ha cancelado los derechos sociales más significativos para la nación mexicana, tales como la seguridad social, los servicios de salud pública, los derechos laborales y la tenencia de la tierra, impulsando una serie de políticas de privatización. Ello se ejemplifica con la propuesta de venta de la industria eléctrica. Es en este contexto donde se inscribe la iniciativa del incremento de cuotas promovido por el rector Barnés.

En un país donde el 50% de los mexicanos vive en la pobreza y donde seis de cada diez jóvenes mexicanos entre 20 y 24 años, no tienen una actividad fija que realizar, porque sólo el 14% está inscrito en alguna institución de educación superior y únicamente el 26% está ubicado en el sector formal del trabajo, es inaceptable el rumbo económico por el que hemos transitado estos últimos años. El mejor ejemplo de la orientación económica que ha seguido nuestro país fue la aprobación, en septiembre de 1998, de la iniciativa para convertir en deuda pública los gastos derivados del rescate financiero de los bancos; con la reorientación y el recorte presupuestal de 1999, derivados de este gran fraude nacional se afectó principalmente a los rubros de atención social.

Ante esto afirmamos que la propuesta de romper con el principio de gratuidad en la UNAM, es parte de un proyecto que busca reestructurar a nuestra institución, modificar aún más su composición social y sus fines públicos.

Estamos en contra de las cuotas porque:

1. Representa el desentendimiento del Estado sobre su responsabilidad de otorgar educación superior gratuita, aún cuando así está consignado en el artículo 3º. Constitucional.
2. Se aprobaron autoritariamente, a espaldas de la comunidad mediante una acción irresponsable del rector Barnés.
3. Las cuotas apenas significan el 0.78% del presupuesto anual en el primer año de su aplicación (considerando que todos pagaran su cuota) con lo cual se demuestra que es una medida que no resuelve ningún problema financiero de la institución y tampoco ninguna problemática de orden académico.
4. La educación superior ya es pagada por todos con los impuestos. Si aumentan las cuotas se creará un precedente contra este derecho. El cobro de cuotas significa un pago doble por un derecho constitucional.
5. Se trata de una iniciativa proveniente de organismos internacionales como la OCDE o el Banco Mundial, Quienes tienen como principal interés disminuir el gasto social de los países subdesarrollados.
6. No existe transparencia en el manejo de los recursos en la UNAM. Son públicos los diversos fraudes que se han cometido contra la universidad. EL patronato universitario (encargado de los recursos económicos de la UNAM) es una instancia controlada completamente por las autoridades universitarias con lo que no existe ninguna garantía del manejo transparente de recursos y de los criterios de asignación presupuestal.

Ante esto, el movimiento estudiantil declara:

1. La decisión tomada por las autoridades violenta la legalidad universitaria, carece de legitimidad y contra ella actuará el movimiento estudiantil.

El rector está actuando con profunda irresponsabilidad política a fin de imponer una medida que implica un costo social muy elevado para la universidad. Los funcionarios de la UNAM le apostaron al individualismo de los estudiantes y esa fue su primer derrota. El nuestro es un movimiento solidario con las generaciones que vienen.

2. La UNAM debe responder a los intereses de la nación mexicana y no a las de un grupo de funcionarios.

Mientras que el rector Barnés pretende dirigir a la universidad como si se tratara de un cuartel policiaco, nosotros hemos exigido constantemente diálogo abierto y público; hemos realizado multitudinarias asambleas; más de 35 mil voces exigimos ser escuchadas en la segunda manifestación; paramos las clases en 18 escuelas para poder discutir con nuestros compañeros. Nada le importó al rector, ha respondido con la imposición montando todo un aparato policiaco para resguardar a sus consejeros, golpeando a profesores y estudiantes. Fotografían y filman a quienes pensamos distinto del rector, nos amenazan con la cárcel y la expulsión por participar e incluso organizan porros para agredirnos.

3. El movimiento está en ascenso.

Como respuesta a este clima de provocación, la convicción de defender nuestra universidad está creciendo. Conforme se va desarrollando la discusión en las escuelas, más y más compañeros se suman a la lucha porque tenemos la razón.

El día de ayer se sumaron al paro, además de las participantes el 11 de marzo, las Facultades de: Contaduría, Medicina, Ingeniería, Química, Arquitectura, las preparatorias 4, 7 y 8, la Escuela Nacional de Música, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el Centro de Ecología, así como otras entidades que se declararon en paro activo.

Por tanto, exigimos:
Al gobierno federal:

-Incremento inmediato al presupuesto destinado a la educación y educación superior en particular.

Al rector de la UNAM:

- La derogación del reglamento general de pagos.
- La democratización de los órganos de gobierno de la UNAM.
- El retiro y cese de las sanciones a los estudiantes que han participado en el movimiento estudiantil.
- El desmantelamiento del aparato policiaco que ha montado en nuestra institución.
- La derogación de las modificaciones a los reglamentos de inscripción, permanencia y evaluación realizadas en junio de 1997.
- La no implementación del EGEL y la eliminación del examen único de ingreso.

La huelga como último recurso

Barnés ha cerrado toda posibilidad al diálogo. Ante la cerrazón que han mostrado los funcionarios de la UNAM no dejan otro recurso que el de la Huelga General Universitaria. No olvidamos que fue mediante una huelga universitaria como la universidad obtuvo su autonomía y fue también a través de una huelga como en 1986 se logró echar atrás las reformas que Carpizo había impuesto.

Con el paro realizado el día de ayer pusimos a discusión de todos los universitarios, el estallamiento de una huelga general en la UNAM. Estamos haciendo el mayor esfuerzo por sumar a todos a este movimiento y estallar la huelga más consensada y fuerte de la UNAM.

A partir del día de hoy ponemos a discusión de las escuelas exigir la renuncia de Barnés, no podemos permitir que sea un policía y no un académico el que dirija la máxima casa de estudios del país.

Convocamos a todas las organizaciones sociales, a todos los universitarios del país, a los maestros de primarias y secundarias, a los electricistas y a todos los trabajadores a unificar las resistencias, a unirnos todos para detener el proyecto de país que está imponiendo el gobierno.

Asimismo, los invitamos a participar en un Diálogo Nacional sobre la universidad pública y gratuita. El diálogo se realizará los días 9 y 10 de abril en Ciudad Universitaria.

(Publicado en el periódico "La Jornada" (p.16)
el jueves 25 de marzo de 1999)

Pliego petitorio del Consejo General de Huelga - UNAM

E l 20 de abril de 1999 a las cero horas, estalló la huelga por los siguientes puntos:

1. Abrogación del Reglamento General de Pagos y anulación de todo tipo de cobros por inscripción, trámites, servicios, equipo y materiales.
 2. Derogación de las reformas aprobadas por el Consejo Universitario en junio de 1997. Esto significa recuperar el pase automático, eliminar los nuevos límites de permanencia a los estudiantes de la UNAM y respetar la elección de carrera dando prioridad al bachillerato de la UNAM.
 3. Congreso democrático y resolutivo en el que toda la comunidad discuta y decida sobre los problemas que enfrenta nuestra universidad y cuyas decisiones tengan carácter de mandato para toda la comunidad universitaria y sean acatadas por las autoridades.
 4. Desmantelamiento del aparato represivo y de espionaje montado por las autoridades y anulación de todo tipo de actas y sanciones en contra de maestros estudiantes y trabajadores que participamos en el movimiento.
 5. Corrimiento del calendario escolar tantos días como los días efectivos de clase suspendidos por el actual conflicto, con la correspondiente anulación de las clases extramuros.
 6. *Rompimiento total y definitivo de los vínculos de la UNAM con el Centro Nacional de Evaluaciones (CENEVAL) y, en consecuencia, la anulación del examen único de ingreso al bachillerato de las universidades y escuelas públicas, así como del Examen Único de Egreso.
 7. +Libertad a todos los presos políticos.
- (*) El sexto punto fue agregado el 3 de Mayo 1999 en Asamblea del CGH en el auditorio CHE Guevara.
- (+) El séptimo punto fue agregado el 1° de febrero de 2000.

Acuerdos de la sesión plenaria del Consejo General de Huelga

Viernes 11 de febrero del año 2000

■ Pronunciamientos

E l Consejo General de Huelga declara, que el más reciente intento del gobierno y las autoridades universitarias por derrotar nuestra lucha, a través del desalojo violento y el encarcelamiento de cerca de mil compañeros, a manos de la paramilitar PFP, ha fracasado, el CGH vive, la huelga sigue. El lunes 14 a las 10 am el Consejo General de Huelga partirá en marcha, del monumento a Alvaro Obregón, para ingresar a Ciudad Universitaria y reinstalar las Asambleas en todas las Facultades. Hacemos explícito el carácter pacífico de nuestra manifestación, los contingentes de cada escuela tomarán las medidas de seguridad necesarias para cerrarle el paso a cualquier tipo de provocación.

Mientras uno sólo de nuestros compañeros permanezca encarcelado y mientras no se discuta la solución de nuestro pliego petitorio en la mesa de diálogo, respetando los acuerdos firmados con las autoridades el día 10 de diciembre, no puede haber clases en la UNAM. Confiamos en la dignidad de los estudiantes universitarios contrarios a la huelga, sabemos que no acudirán a clases como si nada hubiera ocurrido — como pretende el represor De la Fuente — al mismo tiempo que sus compañeros se encuentran en prisión por el “delito” de defender con firmeza sus justas demandas y cuando éstas se encuentran sin resolver. Los convocamos a incorporarse a las Asambleas, el próximo lunes.

Exigimos la inmediata libertad incondicional de absolutamente todos nuestros compañeros presos políticos, que son mantenidos como rehenes por los terroristas Zedillo, Labastida, Diódoro Carrasco y Juan Ramón de la Fuente, pretendiendo así doblegar al movimiento estudiantil. No permitiremos que retengan a uno sólo de ellos.

El Consejo General de Huelga reitera que a su pliego petitorio de 6 puntos, se ha sumado uno más, la libertad de todos nuestros presos políticos. Manifestamos que a casi diez meses de huelga, ninguna de nuestras 7 demandas ha sido solucionada, a pesar de que todas ellas son elementales y muy fáciles de resolver. Exigimos la solución inmediata a los 7 puntos de nuestro pliego petitorio

El Consejo General de Huelga le exige al empleado de Zedillo, Juan Ramón de la Fuente, su inmediata renuncia a la rectoría. Nada tiene que hacer en la UNAM, quien vino con el único propósito de engañar a la comunidad universitaria, aprovechándose de manera indigna de su desesperación, para pasarle la factura de la represión al movimiento estudiantil y la violación de la autonomía universitaria. Nada tiene que hacer en la UNAM, quien convocó a la confrontación entre universitarios. Nada tiene que hacer en la UNAM el lugarteniente de Diódoro Carrasco, el empleado de Zedillo y Labastida, que se vaya.

Nos pronunciamos:

d) Hacemos un llamado a todos los universitarios a no asistir a clases, pues sólo avalarían la salida represiva que las autoridades dieron a un problema que nos incumbe a todos, de igual forma llamamos a los trabajadores a buscar formas de expresar su indignación e inconformidad.

e) Pugnamos por la solución mediante el diálogo como se estableció el día 10 de diciembre con las autoridades, por lo que rechazamos tajantemente toda salida unilateralmente impuesta por las autoridades universitarias.

f) Exigimos la desaparición de la Policía Federal Preventiva y del Cuerpo de granaderos, cuyo papel ha sido siempre el de reprimir a los movimientos sociales.

g) A los banqueros les decimos, quédense con su limosna, saquen sus sucias manos de la UNAM y regresenle al pueblo de México lo que le robaron con el Fobaproa.

h) Hacemos un llamado a los intelectuales y a todo el pueblo en general para que se unan con el cgh en su lucha.

■ Convocatoria

Se convoca a la comunidad universitaria a que asista a una marcha del monumento de Alvaro Obregón a Ciudad Universitaria el próximo lunes 14 de febrero a las 10 de la mañana. Con el objetivo de reinstalar las asambleas en todas las escuelas y facultades de Ciudad Universitaria.

Se les convoca a las Organizaciones sociales a que se incorporen a esta movilización en calidad de garantes.

Se convoca a un paro nacional a todo el sector educativo con los siguientes ejes:

1. Defensa de la gratuidad de la educación pública.
2. Libertad inmediata e incondicional a todos los luchadores sociales presos políticos y la desaparición de la Policía Federal preventiva.
3. Por la solución del pliego petitorio del CGH.

Convocamos a una reunión nacional el sábado 19 de febrero a todas las instituciones de educación superior cuyo punto a discutir será:

- La posibilidad de estallar la huelga nacional.
- La conformación de un consejo general de lucha.
- La reactivación del frente nacional en defensa de la educación gratuita.

■ Plan de Acción

- Mitin en el reclusorio Norte el sábado 12 de febrero a las 9 de la mañana.
- Jornada Nacional de colecta de firmas en defensa de los compañeros presos políticos.

Cronología del conflicto



El propósito de esta sección es presentar, bajo la forma de una cronología por país, la información básica relativa al desarrollo de los principales conflictos sociales ocurridos en la región latinoamericana, en este caso para el período que va entre enero y abril de 2000.

Huelga aclarar que toda pretensión de exhaustividad en la cobertura y relevamiento de los conflictos quedaría desairada ante las enormes dificultades que plantea una empresa de este tipo. Numerosos obstáculos se interponen en el camino: desde el carácter irruptivo y efímero de muchos de ellos hasta su extremo localismo, en algunos casos, y la menos que mediocre cobertura que tanto los medios como las agencias gubernamentales efectúan de los mismos, unos y otros hermanados en su común afán por minimizar la presencia de las contradicciones y antagonismos sociales en nuestros países.

El resultado, deletéreo tanto para las ciencias sociales como para la ciudadanía democrática, es la invisibilización del conflicto social y la construcción de un engañoso imaginario en donde las tensiones y las protestas originadas por los rigores de la restructuración regresiva del capitalismo en curso desaparecen del horizonte. Sólo los conflictos que, por su envergadura, naturaleza y/o capacidad organizativa de sus actores principales, y su centralidad en la reproducción de la vida social logran romper este muro de silencio, acceden a una cobertura más o menos completa.

Esto no es óbice, sin embargo, para que muy a menudo la misma no tenga la objetividad que el tema merece, abriendo el campo para la introducción de arraigados prejuicios o convencionales estereotipos que, en la mayoría de las veces, tienen a satanizar a los revoltosos y estigmatizar sus objetivos y formas de lucha. O que “urgencias informativas” a las cuales tienen que someterse los medios de comunicación terminen por interrumpir el seguimiento de las noticias relativas a determinados conflictos, para no hablar de situaciones en las cuales los grandes oligopolios que controlan la mayor parte de los medios de comunicación de masas adecuan los contenidos de sus noticias a las preferencias insinuadas por los gobiernos de turno.

Hechas estas imprescindibles salvedades, ofrecemos a continuación una cronología de los principales conflictos sociales ocurridos en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Perú.

Argentina*

E n e r o

Miércoles 12 • La CTA y la CGT realizaron sendas movilizaciones en la Provincia de Corrientes en contra de la reducción de la planta del personal y del pago de sueldos con bonos anunciada por el Interventor Federal actualmente a cargo del gobierno de la Provincia.

Lunes 24 • Empleados municipales de la ciudad de Gral. Güemes, Salta, iniciaron el corte de la ruta nacional 34 en demanda de los sueldos atrasados desde hace 9 meses. Ex obreros del quebrado ingenio San Isidro se sumaron a la manifestación para reclamar el pago de indemnizaciones adeudadas.

Miércoles 26 • Trabajadores estatales y del sindicato de Luz y Fuerza realizaron una marcha en la ciudad de Córdoba en oposición a la ley ómnibus enviada por el Gobierno Provincial al Parlamento local. Dicha ley prevee entre otras cuestiones, la privatización de EPEC (Empresa Provincial de Energía Eléctrica) y del Banco de Córdoba y determina duros parámetros de disciplina fiscal.

• El Sindicato de Peones de Taxi realizó una marcha a Plaza de Mayo para entregar un petitorio en el ministerio del Interior reclamando más seguridad.

• La policía salteña reprimió a los trabajadores que cortaban la ruta nacional 34 en la provincia de Salta. 48 detenidos, entre ellos dirigentes gremiales y un periodista, y un número no definido de lesionados fue el resultado del operativo

F e b r e r o

Martes 8 • Desocupados cortaron el puente internacional que comunica La Quiaca con Villazón (Bolivia) en demanda al gobierno nacional por la restitución de los planes Trabajar. El cura párroco Jesús Olmedo encabeza la protesta de la que participan 350 personas, de las cuales la mayoría comenzó un ayuno.

• Trabajadores del ingenio La Esperanza, Provincia de Jujuy, cortaron la ruta nacional 34 exigiendo facilidades crediticias que permitan el levantamiento de la zafra y el pago de los salarios adeudados.

Miércoles 9 • Los desocupados de La Quiaca levantaron ayer el corte del puente tras recibir la promesa del gobierno nacional de crear 150 nuevos puestos de trabajo entre otros compromisos, y de festejar con una olla popular y una misa comunitaria.

Jueves 10 • El consejo directivo de la CGT (Central General de Trabajadores) dispuso un cese de actividades en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires a partir de las 14 horas y una concentración en Plaza de Mayo para el día 24 de este mes. La medida de fuerza se ha-

Cronología

ría a fin de protestar contra el proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional, que ese día sería tratado en la sesión de la cámara de diputados.

- El Sindicato de Peones de Taxi realizó un paro de 24 hs exigiendo al gobierno nacional medidas que aseguren mayor seguridad.

- Los trabajadores azucareros del Ingenio la Esperanza decidieron levantar el corte de la ruta nacional 34 ante el anuncio oficial de crear un fondo fiduciario de salvamento al ingenio.

Sábado 12

- El Frente de Gremios Estatales de la provincia de Jujuy realizó la primera gran movilización de protesta del año, en demanda del pago de los sueldos de enero y del aguinaldo a los empleados públicos provinciales. Además exigieron los depósitos correspondientes a las AFJP. Los manifestantes advirtieron también que resistirán el ajuste.

Lunes 14

- Carlos Santillán, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa, anunció el apoyo de esa agrupación a la concentración convocada por la CGT, aunque criticó a la dirigencia de la CGT.

Miércoles 16

- La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) convocó a una manifestación frente al Congreso Nacional el día 24 para expresar su rechazo al proyecto de ley de reforma laboral.

Lunes 21

- La Asociación de Educadores de la Provincia de Santiago del Estero inició un paro de 72 hs. en demanda de una recomposición salarial (un sueldo básico de \$330, reducido hace 7 años). El gobierno provincial anticipó que les descontará los días de huelga. En el mismo sentido la Asociación de Docentes de la Provincia de Jujuy inició un paro provincial exigiendo el pago de los salarios de enero y la derogación del decreto 410 que permite avanzar en una reducción salarial. Gremios docentes de las provincias de San Luis, Santa Cruz y Misiones amenazan con diferentes medidas de fuerza ante retrasos en el pago de los salarios, amenazas de despidos y rebaja salarial.

Martes 22

- La conducción de la CGT decidió levantar el cese de actividades y movilización a Plaza de Mayo que había convocado días antes, tras haber llegado a un acuerdo con el gobierno acerca de la ley de reforma laboral. Sin embargo, el dirigente del sindicato de camioneros y del Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA) Hugo Moyano, junto con un conjunto de sindicatos, ratificaron la movilización a Plaza de Mayo para el día 24. De este modo, se produjo la fractura de la CGT entre estos dos sectores encabezados por Daer y Moyano.

Miércoles 23

- Propietarios de colectivos de líneas metropolitanas, del GBAy nacionales marcharon ayer por el centro para protestar por el aumento del combustible (el gasoil aumentó un 61% desde julio del 99) y la falta de control de transportes ilegales. También pidieron la reducción de servicios en el horario nocturno. Asimismo exigen, entre otras cuestiones, un aumento tarifario del 20% si no se aplican medidas compensatorias.

Jueves 24

- Se realizó la concentración en Plaza de Mayo convocada por un sector de la CGT en rechazo al proyecto de ley de reforma laboral, que finalmente fue aprobado en la cámara de diputados de la Nación. Según medios periodísticos participaron 20.000 personas (80.000 para los organizadores y 15.000 para el gobierno nacional). Participaron, entre otras, columnas de trabajadores metalúrgicos, de automotrices, de la construcción, camioneros, ta-

xistas, de líneas aéreas, del transporte automotor de pasajeros, judiciales y rurales; también participaron columnas de diversos partidos de izquierda

- Se realizó la concentración frente al Congreso Nacional convocada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que congregó a unos 3.000 manifestantes según medios periodísticos (5.000 para los organizadores y 1.500 para el gobierno). Víctor De Gennaro (secretario general de la CTA) fue el único orador. Las columnas más numerosas fueron las de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y los docentes de CTERA, UTE y SU-TEBA. También había manifestantes de los sindicatos de periodistas, actores, visitantes médicos, aeronáuticos, remiseros, judiciales bonaerenses y gastronómicos de la Capital Federal.

Viernes 25

- El Sindicato de Luz y Fuerza y de Estatales de la Provincia de Córdoba manifestaron por las calles de la ciudad capital en oposición al proyecto oficial girado a la legislatura que, entre otras cuestiones, permite privatizar la empresa provincial de energía y el banco provincial. Una severa vigilancia policial impidió que la marcha llegara a la legislatura y luego a la casa de gobierno.

M a r z o

Domingo 5

- El Sindicato Docente de la Provincia de Santa Fe anuncio una huelga de una hora por turno en reclamo de la incorrecta liquidación del aumento salarial previsto por el Fondo de Incentivo Docente.

Lunes 6

- El Sindicato Docente de Santa Cruz realizó una movilización e instaló una carpa frente al Consejo de Educación, en reclamo por el despido de docentes y en demanda de la incorporación del plus por presentismo al sueldo básico. En la Provincia de Catamarca el gobierno aplazó una semana el inicio de las clases para neutralizar el paro convocado por la Asociación de Trabajadores de la Educación, los docentes marcharon contra el recorte salarial de los empleados públicos anunciado por el gobierno. Los docentes de la Provincia de Jujuy continúan el paro por tiempo indeterminado en reclamo del pago de sus salarios de enero y febrero. En la Provincia de Tierra del Fuego el sindicato docente anunció una huelga contra la reducción salarial y la eliminación del Estatuto Docente. Por otra parte los sindicatos docentes de la Provincia de Misiones iniciaron una huelga de 3 días en rechazo a las medidas de reducción de personal y rebaja salarial impulsadas por el Gobierno Provincial.

Miércoles 8

- Convocado por los sindicatos de empleados públicos (ATE) y docentes (ATEN) se realizó en la Provincia de Neuquén un paro de 24 horas contra el plan de ajuste que el Gobernador provincial envió a la legislatura. En la ciudad capital de la provincia se realizó una movilización, que congregó según fuente periodística a 2500 personas, hacia la legislatura exigiendo a los legisladores el rechazo del ajuste. Entre otras cuestiones los proyectos de ley remitidos a la legislatura preveen la prescindibilidad del empleado publico, jubilaciones anticipadas, y la posibilidad de realizar pagos con bonos. Los sindicatos estimaron una adhesión al paro del 80% mientras que el gobierno provincial relativizó sus alcances estimando el acatamiento en un 10%.

Jueves 9

- La CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) realizó frente al Ministerio de Educación una clase pública para reclamar contra la rebaja

Cronología

de los sueldos docentes en algunas provincias y la demora en el pago en otras. La protesta se realizó mientras en el ministerio se reunían los ministros de Educación de todo el país.

Martes 14

- Desocupados cortaron la ruta 34 a la altura de la ciudad de Salvador Maza, Provincia de Salta en reclamo de la renovación de 350 planes Trabajar.

Jueves 16

- Los sindicatos de la CGT opuestos a la reforma laboral rompieron formalmente con la conducción de Rodolfo Daer y se atribuyeron la condición de “única representación válida” de la central sindical. En el congreso realizado eligieron a Hugo Moyano como secretario general y José Rodríguez fue designado como el secretario adjunto. En esta CGT se agrupan los sindicatos de camioneros, choferes de ómnibus, mecánicos, metalúrgicos, obreros de la construcción y peones rurales, entre otros. Este sector se fijó como primer objetivo impedir que el senado aprobara la reforma laboral, que ya tenía media sanción de la cámara de diputados.

Lunes 20

- Los sindicatos de Luz y fuerza y estatales de la Provincia de Córdoba, entre otros, realizaron una movilización contra la reforma del Estado provincial impulsada por el Gobernador y que aguarda ser aprobada por el legislativo. Según fuentes periodísticas se movilizaron alrededor de 5000 manifestantes.

Miércoles 22

- El secretario general de la CGT Rodolfo Daer, que en febrero había apoyado la versión de reforma laboral aprobada en la cámara de diputados, les pidió a los senadores del Partido Justicialista que introdujeran varias modificaciones al proyecto, cambiando la versión original.

62

Jueves 23

- Los sindicatos de Luz y Fuerza, bancarios, médicos y estatales de la provincia de Córdoba realizaron un paro con movilización al Legislativo Provincial para exigir que el Senado rechace las tres leyes que incluye la reforma del estado impulsada por el Gobernador. Participaron alrededor de 2500 manifestantes. Se registraron incidentes con la policía. Finalmente el Senado aprobó las tres leyes por 34 votos contra 33.

Sábado 25

- La Cámara de Diputados de la provincia de Córdoba cerró el trámite legislativo abierto a fines de enero, entrando en vigencia la ley de reforma del estado. En las inmediaciones de la legislatura, con bombas de estruendo y quema de bolsas de residuos en la calle, aunque sin provocar enfrentamientos, hicieron oír su protesta unos 100 activistas de Luz y Fuerza y empleados públicos.

A b r i l

Lunes 3

- Alrededor de 5.000 propietarios de camiones de la provincia de Santa Fe comenzaron un lock out –inicialmente declarado por una semana pero que podría extenderse por “tiempo indeterminado”- convocado por dos entidades de base, Transportadores Rurales Argentinos y la Federación Argentina del Transporte Automotor de Cargas. La medida se realizó en reclamo de una actualización de las tarifas vigentes desde hacía ocho años y de una rebaja en los peajes. El lock-out fue reforzado con la instalación de unos quince piquetes en las principales rutas de la provincia.

Martes 4

- Desocupados cortaron el puente Gral. Belgrano en las afueras de la ciudad capital de la provincia de Chaco reclamando al Gobierno provincial, entre otras cuestiones, planes de trabajo.
- Más de 300 empleados ferroviarios de la empresa Femesa se congregaron en el hall de la estación de Once en la ciudad de Buenos Aires para protestar por los 300 despidos que dispuso la empresa. Femesa les impidió el acceso a su lugar de trabajo a pesar de la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo.

Jueves 6

- El lock out del transporte de cargas se extiende a otras provincias, a partir de la convocatoria de la Confederación Nacional del Transporte Argentino (CNTA). La medida se extiende a las provincias de Corrientes, Misiones, Córdoba y La Pampa y cuenta ya con unos 50.000 los camiones inmovilizados a la vera de distintas rutas nacionales y provinciales con piquetes en las rutas nacionales 3, 7 y 51. El sindicato de camioneros, encabezado por el dirigente Hugo Moyano, expreso su apoyo a la medida patronal.
- Sindicatos de empleados públicos y docentes (ATE, ATEN) realizaron en la provincia de Neuquén un paro y movilización para protestar contra la política de ajuste del estado provincial que impulsa el Gobernador Jorge Sobisch. En la movilización participaron alrededor de 2.500 personas.

Domingo 9

- El lock out del transporte de carga iniciado el 6/4 se levantó en la provincia de Buenos Aires, aunque continuaba en Santa Fe y las provincias del litoral e interior del país. El levantamiento de la medida en esa provincia fue el resultado del compromiso asumido por el Gobierno nacional de implementar, entre otras cuestiones, un sistema de distribución mayorista de gasoil a precios reducidos. Sin embargo la CNTA (Confederación Nacional del Transporte Argentino) decidió continuar el lock out en la exigencia de medidas mas claras y una resolución real del valor de los peajes en rutas.

Lunes 10

- La CGT “disidente” convocó a una movilización al Congreso con cese de actividades en Capital Federal y el Gran Buenos Aires para el día en que el senado tratara el proyecto de reforma laboral. El congreso confederal de la central obrera facultó además al consejo directivo a “decretar un paro nacional en defensa del empleo, el salario y las condiciones de vida de los trabajadores, en la fecha y con la modalidad que estime conveniente”.
- La CNTA resuelve levantar el paro y corte de rutas luego de llegar a un acuerdo con el gobierno nacional que incluye, entre otras cuestiones,: gestiones ante las provincias para tratar de adecuar las tarifas de los peajes a los valores vigentes en las rutas nacionales; revisión de la valuación fiscal de los camiones para disminuir el pago de Ganancias y Bienes Personales; la posible refinanciación por parte del Banco Nación de la deuda del transporte de cargas; el abaratamiento de los seguros; así como el compromiso de habilitar la venta de gasoil a precios reducidos.

Miércoles 19

- La CGT disidente realiza una concentración en el Congreso para exigir la no aprobación del proyecto de ley de reforma laboral que será tratado por el Senado, ya aprobado por Diputados días atrás. Durante la madrugada, mientras 500 trabajadores y dirigentes sindicales instalaban una olla popular frente al Congreso se produjo una salvaje represión por parte de la policía federal. Más de 40 trabajadores detenidos y más de 30 heridos fue el saldo de la represión. En respuesta se convocó a una nueva movilización por la mañana que contó con el respaldo de la CTA y de varias organizaciones políticas. Se produjeron nuevamente incidentes con la policía. Al mediodía el Senado decidió levantar la sesión y los manifestantes se desconcentraron.

Cronología

- Trabajadores estatales, colectiveros, docentes, médicos; junto a organizaciones estudiantiles, de derechos humanos y vecinos realizaron una concentración en la plaza central de la ciudad capital de la provincia de Salta para protestar contra la política del gobierno provincial y nacional.

Miércoles 26

- Frente al Congreso Nacional se realizó una nueva movilización convocada por la CGT disidente y la CTA para rechazar el proyecto de ley de reforma laboral que el Senado Nacional se apresta a considerar. Con la participación de otros agrupamientos sociales y partidos políticos, distintos medios periodísticos calcularon la convocatoria en 20.000 personas, según los organizadores hubo 40.000 y para la policía 16.500. Finalmente, con algunas pequeñas modificaciones, el Senado aprobó la ley con una mayoría especial de dos tercios de los votos (expresión del acuerdo entre el bloque de la Alianza y el P. Justicialista).

Miércoles 26

- Convocada por los sindicatos de empleados públicos se realizó en la ciudad capital de la Provincia del Chaco una movilización hacia la legislatura provincial para protestar contra el tratamiento legislativo del plan de ajuste del estado provincial propuesto por el Gobernador. Según medios periodísticos participaron alrededor de 5000 manifestantes. Cuando la movilización intentó superar las vallas que le impedían acercarse a la Legislatura provincial se desató una violenta represión que se extendió por las calles de la ciudad a lo largo de varias horas.
- Trabajadores de la Aduana y de la DGI (Dirección General Impositiva) iniciaron un paro nacional de protesta contra el programa de reducción del 25% del personal que anunció el gobierno.

Brasil*

Febrero

Martes 8

• El Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) inició en Matão (305 km de São Paulo) la marcha estadual por la Reforma Agraria y la Justicia Social. Participando cerca de 600 personas. Llegaron a la capital del estado el 23/2 y acamparon en el Parque Ibirapueira, después de pasar por varias ciudades del interior. Protestan contra la postura del Gobierno Federal de no llevar a cabo la reforma agraria en esta unidad de la federación y reclaman la liberación de 6 manifestantes del MST presos.

Martes 22

• Empezó una huelga de 3 días en el estado de Rio de Janeiro de los casi 100.000 trabajadores de la red estadual de educación, convocada por el SEPE (Sindicato Estadual de los Profesores de la Educación). Exigen al gobierno estadual un nuevo piso salarial, respeto del plan de carrera e inversiones en educación. La adhesión fue del 50% (principalmente en la ciudad de Rio de Janeiro y en la Baixada Fluminense). La huelga finalizó el 24/2 sin conseguir el aumento reivindicado.

• Fiscales de la Receita Federal (Dirección Impositiva), del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Ministerio de Trabajo realizaron una paralización por 24 horas con manifestaciones frente a edificios públicos en varias capitales del país. Quieren garantías contra despidos en la ley complementaria a ser votada por el Congreso y piden el fin de la reducción de salarios basada en la evaluación de desempeño, que afecta al 85% de la categoría. Según fuentes sindicales hubo un 80% de adhesión.

Viernes 28

• Beneficio adicional extra salarial de hasta 3.000 reales inmediato evitó la huelga de jueces federales y del trabajo convocada por la Ajufe (Asociación de Jueces Federales de Brasil) y Anamatra (Asociación Nacional de los Magistrados del Trabajo). Auxilio vivienda a todos los jueces, incluidos los retirados (en total unos 3.000) para equiparar beneficios que reciben integrantes de los otros poderes del Estado. Decidido por el Supremo Tribunal Federal. La mayoría de los jueces igualmente paró para analizar las medidas y resolvió retomar las actividades pero seguir en estado de alerta. Quieren que se fije un techo salarial de R\$ 12.720.

Marzo

Jueves 2

• Entraron en huelga por tiempo indeterminado los profesores estaduais de Rio Grande do Sul, después de deliberar en una asamblea de 15.000 participantes. Son 90.000 profesores y 1.480.000 de alumnos sin clases. Rechazan el aumento de 10% ofrecido por el gobierno estadual. Hubo diversas manifestaciones hasta la casa de gobierno del estado durante los 32 días que duró la huelga, con una adhesión cercana al 80% y que terminó el 3/4, después de conseguir un aumento mayor al inicialmente ofrecido por el gobierno.

Cronología

- Miércoles 15** • Cerca de 3000 mujeres sin tierra integrantes de la ANMTR (Articulación Nacional de las Mujeres Trabajadoras Rurales) se reunieron en Brasilia para conmemorar el día de la mujer y reivindicar mejores condiciones de vida para las pequeñas agricultoras rurales. Dejaron Brasilia el viernes 17/3, después de haber acampado durante la semana al lado de la Catedral.
- Miércoles 22** • Unos 700 militantes de organizaciones que conforman el Movimiento “Brasil, otros 500” enfrentaron a la policía en el centro de São Paulo frente al reloj de la Red Globo de televisión en un acto de repudio a los festejos por los 500 años del “Descubrimiento”.
- Martes 28** • Cerca de 10.000 personas se reunieron en un acto en Rio de Janeiro contra el Gobierno Federal, convocadas por la UNE (Unión Nacional de Estudiantes), la UBES (Unión Brasileira de los Estudiantes Secundarios) y la CUT para protestar contra el nuevo salario mínimo de R\$ 151,00 y en defensa de la enseñanza pública y gratuita. Se sumaron otras protestas contra la corrupción de la policía fluminense y la contaminación de la Lagoa Rodrigo de Freitas.
- Força Sindical ocupó la planta baja del INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) en un acto en São Paulo exigiendo audiencia con el presidente Cardoso. Querían salario mínimo para jubilados y pensionados de u\$s 100. 500 manifestantes metalúrgicos, panaderos y empleados de comercio. Hubo manifestaciones en Santa Catarina y Espírito Santo y ocupación del INSS en Recife.
- Jueves 30** • Manifestación de universitarios y secundarios en Belo Horizonte contra la política económica del Gobierno Federal (entre 5000 y 10.000 participantes). Se juntaron después a profesores municipales en huelga contra la política educativa del gobierno municipal.

66

A b r i l

- Martes 4** • Protestas y manifestaciones culturales en Manaus reunieron cerca de 400 indios de diversos grupos étnicos, dando inicio a la “Marcha Indígena 2000” en los estados de Amazonas y Roraima. La Marcha cuenta con caravanas de todas las regiones del país. Exigen la preservación de la identidad étnica y cultural, denuncian las masacres de los últimos años y reivindican la demarcación de tierras, la aprobación del Estatuto del Indio por el Congreso y la ratificación brasilera de la Convención 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas. Constituye un movimiento inédito en escala nacional que cuestiona los festejos por el “Descubrimiento” y que quiere reunir más de 2000 indios representando cerca de 200 naciones indígenas.
- Miércoles 5** • 4.000 acampados del MST frente a los tribunales de Vitoria (Espírito Santo) festejaron la absolución de José Rainha Jr., líder del movimiento que era acusado de matar un policía y un terrateniente.
- Viernes 7** • Pararon profesores de la red pública en la mayoría de los estados brasileños, para cerrar la “Semana Nacional de Defensa y Promoción de la Educación Pública” organizada por la CNTE (Confederación Nacional de los Trabajadores de la Educación). Profesores primarios y secundarios ya están en huelga en Minas Gerais, Bahía y Paraíba (en Goiás después de 20 días de paralización los profesores volvieron a clase ayer). En total hubo cese de actividades en 20 estados, con manifestaciones importantes en diversas capitales, congregando, en muchos casos, profesores, padres y alumnos. En el resto de los estados los profesores no adhi-

rieron porque acababan de terminar huelgas por mejoras salariales. Unos 46 millones de estudiantes quedaron sin clases. Entre otros objetivos, el movimiento buscaba garantizar la enseñanza gratuita y discutir soluciones para la repitencia y el analfabetismo entre adultos.

Lunes 10

- Profesores del estado de Santa Catarina de la red estadual entraron en huelga por tiempo indeterminado. Reivindican piso salarial de R\$744 por reposición de la inflación, vale alimentación, plan de carrera y nominación de concursados

Martes 11

- El MST inició vigilia reuniendo 500 personas frente al Tribunal de Justicia de Belém do Pará. Exigen la condena de los responsables por la masacre de Eldorado dos Carajás (Pará) en 1996, cuando 19 sin tierra fueron muertos y 60 heridos por la policía y anulación de la primera sesión del juicio en la que los tres policías militares acusados fueron absueltos.

Jueves 13

- Los trabajadores docentes y no docentes de las universidades estatales de São Paulo (USP Unesp y Unicamp) pararon exigiendo reajuste salarial y marcharon hasta la Secretaría de Ciencia y Tecnología, donde se realizó la reunión del Consejo de Rectores de las Universidades Estadales Paulistas (Cruesp).

- Tumulto en reunión entre el presidente del Congreso Nacional con grupos indígenas reclamando por la inmediata aprobación del Estatuto de las Sociedades Indígenas que tramita en el Congreso hace 9 años. Antes de llegar al Congreso, 500 integrantes de la Marcha contra los festejos del “Descubrimiento” tiraron flechas al reloj de la Red Globo de televisión.

- Acto en Boa Vista (Roraima) reunió cerca de 30.000 personas protestando contra la demarcación total de la reserva indígena de Raposa do Sol en ese estado, convocadas por el Fórum Permanente de Defensa de Roraima y de la Soberanía de Brasil, que reúne 30 entidades de empresarios, políticos y productores rurales.

Viernes 14

- Una barrera de la Policía Militar en Itabuna (Bahía) interrumpió ayer el viaje de 400 sin tierra a Porto Seguro. En el enfrentamiento 3 policías fueron heridos y 11 manifestantes fueron presos (entre estos últimos dos turistas españoles que acompañaban a los sin tierra). El MST pretendía protestar contra las injusticias sociales, el desempleo y la corrupción y recordar los cuatro años de la masacre de Eldorado dos Carajás (Pará).

Sábado 15

- Alrededor de 2.500 sin tierra (1200 según la policía) marcharon 25 km., distancia que separa Eunápolis de Porto Seguro (Bahía), para protestar contra los festejos del “Descubrimiento”.

Lunes 17

- Cerca de 500 indios pertenecientes a 29 poblados de todos los estados del Noreste, con el apoyo de la CUT (Central Única de Trabajadores), la Conen (Coordinación Nacional de Entidades Negras) y partidos de la oposición, marcharon en Salvador contra los festejos del “Descubrimiento”, en el marco del movimiento “Brasil, otros 500”. Realizaron protestas contra el genocidio y contra la realidad del indio hoy.

- El MST inició onda de ocupaciones tomando 60 propiedades y prometiendo llegar a 500 (en referencia a los 500 años). Según fuentes de los sin tierra fueron 65 tierras en 5 estados (São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Espírito Santo y Paraíba), contradiciendo al Gobierno Federal, quien sólo habla de 12 ocupaciones. El movimiento adhiere así a las protestas por los festejos del “Descubrimiento” y también exige la condena de los responsables por la masacre de Eldorado dos Carajás, Belém, de la que se cumplen cuatro años.

- En Salvador (Bahía) 100 trabajadores sin tierra ocuparon el edificio de la Superintendencia del INCRA (Instituto Nacional de la Reforma Agraria), tomando cuatro rehenes (liberados 3 días después). Exigían una audiencia con el Ministro de Desarrollo Agrario y solicitaban recursos para la reforma agraria y un nuevo Superintendente del INCRA en el estado. Ante las amenazas de represión por parte de los gobiernos estadual y federal, dejaron el edificio el 24/4, cuando ascendían a 1.000 manifestantes. La UDR (Unión Democrática Ruralista), entidad que agrupa a los grandes latifundistas, llamó a armarse contra los sin tierra.

- Cerca de 80 trabajadores sin tierra ocuparon y destruyeron la sede de la Secretaría de Seguridad Pública de Pará en la capital, Belém. Protestaban contra la impunidad de los responsables de la masacre de Eldorado dos Carajás. Hubo palos y piedras contra vehículos allí estacionados. El grupo se había separado de la manifestación de 3.000 personas (500 según la policía) convocadas por el MST. Después fueron al Tribunal de Justicia de Pará, donde también hubo destrozos y represión policial. El saldo fue de dos trabajadores sin tierra y un cura presos y 15 heridos.

Martes 18

- El MST llegó a 97 ocupaciones de tierras en 9 estados desde el domingo último en protesta contra los festejos de los 500 años y exigiendo al gobierno federal que acelere el proceso de reforma agraria y más fondos para los asentamientos.

- Cerca de 2.000 indios comenzaron la Conferencia de los Pueblos Indígenas de Brasil en la Aldea de Coroa Vermelha, Santa Cruz de Cabralia (Bahía), de cuatro días de duración, para protestar por los festejos del “Descubrimiento” organizados por el Gobierno Federal.

Miércoles 19

- En Rio de Janeiro 300 estudiantes universitarios realizaron una protesta frente al reloj de la Red Globo de televisión, en repudio a los actos oficiales de conmemoración de los 500 años del “Descubrimiento”. Cuando intentaron romper el reloj que indicaba cuánto faltaba para llegar al día en que se cumplían los 500 años, se desató una brutal represión policial.

Jueves 20

- En el estado de Mato Grosso do Sul, 2.000 indios Bororo y Jaguapiru bloquearon ruta estadual en protesta contra los 500 años del “Descubrimiento”.

Sábado 22

- El Movimiento “Brasil, otros 500”, que agrupa a varias naciones indígenas, MST, CUT, Conen y organizaciones estudiantiles, pretendía reunir 40.000 manifestantes en Porto Seguro. Fueron impedidos por ocho barreras montadas por la policía militar bahiana y la policía federal, con 5.000 hombres armados en la ruta de entrada a la ciudad. Al ver negado el paso, los manifestantes realizaron protestas en la ruta, en el caso de los indios arrojando flechas y piedras. Todos fueron reprimidos con gas lacrimógeno y balas de goma, lo que resultó en 131 detenidos y 30 heridos. La prensa también fue impedida de circular libremente.

Miércoles 26

- Profesores y funcionarios de la USP y la Unesp se plegaron a la huelga por tiempo indeterminado decretada por los trabajadores de la Unicamp, para protestar contra el aumento salarial propuesto por el Consejo de Rectores.

- Alrededor de 40 indios pataxós invadieron la misa de los 500 años de evangelización en Porto Seguro. Protesta por el genocidio y la mentira del Descubrimiento. También contra los 30 heridos del sábado y los 141 presos.

Sábado 29

- Conmemoraciones de la Inconfidencia Mineira sirvieron de escenario para protestar contra lo ocurrido el 22/4 en Porto Seguro. El gobernador de Minas Gerais y el Partido de los Trabajadores (PT) reunieron 3.000 personas en Ouro Preto.

* Realizada por Gabriel Vitulo de Universidad Federal de Rio Grande do Sul
Fuentes: diarios *Folha de Sao Paulo* y *Zero Hora*

Bolivia*

E n e r o

Lunes 3

• La Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) elabora una tesis que busca permitir que un dirigente no minero ocupe la secretaría ejecutiva del ente matriz de los trabajadores (COB). Amenazan con dejar el seno de la Confederación Obrera Boliviana de no ser aceptada su propuesta de modificación de la estructura de la organización.

Miércoles 12

• La Coordinadora de Defensa del Agua de la ciudad de Cochabamba comienza un bloqueo de carreteras reclamando la anulación del contrato con la empresa Aguas del Tunari y de las tarifas actuales que fueron incrementadas en un 100 por ciento. Por otra parte los campesinos en adhesión, marchan para que se revise la Ley de Agua Potable, alcantarillado sanitario, así como la Ley de Aguas.

Jueves 13

• Cochabamba quedo aislada del resto del país por segundo día consecutivo, a causa del bloqueo de caminos que llevan adelante decenas de campesinos. El conflicto se agudiza con la declaración de un paro indefinido por parte de los transportistas en apoyo al reclamo por las tarifas del agua.

Viernes 14

• En Cochabamba una marcha masiva y un cabildo abierto rechazó el incremento del costo del agua. La muchedumbre acusó a los responsables gubernamentales de la firma del contrato con Aguas del Tunari, critico duramente al gobierno, y exigió la eliminación inmediata del contrato suscrito con el consorcio. Coincidieron los oradores en que no debe levantarse las medidas de presión, los bloqueos de caminos y el paro de transportes hasta que el gobierno acepte las medidas regionales. Los manifestantes se quedaron en la plaza a la espera de los resultados de la negociación que comenzaron los Ministros del gobierno nacional, los representantes de la Coordinadora del Agua y el Comité Cívico de Cochabamba. Finalmente, como resultado de las protestas, se conformo una comisión mixta de negociación que revisará la estructura tarifaria del agua potable, el contrato firmado con Aguas del Tunari y la revisión de la ley 2029 (ley del Agua). El Acuerdo se denomina "Acuerdo regional por la dotación de agua, defensa de la economía popular, la convivencia pacífica y el respeto de los derechos humanos"

Lunes 17

• La COB inicia su congreso bajo la amenaza de la división. Algunos sindicatos importantes, como el de maestros urbanos y el de jubilados anuncian que no asistirán al Congreso. Los campesinos por su parte insisten en obtener la modificación de la estructura orgánica que les posibilite acceder a la Secretaría General.

• Los productores de coca de los Yungas realizan una movilización en la ciudad de La Paz en rechazo a la propuesta gubernamental de erradicar los cultivos excedentes.

• La Federación de Sindicatos médicos y ramas anexas inician un paro de 72 hs en todo el país en protesta contra el estatuto del funcionario público. La medida fue iniciada con una manifestación que partió del Hospital Obrero.

Cronología

Viernes 21 • Campesinos, colonizadores, la Confederación de los Maestros Urbanos, jubilados, entre otras organizaciones, deciden abandonar reunión nacional de la COB, exigiendo la renuncia del actual comité ejecutivo, la suspensión del Congreso, y la convocatoria inmediata a un congreso orgánico de la COB. Estas organizaciones forman parte del llamado “Bloque Sindical Antineoliberal”.

Sábado 29 • Los delegados que permanecieron en el Congreso de la COB determinaron suspender el encuentro por el lapso de 90 días, pero las posiciones siguen enfrentadas. Los mineros niegan cualquier posibilidad de cambiar los estatutos y ceder el control de la Secretaría Ejecutiva. Campesinos y maestros insisten en la necesidad de reformar la actual estructura de la COB.

F e b r e r o

Miércoles 2 • Los vecinos de Cochabamba convocaron para el próximo viernes 4 a la toma simbólica de la ciudad. Mas de 20 mil campesinos se aprestan a iniciar una nueva fase de la guerra del agua, en protesta por el alza de las tarifas. Frente a estas amenazas el Presidente ordena el despliegue de las fuerzas armadas en la zona y pone a Cochabamba bajo control militar y policial. Por la noche la Iglesia intenta acercar a las partes en conflicto- gobierno y Coordinadora del Agua-, para evitar acciones de violencia.

Jueves 3 • El Gobierno y la Coordinadora del Agua no logran llegar a un acuerdo. Sin embargo queda planteada la posibilidad de que las negociaciones por las tarifas de agua continúen hasta su resolución.

Viernes 4 • En Cochabamba, liderados por la Coordinadora del Agua, vecinos, maestros, profesionales y campesinos se movilizaron por la ciudad y en los accesos a ésta produciéndose enfrentamientos con las fuerzas policiales. Los enfrentamientos se prolongaron por mas de 14 hs, dejando decenas de heridos y detenidos. Entretanto efectivos militares, destinados a controlar los accesos a la ciudad se enfrentaron con campesinos de la región de Parotani y en el Cañador fueron detenidos 20 buses con coccaleros. Comercios, bancos, supermercados, y todo tipo de entidades públicas y privadas cerraron sus puertas. Sin haber sido declarado un paro cívico, muy poca gente trabajó en esta ciudad.

• Los policías ocuparon la plaza 14 de setiembre y los alrededores, y no permitieron que ningún ciudadano ingrese a ese sector. Mientras tanto los manifestantes rodearon a las fuerzas del orden en todo el centro de la ciudad. Cochabamba había sido tomada. Los detenidos de la cárcel de San Sebastián se amotinaron y ocuparon los techos del penal para expresar su apoyo a la protesta ciudadana. La Coordinadora por la Defensa del Agua capitalizo el descontento popular y tomo a su cargo la lucha contra las tarifas del agua, frente al llamado del Comité Cívico de no participar en la medida de lucha.

Sábado 5 • Después de dos días de enfrentamientos, un acuerdo congela las tarifas y vuelve la calma a Cochabamba. El gobierno y las organizaciones locales acuerdan , entre otras cuestiones, que para el cobro del servicio del agua y alcantarillado se mantendrá la tarifa que regía en octubre hasta que terminen las negociaciones.

Domingo 6 • La Coordinadora en Defensa del Agua propone fortalecer las organizaciones de base, continuar entendiendo y discutiendo la temática del agua, y pedir cuentas a los dirigentes que han mostrado posturas “ambiguas”.

Viernes 11

• Los maestros rechazan la oferta del gobierno de incrementar en un 5.5% los salarios del sector y anuncian protestas y huelgas para el 23 del corriente en todos los distritos del país. Por otra parte la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, rechaza el reglamento de unidades educativas puesto que se constituye en una disposición “relocalizadora” y consideran que tiene por finalidad iniciar un proceso de despidos masivos de cerca de dos tercios del personal administrativo y de servicio.

M a r z o**Domingo 12**

• Los colonizadores, juntas vecinales y autoridades locales de las provincias Caranavi y Nor Yungas bloquean el acceso a esta zona como una medida de protesta por el mal estado de los caminos y la falta de atención del gobierno. El norte paceño se encuentra aislado del resto del país.

Martes 21

• Los choferes sindicalizados paralizan sus actividades y realizan marchas y bloqueos, en protesta por la continua suba de los combustibles. El paro afecta fundamentalmente a las ciudades de La Paz y El Alto. Pese a las graves dificultades para movilizarse, la población se identificó con la molestia de los choferes y apoyó la protesta por el constante incremento en el precio de los carburantes.

Domingo 26

• La Coordinadora del Agua cochabambina realiza una consulta popular, con el fin de ratificar el rechazo al incremento de las tarifas de agua potable y contrato suscrito con Aguas del Tunari. Se instalan mas de 140 mesas electorales en todos los barrios y zonas de la ciudad sobre todo, plazas, mercados y templos. La consulta consiste en tres preguntas: Si esta de acuerdo con la elevación de las tarifas del agua potable. Si desea mantener el contrato suscrito con Aguas del Tunari, y si aprueba las modificaciones a la Ley 2029.

Lunes 27

• Los trabajadores de la Central Obrera Regional de El Alto paralizan La Paz y realizaron una manifestación. A ella se suman otros sectores laborales de El Alto. La protesta es por el aumento de precios de los hidrocarburos y su efecto multiplicador en los demás precios.

Martes 28

• En la cede de la COB, un ex policía comienza un ayuno en reclamo, entre otras cuestiones, por aumento salarial. Se suman a la medida algunas esposas de policías.

Miércoles 29

• La huelga de hambre del ex policía obtiene respaldo de policías y jubilados de la fuerza policial. En algunas reparticiones policiales hay amenaza de acuartelamiento, en reclamo de aumentos salariales.

• Las confederaciones de campesinos, maestros urbanos, jubilados, y la Central Obrera de La Paz no asisten al encuentro ampliado de la COB que se realiza hoy en Cochabamba.

Jueves 30

• Las personas que estaban en huelga de hambre entre policías y familiares desde hace una semana, levantan, momentáneamente, su medida de protesta tras el compromiso del Ministro del Interior de buscar soluciones a sus problemas.

Cronología

- Viernes 31** • Una asamblea decretó paro y bloqueo de caminos en Cochabamba. Preparan la batalla final para que Aguas del Tunari se vaya de la Llajta, se congelen las tarifas y se modifique la ley 2029. La Coordinadora de Defensa del Agua pidió a la población aprovisionarse de alimentos y agua porque “la batalla final será larga”.

A b r i l

- Sábado 1** • Un paro regional está fijado para esta 4 de abril en continuación con la protesta “guerra del Agua”, en Cochabamba.

- El gobierno reincorpora a los policías despedidos que protagonizaron la huelga de hambre.

- Campesinos y maestros tienen listo el bloqueo de carreteras. La medida de presión tiene carácter indefinido. Los agricultores exigen atención a la crisis que vive el sector y los educadores una mayor asignación presupuestaria.

- Lunes 3** • La Confederación de Campesinos de Bolivia ordenó a sus afiliados interrumpir la circulación vehicular en todas las vías carreteras del país. Entre las demandas campesinas se destacan la reforma a la Ley de Aguas, y a la del Instituto Nacional de Reforma Agraria, así como la no erradicación de los cultivos de coca de los yungas de La Paz.

- La Coordinadora de Defensa del Agua de Cochabamba ratificó que el paro y bloqueo de caminos será sostenido hasta que la empresa Aguas del Tunari abandone la capital del valle. Por otra parte los trabajadores del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) determinaron suspender este martes sus actividades en apoyo a la Coordinadora del Agua.

- Martes 4** • Trabajadores entraron en huelga de hambre en protesta por la decisión del consorcio constructor Gutierrez-Copeza-Minerva de abandonar los trabajos en Cotapara -Santa Bárbara. Despedirá a 800 trabajadores y desmantelará sus campamentos.

- Los dirigentes de la Coordinadora de Defensa del Agua aseguran que mantendrán sus medidas de protesta pese a la inminente represión policial. Por otra parte el Comité Cívico rechaza el llamado a un paro y defiende el diálogo con el gobierno. El edificio del Comité Cívico es apedreado por estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón, y son destruidos algunos de sus símbolos. El Arzobispo de Cochabamba expresa que la iglesia no está de acuerdo con un eventual estado de sitio. La Coordinadora en Defensa del Agua convoca a la toma física de las instalaciones de Aguas del Tunari si el gobierno en 24 hs. no decide que el consorcio se vaya.

- Cientos de campesinos en Chuquisaca bloquearon las rutas de acceso a la ciudad por instrucción de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). El sindicato de transportes apoya las medidas de los campesinos en protesta contra el alza de precios de los carburantes, por el mal estado de los caminos, y la creciente pobreza en que viven.

- Miércoles 5** • En Cochabamba sigue el bloqueo de caminos por parte de los campesinos y el paro regional en la región. Una gran movilización convocada por La Coordinadora del Agua toma la capital con el reclamo de la anulación del contrato con Aguas del Tunari, mientras el Gobierno ratifica su negativa a negociar.

- En el camino de Laja se producen los primeros enfrentamientos entre las fuerzas militares y los campesinos. Los militares toman el control de las carreteras en La Paz y Oruro, mientras los campesinos advierten con mas bloqueos hasta que el gobierno atienda sus reivindicaciones: la defensa de sus fuentes de agua, mejoramiento de los caminos, contra el alza del precio de los carburantes, y la titularización de las tierras. En la ciudad de Cochabamba, pese a la fuerte presencia militar que impidió el bloqueo de caminos, el paro cívico fue contundente.

- En La Paz la policía reanuda la huelga de hambre de las esposas y 20 mil policías amenazan con masificar la huelga en apoyo al ayuno voluntario que mantiene un grupo de esposas, en reclamo por mejores salarios. Las negociaciones entre los policías y el gobierno pasaron a cuarto intermedio hasta mañana. Los policías rechazan la oferta del ministro de Gobierno de un incremento del 6% en los salarios, y amenazan con acuartelarse si no obtienen una respuesta

Jueves 6

- Después de cuatro días de paralización total de la ciudad de Cochabamba militares y policías reprimen a una multitud concentrada en la plaza 14 de setiembre, toman la plaza y detienen a los dirigentes de la coordinadora y virtualmente instalan el estado de excepción. Aunque luego liberan a los detenidos.

- Se realizan tres Cabildos en las zonas rurales del Departamento de La Paz: en Huatajara con unos 5000 campesinos, en Achacachi mas de 15000, y Vilaque cerca de 500. Expresaron la decisión de continuar con el bloqueo de caminos mientras el gobierno no muestre señales reales de dialogo para frenar la Ley de Aguas y el persistente alza de precios en los carburantes, entre otras demandas.

Viernes 7

- La ciudad de Cochabamba es nuevamente tomada por miles de personas que copan, como nunca antes, la plaza 14 de setiembre. La muchedumbre exige que Aguas del Tunari se vaya. Mas tarde el Prefecto comunica a Monseñor Solari que el consorcio se fue y éste lo anuncia al pueblo. Inmediatamente se desata una fiesta popular que terminaría en una frustración al desmentirse oficialmente este anuncio. El prefecto renuncia. El gobierno dicta el estado de sitio.

- Los policías de La Paz se amotinan contra el gobierno. Apoyan a sus esposas en huelga de hambre y piden mejores salarios. Son los efectivos del regimiento 1 y 2 del GES, Los Pumas y los Polivalentes. Esta madrugada les ordenaron actuar en La Paz y se negaron.

- Mas comunidades campesinas se suman al bloqueo de carreteras en La Paz y Oruro, los soldados se retiraron de las carreteras de Oruro. La carretera internacional al Perú por la ruta desaguadero esta totalmente bloqueada por cientos de trabajadores del agro.

Sábado 8

- El gobierno hace oficial e decreto del estado de sitio. En la carretera Oruro muere un maestro cuando los militares levantaban el bloqueo.

Otra vez miles de personas toman las calles de Cochabamba y en los violentos enfrentamientos, muere un estudiante víctima de un disparo de arma de fuego. Entremezclado entre la tropa militar un capitán vestido de civil es descubierto por una cámara de televisión disparando sobre los manifestantes.

- Los policías amotinados en La Paz logran un incremento del 50% en sus salarios. Ante la gravedad de la situación el gobierno cede ante las demandas policiales. No tomaran represalias contra los amotinados.

Cronología

- La Coordinadora en defensa del Agua instruyó hoy al pueblo de Cochabamba continuar con los bloqueos y movilizaciones para mantener una resistencia civil al estado de sitio y lograr en definitiva el retiro de Aguas del Tunari.

Domingo 9

- Graves enfrentamientos en Achacachi cuando los militares intentaban desbloquear la carretera. Una tensa calma se apodera de Cochabamba. Las tropas policiales y militares se repliegan a sus cuarteles y centenares de jóvenes ocupan la plaza 14 de setiembre y levantan barricadas hasta que “Aguas de Tunari se vaya”.

Lunes 10

- Al final de la tarde se comunica que Aguas del Tunari se va de Cochabamba. El gobierno firma un acuerdo en Cochabamba accediendo a la demanda de la Coordinadora del Agua, mientras crece el pedido de partidos e instituciones para que se levante el estado de sitio. Los manifestantes deciden proseguir los bloqueos mientras el parlamento no apruebe efectivamente las modificaciones a la Ley de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico. Ante la exigencia los diputados se convocan de urgencia y modifican la Ley de Aguas.
- Los universitarios de Potosí marchan en franco desacato a la medida de estado de sitio.
- En La Paz los agentes antimotines reprimieron la protesta de universitarios trasladando el conflicto hasta esta ciudad, que se había mantenido al margen de las movilizaciones. Los universitarios reclaman mayor presupuesto y el levantamiento del estado de sitio.
- En Santa Cruz unos 300 docentes marcharon demandando el pago de sus haberes adeudados y la suspensión del estado de sitio.
- El Comité Cívico de Potosí convoca a un paro de 24 hs contra el estado de sitio y demandando solución a los problemas regionales.
- En Sucre los periodistas marchan contra el silenciamiento de los medios de comunicación en Cochabamba y algunas provincias de La Paz.

74

Martes 11

- Gobierno y campesinos comienzan a negociar con mediación de la iglesia. Se levantan gran parte de los bloqueos.
- La COB convoca a un paro nacional de 24 hs en demanda de la suspensión del estado de sitio y contra la represión a los campesinos bloqueadores.

Miércoles 12

- Baja la tensión en todo el país pero el conflicto se traslada a la ciudad de La Paz con manifestaciones y marchas universitarias. El comité de la COB realiza un paro con movilización a la que se suman los universitarios, logrando paralizar el tránsito vehicular hasta que son dispersados por la policía.

Jueves 13

- El Congreso Nacional ratifica en la madrugada el estado de sitio, bajo la protesta de la oposición que asegura no se cumplieron los procedimientos para ratificar la medida.

Viernes 14

- El gobierno y los campesinos firman un acuerdo que pone fin al conflicto y a los bloqueos. El gobierno se compromete a atender en 90 días las demandas del sector. El ejército se repliega a los cuarteles.

Sábado 15

- El gobierno logra aplacar una amenaza de amotinamiento de los militares de baja graduación quienes piden aumento salarial. El poder ejecutivo cede al pedido.

- Se abre otro conflicto en los Yungas donde los cocaleros bloquean caminos.

Lunes 17

- Los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés en la ciudad de La Paz protagonizan nuevos enfrentamientos con la policía en protesta contra el estado de sitio.

- La COB y el Colegio Médico de Bolivia realizan manifestaciones, en demanda del levantamiento del estado de sitio.

Martes 18

- El gobierno se compromete a no erradicar la coca tradicional y logra un acuerdo con los cocaleros de Yungas. Se levantan los bloqueos.

- Los partidos de oposición anuncian que presentaran una demanda ante el tribunal por el estado de sitio.

Miércoles 19

- La empresa Aguas de Tunari rompe el silencio y exige al gobierno una justa compensación por la ruptura del contrato en Cochabamba.

- Los universitarios y las organizaciones sindicales agrupadas en el Pacto Intersindical, formado por las confederaciones de maestros, trabajadores en salud, administrativos de la Universidad Mayor de San Andrés entre otros, protestan por mayor presupuesto para las universidades y aumento salarial del 50%.

Jueves 20

- El consejo de ministros aprueba el levantamiento del estado de sitio.

* Realizada por Clara Algranati, colaboradora del OSAL
Fuentes: diarios *La Razón* y *La Prensa*

Chile*

E n e r o

Miércoles 12 • Una veintena de pehuenches de la comunidad de Trapa-Trapa protestan en el frontis de la Intendencia por los hechos ocurridos el sábado en la veranada de Vega Larga, en el Alto Biobío, que culminó con la detención de 12 personas. La comunidad de Trapa-Trapa cuenta con títulos de Merced desde 1920 que acreditan su pertenencia en las veranadas de Quebrada Honda, Curamallín, Vega Larga, Corralito y Las Vallas, que reclama el empresario Raúl Pérez Serani.

Domingo 16 • Se realiza la segunda ronda de elecciones presidenciales. Resulta electo presidente el candidato de la Concertación Ricardo Lagos con el 51.31% de los votos contra el 48.69 que obtuvo Joaquín Llavín candidato del partido Alianza por Chile.

Lunes 24 • Cuatro campamentos de resistencia mapuche son instalados alrededor de un predio ubicado en la comuna de Ercilla (Novena Región), de propiedad de la empresa Forestal Arauco, en el marco del conflicto que esta comunidad mantiene con la empresa por la posesión y explotación de las tierras.

76

F e b r e r o

Martes 1 • Medio centenar de mapuches ocupan al mediodía el edificio de la Municipalidad de Colipulli para protestar por la detención del líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Víctor Ancalaf, y por la tardanza en dar respuesta a sus demandas.

• Indígenas de cinco comunidades mapuches, vinculadas a las organizaciones étnicas Coordinadora Arauco-Malleco y Consejo de Todas Las Tierras, ocuparon el municipio de Colipulli, en la provincia de Malleco. Tienen como objetivo reclamar por la situación judicial que involucra a más de una veintena de mapuches de las comunidades Colihuinca Tori, Temucuicui, Paillacoí, Caillín y Choilafquenche, quienes están sometidos a proceso por distintos tribunales de la Región de la Araucanía.

Sábado 12 • Unos 40 pehuenches de la zona de Trapa Trapa vuelven a ocupar las veranadas que mantienen en conflicto con un propietario particular en la zona de Alto Antuco.

Martes 22 • Un grupo de Trabajadores de la empresa contratista de Ralco tomaron la Ruta 5 Sur, a la altura del puente Duqueco, para protestar por la paralización de las obras de construcción de la central hidroeléctrica, de acuerdo al anuncio hecho por Endesa y que se hará efectivo a partir del 1 de marzo.

Miércoles 23 • Trabajadores que participan en la construcción de la central hidroeléctrica de Ralco, en Alto del Biobío, ocupan instalaciones ubicadas en el sector de Palmucho, tras el anuncio de Endesa de paralizar las obras a contar del 1 de marzo. La acción tiene por objetivo protestar ante la cesantía que enfrentarán 1.300 trabajadores.

Sábado 26 • El Consejo de Todas las Tierras con las comunidades mapuches de Temuicui, Requiem Pillan y Requiem Lemul, de la comuna de Ercilla realizan un encuentro donde concluyen impedir que la empresa forestal Mininco siga con la tala de 50 hectáreas de bosques del fundo Alaska

Domingo 27 • Un centenar de indígenas de la comunidad Temuicui, vinculada a la organización Consejo de Todas las Tierras, ingresa al fundo Alaska de la empresa Mininco de más de mil hectáreas a demarcar como “territorio mapuche” parte del fundo forestado. Ante esta situación la empresa forestal determina paralizar las faenas de tala.

M a r z o

Sábado 4 • Se realiza una marcha de protesta en Santiago de Chile por el regreso del senador vitalicio Pinochet al país. Termina con represión por parte de los carabineros. Participaron, según medios periodísticos, unas 3000 personas que caminaban por el centro de Santiago. La medida es organizada por diversas entidades defensoras de los derechos humanos. Por otra parte, al menos en cinco comunas de la región metropolitana se realizaron protestas en contra del arribo al país del senador vitalicio Pinochet.

Domingo 5 • Indígenas mapuches de la comuna de Contulmo, provincia de Arauco, ocupan ruta de Acceso al Predio Forestal Mininco. La acción, a la que se sumaron lugareños no mapuches, se realizó en protesta por lo que denuncian como un permanente deterioro provocado por los camiones y maquinarias de la empresa en esa ruta, que inundan de polvo sus viviendas.

Jueves 9 • Mapuches-lafquenche ocupan los caminos en Tranque, La Huellas y Curapailaco exigiendo la libertad del dirigente Dinesio Maril Huenchuñir recluido en la cárcel de Lebu. Los indígenas bloquearon el paso de camiones de la forestal Mininco.

Lunes 13 • Alrededor de 200 personas, en su mayoría mapuches, permanecen desde las 8 de la mañana obstruyendo el paso de camiones hacia las faenas de la Forestal Mininco, en protesta por la falta de seguridad en los caminos de acceso a las comunidades de Valle de Elicura y Calebu en Contulmo,

• El gremio pesquero artesanal se moviliza en la zona sur y austral del país, contra la actitud monopólica de las empresas pesqueras industriales.

Jueves 16 • Se conforma una comisión de trabajo integrada por los titulares de los ministerios de Planificación y Cooperación, Obras Públicas, Educación, Agricultura, Trabajo, Salud y Bienes Nacionales, más el director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Por las distintas etnias participaron consejeros. Esta instancia de Mesa de diálogo, que procura resolver el conflicto indígena, fue propuesta por el presidente Lagos.

Cronología

- Viernes 17** • Tres organizaciones se excluyen de la Mesa de diálogo, como manifestación de rechazo por la incorporación a ella del director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Se esperaba que en el cargo fuese designado un dirigente de ascendencia indígena, preferentemente mapuche.
- Lunes 20** • Las autoridades regionales, dirigentes empresarios y pescadores artesanales de las X, XI y XII regiones dieron por terminado el conflicto que mantuvo al gremio pesquero artesanal movilizad durante 8 días en la zona sur y austral del país, contra la actitud monopólica de las empresas pesqueras industriales, luego de que el Subsecretario de Pesca otorgo mayores facilidades a pescadores artesanales.
- En Tocopilla 4 mineros (“pirqueros”) del yacimiento de cobre San José pertenecientes a la Asociación Gremial Minera inician un encierro voluntario en el socavón de la mina frente a la rebaja en el precio del cobre dispuesta por Enami (Empresa Nacional de Minería) y el cierre de una planta de mineral sulfurado.
- Jueves 23** • El inicio de negociaciones entre la Asociación Minera de Tocopilla y la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y los representantes de la Empresa Nacional de Minería (Enami) pone fin al encierro que llevaban adelante cuatro mineros en el yacimiento de cobre San José.
- Los trabajadores marítimo - portuarios de Valparaíso inician un paro nacional de actividades de carácter prolongado a raíz del quiebre en las negociaciones que se llevan a cabo con el gobierno respecto al pago de compensaciones por despidos en el sector. Acusan al gobierno por incumplimiento de los acuerdos del año pasado referentes a los planes para las microempresas y a las pensiones administrativas. Se producen incidentes con los carabineros en una movilización que realizan los trabajadores portuarios de la V Región. La actividad portuaria esta absolutamente paralizada. Los portuarios acusan al gobierno de no cumplir acuerdos económicos pactados.
- Viernes 24** • Desalojan a mapuches del Fundo en Tirúa. Los manifestantes fueron desalojados por un contingente de 40 efectivos de Carabineros, siendo detenido en la acción el vocero de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco, José Huenchunao. Huenchunao enfrenta acusaciones por abigeato y por usurpación de propiedad privada.
- Sábado 25** • Unos 4000 trabajadores marítimos – portuarios continúan, a lo largo de todo el país, en estado de paralización indefinida a raíz del quiebre de las negociaciones con el gobierno, en reclamo de resolver el pago de los beneficios por los despidos de trabajadores del sector a raíz de las privatizaciones de las principales terminales del Puerto. A los puertos de Valparaíso, San Antonio, Chañaral, Coquimbo, Talcahuano, Corral y Puerto Montt se suman los estibadores de Iquique quienes exigen una pensión administrativa por cada operario en concepto de programas para la microempresa. Finalmente el Gobierno cede a las exigencias de los trabajadores iniciando una mesa de negociación. Los portuarios deciden levantar el paro, pero amenazan con reiniciarlo si no se logran las negociaciones colectivas con las empresas portuarias.
- Domingo 26** • Un grupo cercano a 40 comuneros mapuches realiza una protesta frente al Juzgado del Crimen de Cañete, provincia de Arauco, en momentos en que prestaba declaración ante el tribunal el vocero o werkén de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco, José Huenchunao, detenido desde el viernes.

A b r i l

- Miércoles 5** • Decenas de indígenas provenientes de distintos puntos de la Novena Región, inician en Temuco el Séptimo Tribunal Mapuche, con el objetivo de delinear las futuras acciones a seguir durante el presente año para lograr beneficios tanto territoriales como culturales para esa etnia. La actividad se inició pasadas las 12 horas de ayer en el Aula Magna de la Biblioteca Galo Sepúlveda, y en ella participan organizaciones indígenas vinculadas al Consejo de Todas las Tierras, agrupación que organiza el encuentro
- Miércoles 12** • Veintisiete mapuches toman la Catedral de Temuco en protesta por la detención y procesamiento de comuneros mapuches de Collipulli y Ercilla, vinculados a la Coordinadora Arauco Malleco. La ocupación se efectuó pasadas las 20 horas, lo que movilizó a efectivos de Carabineros para intentar el desalojo de los indígenas. Sin embargo, la mediación del obispo de Temuco, evitó que se materializara la acción de los policías, con el compromiso de que se inicien las conversaciones para que los participantes de la toma dejen el recinto
- Sábado 15** • Mapuches ocupan la Sede de la Unión Europea en Santiago para protestar por el enjuiciamiento de nueve miembros de esa etnia. Los manifestantes calificaron de injusta y arbitraria la reclusión en los penales de Temuco y Collipulli del grupo de procesados pertenecientes a la Coordinadora Arauco Malleco.
- Viernes 21** • Se realiza una manifestación pacífica frente a la residencia del Presidente Ricardo Lagos, en la comuna de Providencia, en oposición a la construcción de la central Ralco.

* Realizada por Clara Algranati, colaboradora del OSAL
*Fuentes: diarios La Tercera en Internet y La Tercera en soporte papel;
se consultó también la página Web "Novedades Nuque Mapuche"
(<http://www.soc.uu.se/mapuche/>)*

Colombia*

E n e r o

Domingo 2 • La guerrilla colombiana inició el Año Nuevo con un ataque después de la medianoche de ayer al segundo oleoducto mas grande del país, lo que obligó a suspender el bombeo de crudo. (Los guerrilleros izquierdistas atacan a menudo la infraestructura del sector energético en el país, en protesta por lo que consideran una excesiva presencia de multinacionales extranjeras en la industria petrolera colombiana.)

Lunes 3 • La iglesia colombiana pidió al Gobierno y a las Farc analizar la posibilidad de ampliar la tregua que finaliza el próximo 10 de enero.

Martes 4 • La Sede del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia (CICR), es ocupada por aproximadamente 400 desplazados que exigen dialogar con el gerente de la Red de Solidaridad, Fernando Medellín, para buscar soluciones a la grave situación que afrontan. Precisamente, Medellín advirtió que el gobierno no dialogará bajo presiones de ninguna naturaleza y calificó el hecho como una situación de orden público.

80

Viernes 7 • Congresistas colombianos se reunieron ayer durante cuatro horas con dos encarcelados dirigentes del ELN para intentar allanar el camino a la desmilitarización de una zona del norte del país, que facilite iniciar un proceso de paz con esa organización.

• El Ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez Acuña, hizo un llamado a las Farc-ep para que mantengan la tregua pero advirtió que las Fuerzas Militares están preparadas para afrontar eventuales ataques de la subversión.

• El Gobierno Nacional reiteró su disposición a dialogar con la comunidad indígena Embera Katío que continúa ubicada frente al Ministerio del Medio Ambiente, siempre y cuando abandonen las instalaciones y se reubiquen en un sitio donde tengan óptimas condiciones de salud, alimentación y seguridad. Es importante aclarar que este grupo que permanece en las instalaciones del Medio Ambiente es tan sólo una fracción que representa a seis de los 19 cabildos, que conforman la totalidad del pueblo Embera Katío del Alto Sinú. Por su parte, el secretario del cabildo La Alianza, Wadis Libardo Jarupí, anunciaba en la Casa de Nariño la suscripción de un acuerdo para mejorar la calidad de vida de la comunidad Embera Katío. El dirigente indígena, aseguró que se negoció un plan de vida que compone 14 proyectos a nivel agrícola, pecuario, piscícola, entre otros. En cuanto a la ocupación que mantienen algunos indígenas de las instalaciones del Ministerio del Medio Ambiente, Libardo Jarupí dijo que aunque respeta la decisión, no comparte la actitud de sus compañeros

Sábado 8 • La sede del CICR continúa tomada por un número de desplazados que asciende a 1200, aun no hay acuerdo

lunes 10 • En estado de máxima alerta y dispuestos a neutralizar cualquier ataque de las Farc, se encuentran los militares colombianos al llegar hoy a su fin la tregua de fin de año.

Miércoles 12 • Enfrentamientos entre el Frente José Solano Sepúlveda del ELN y miembros de las Farc con los grupos paramilitares dejan hasta el momento cerca de cincuenta muertos en el sur de Bolívar.

• Se empezó a gestar en la ciudad de Cartagena, un principio de acuerdo para buscar un consenso en torno a la posibilidad de despejar un área del sur de Bolívar para adelantar diálogos con el ELN. Los Alcaldes de esa zona dijeron estar dispuestos a aceptar la zona de distensión, bajo ciertas condiciones.

Lunes 17

• Según datos dados por el Ejército hay 70 muertos en combates: En la vía al Llano murieron 44 guerrilleros, 5 militares y 6 civiles. Otros 13 subversivos fueron dados de baja en el sur de Bolívar, en donde también resultaron muertos 2 soldados. En confusos hechos un soldado murió durante enfrentamiento entre Ejército y Policía en San Juan del Cesar.

Martes 18

• Una nueva matanza cometieron los grupos paramilitares en los Departamentos de Antioquia y Cesar, dejando un saldo de veintiséis campesinos muertos de acuerdo con los reportes de las autoridades. En el Municipio antioqueño de Yarumal el grupo armado acabó con la vida de 19 labriegos, según informó el Secretario de Gobierno de esa localidad Eliécer Agudelo.

Domingo 23

• Más de 15 millones de colombianos apagaron las luces de sus residencias para decirle no a la ola terrorista adelantada por la subversión contra la infraestructura eléctrica nacional. Según el Centro Nacional de Computo de ISA, 3 millones 900 mil hogares participaron en la protesta. Según el criterio del Gobierno, las reparaciones de esas torres tendrán que ser pagadas por los colombianos que, además, se enfrentan a un nuevo apagón mucho más severo que el de 1992. Por esto el Movimiento del No Más tomó la vocería acompañado por decenas de ONG s que también convocaron a la jornada.

F e b r e r o**Martes 1**

• En la Universidad del Atlántico se produjeron violentos disturbios entre una veintena de estudiantes y la Policía Departamental. La razón de la protesta se originó en los malos manejos administrativos del rector y la muerte de un estudiante. Como consecuencia del enfrentamiento resultaron ocho policías heridos. Finalmente se produjo el diálogo entre las partes que fue registrado por la prensa. Se solicitó una reforma estructural que incluya cambios en el estatuto general, docente, estudiantil y en el sistema de admisiones.

Lunes 7

• El comienzo del año lectivo, en el Departamento del Atlántico, se inicia con un paro convocado por la Asociación de Educadores del Atlántico (Adea). Adea incita a concurrir a los puestos de trabajo, ya que si bien reconoce que el paro es justo y legítimo porque es importante reivindicar los derechos salariales y prestacionales de los educadores oficiales, no lo considera coyunturalmente conveniente. 09 Tropas del Ejército recuperaron la autopista Bogotá-Medellín, que estuvo cuatro días (desde el 5-2) en poder del Ejército de Liberación Nacional

Viernes 11

• El Viceministro del Interior Jorge Mario Eastman llegó ayer hasta la zona donde unos ocho mil campesinos mantienen el bloqueo de la Troncal del Magdalena Medio, para reunirse con los alcaldes del sur de Bolívar y los líderes de la protesta, a fin de escuchar los planteamientos de la población, cuya principal petición es que el sur no sea convertido en área de despeje para comenzar las negociaciones con el ELN.

Lunes 14

• Los campesinos del Atlántico cuestionaron al Gobierno Nacional por querer hacer otra reforma agraria cuando no hay recursos para comprar tierra y darles asesoría técnica. El cuestionamiento lo hicieron los agricultores en el marco de un foro que se celebró en el Municipio de Sabanalarga, el cual contó con la asistencia de funcionarios del Incora y el senador Augusto García. La petición de los campesinos es que haya una reforma agraria integral, con tierra, educación, vivienda rural y tecnificación porque la apertura económica los dejó en condiciones desfavorables.

Cronología

- Desde las 6 de la mañana de hoy quedarán suspendidos los bloqueos a la vía Bogotá-Medellín, y de las carreteras de Antioquia, obstruidas por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en su propósito de presionar el despeje de una parte del sur de Bolívar para realizar la Convención Nacional.

- Tras ocho horas de reunión, en el Municipio de Aguachica, voceros del Gobierno y representantes de los 15.000 campesinos del sur de Bolívar que desde hace siete días mantienen bloqueadas las vías hacia la Costa Atlántica, lograron un principio de acuerdo. La situación que afrontan los labriegos ante los problemas de hacinamiento, escasez de alimentos y cansancio los obligó a exigir la presencia del Ministro o su renuncia. Se espera que hoy a primera hora el Ministro del Interior confirme su asistencia a la zona donde los campesinos mantienen el bloqueo.

Martes 15

- Los 15 mil campesinos que tenían bloqueada la vía que comunica a la Costa Atlántica con el interior del país, suspendieron la protesta que hace una semana mantenían en los sitios de Aguas Claras y el Puente Torcoroma, en el sur del Cesar, calificando el levantamiento del paro, ocurrido a las 10 de la mañana de ayer, como un gesto de buena voluntad para iniciar un diálogo con el Ministro del Interior Néstor Humberto Martínez Neira, a fin que el Gobierno se comprometa a no convertir el sur de Bolívar en un área de despeje.

Jueves 17

- Los campesinos del sur de Bolívar y sur del Cesar decidieron volver a bloquear la carretera a la Costa, tras la ausencia ayer del Ministro del Interior Néstor Humberto Martínez Neira en las mesas de trabajo que se cumplen en la base militar El Juncal. Ante la ausencia del Ministro, quien estuvo ayer en la zona fue el ex General Harold Bedoya quien afirmó en Aguas Claras que “la protesta de los campesinos es la nueva revolución comunera de Colombia por la libertad del pueblo”.

- La acción de los paramilitares en el Magdalena caracterizada por las sangrientas incursiones realizadas en los últimos días en la Ciénaga Grande de Santa Marta y en el área rural del Municipio de Remolino, provocó un masivo éxodo campesino hacia las cabeceras municipales del área de su jurisdicción y otras vecinas.

82

Domingo 20

- A quince ascendió el número de personas muertas como resultado de los enfrentamientos que desde hace cuatro días se registran entre miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y guerrilleros del frente 37 de las Farc, en el corregimiento de El Salado, jurisdicción de El Carmen de Bolívar. De acuerdo con la información suministrada por el Batallón de Infantería número 5, los paramilitares retuvieron a varios hombres de las Farc y luego de un supuesto juicio les dieron muerte. El teniente coronel de la Primera Brigada de Infantería, Harold Mantilla, dijo que la mayoría de las víctimas presentaban signos de tortura. Algunos fueron decapitados, otros murieron como consecuencia de impactos de bala, mientras los demás fueron quemados. Agregó que los enfrentamientos entre los dos grupos armados se deben a disputas por la recuperación de la zona, actualmente en poder de las Farc. Además, tropas del Batallón de Infantería de Marina Número 5, se enfrentaron con miembros de los paramilitares en un intento de recuperar la zona, mientras que los subversivos huyeron hacia las montañas.

M a r z o

Jueves 16

- En el marco de la jornada nacional de protesta convocada por las centrales de trabajadores, sindicatos de profesores y hospitales, entre otros, se toman medidas de seguridad para garantizar que el paro estatal de 24 horas se lleve adelante en completa calma. Entre otras medidas se anunció la suspensión de clases tanto en los colegios públicos de Barranquilla y el resto de Municipios del Atlántico. En este punto, se advirtió a los padres de familia que por lo anterior, de ninguna manera podrán enviar a sus hijos a clases y mucho menos, que participen en las protestas.

- Según las centrales obreras el cese de actividades fue del 80%. El paro dirigido por Central Unitaria de Trabajadores en todo el país se cumplió sin problemas de orden público. En el Departamento del Atlántico la jornada de cese de actividades se celebró con marchas en varias vías, a fin de pro-

testar contra algunas medidas establecidas por el Gobierno. Pero en esta jornada de protesta no sólo participaron los trabajadores del Estado, también lo hicieron varios miembros de la comunidad, quienes se sienten atropellados por las altas tarifas en los servicios públicos domiciliarios.

Viernes 17

• En un esfuerzo por impulsar el proceso de paz, los dirigentes empresariales se reúnen hoy con los jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Lo mismo harán el 9 de abril los líderes sindicales, pero un sector de la oposición pidió suspender su participación en el proceso en protesta por la ofensiva militar de la guerrilla.

Martes 28

• Producto del ataque que por más de 12 horas ejecutaron tres frentes de las Farc, Vigía del Fuerte, uno de los Municipios más pobres del país, quedó sumido en la desolación y la destrucción. Los resultados arrojan 32 muertes, entre policías y civiles, así como la total destrucción de la Alcaldía, la Iglesia, el Comando de Policía y más de 15 viviendas ubicadas en cercanías de la estación.

A b r i l**Miércoles 5**

• El Ejército de Liberación Nacional, ELN, se atribuyó la escalada terrorista adelantada en diferentes puntos del país. En un comunicado leído por el dirigente de esa organización subversiva Antonio García, afirmó que el ELN fue el autor de 40 acciones armadas, entre las que se destacan retenes en las carreteras, especialmente de la Costa Atlántica.

Domingo 9

• El mayor problema social que tiene Colombia como es el desempleo y que está íntimamente ligado al desarrollo económico del país, será el tema del cual se ocupará hoy el proceso de paz con las Farc. Las propuestas para superar la desocupación que llega al 18% y cómo alcanzar un mejor desarrollo económico, serán recibidas por el Gobierno y las Farc de parte de los empresarios y las centrales obreras, en desarrollo de la primera audiencia pública, que se realizará en el corregimiento Los Pozos, del Municipio de San Vicente del Caguán.

• Los gremios de la producción le reclaman a la guerrilla un cese de sus ataques bélicos, de los secuestros, el boleteo y el respeto del Derecho Internacional Humanitario, como condición básica para generar el clima perfecto para generar empleo y reactivar la economía de Colombia. El sector privado colombiano ratificó su disposición permanente de colaborar en la consecución de la paz para el país.

Martes 11

• La Costa Atlántica está prácticamente incomunicada con el interior del país, a raíz del paro armado que adelanta en carreteras de la región el ELN, que durante las últimas horas anunció que las acciones se mantendrán de manera indefinida.

Miércoles 26

• Unos doscientos campesinos de la zona se tomaron en forma pacífica las instalaciones de la Gobernación para manifestar su rechazo al despeje. Mientras el Gobernador de Bolívar Miguel Raad Hernández y los Alcaldes del sur de Bolívar, dialogaban en Santafé de Bogotá con el Gobierno Nacional la posibilidad de despejar tres Municipios para los diálogos con el ELN,

Sábado 29

• Las Farc anuncian el lanzamiento de su partido político: el Movimiento Bolivariano.

* Realizada por Liliana Dermirdjian, colaboradora del OSAL
Fuentes: diarios *El Heraldo* y *El Espectador*

Ecuador*

E n e r o

Viernes 7

• La CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) anuncia una protesta nacional indefinida a partir del sábado 15. Plantean la salida del presidente Mahuad, el cese de los diputados del Congreso y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y la instauración de un “gobierno de salvación nacional”, integrado por las fuerzas armadas, sectores sociales y profesionales. Se manifiestan en en contra de la corrupción, critican el congelamiento de los depósitos en la banca, la inacción frente a los banqueros que hicieron desaparecer los ahorros del pueblo, y la subida incontrolable de los precios de los artículos de primera necesidad. Los pedidos de renuncia de Mahuad se habían iniciado en noviembre y diciembre de 1999, y provenían desde prácticamente todos los sectores sociales: dirigentes de las cámaras empresariales, personeros de los principales partidos políticos, los expresidentes Febres Cordero (1984-88) y Borja (1988-92), e incluso diputados pertenecientes al partido del presidente Mahuad, la Democracia Popular (demócrata cristiana).

• El Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular realizan manifestaciones para exigir la salida de Mahuad y la instauración de un “gobierno patriótico de unidad nacional”.

84

Domingo 9

• Por la noche, en cadena de radio y televisión, el presidente Mahuad anuncia la dolarización de la economía, según una paridad de 25 a 1. En año y medio de su gestión, el sucre se desvalorizó 500% respecto al dólar, y solo en los primeros días de enero se devaluó 30%; mientras tanto, la inflación en 1999 había sido del 60%. Otras medidas anunciadas incluían la profundización de las privatizaciones (energía, telefonía y seguridad social) y la flexibilización laboral. Se declara el estado de emergencia.

Lunes 10

• También en Guayaquil, los transportistas realizaron un paro y bloquearon el tránsito con los autobuses. Exigían que sus deudas en dólares sean sucretizadas a tasa preferencial.

Martes 11

• En Quito, la Conaie, la Coordinadora de Movimientos Sociales, diversos sectores de la sociedad civil, organizaciones juveniles, ecologistas, cristianas, la Iglesia Anglicana, sectores de la Iglesia Católica, organizaciones de mujeres, colegios profesionales y organizaciones estudiantiles instalan el “Parlamento de los Pueblos” con aproximadamente 300 delegados de distintas partes del país, sobre todo indígenas. En días previos, en algunos sectores del país, se habían instalado “parlamentos indígenas” y “parlamentos indígenas y populares”, acompañados de marchas y manifestaciones contra el gobierno. Monseñor Alberto Luna, entonces arzobispo de Cuenca (la tercera ciudad más poblada del país) fue elegido presidente del Parlamento de los Pueblos por unanimidad. Se demanda el cese de los tres poderes del Estado y que quede sin efecto la dolarización de la economía.

Viernes 14

• La Conaie inicia bloqueos de caminos y carreteras para exigir la salida de Mahuad y de los tres poderes del Estado. Las acciones se realizaron en las provincias de la sierra ecuatoriana. Antonio Vargas, presidente de la CONAIE, dijo que el pueblo iba a gobernar en 8 o 15

días y pidió a las Fuerzas Armadas y a la Policía que se unan al movimiento. El Gobierno recuerda que está vigente el estado de emergencia y militariza las carreteras. En los primeros días, la movilización es casi exclusivamente indígena; en días posteriores se irán sumando sectores populares urbanos. Una encuesta de CEDATOS advertía que 53% de los encuestados estaba de acuerdo con la renuncia de Mahuad, y que otro 42% quería que el gobierno modifique el rumbo.

Lunes 17

- Moradores urbanos en las ciudades serranas de Ibarra y Cuenca (al norte y sur del país respectivamente) realizan “marchas de cacerolas vacías” en protesta por el alto costo de la vida y en respaldo a las movilizaciones indígenas.

- Entre 5 mil y 8 mil indígenas entraron en pequeños grupos a Quito en la noche y en la madrugada, burlando los cercos establecidos por los militares en las entradas norte y sur de la ciudad. Los días anteriores, patrullas militares obligaban a los indígenas a bajarse de los buses que se dirigían a la capital. Los indígenas se agruparon en el parque de El Arbolito y en el Ágora de la Casa de la Cultura, a pocas cuadras del Palacio Legislativo, donde, a partir de entonces, se trasladó el funcionamiento del Parlamento de los Pueblos. Exigen el cese de los tres poderes del estado y la instauración de un gobierno de salvación nacional. Mientras se mantuvieron en Quito, los indígenas recibieron la solidaridad de vendedores y vendedoras de los mercados, así como de pobladores de barrios populares, que llevaron alimentos, cobijas y ropa.

Miércoles 19

- Los indígenas que habían realizado la “toma” de Quito, acompañados de organizaciones sociales urbanas, realizaron una movilización por las calles, desde el parque de El Arbolito hasta el Ministerio de Defensa. Aproximadamente 5 mil manifestantes presionaban por el cambio de gobierno y por el cambio de modelo económico. En el ministerio de Defensa, entregaron un manifiesto al ministro y Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Mendoza, a quien solicitaron cumpla el compromiso de no reprimir al pueblo “y defina si el apoyo militar será para los corruptos que gobiernan el país o para el pueblo”. Mientras tanto, el gobierno ordena cercar con elementos militares y alambradas de púas la sede del Congreso y el Palacio Presidencial.

Jueves 20

- Grupos de campesinos cierran vías de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos y Guayas, en la Costa y se enfrentan con la policía. Respaldan la movilización indígena y piden la salida del gobierno. En Manabí, cientos de campesinos realizaron una toma simbólica de la capital provincial, Portoviejo. Por otra parte, en la provincia de Imbabura, aproximadamente 5000 indígenas realizaron una toma de la ciudad de Ibarra, capital provincial, para protestar frente a la gobernación.

Viernes 21

- A las 10 de la mañana, los indígenas que sitiaban el Congreso tomaron el edificio acompañados por un grupo de coroneles del Ejército. Emitieron una proclama en la que destituyeran al presidente, a los congresistas y a los magistrados de la Corte de Justicia, e instauraban una Junta de Salvación Nacional, integrada por el coronel Gutiérrez, Antonio Vargas, presidente de la Conaie, y Carlos Solórzano, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia. A las tres de la tarde, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas le retira el respaldo a Mahuad, quien sale de Palacio.

- Desde el Congreso, una manifestación de cerca de 40 mil personas se dirige al palacio de gobierno, donde está reunido el Alto Mando Militar. Mientras tanto, la mayoría de jefes de destacamentos militares anuncian su decisión de apoyar al Alto Mando. En varias ciudades del país: Ibarra, Cuenca, Ambato, Latacunga, Guaranda, Portoviejo,

Guayaquil se realizaron movilizaciones de protesta y tomas simbólicas de edificios públicos. Las movilizaciones fueron masivas en las ciudades de la sierra, al contrario de lo que ocurrió en las ciudades de la costa.

- En la Casa de Gobierno, luego de varias horas de deliberación, se anuncia la formación de un triunvirato, con la participación del general Mendoza, Antonio Vargas y Carlos Solórzano, pero Mendoza renuncia a la Junta apenas tres horas después, anunciando que el Alto mando de las Fuerzas Armadas apoya la sucesión constitucional, y la asunción del vicepresidente Gustavo Noboa.

- En Guayaquil y en Quito, los dirigentes del Partido Socialcristiano (de derecha) y Democracia Popular (derecha moderada, del presidente Mahuad), así como los principales personeros de las cámaras empresariales rechazan el “triumvirato” acusándolo de “golpe de Estado” y hacen un llamado a enfrentarlo, incluso con las armas.

Sábado 22

- Noboa se posesiona del cargo de Presidente en el ministerio de Defensa, a las 6 y media de la mañana del sábado 22. Los indígenas que habían tomado Quito retornan a sus comunidades. El nuevo presidente anuncia que continuará con las medidas emprendidas por Mahuad, especialmente la dolarización y las privatizaciones, que pondrá en marcha un plan social de compensaciones, y que no permitirá el caos en el país. En las semanas siguientes iniciarán una serie de juicios contra los militares, policías y civiles que intervinieron en los hechos del 21.

Miércoles 26

- La Conaie anuncia disposición de dialogar con el nuevo gobierno, a condición de que no haya persecuciones. Presentará un conjunto de demandas que incluyen tanto aspectos particulares de interés de los indígenas cuanto aspectos relativos a la marcha del país. Posteriormente se instalarán mesas de diálogo entre el gobierno y la Conaie: educación (flexibilización de créditos, mayor apoyo a la educación bilingüe), vivienda (incremento de subsidios familiares, plan de vivienda para las nacionalidades indígenas), reorientación de las obras del Fondo de Inversión Social de Emergencia, administración autogestionaria del castillo de Ingapirca (ruinas de la época incaica situadas en la provincia de Cañar).

Febrero

Martes 1

- Clientes del Banco del Progreso, cerrado por iniciativa de su dueño en marzo de 1999, en medio de la crisis bancaria, inician una huelga de hambre al pie del edificio matriz en la ciudad de Guayaquil. Queman llantas, bloquean la calle y se enfrentan con la policía. Piden que las autoridades dispongan el descongelamiento de los dineros que tenían depositados en el banco al momento de su cierre. La medida duró tres días.

- En Tena, capital de la provincia amazónica de Napo, el Comité de Solidaridad del Napo inicia una vigilia. Piden la libertad incondicional del coronel Lucio Gutiérrez, cabeza del levantamiento indígena-militar del 21 de enero.

Miércoles 2

- La CONAIE, la Coordinadora de Movimientos Sociales y organizaciones de derechos humanos demandan la amnistía para todos los encausados a consecuencia del levantamiento del 21 de enero.

- Trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que están en huelga desde hace dos meses, realizan manifestaciones en las calles de Guayaquil, Quito y Cuenca, las tres principales ciudades del país. Demandan que se archive el proyecto de ley del

Seguro Social (que prevé su privatización parcial), y que se destituya a los miembros de la Comisión Interventora y al director general del IESS. Reciben apoyo del Frente Patriótico.

- También se encuentran en paro, desde hace 100 días, los médicos de los hospitales del IESS, manteniendo las mismas reivindicaciones, más la entrega de medicamentos y equipos a los hospitales y centros de salud. Denuncian corrupción administrativa. Exigen suspender las sanciones contra 400 empleados. Reciben respaldo de la Federación Médica Nacional y de la Confederación de Afiliados al Seguro Social Campesino.

Domingo 6

- En Guayaquil, la CONAIE lanza públicamente la campaña de recolección de firmas para convocar una consulta popular. Se pide la libertad de los coroneles que participaron el 21 de enero, oposición a las privatizaciones y a la dolarización, cese del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia. Reciben respaldo del movimiento campesino Solidaridad y de la Federación de Comerciantes Minoristas de la Bahía.

Domingo 13

- El Parlamento de los Pueblos, la CONAIE y la Coordinadora de Movimientos Sociales definen en conjunto las preguntas para la propuesta consulta popular. Plantean ratificar revocatoria del mandato de Mahuad, proponer el cese de los diputados y los ministros jueces de la Corte de Justicia, rechazar dolarización y privatizaciones, devolución de los fondos congelados, libertad de militares, policías y civiles encarcelados y enjuiciados a raíz del levantamiento del 21 de enero, retiro de base militar estadounidense de Manta (puerto de la provincia de Manabí, al norte del Ecuador).

Jueves 17

- La CONAIE pone condiciones para dialogar con el gobierno. Exige la libertad de los coroneles, el retiro de la ley de transformación económica (conocida como “ley trole”, que establece las pautas para la dolarización, flexibilización laboral, etc.), y suspensión de la dolarización.

- La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) protesta frente a la Corte Suprema de Justicia. Exige agilidad en el juicio por el asesinato del diputado Jaime Hurtado, del Movimiento Popular Democrático, un año atrás. Ese movimiento también realizó una marcha de protesta por el mismo motivo.

- La Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE) realizó una manifestación hacia el Congreso y la Casa de Gobierno. Se opone a la dolarización y a las privatizaciones. Respaldan la consulta popular planteada por la CONAIE.

Martes 22

- Clientes perjudicados del Banco del Progreso y de las financieras Intergreso e Invidepro, vinculadas a dicho banco, realizaron una manifestación pacífica en la ciudad de Guayaquil. Solicitan devolución de sus recursos.

Lunes 28

- La Coordinadora de Movimientos Sociales anuncia que rompe el diálogo con el gobierno por la aprobación de la ley de “transformación económica” (conocida como “ley trole”).

Marzo

Miércoles 1

• La Coordinadora de Movimientos Sociales anuncia movilizaciones para el 21 de marzo. La Conaie, por su lado, esperará a ver “cómo el gobierno concreta los acuerdos”. Por su parte, la FENOCIN (Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras) anuncia que formará 8 comisiones con el gobierno para analizar temas económicos, agrícolas, educativos, la seguridad social, etc. Mientras tanto, se hacen públicos los resultados de la encuesta anual de condiciones de vida. El 69% de hogares se encuentran en condición de pobreza y el 34% en la indigencia. Los hogares con ingresos más bajos redujeron sus ingresos de 166 dólares mensuales a 86 dólares por mes entre 1995 y 1999.

Jueves 9

• Pensionista y jubilados del IESS protestan por la reducción de sus pensiones jubilatorias, que se opera al modificarse la fórmula de cálculo para las jubilaciones.

Domingo 12

8 Reunidas en la ciudad de Bahía, las Cámaras de Comercio del país anuncian su respaldo a la “ley trole”. Exigen leyes complementarias que alienten la inversión extranjera.

Viernes 17

• Las Cámaras empresariales del país protestan porque la “ley trole” introdujo un cambio en la composición de la Corporación Aduanera, integrando un representante del Servicio de Rentas Internas. Con esto, el Estado tendrá mayoría. Amenazan con retirar a sus delegados.

88

Domingo 19

• Continúa sin solución el conflicto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En Esmeraldas (al norte del país) los trabajadores celebran los 78 años de creación del IESS con crepiones negros.

Miércoles 22

• La Coordinadora de Movimientos Sociales realizó manifestaciones en protesta por la aprobación de la “ley trole”. Mientras tanto, se conoce que el FMI realizó observaciones a algunos puntos de la ley aprobada. El gobierno y la mayoría parlamentaria anuncian su disposición a introducir los cambios sugeridos, lo que será aprobado en dos días (se reestructuran las deudas, se amplía a 3 años el plazo para capitalizar la banca).

• Los maestros del nororiente de Pichincha se declaran en paro y cierran carreteras. Protestan por el traslado de sus partidas del Ministerio de Educación a “Redes Amigas” (según el modelo de descentralización y autogestión, la educación pasa a manos de los “consejos escolares”, una instancia compuesta por padres de familia, comunidad y profesores). Reclaman también el pago de sueldos adeudados desde diciembre de 1999.

Martes 28

• Nueva interrupción de los diálogos entre la CONAIE y el gobierno. Los dirigentes indígenas no acudieron a firmar los acuerdos. Afirman que el gobierno quería que se firmen los acuerdos sin que la CONAIE los haya aprobado previamente, que no se oficializa la creación y el funcionamiento del Fondo Indígena; piden que el bono de la vivienda se fije en 25 millones de sucres (mil dólares) y no entre 10 y 15 millones, como plantea el gobierno, que se recapitalice el Banco de Fomento, que se establezcan las inversiones para la educación bilingüe y que el organismo encargado de la administración del sitio arqueológico de Ingapirca pase a manos de los cañaris.

A b r i l

Viernes 7

- El Consejo Nacional de Tránsito decide elevar en un 100% el precio de los pasajes urbanos y en un 85% en promedio los interprovinciales. Las nuevas tarifas entrarán en vigencia desde el 15 de abril.

- Se reinician las movilizaciones de los afiliados al Seguro Social Campesino. En la amazónica provincia de Napo, centenares de campesinos cerraron las vías rechazando el proyecto de ley de la Seguridad Social y la dolarización. En las provincias andinas de Azuay y Chimborazo también se produjeron movilizaciones campesinas.

Lunes 10

- Se inicia un paro de dos días de los afiliados al Seguro Social Campesino. Se cierran carreteras en las provincias de Guayas y Manabí (en la costa), Azuay, Chimborazo, Bolívar y Cotopaxi (en la sierra), Pastaza y Zamora (en la Amazonía). La Cámara de Industrias del Azuay solicitó al ministro fiscal que se enjuicie a los dirigentes de las movilizaciones. El 17 de abril renuncia el director general del IESS.

- En Cuenca y en Sucumbíos se producen enfrentamientos entre la policía y estudiantes secundarios que protestaban contra la dolarización y contra el incremento de los pasajes.

Miércoles 12

- La Federación de Trabajadores Públicos de Pichincha se declara en sesión permanente hasta que el gobierno no atienda la petición de incrementos salariales. Se inicia un paro de 40 mil servidores públicos: su Confederación Nacional exige que se establezca un sueldo de 200 dólares mensuales. La paralización durará más de tres semanas y afectará a varias dependencias en todo el país (Ministerios de Agricultura, Bienestar Social, Medio Ambiente, Obras Públicas, el Registro Civil, INEN, INAMHI...). Realizarán manifestaciones en las calles y tomas de las dependencias. En esos días, también se iniciarán una serie de manifestaciones de los maestros, reclamando un sueldo mínimo de 100 dólares mensuales. Sus acciones seguirán en abril y mayo.

Jueves 13

- El presidente Gustavo Noboa pide al Congreso que apruebe una amnistía para los militares, policías y civiles implicados en el 21 de enero

- El Parlamento de los Pueblos de Pichincha realizó una marcha por calles céntricas de Quito “en defensa de la vida y en contra de la dolarización”.

Lunes 17

- A partir de este día comienzan una serie de manifestaciones y protestas, sobre todo estudiantiles, en contra del alza de los pasajes en varias provincias del país: Pichincha, Azuay, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Pastaza, Manabí, El Oro. Varios colegios son suspendidos. En los dos primeros días de manifestaciones serán detenidos 160 estudiantes, según denuncia el Frente Popular. En Cuenca, la Federación de Estudiantes Universitarios tomará pacíficamente la Gobernación durante un par de horas.

Martes 18

- 200 miembros de la FENOCIN y de la FEINE toman el edificio del CODENPE (Consejo de Desarrollo de los Pueblos del Ecuador). Manifiestan estar en contra de la dolarización y del alza de pasajes, pero pretenden también que el gobierno cambie las autoridades del Consejo, ligadas a la CONAIE.

Cronología

Miércoles 19

- Se anuncia la firma de un acuerdo con el FMI. Incluye incrementos de precios de los combustibles en 90%, del gas de uso doméstico en 40%, de la energía eléctrica; acelerar la marcha de las privatizaciones; destinar recursos al saneamiento de la banca, reducir la base de exenciones para el impuesto a la renta, incrementar el IVA, crear un impuesto al consumo de servicios domésticos, eliminar impuestos financieros y alzas salariales de 40%. El Gobierno pospone las medidas económicas que se desprenden de esta “carta de intención” para después de las elecciones seccionales del 21 de mayo.

- Los dirigentes de los afiliados al Seguro Campesino plantean una serie de peticiones al gobierno. Insisten, entre otras cuestiones, en la salida de la Comisión interventora y de los directores regionales, y exigen que el estado pague la deuda que mantiene con el IESS.

Martes 25

- En la población Las Golondrinas, Quinindé, provincia de Esmeraldas, la Asociación Campesina Ecuador Libre inició un paro indefinido para denunciar los atropellos cometidos por una empresa maderera.

Por su parte, en Quito, los detenidos en el penal García Moreno comenzaron acciones de protesta por el incumplimiento del sistema de rebajas de penas. No se presentan a las listas de control y no permiten que se cierren sus celdas con llave. Anuncian que recurrirán a la Corte Suprema de Justicia y a organismos de derechos humanos.

* Realizada por Mario Unda (CIUDAD-Ecuador).

Fuentes: *Diarios El Comercio y Hoy; Kintto Lucas: La rebelión de los indios, Abya Yala, Quito, 2000.*

Guatemala*

E n e r o

Miércoles 12 • Vecinos de Tactic, Alta Verapaz, se movilizaron contra el alcalde acusándolo por la supuesta apropiación indebida de fondos públicos. Ante la eventualidad de otros actos de violencia o protesta en la transmisión del mando en las municipalidades del país, las autoridades han puesto en marcha un plan de seguridad. Dado que en la primera vuelta, en once municipios fueron cuestionados los resultados electorales.

Jueves 27 • La detención de un dirigente campesino en Livingston, Izabal, y la orden de captura de diez más, generó la protesta de la Coordinadora Nacional Indígena Campesina, Conic. La Conic, a través de su dirigente Juan Tiney, advirtió al Gobierno acerca de un levantamiento campesino a nivel nacional, y calificó la detención de Choc en Livingston como el inicio de la represión y persecución de dirigentes campesinos. Aparte, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas emitió un pronunciamiento público donde respalda una vez más la lucha de Conic, así como pide la intervención de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala para que liberen a Choc y se deje sin efecto las otras capturas. La Iglesia Católica y la Comisión Nacional de Tierras llamó a la cordura a la Conic y pidió que procuren la vía del diálogo.

91

F e b r e r o

Domingo 13 • Convocados por la Asociación Civil de transporte cerca de mil 500 campesinos de diferentes comunidades de Petén ocuparon instalaciones de la refinería petrolera Basic Resources ubicada en La Libertad, Petén. Los manifestantes demandan de la empresa la asignación de contratos para transportar asfalto de ese municipio hacia San Vicente, Río Dulce, Izabal. Además, solicitan 10 millones de árboles para reforestar algunas áreas del departamento, informó el presidente de la Asociación Civil de Transporte, Proveeduría, Mano de Obra y Actividades Varias, Acitprolip, Jorge García. Tras fracasar una reunión con personeros de la refinería, los campesinos ingresaron a las instalaciones, y cerraron la llave principal que transporta el petróleo por el oleoducto.

Jueves 17 • La Gremial del Transporte Extraurbano de Pasajeros, Gretexpa, amenazó con un paro paulatino del transporte, si las autoridades no resuelven el incremento del valor del pasaje acorde al incremento del diesel y la devaluación de la moneda.

Sábado 19 • Aproximadamente 300 personas obstaculizaron la carretera, en La Libertad, Petén, para presionar a la Basic y lograr que los contrate para transportar asfalto. El hecho se registró a eso de las 10 horas, y provocó el movimiento de 51 miembros de la Fuerza Especial Policial, FEP, así como 30 agentes de la Comisaría 32 de la Policía Nacional Civil, PNC, de Petén. También se hicieron presentes personeros de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala, Minugua, así como del Ministerio Público.

Cronología

Martes 22

• Los transportistas piden audiencia al presidente para solicitarle: Modificación de las leyes de inversión extranjera y de tránsito; evitar la competencia desleal, con privilegios o subsidios. Ajuste y aumento de las tarifas del transporte; creación del Viceministerio de Transporte Terrestre y representatividad en las dependencias gubernamentales.

Martes 29

• Mataron a Erwin Haroldo Ochoa López quien luchaba en contra de la deforestación y depredación. El ambientalista lanzó una ofensiva contra depredadores en Petén. Las organizaciones ecologistas solicitaron al gobierno protección.

M a r z o

Jueves 2

• Comienza el paro convocado por la Coordinadora Nacional del Transporte, CNT. El motivo es el agotamiento de las gestiones para obtener una audiencia con el presidente de la República para plantearle su problemática: las pérdidas que ocasionan las faltas de aumento en las tarifas cuando se han incrementado los precios de los combustibles y los insumos. José García Santa Cruz, presidente de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina, AGEG, anunció que 500 expendios de combustibles dejarían de funcionar a partir de hoy. El motivo es la imposibilidad de competir frente a los privilegios que tienen las transnacionales. El gobierno afirmó que pueden ser sancionadas con multas.

• El transporte urbano organizado no adhiere al paro convocado por la CNT, informó la Asociación del Transporte Urbano, ATU. La Gremial de Transportistas Especializados en Combustible, Gretec, apoya el paro por lo cual existe posibilidad de desabastecimiento de carburantes. La Asociación de Transportistas del Suroccidente paralizaron sus remolques (en el kilómetro 150 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Mazatenango) El transporte de combustible y otras ramas también entraron en paro. Debido a la suspensión total de actividades, las fronteras del país estarían cerradas afectando al transporte internacional. Concentraciones masivas de transportistas se producen en Escuintla, Izabal, Quetzaltenango y Chimaltenango.

• El presidente Portillo anunció que como forma de impedir el paro del transporte intervendrá durante 30 días los servicios de transporte público extraurbano, de carga y de cualquier otro tipo, en todo el territorio nacional. Enfatizó Portillo que los transportistas extraurbanos y de combustibles forman un sector que ha vivido al amparo de los privilegios y proteccionismo que les brinda el Estado.

• La Unión Guatemalteca de Trabajadores indicó que el Gobierno no debe dejarse chantajear por la presión de los transportistas, y debe hacer uso de las unidades del Ejército, Caminos y empresas de transporte del vicepresidente de la República, Francisco Reyes López, para normalizar la situación

Viernes 3

• Los empresarios del transporte extraurbano suspenden el paro que iniciaron el miércoles último, luego de haber concluido una reunión con ministros de Estado, en Casa Presidencial. En este sentido también representantes de las gremiales que integran la Coordinadora Nacional del Transporte, CNT, levantan el paro. Se reinicia el diálogo la semana próxima, con la intención de que el Gobierno atienda sus planteamientos. No obstante, no lograron ningún tipo de compromisos de parte del Ejecutivo. Tampoco que el Gobierno eliminara las medidas que tomó el día 2-2.

Miércoles 15 • En la Costa Sur del país, centenares de pobladores de Retalhuleu efectúan una marcha para demandar el cese de secuestros, fin de la impunidad y que se condene a integrantes de la banda Agosto Negro, quienes son enjuiciados. La “Marcha pacífica contra la violencia y la impunidad”, convocó a aproximadamente 300 habitantes. Participaron también en la caminata pobladores de las comunidades Santa Isabel, San Marcos Niza, Suchitepéquez.

Jueves 23 • Los transportistas desalojan la entrada a la refinería Basic Resources (ubicada en La Libertad, Petén), que mantenían tomada desde el 14 de febrero último en demanda de contratos de trabajo. Lo mismo hicieron con un tramo carretero adyacente a esas instalaciones. Estas medidas habían ocasionado enfrentamientos que dejaron al menos nueve lesionados. Pese a haber desocupado la refinería, los transportistas, agrupados en la Asociación Civil de Transporte y Proveeduría de La Libertad, insistieron en que la petrolera les dé trabajo.

Jueves 30 • Campesinos e indígenas protestan en varias regiones del interior del país para exigir tierras, mejores salarios y el cumplimiento de los acuerdos de paz.

Viernes 31 • Convocado por la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos 49 autobuses bloquearon calles en la ciudad para exigir la apertura de un diálogo con el Alcalde en referencia a las demandas de un incremento de las tarifas.

• En Izabal, Totonicapán, Sololá y San Marcos los campesinos entregaron memoriales a los gobernadores departamentales, en los cuales exigen mejor calidad de vida. El objetivo es la recuperación de la madre tierra, salarios justos en el campo, y rechazo por el alto costo de la vida, los despidos masivos y los desalojos, según afirma el portavoz de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, Aniceto Montiel.

A b r i l

Sábado 1 • Llega la movilización campesina a la capital desde trece departamentos para pedir a Portillo que cumpla con sus promesas, según la Conic en la convocatoria participaron la Unión de Acción Sindical y Popular, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas y el Movimiento de Pobladores. Las demandas destacan el cese de los desalojos, resolución de los conflictos por tierras y dejar sin efecto decenas de órdenes de captura en contra de labriegos. También una política agraria e incremento presupuestal a Fontierra, así como la renegociación de deudas con el Banco de Desarrollo Rural, Banrural. A esas reivindicaciones agregaron su exigencia de respeto a los Derechos Humanos y al cumplimiento integral de los acuerdos firmados entre el gobierno de Alvaro Arzú y la ex guerrilla. El Ejecutivo se comprometió a integrar una comisión para analizar las disputas de tierras e incluir las demandas campesinas en el Pacto de Gobernabilidad. También analizará el apoyo crediticio a pequeños y medianos agricultores, así como a distribuir (sin intermediarios) fertilizantes a bajo precio.

Miércoles 5 • El alcalde, Fritz García-Gallont, se reúne con directivos de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, AEAU, para discutir soluciones a la problemática que plantean los transportistas. En la reunión se analizarán los hechos ocurridos el viernes último, así como las demandas de AEAU en referencia a un incremento de la tarifa, el pago de un ecobono y la suspensión de las infracciones a los autobuses. Mientras la comuna capitalina demanda mejorar el servicio.

Jueves 13

• Dirigentes sindicales y estudiantes marchan por el incremento del pasaje del transporte urbano, pidiendo al alcalde, Fritz García-Gallont, desistir de tal medida. El secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU, Fernando Sánchez, y el secretario general de la Central General de Trabajadores de Guatemala, CGTG, José Pinzón, sostienen que el propósito de la actividad es reiterar la exigencia de que se regrese al diálogo con la Comisión Multisectorial del Transporte Urbano. De lo contrario, el Ejecutivo debe intervenir el transporte.

Lunes 24

• A causa de la quema de dos autobuses urbanos en los últimos días, frente a las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Usac, la PNC también prevee mayor seguridad en ese sector. Un grupo de estudiantes realizó una protesta pacífica en la entrada de la Usac por la avenida Petapa. Tras ser expulsados de los autobuses por la municipalidad, unos 50 ayudantes o “brochas” protestaron frente a la comuna, por el incremento al pasaje y su despido. Dirigentes y seguidores de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, marcharon con volantes y megáfono en mano. Al final del día se produce escasez de unidades.

Martes 25

• En el segundo día de vigencia del alza al transporte urbano: 38 estudiantes de Derecho de la Usac inician una huelga de hambre por 48 horas, frente a la Municipalidad de Guatemala.

• Ayudantes del transporte urbano, estudiantes de los institutos Rafael Aqueche y Central para Varones, así como de la Escuela Normal para Varones, se sumaron a la protesta. Al lugar fueron enviados 170 agentes de la FEP. El resultado de la violenta jornada fue un autobús quemado, 19 más con daños, 58 detenidos y múltiples destrozos.

94

Miércoles 26

• Consecuencia de la agudización de la crisis del problema del transporte urbano es la suspensión de clases en establecimientos públicos. La Dirección Departamental de Educación de Guatemala informó, que se suspenden las actividades escolares hoy y mañana.

La Unidad de Acción Sindical y Popular, UASP, interrumpió el tráfico en el “Palacio de la Loba”. Por la noche las protestas concluyeron con un mitin (en la avenida Petapa y 32 calle, zona 12), organizado por estudiantes de la Usac. Los sancarlistas hicieron un llamado a la población para unirse a la lucha para lograr que se dé marcha atrás en lo dispuesto por el alcalde capitalino, Fritz García-Gallont. Con platos y otros objetos que llevaban en las manos, cerca de 300 universitarios hacían ruido, en señal de protesta.

La tercera jornada de protestas culmina con 23 autobuses dañados, miles de personas que se transportaban en camionetas y camiones, y dos personas detenidas. Las autoridades informaron que se eleva el número de detenidos a 60 en los últimos tres días, por participar en ataques contra camionetas o alterar el orden público

Jueves 27

• Estudiantes universitarios, de nivel medio, vendedores de mercados y agrupaciones sindicales manifiestan por las calles de la capital; mientras que los transportistas retiran sus unidades, por temor a más daños. La represión policial frente a la protesta contra el alza al transporte urbano derivó en violencia y vandalismo, con saldo de cinco muertos, 19 lesionados, 105 capturados y pérdidas incalculables por saqueos y destrucción de comercios del centro capitalino. Como resultado de la represión policial, entre las cinco víctimas mortales se encuentra el fotógrafo del periódico Prensa Libre Roberto Martínez.

* Realizada por Liliana Dermirdjian, colaboradora del OSAL
Fuentes: diario Prensa Libre

México*

E n e r o

Martes 4 • El plenario del CGH (Consejo General de Huelga), después de una extensa sesión, resuelve favorablemente las demandas de la rectoría en relación a que la Preparatoria Popular y el CLETA (Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística) no formen parte de los 120 representantes del CGH en la mesa de diálogo. Se allana así el inicio de negociaciones entre la rectoría, encabezada por el recientemente designado (12/11/99) rector Juan Ramón de la Fuente y los representantes del movimiento estudiantil.

Miércoles 5 • En el marco de las revisiones salariales contractuales diversos sindicatos amenazan con medidas de fuerza de no obtener aumentos salariales (de hasta 40%) para compensar, entre otras cuestiones, las recientes alzas de tarifas y alimentos. En particular la Asociación de Tranviarios de México, los trabajadores de la aerolínea TAESA, el Sindicato de los Trabajadores de la UNAM (STUNAM), y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera y Alcohólica de la Rep. Mexicana (SNTIAARM) han amenazado con iniciar paros en el próximo mes de no llegar a una recomposición salarial satisfactoria.

Jueves 6 • El Rector de la UNAM, Ramón de la Fuente, presenta al Consejo Universitario una propuesta de cinco puntos que pretende resolver el conflicto planteado en la Universidad. Su contenido plantea, entre otras cuestiones, trasladar la decisión sobre el pase automático, el reglamento general de pagos y la permanencia en la UNAM a un futuro congreso universitario, suspender las relaciones entre la UNAM y el CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación) a la espera del congreso universitario, y permitir la regularización escolar de todos los alumnos sin excepción retirando las actas levantadas contra aquellos que participaron del movimiento huelguístico. En una sesión de cuatro horas y media el Consejo Universitario aprueba con 112 votos a favor y cinco en contra la propuesta de rectoría. El Rector anuncia su decisión de someter a un posterior plebiscito universitario dicha propuesta.

Viernes 7 • Se realiza en el Palacio de Minería la reunión de los comisionados de la rectoría y los representantes del CGH. El CGH rechaza la propuesta del rector en tanto violatoria de los acuerdos firmados el 10/12/99. Los comisionados de rectoría al retirarse de la mesa de diálogo ratifican la decisión de impulsar un plebiscito universitario.

Lunes 10 • Los comisionados de rectoría no acuden al diálogo en Minería. Las negociaciones están rotas y el Rectorado impulsa la realización del plebiscito universitario el próximo 20 de enero. Por otra parte el CGH anunciará la realización de una consulta popular propia que tendrá lugar el 18 y 19 de enero próximos.

Cronología

- Miércoles 12** • Un grupo de 54 escritores entre los que se cuentan Carlos Fuentes, Carlos Monsivais, Angeles Mastretta, Elena Poniatowska, entre otros, manifiestan públicamente su apoyo a la propuesta de rectoría aprobada por el Consejo Universitario.
- Martes 18** • Se inicia la consulta organizada por el CGH con la instalación de mil quinientas casillas en el DF y zona metropolitana. La consulta es abierta a toda la población y cuenta con el apoyo de los frentes zapatistas de liberación nacional, el Frente Popular Francisco Villa, asambleas de barrios, secciones de la SNTE, entre otros y la participación de los padres de familia. La consulta consiste en tres preguntas. La primera inquiriere sobre la opinión respecto del pliego petitorio defendido por el CGH y su necesaria aprobación para levantar la huelga. La segunda consulta sobre el acuerdo respecto del reinicio del dialogo entre rectoría y el CGH para solucionar el conflicto Finalmente, la tercera interroga sobre si se considera que la propuesta impulsada por el gobierno busca confrontar con los universitarios e imponer una salida por la fuerza.
- Miércoles 19** • Continúa la consulta organizada por el CGH. Al cierre de la misma los representantes del CGH anuncian que participaron más de 120.000 miembros de la comunidad universitaria y 500.000 ciudadanos. Posteriormente se informará que mayoritariamente (en un promedio del 85%) los participantes de la consulta respaldaron las demandas del CGH.
- Jueves 20** • Se realiza el plebiscito convocado por la rectoría. El mismo consiste en dos preguntas. La primera consulta sobre el apoyo a la propuesta impulsada por el Rector, la segunda sobre si dicha propuesta debe concluir la huelga en la universidad. Con la instalación de alrededor de 700 mesas, el rectorado anuncia la participación de aproximadamente 160.000 miembros de la comunidad universitaria sobre un padrón de 400.000. Posteriormente se informará de los resultados finales que indican una aprobación a la propuesta de rectoría de alrededor del 87%.
- Viernes 21** • Mil quinientos trabajadores de la Empresa ICA en el complejo petroquímico de Cactus, Chiapas manifestaron en dicho complejo y retuvieron por mas de ocho horas a 57 directivos de PEMEX en reclamo de aumento salarial y mejor alimentación. Finalmente abandonaron la planta ante la llegada de fuerzas militares y policiales.
- Sábado 22** • El plenario del CGH realizado en el auditorio “Che” resuelve rechazar el plebiscito organizado por el rectorado caratulando de fraudulento y convoca a reinicar el diálogo sobre la base de los seis puntos del pliego petitorio.
- Lunes 24** • El rector De la Fuente exhorta públicamente al CGH a acatar los resultados del plebiscito y reanudar el dialogo pero con la universidad abierta. También convocó a toda la comunidad universitaria para que en cada una de las facultades, escuelas e institutos apliquen en los próximos las medidas necesarias para el reinicio de las actividades.

Martes 25 • El rector De la Fuente concurre a la UNAM para convocar al CGH a respetar lo aprobado en el plebiscito. El vallado de los huelguistas le impide acceder a la ciudad universitaria.

Domingo 30 • Concluye un nuevo plenario del CGH que pide reiniciar el diálogo con rectoría el 2/2

F e b r e r o

Martes 1 • La Policía Federal Preventiva (PFP) ocupa las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria No. 3 luego de intervenir ante incidentes desatados entre los miembros del CGH que ocupaban dicha escuela y un grupo de “antiparistas” que intentó retomar el establecimiento. El saldo fue de 37 heridos y 248 detenidos, muchos de ellos miembros del movimiento huelguístico. El CGH denuncia la provocación y represión, la violación de la autonomía universitaria y reclama por la liberación de los detenidos.

Viernes 4 • Se realiza una reunión cerrada entre representantes del CGH y de la rectoría. Esta insiste en la condición de levantar la huelga para reiniciar el dialogo mientras los delegados estudiantiles reclaman la liberación de los recientes detenidos, el retiro de la PFP y el reinicio del diálogo sin condiciones. Se rompen las negociaciones.

Domingo 6 • A primeras horas de la mañana más de 2000 miembros de la Policía Federal Preventiva ingresan al predio de la UNAM. Bajo la dirección del Ministerio Público las fuerzas policiales ocupan la universidad y detienen a los huelguistas que se encontraban en el recinto. Mas de 600 estudiantes fueron detenidos, luego la cifra se eleva a alrededor de 1000. Solo el PRI respalda públicamente la decisión de desalojar las instalaciones de la UNAM.
Por la tarde se realiza una movilización de más de 15.000 personas en rechazo a la represión policial y en la exigencia de liberar a los estudiantes presos.

Jueves 9 • Más de 100.000 personas (según información periodística) se movilizan a través de la ciudad en apoyo a los estudiantes presos, contra la violación de la autonomía universitaria y en la exigencia de inmediata libertad a los detenidos. Participan de la movilización, junto al CGH, padres de familia, sectores del PRD y sindicatos. Alrededor de 5000 estudiantes, padres de universitarios, profesores, trabajadores y sindicatos reingresaron en la ciudad universitaria y realizaron una asamblea del CGH en la Facultad de Economía. Entre otras cuestiones exigieron la libertad de los detenidos.

Viernes 17 • El CGH convoca a realizar un paro nacional universitario. Dicho paro tuvo eco en varios planteles de la UNAM donde se registran momentos de tensión entre estudiantes que rechazan la medida y los alumnos huelguistas.

Cronología

Viernes 25 • En México DF se movilizan más de 15.000 personas, según fuentes periodísticas, (el CGH calcula en 70.000 el número de participantes) de Tlatelolco al Zócalo exigiendo la libertad de los estudiantes presos.

Sábado 26 • Unos 300 representantes de seis poblados indígenas del municipio de Ocosingo, Chiapas bloquean la carretera y manifiestan frente al nuevo campamento militar instalado en el centro del poblado Nuevo Israel reclamando el desmantelamiento del campamento castrense y el levantamiento del retén que impide el tránsito de los pobladores.

• Se realiza una nueva reunión del plenario del CGH en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Finalmente resuelve reforzar su estructura y mantenerse como instancia de dirección del movimiento estudiantil, por otra parte rechazan la propuesta de transformar los comité de huelga en asambleas generales.

Marzo

Lunes 6 • El CGH toma la rectoría de la UNAM en medio de incidentes exigiendo a la rectoría a reiniciar el diálogo ahora que la universidad está abierta, y piden la libertad de los huelguistas aún presos.

Miércoles 8 • El CGH devuelve el edificio de la rectoría a las autoridades universitarias.

Viernes 10 • Se realiza una movilización de estudiantes y padres, que según fuentes periodísticas suman 10000 personas, exigiendo la libertad a los presos políticos y respuesta a los seis puntos del pliego petitorio.

Jueves 16 • Caficultores de doce estados efectúan su primera movilización nacional frente a la Secretaría de Comercio. Asisten cerca de 2000 representantes de las regiones cafetaleras del país para exigir que se apliquen medidas que ayuden al sector a salir de la crisis en que se encuentra.

Viernes 17 • El CGH impulsa la toma de las Direcciones de las Facultades y Escuelas de la UNAM. Según los medios periodísticos esta tiene una respuesta parcial.

Lunes 20 • Comunidades Zapatistas expulsan a más de 140 maestros rurales en protesta por el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, considerados en la iniciativa de ley sobre derechos y culturas indígenas; e instauran sus propias escuelas autónomas con planes de estudio independientes.

Lunes 27

- El rector De la Fuente llama a reanudar el diálogo y presenta su propuesta de instalar “mesas de diálogo” en todas las dependencias de la Universidad cuyas discusiones servirán de base para que el Consejo Universitario convoque a la realización del anunciado Congreso Universitario. A su vez reitera que se sancionaran las nuevas faltas con los mismos instrumentos que las anteriores. El CGH rechaza la convocatoria del rector.

A b r i l

Miércoles 5

- Está prevista la reunión del Consejo Universitario de la UNAM. El CGH bloquea los accesos a la reunión, rechazando el proceso de diálogo propuesto por el rector. El Consejo Universitario no pudo sesionar.

Lunes 10

- En el 81° aniversario de la muerte de Emiliano Zapata campesinos, organizaciones sociales, políticas y agrarias se manifestaron por diversos estados en demanda de políticas agrícolas nacionalistas además de exhortar a las organizaciones independientes a formar un bloque común que luche por las reivindicaciones sociales, entre ellas la posesión de la tierra.

- En Chiapas las demandas centrales fueron: que se cumplan los acuerdos de San Andrés y que las tropas del Ejército se retiren de las comunidades.

En las principales ciudades de Oaxaca se movilizan alrededor de 75.000 campesinos, vecinos y organizaciones políticas y sociales. Marchas, bloqueos de carreteras y tomas de edificios públicos se registran en ciudades como Tuxtepec, Juchitan, Huatulco, Pinotepa. En Tapachula campesinos de cinco municipios de la costa se movilizan en demanda de una tarifa preferencial de energía eléctrica así como por un justo reparto de la tierra.

Miércoles 12

- El CGH realiza un paro estudiantil de 24 horas que afecta a 23 escuelas de la UNAM, en cuatro de ellas bajo la modalidad de paro activo. El rector instruye a la abogada general de la UNAM a actuar con energía y levantar actas contra los paristas. Por otra parte la rectoría informa que ya suman 53 las dependencias académicas que se suman al debate planteado por las autoridades.

Jueves 13

- Después de varios incidentes, el Consejo Universitario, pese al intento de bloqueo impulsado por el CGH, consigue sesionar. Aprueba descentralizar el cuerpo de seguridad de la UNAM dándole facultades a las escuelas para organizar sus propios cuerpos. El rector pide la intervención de la policía para resguardar las instalaciones durante el período vacacional.

Sábado 15

- La Policía Federal Preventiva cerca la universidad.

Cronología

- Lunes 17** • El Sindicato de Telefonistas de la Rep. Mexicana (STRM) amenaza con iniciar un paro en Telmex, si dicha empresa no concede el incremento salarial exigido por el sindicato en las negociaciones contractuales en curso.
- Martes 25** • El CGH y la comisión de rectoría acuerdan iniciar el próximo jueves 27 la discusión de cada uno de los seis puntos del pliego petitorio en base a los acuerdos del 10/12/99.
- Jueves 27** • Se reinicia el diálogo entre el CGH y rectoría. El primer punto del debate abordado fue la situación de los estudiantes aún detenidos. Por otra parte el Rector anuncia que no acudirá a las instancias judiciales y pide agilizar la liberación de los estudiantes.
- Viernes 28** • Continúa el diálogo entre el CGH y la comisión de rectoría. Se inicia el debate sobre el segundo punto del pliego: la eliminación de los cuerpos represivos y de espionaje.
- Domingo 30** • Integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) para el conflicto de Chiapas, demandan al gobierno federal recapacitar y dar marcha atrás en la decisión de enviar a la Policía Federal Preventiva (PFP) a la Selva Lacandona, ya que dicha decisión viola la ley para el diálogo en Chiapas y pone en riesgo el precario equilibrio en la zona.

* Realizada por Clara Algranati y José Seoane, OSAL
Fuentes: diario *La Jornada*; se consultó también la página Web "UNAM en huelga"
(<http://www.geocities.com/CollegePark/Den/2793/>)

Paraguay*

E n e r o

Domingo 9 • Enfrentamiento entre campesinos y fuerzas policiales en San Pedro, Estancia “La Esperanza”. Se ordenó el desalojo y la detención de los campesinos que terminó en intercambio de disparos de armas de fuego produciendo la muerte de dos campesinos y ocho heridos (Versión periodística). Pese a las promesas del gobierno, la problemática de los campesinos sigue sin resolverse.

Lunes 10 • Labriegos respondieron a los disparos de la policía exigiendo la expropiación de 10.000 hectáreas de “La Esperanza”, una propiedad que cuenta con 35.000 hectáreas. Tres campesinos murieron y más de 20 resultaron heridos.

Viernes 21 • Violenta manifestación de choferes en repudio al aumento del pasaje. Un grupo de choferes nucleados en la Federación de Trabajadores del Transporte (FETRAT) y en la Confederación de Sindicatos de Trabajadores del Transporte (CSTT) se manifestaron frente al Ministerio de Transporte mientras se encontraba reunido el Consejo Asesor del Transporte. La protesta se vio plagada de hechos de violencia.

Lunes 31 • Alrededor de 400 campesinos (versión periodística) del asentamiento Maracaná, Distrito de Curuguaty (Canindeyú) ocuparon el local del Instituto de Bienestar Rural (IBR) para exigir a las autoridades la regularización de sus tierras, la solución a los problemas indígenas de la zona y el desarrollo rural.

101

F e b r e r o

Lunes 14 Afiliados a tres gremios docentes fueron convocados a una huelga general del 14 al 28 de febrero y llamados a concurrir a clase desde el 2 de marzo. La medida fue acordada en protesta por la usurpación de “derechos adquiridos” y en rechazo a la ausencia de una educación pública, gratuita y de calidad. Participaron la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), la Asociación de Educadores Rurales de San Juan, Misiones (AERS) y la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP). Estos tres sindicatos docentes reunirían a unos 8.000 afiliados, la mayoría de los cuales se encuentran radicados en el interior del país. Dirigentes de la Federación Nacional Campesina (FNC) apoyaron la convocatoria y llamaron a sus bases a colaborar con la huelga.

• Grupos populares reclaman democracia social y económica. El Congreso Popular 2000, organizado por distintas organizaciones sociales del país alcanzó un consenso sobre las siguientes demandas: no a la privatización salvaje, precio justo al algodón, poner en vigencia la reforestación, fin de apresamiento indebido de campesinos, no al servicio militar obligatorio y continuar el estudio de la reforma agraria, entre otros. Algunas de las organizaciones participantes fueron: Sindicato de la Ande (SITRANDE), la INC, Corporana y Antelco.

Jueves 17 17 Labriegos nucleados en la Organización Nacional Campesina (ONAC) y líderes obreros de la Central Nacional de Trabajadores cerraron la ruta 10 que une Curuguaty con la zona de Salto del Guairá, fronteriza con Brasil, en protesta por la violencia e impunidad con que actúan los

Cronología

ganaderos de la zona y para conseguir una reforma agraria integral. Tras 8 horas del cierre de la ruta y en la presencia de las autoridades nacionales, se logró un acuerdo para permitir el libre tránsito automotor y proveer tierras a los campesinos.

Viernes 18

18 Docentes de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) levantaron la medida de fuerza y regresarán a las clases tras la firma de un acuerdo con las autoridades de educación. La huelga se había iniciado el 14 de febrero en busca de una mejora en la calidad educativa. La huelga no tuvo gran repercusión y el impacto fue mínimo, ya que el sector mayoritario de maestros responde al movimiento de la Alianza Sindical que no se adhirió a la medida.

M a r z o

Viernes 10

- Manifestantes cerraron la ruta 2 en protesta por el posible traslado del Correccional de Menores “Panchito López” en Itauguá, y fueron reprimidos por la policía.

Miércoles 15

- Alrededor de 30 mil campesinos (versión periodística) convocados por la Federación Nacional Campesina (FNC) acamparon pacíficamente frente al Congreso Nacional en reclamo de mayor atención gubernamental al sector; reactivación del agro; cambio del sistema crediticio y 1.500 guaraníes por cada kilo de algodón; creación del seguro agrícola para casos de calamidades climatológicas; desarticulación de los latifundios y el traslado de la tecnología al campo. Se unieron a la Marcha la CNT, el gremio de educadores (OTEP), los sin techo. El objetivo de la movilización fue entregar al gobierno un petitorio con propuestas para la reactivación productiva del país y la reforma agraria. El Gobierno Nacional fijó para el 17 de marzo una reunión con los principales dirigentes de la FNC, en el Ministerio de Agricultura, para estudiar los puntos presentados al Presidente, Luis González Macchi. Si las promesas no se cumplen habrá más movilizaciones, cortes de rutas, invasiones y otras acciones de protesta.

Sábado 25

- Campesinos nucleados en la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) conjuntamente con el frente Sindical y Social marcharon a Asunción con el objetivo de poner fin a la impunidad, conseguir la reforma agraria y en respaldo a los trabajadores de la ANDE que están en huelga desde hace más de un mes. Los manifestantes permanecerán frente al Congreso por tiempo indefinido hasta lograr un resultado concreto por parte del Gobierno Nacional.

Lunes 27

- Manifestación en Santa Rosa (San Pedro) en solidaridad con los labriegos que marcharon a la capital fue reprimida por la Policía dejando un saldo de dos campesinos heridos de gravedad.

Martes 28

- Intensas negociaciones llevaron al levantamiento de la medida de fuerza adoptada por los campesinos del departamento de San Pedro, quienes consiguieron que el Gobierno ratifique su compromiso sumido en noviembre del año pasado de asistir económicamente a un proyecto de desarrollo productivo que beneficiará a 1500 familias rurales de la zona.

Miércoles 29

- Campesinos nucleados en la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) conjuntamente con el frente Sindical y Social que se manifestaron por tres días en la capital regresaron satisfechos al campo luego de lograr los acuerdos con el gobierno.

Trabajadores de la ANDE (Administración Nacional de Electricidad) levantaron la huelga luego de 38 días de suspender sus actividades. Los puntos del acuerdo son: cambio de sanciones; análisis caso por caso de los despedidos; traslado de funcionarios corruptos; aumento de un 10% de salario; la ANDE apoyará el plan de una caja de jubilaciones, entre otros.

* Realizada por Fabiana Werthein y Clara Algranati, colaboradoras del OSAL
Fuentes: diario electrónico Noticias on line de Paraguay, y ABC Color

Perú*

E n e r o

Sábado 1

• Organizaciones sociales, sindicales y políticas de Ancash conformaron el Frente Amplio Cívico Regional y convocan para el próximo 6 de enero a una movilización de protesta contra el re-reelección. Uno de los acuerdos de esta organización fue responsabilizar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por las consecuencias que pudiera generar una decisión al margen de lo que dispone la Constitución frente a los pedidos de tacha a la candidatura del mandatario presentados por varias agrupaciones políticas.

Jueves 6

• Trabajadores, profesionales, jóvenes, amas de casas y jubilados se manifestaron en todo el país contra la postulación del presidente Fujimori, a un ilegal tercer período, y demandando a los candidatos de oposición la unidad en la primera vuelta electoral. En Lima, cerca de 30 mil personas hicieron sentir su voz en las principales calles de la ciudad. Gran repercusión en el interior del país.

Jueves 13

• El Frente de Defensa de la Salud y la Seguridad Social convocó para hoy a una marcha de repudio al proyecto de ley presentado en el Congreso por el legislador oficialista Luis Delgado Aparicio, con la que se intenta liquidar el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS). Los manifestantes pidieron que la Seguridad Social tenga carácter solidario, igualitario, integral y universal para todos los peruanos, que las empresas morosas y el Estado cumplan con pagar sus deudas al IPSS y que la ONP devuelva los bienes y recursos arrebatados por ese organismo. Participaron en la marcha los siguientes gremios: Frente Nacional de Defensa de la Salud y la Seguridad Social (Friends), Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Central Nacional de Jubilados y Pensionistas (Cenajupe), Asociación Médica del IPSS (Amssop), Federación Médica del Perú, Academia Peruana de la Salud, Confederación Unificada de Trabajadores Pensionistas del Perú, Confederación de Trabajadores del Perú, Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud, Sindicato de Trabajadores de Electrolima, Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, Colegios profesionales, Organizaciones populares.

Jueves 20

• Profesionales del Seguro Social (médicos, enfermeras, dentistas, técnicos y auxiliares de Essalud) a nivel nacional paralizaron sus labores exigiendo la atención de su pliego de reclamos, entre cuyos puntos se encuentran el aumento de sus salarios y el respeto a la línea de carrera en el sector. Esta nueva jornada de protesta es impulsada por la Asociación Médica del Instituto Peruano de Seguridad Social (AMSSOP).

Viernes 28

• Paro regional de 24 horas en Puno acatado por miles de personas (versión periodística) en contra de la política neoliberal del gobierno. La medida de fuerza, convocada por el Frente de Organizaciones Populares (FOP) fue acatada también en las provincias del sur y parte del norte puneño, donde se paralizaron todo tipo de transportes de unidades vehiculares. Más de 80 comités de electrificación, agremiados a la Asociación de Usuarios de Electrificación del Departamento de Puno, y transportistas se plegaron a la lucha. En Callao también marcharon contra la política neoliberal. Cientos de trabajadores, jubilados, pensionistas, mujeres agrupadas en organizaciones populares y dirigentes de base (versión periodística), marcharon por las calles del primer puerto en protesta por la política neoliberal del actual régimen y demandaron la creación de la Región Autónoma del Callao, además de recursos del canon aduanero, la no privatización de los puertos y el restablecimiento de una legítima democracia en el país.

Sábado 29 • Marchas regionales simultáneas de los Pueblos Amazónicos en rechazo a la Ley de la Amazonía, los acuerdos globales con Ecuador, el desarrollo integral de la región y reclamando la convocatoria a elecciones regionales. Organizaciones cívicas, sectores empresariales, comerciales, laborales, vecinales, transportistas, estudiantes, campesinos y ciudadanía en general se manifestaron en sus respectivas ciudades (aproximadamente 10 mil personas en Iquitos, 15 mil en Tarapoto y 12 mil en Pucallpa -fuente periodística) fueron convocadas por el Frente Patriótico de Loreto (FPL), la Municipalidad provincial de Tarapoto y la Coordinadora Democrática por la Defensa de Ucayali.

Lunes 31 • Jubilados y trabajadores de la construcción civil realizaron una movilización conjunta hasta la sede principal de Essalud y al Ministerio de Trabajo para exigir la restitución de la atención médica y la generación de puestos de trabajo para más de 200 mil obreros que se encuentran desocupados. Cientos de obreros (fuente periodística) de la construcción civil marcharon por la avenida Colonial hasta la sede del Ministerio de Economía, exigiendo a gritos la reposición de los más de 300 puestos de trabajo y permanecieron frente al local de la entidad pública durante seis horas. Los manifestantes fueron en su mayoría obreros de las empresas contratistas Sade Cocysa y Bruce, empresas que desde hace algunos días paralizaron las obras de rehabilitación de los servicios de agua y desagüe que realizaban para la empresa del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal), debido al recorte presupuestal que está realizando el Ministerio de Economía y Finanzas.

Febrero

Domingo 6 • Una movilización pacífica del Frente Patriótico de Loreto contra la re-relección terminó en una violenta represión policial contra dirigentes de esa organización quienes borraban pintas de Perú 2000. Cuatro personas resultaron con heridas graves (dos de ellos con custodia policial), y otras ocho se encuentran detenidas en Seguridad del Estado.

Lunes 7 • La Federación Nacional de Trabajadores Portuarios (Fentenapu) anunció que se extenderá a nivel nacional la campaña de recolección de firmas cuyo objetivo es alcanzar las 200 mil rúbricas para impedir la privatización de los puertos.

Miércoles 9 • Un 95 por ciento de la población de Ayacucho acató el paro departamental contra la ilegal candidatura a la re-reelección del actual presidente y la incapacidad del alcalde gobiernista de Huamanga, Félix Solar. Durante el paro departamental, los manifestantes (más de 10 mil según fuente periodística) convocados por el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho se volcaron a las calles para expresar su descontento por el alza de los precios de los combustibles, las tarifas de agua, luz y teléfono, así como por el incesante aumento de la desocupación.

Jueves 10 • Miles de mototaxistas bloquearon ayer durante tres horas el tránsito vehicular en el centro de Chiclayo, en cumplimiento del paro nacional y en demanda de una nueva reglamentación para el adecuado funcionamiento de su sector. En la jornada de protesta se produjeron violentos enfrentamientos entre los propietarios de estos vehículos menores y efectivos de la policía que les cerraron el paso para tratar de impedir que lleguen al Parque Principal de la ciudad. Policías y mototaxistas se enfrentaron con palos, piedras y bombas lacrimógenas en diferentes sectores de la ciudad. Al final, sólo unos 30 mototaxistas pudieron ingresar al parque principal y exigir la modificación del Reglamento General de Vehículos Menores 002-2000, emitido el 22 de enero pasado.

Miércoles 16 • Jornada nacional de protesta en todo el país contra ilegal re-reelección de Fujimori y su política económica protagonizaron hoy en todo el país diversas organizaciones sindicales, sociales, populares y políticas, convocadas por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). También marcharon en Piura, Trujillo, Arequipa y Cusco.

Martes 29

• Marcha al Palacio de Gobierno de jubilados y obreros de la construcción desempleados en demanda de aumentos de salarios y reactivación de la industria de la construcción. Bernardo Fernández y Mario Huamán, presidente de la Central Nacional de Jubilados y Pensionistas y secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, respectivamente, confirmaron la realización de este acto de protesta y demandas sociales que se iniciará a las 11 de la mañana, frente a la sede del Ministerio de Trabajo.

M a r z o**Lunes 6**

• Jornada Nacional contra el Fraude por la inconstitucional postulación de Fujimori y en demanda de la unidad de las fuerzas de oposición para impedir la re-reelección. Paros y movilizaciones se realizaron en todo el país.

Miércoles 8

• Marcha Mundial contra la Pobreza y la Violencia realizada por centenares de mujeres (fuente periodística) de diversas organizaciones para exigir indemnización por esterilizaciones forzadas, respeto a los mecanismos democráticos y el fin de la manipulación de la ayuda alimentaria. Participaron de la marcha al Palacio de Gobierno más de 150 organizaciones en todo el país en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Martes 14

• Trabajadores petroleros de Lima y provincias cumplieron ayer una paralización de 24 horas exigiendo al Poder Judicial dejar sin efecto una acción de amparo a través de la cual el Estado, por intermedio de Petroperú, se niega a pagar un incremento de sueldos de 11 % fijado por una comisión de árbitros.

Jueves 16

• Trabajadores de los 113 hospitales, postas médicas y demás dependencias del Ministerio de Salud a nivel nacional, paralizaron sus labores en demanda del incremento de remuneraciones y la solución inmediata a su pliego de reclamos presentado el año pasado. Oscar Plascencia, secretario general de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (Fenutssa), dijo que los sindicatos de provincias como Trujillo, Huancayo, Puno, Tacna, Ayacucho, Ica, Cerro de Pasco, Huancavelica, Cusco y otros han asegurado la paralización total de labores. La jornada se desarrolló con movilizaciones en diversos puntos del país, donde los trabajadores se movilizaron desde sus centros de trabajo hasta las sedes de las direcciones y subdirecciones regionales, mientras en Lima se hizo una concentración masiva en la Plaza Mayor. Las demandas: Solución al Pliego de Reclamos; No a la privatización del sector; No a la municipalización; Nombramiento de personal contratado; Restitución de los beneficios sociales; Aumento del presupuesto; Pago de un incentivo económico de S/. 613 soles a cada trabajador del sector; Incremento del básico; Restitución de sepelio y luto; Aumento real de sueldos de acuerdo a la Canasta Básica Familiar valorizada en 1,600 soles.

• Maestros afiliados al Sindicato Unico de Trabajadores en la Educación (Sutep) realizan una marcha al Ministerio de Educación demandando al ministro de Educación, Felipe García Escudero, el inicio de una política de diálogo con ese gremio para solucionar los graves problemas que afectan a los profesores y a la educación en general.

Martes 21

• La Federación de Campesinos de Puno reveló que cientos de sus afiliados del interior del departamento iniciaron las marchas de sacrificio descentralizadas a esta ciudad del Altiplano, en lo que marca el inicio de la Movilización Nacional Contra el Fraude en esta parte del país.

Jueves 23

• Movilización Cívica Nacional contra el Fraude. Diversas organizaciones políticas, sindicales y sociales, tanto regionales como nacionales, se manifestaron en una Movilización Cívica Nacional contra el fraude y la reelección, donde demandaron al presidente candidato, Alberto Fujimori, su retiro del proceso electoral. Los maestros del Sutep y los trabajadores médicos, enfermeras y asis-

tencia de Essalud, por su parte, cumplirán una paralización de 24 horas en protesta por el desinterés del gobierno para resolver sus problemas laborales y para exigir el establecimiento de una verdadera democracia.

A b r i l

Martes 4

• Trabajadores del Instituto Nacional de Salud del Niño (Hospital del Niño) inician hoy un paro de 48 horas en demanda a su pliego de reclamos que hasta el momento no ha sido atendidos por las autoridades del sector. Exigen el incremento de salarios a Técnicos en Enfermería, Personal de Apoyo Asistencial y Administrativo que pertenecen a la Clínica del Instituto de Salud del Niño, además el respeto al fuero sindical, a la libertad de expresión así como al concurso de Jefaturas de acuerdo a las leyes vigentes; y restricción de contratos. Otros puntos que señala la plataforma es la programación de horas extras a todo el personal, así como el incremento de la Bolsa de Víveres y del incentivo a la productividad.

Miércoles 5

• Protesta de los jóvenes contra el fraude. A partir de las 11 de la mañana la Plaza Francia será “invadida” por la movida joven Antimegafraude para protestar en contra del fraude electoral y el autogolpe del 5 de abril de 1992 que liquidó el orden institucional democrático con el claro objetivo de perpetuar en el poder al presidente Alberto Fujimori. La movida Antimegafraude, compuesta por jóvenes estudiantes, trabajadores e integrantes de diversas instituciones sociales, en alusión a las irregularidades cometidas por el gobierno en el proceso electoral.

Domingo 9

• Se realizaron elecciones presidenciales y legislativas. Las elecciones presidenciales arrojaron sobre un total de 11.213.012 (82% del recuento de votos) votos válidos los siguientes porcentajes: Alberto Fujimori por PERU 2000, 49.85 %; Alberto Toledo por Peru Posible, 40.41%; Alberto Andrade por Somos Peru, 2.93 %; Federico Salas por Avancemos, 2.21%; Luis Castaneda Lossio por Partido Solidaridad Nacional, 1.82%; otros candidatos 2.15%. Las elecciones legislativas contaron con un total de 7.830.802 votos validos entre los cuales los porcentajes obtenidos por partido fueron los siguientes: Peru 2000 el 41.80 %; Peru Posible el 22.84%; Frente Independiente Moralizador (FIM) el 7.89 %; Somos Peru el 7.30%; el Partido Aprista Peruano (PAP) el 5.84 %; Partido Solidaridad Peruano (PSN) 4.28; el Avancemos 3.17%; el Union por el Peru (UPP) 2.56%; el Acción Popular (AP) 2.18%; el Frente Popular Agrícola Del Peru (FREPOP) 2.13%.

• Centenares de jóvenes (fuente periodística) se movilizaron por diversas arterias de Lima, en un acto denominado “En defensa de la voluntad popular: No al fraude”. La Policía atacó con bombas lacrimógenas la marcha popular contra el fraude para dispersar a la multitud.

Miércoles 12

• Rechazo del fraude en Lima, Arequipa, Iquitos, Tacna Cusco, Piura, Huánuco, Chimbote y Huaraz. Miles de personas (fuente periodística) marcharon a la Plaza Mayor, luego de desfilar frente al local de la ONPE y rumbo a los canales de TV de señal abierta. Líderes políticos llaman a la resistencia pacífica y preparan Paro Nacional contra el fraude. Ante más de cien mil personas (fuente periodística), el candidato de Perú Posible, Alejandro Toledo, anunció que impulsará un Paro Nacional de resistencia y de respeto a la voluntad popular, y que junto con los candidatos presidenciales se ha tomado la decisión de declarar fraudulento el proceso electoral debido a las serias irregularidades orientadas a perpetuar en el poder al presidente Alberto Fujimori.

* Realizada por Fabiana Werthein, colaboradora del OSAL
Fuentes: diario La República

Debates teóricos

En esta sección, destinada a abrir y estimular los debates teóricos, se presentan a la consideración del lector, en este número, tres trabajos a cargo de distinguidos especialistas. El primer artículo, de Hugo Zemelman, nos interpela sobre la responsabilidad ético-política que le cabe a las ciencias sociales ante la realidad del capitalismo salvaje que signa la región latinoamericana. A partir de un replanteo de las preguntas básicas de la reflexión social, Zemelman valoriza el ángulo de lectura que parte del par sujeto-conflictividad en su capacidad radical de poner la mirada en la génesis de los sujetos y la historicidad de los procesos. En este sentido, contra las visiones economicistas y naturalizadoras de lo social, la reflexión del autor propone una aproximación de corte epistemológico que de cuenta, en su propio formato, de la responsabilidad y el aporte indispensable que le cabe a las ciencias sociales en la tarea de forjar utopías.



El segundo artículo, de Ellen Meiksins Wood se adentra con agudeza en un par de problemas cruciales: la naturaleza de la globalización y, por otra parte, el papel del estado-nación. En relación al primer tema, íntimamente vinculado a la problemática de la competencia en el interior y entre las economías capitalistas, la autora señala que la intensificación del proceso de globalización, o mundialización, es la expresión de la lógica capitalista por excelencia y que la fase actual, lejos de testimoniar la atenuación de las rivalidades capitalistas no ha hecho sino exacerbarlas, abriendo así las puertas para una efectiva lucha anti-capitalista. En lo tocante al segundo tema Meiksins Wood plantea que si bien es innegable que han habido procesos de transferencia de soberanía desde el estado-nación hacia los actores supra o transnacionales, lo cierto es que aquél continúa siendo un agente crucial para asegurar la reproducción del capital en la economía global, y que la conquista del estado por parte de las clases populares continúa siendo un objetivo de inigualable importancia.

Finalmente la contribución de René Mouriaux y Sophie Beroud, partiendo de sendos trabajos anteriores sobre las huelgas y movilizaciones del '95, '97 y '98 en Francia, avanza en una extremadamente rica reflexión acerca de distintas conceptualizaciones sobre el movimiento social y sus inscripciones teóricas. En este camino, tras la permanente referencia a la experiencia del movimiento social en Francia, los autores analizan críticamente las interpretaciones y aproximaciones teóricas de dos de los más conocidos sociólogos franceses como son Pierre Bourdieu y Alain Touraine, proponiendo una tercera interpretación que hunde su inspiración teórica en la obra de Marx.

En este sentido confiamos que este texto, junto a los dos referidos anteriormente, sirvan a los efectos de enriquecer el filosófico debate que la reflexión social crítica se plantea alrededor del conflicto y los movimientos sociales.

Conocimiento social y conflicto en América Latina

Notas para una discusión

Por Hugo Zemelman*

1.- La actual situación en América Latina aparentemente sin otra salida que el capitalismo salvaje, obliga a trabajar profundamente por alternativas que rompan con el discurso hegemónico dominante, que, disfrazado del lenguaje de la tecnología, presume ser inevitable y excluyente. Los esfuerzos por romper con este mandato valórico enraízan con el afán de sobrevivencia de gran parte de la especie humana. Pues los favorecidos por esta nueva arca de Noé del capitalismo transnacional – neoliberal son pocos, quizás demasiado pocos. La mayoría están quedando a la intemperie de la sorda y ciega lucha por quién domina a quién.

En éste contexto debemos plantearnos los interrogantes sobre el papel de las ciencias sociales si concordamos en que éstas tienen una responsabilidad ético – política, en la medida que el conocimiento que construyen tendría que servir de soporte a decisiones de políticas. En consecuencia, la naturaleza de los problemas que se planteen, o son expresión de decisiones previamente definidas, o, por el contrario, implican decisiones vinculadas con opciones diferentes de construcción social. En efecto ¿Qué significa preocuparse de problemas como la pobreza, la paz, la gobernabilidad, etc?

Una posibilidad de respuesta es contribuir a consolidar el funcionamiento de los poderes establecidos o bien, anticipar proyectos diferentes de sociedad. Lo que decimos coloca en el primer plano de la discusión metodológica lo que significa construir un problema.

¿Sabemos construir un problema? ¿Sabemos plantearnos frente a la realidad una agenda que difiera de las agendas de las burocracias nacionales e internacionales, o bien de las agencias de financiamiento? ¿Estamos rompiendo con los parámetros de lectura que imponen las lógicas del poder? ¿De dónde surgen los temas que preocupan actualmente a las ciencias sociales? ¿Surgen de una imaginación alerta y rupturista, o más bien de su vocación por ser eficazmente útiles a los problemas que imponen los proyectos de sociedad hoy dominantes?

2.- Desde ésta perspectiva enfrenta el conocimiento socio – histórico un desafío fundamental entre los muchos posibles: han quedado arrumbadas algunas referencias del pensamiento que han servido para orientarlo, como ser la crisis de los acto-



res históricos con los que se identificaba la construcción de la sociedad del futuro; y, de otra parte, la certeza de un proceso de transición hacia una etapa éticamente superior en la vida de los hombres. En su lugar se multiplican una proliferación de actores sin proyectos de largo plazo, todos los cuales, o gran parte de los cuales, se arremolinan al interior de un capitalismo que parece impune a sus embates, que, por el contrario, avanza inexorablemente hacia una especie de triunfo paradójico: la autodestrucción colectiva como el costo que la humanidad tendría que pagar por la ceguera del lucro, de la ganancia, de la rentabilidad.

Como se ha dicho, la precariedad asume el status de definitividad casi ontológica, perdiéndose la idea de historia que contenga el desafío de otras posibilidades de construcción social. El interés particular de grupos minoritarios se disfraza de objetividad, la ceguera irresponsable se identifica con el curso de la historia, la estulticia de diestro manejo de lo dado. Ante ello ¿Qué decir? Además del reclamo casi profético por la reinstalación de los valores orientados hacia el rescate del hombre y de su futuro, de la incorporación de la utopía como fuerza social y moral, y de los esfuerzos por liberar a la inteligencia de la tecnología convertida muchas veces en estupidez, el Frankenstein del siglo XXI, de manera de doblegarla en vez de transformarla en el molde de los futuros sujetos, con riesgo de perder lo que caracteriza específicamente a lo humano, el lenguaje ¿Qué decir desde las ciencias sociales, este conjunto de conocimientos que supuestamente surgieron para hacer posible una vida más libre, justa y digna? ¿Qué decir y qué hacer? Quizá algo más modesto pero central: repensar nuestro quehacer y nuestro modo de enfrentarnos con la realidad social.

3.- En este marco histórico y existencial se plantean cuestiones básicas. Entre éstas está la de recuperar ángulos desde los cuales organizar nuestra mirada de la sociedad; ángulos

que no queden atrapados ni por lo tanto limitados por grandes verdades. En éste sentido pensamos que un ángulo fundamental por su vastedad y resistencia a convertirse en contenido de teorías cerradas, es la naturaleza y práctica de los sujetos sociales, si estamos de acuerdo que la realidad socio-histórica es siempre una construcción de una variada gama de sujetos. El esfuerzo por impulsar construcciones sociales diferentes, también contradictorias, conforman un eje estructurador central de la realidad social como es el conflicto en todas sus manifestaciones, espacios y temporalidades. Y que no es sino la expresión fenoménica de la capacidad de activación de los sujetos y de sus distintas proyecciones históricas. De ahí que para dar cuenta de cualquier problema social, económico, político o cultural no se pueda prescindir del ángulo de lectura conformado por el par sujeto – conflictividad; ya que alude a las dinámicas constituyentes de la realidad social. Ello, si no queremos dejar de reconocer la especificidad histórica que tienen los diversos temas y problemas: ¿Qué es la paz? ¿Qué es el progreso o la llamada modernización? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la justicia social? ¿Qué significa hablar del futuro o de la integración latinoamericana?

4.- Pero ¿De dónde surgen los sujetos? Del mundo de las necesidades y de su despliegue que articulan como tales las necesidades propias de la memoria y las necesidades vinculadas con las visiones utópicas. Memoria y utopía que muchas veces pierden las particularidades del sujeto al que pertenecen para ser convertidas en esquemas generales que ocultan la diversidad de fuerzas que pugnan por ser en su propia construcción de la realidad histórica. Por ello recibe aquí el núcleo germinador de la condición conflictiva de toda realidad: la posibilidad de reconocer por cada sujeto, desde sus espacios y tiempos, sus propias opciones resistiendo a la pretensión del poder por imponer su homogeneización como si ésta respondiera a una ley natural. En verdad, cada actor tiene su espacio y su tiempo no pudiendo ser ubicado para su debida interpretación y evaluación de sus fuerzas en el espacio y tiempo, por ejemplo, del orden dominante. Aunque está claro que los ritmos de cada uno de ellos es diferente con lo que se determina una situación de conflictividad particular.

A este respecto, cabe mencionar los procesos de polarización social y económica que resultan de dinanismos no necesariamente sincrónicos entre lo que son los mecanismos de constitución de la pobreza y de la riqueza. La creación de pobres, así como el surgimiento de la conciencia de ser pobre, no es simétrica con la creación de la concentración de riqueza ni con la conciencia de ser rico. Es indudable que el ritmo de constitución de la riqueza es más acelerado que el de su opuesto, lo que se relaciona con el viejo tema de la asincronía en el desenvolvimiento del factor trabajo y del factor capital. He aquí un tronco de conflictividad que plantea desafíos múltiples. Entre éstos está el de la creación y reconocimiento de espacios desde los cuales leer a la sociedad, porque ésta tiende a ser leída desde lo ya constituido como poder, equilibrio, riqueza, que es lo que consiste la hegemonía. Por eso hay que resistir a interpretaciones de la sociedad y de su futuro organizadas desde los espacios sociales y los ritmos impuestos por

los parámetros de la dominación hegemónica; lo que es condición para poder descomponer los procesos internos de la dominación y su fijación de lo socialmente establecido. Es el aporte con que contribuyen al pensamiento crítico algunos movimientos sociales protagonizados por sectores subalternos. Es el caso de los movimientos indígenas.

De lo anterior se deriva la importancia de centrar nuestra atención en los lugares sociales donde se contiene la capacidad de conflicto. Es así como se pueden distinguir distintas modalidades de conflictividad:

a) Aquellas que se circunscriben a los límites de las realidades parametralizadas por el poder: v.gr.: los sindicatos, el movimiento feminista, algunas reivindicaciones ecologistas; y b) Aquellos otros conflictos relacionados con realidades que transgreden esos parámetros, que, por lo mismo problematizan a la hegemonía más allá del simple juego de acomodados: vgr.: los movimientos indígenas, la demanda por tierra, las reivindicaciones por transformar a la democracia en un espacio abierto a múltiple proyectos.

5.- Esta capacidad de conflicto, más que sus expresiones morfológicas, debe ser nuestra preocupación pues apunta a una de las cuestiones más profundas del actual momento histórico, como son los intentos por minimizar sistemáticamente los riesgos de presión sobre el modelo económico. Entre los mecanismos utilizados para este propósito se encuentra la atomización social, la disolución de las relaciones de horizontalidad; pero también están los esfuerzos por acotar los espacios dentro de los cuales se pueden los sujetos desarrollar “legítimamente”, esto es, sin cuestionar el orden establecido. Es la imposición de parámetros de un orden permisivo de márgenes de conflictividad.

Una manifestación concreta de lo anterior es la rápida conformación de la democracia de ser un sistema político caracterizado por la garantía de espacios de alternancia entre proyectos, a una democracia que se identifica exclusivamente con un solo proyecto de desarrollo económico y político. Es cuestión de constatar cuánto pensamiento socialdemócrata, incluso socialista que dice mantener su raigambre marxista, transformado en administrador y aval de políticas conducentes al cumplimiento de ése objetivo estratégico. Lo anterior sin entrar en mayores profundidades como los intentos por crear un ser humano que se respete para continuar siendo sujeto, pero siempre que no rompa con la condición de ser un “sujeto mínimo”. Mínimo en pensamiento, en emocionalidad, en capacidad para vislumbrar su propio futuro, mínimo en su voluntad para enfrentar las circunstancias que lo someten a la condición de explotado y subalterno.

El ángulo que defendemos conformado por el par sujeto - conflictividad no se corresponde con ningún calificativo ideológico de los que dominaron la discusión casi todo el siglo XX, como ser el de gradualismo y revolución; más bien implica todas las formas de cuestionamiento de la hegemonía en forma de adentrarse en sus intersticios. Esto es, en sus dinanismos constituyentes como ser el surgimiento, desarrollo y

transformación de los sujetos, atendiendo a sus diferentes significaciones históricas para el momento actual, pero también tomando en cuenta su proyección en el mediano y largo plazo. Lo que trae consigo la necesidad de revisar a la actual teoría desde las exigencias de cómo recuperar la historicidad del momento actual, es decir, su condición de ser un producto y además todas las potencialidades que permanecen ocultas; las cuales dependerán de la presencia de determinados sujetos sociales aunque también individuales, en la medida que la realidad social no es el resultado del juego de leyes celestes sino una construcción de los propios hombres. Claro que en este ámbito de la realidad cabe lo que no es posible en la naturaleza: que la aceptación conformista se transforme en regularidad empírica.

Desde el ángulo que hemos expuesto se desprende la necesidad de definir algunas conclusiones respecto a las Ciencias Sociales. El conocimiento de cualquier fenómeno social, en su acepción genérica, tendrá que considerar las exigencias que se derivan de este ángulo. Estas las resumimos en las siguientes:

- a) el movimiento interno de los sujetos: génesis, desenvolvimiento y transformación, así como la naturaleza de sus proyecciones en los distintos planos de la realidad;
- b) la influencia de las coyunturas en la construcción del conocimiento y su ensamble con una perspectiva transcoyuntural, de manera de no quedar atrapado en la condición de producto de los fenómenos;
- c) relativizar a las estructuras destacando sus dinamosmos internos, sus momentos de despliegue y repliegue, de manera de cuestionar los parámetros que tienden a fijar el fluir de los fenómenos en una identidad histórica particular.

De manera más concreta, lo que decimos se corresponde con la urgencia de discutir para poder resolver la cuestión de los límites disciplinarios, por cuanto estos ya no permiten dar cuenta de la complejidad de los fenómenos que emergen, en razón de estar sometidas a la lógica simplificada de objetos aislados. En esta dirección, también se hace imperativa la discusión a cerca de las diferentes modalidades de los sujetos que en el marco del actual sistema clasificatorio de las ciencias quedan prisioneros de esos recortes disciplinarios.

Por último, es un imperativo recuperar las grandes formas de pensamiento ante la historia, más allá de sus teorizaciones histórico sociales concretas, las cuales se busca hoy inteligentemente olvidar con la complicitad de tanto ingenuo o tonto ilustrado, ya que en ellas se encuentra la raíz de un pensamiento capaz de trascender la pura descripción de lo que se presenta como inevitable, por lo mismo fatal, sino de avanzar en la aventura por ayudar a la liberación del hombre.

Cabe ilustrar estas breves notas de reflexión con lo que ocurre en América Latina. Como venimos sosteniendo¹ América Latina vive un momento de reajuste que se pretende

constituye un esfuerzo por recuperar la creatividad de la persona, creatividad que se busca identificar con la dinámica liberadora del mercado... es una idea que se vincula con la democracia, que se ofrece depurada de las contaminaciones propias de cualquier sistema de poder para revestir el carácter de un valor universal. Se olvida todo aquello que encubre en cuanto a situaciones de privilegio y subalternidad económica social y política. Y se difunde con tal fuerza por los medios de comunicación que no se ofrece más alternativa que la de conformarse, esto es, la de encontrar la armonía y el consenso social. La política, por tanto, parece ser la encarnación misma de una utopía añorada que resulta, inesperadamente, ser parte de la misma realidad. Se nos ubica en una inercia, como si la realidad constituyera un túnel fuera del cual no cabe pensar ni soñar.

Desde la lógica que nos rige, la realidad parece haber encontrado su utopía, de manera que carece de sentido cualquier esfuerzo imaginativo que la cuestione... y con ello se pretende aplastar todo intento conducente a liberar al hombre en una sociedad más justa.

Es una necesidad imperativa salirse de los marcos de lectura fijados por el discurso económico del poder, que cada vez se reproduce en forma más homogénea por todas las latitudes de la región latinoamericana; hay que romper con sus lineamientos para ser capaces de vislumbrar realidades diferentes. Esta posibilidad exige afrontar el desafío de una utopía como la base constituyente de visiones renovadas de futuros para el desarrollo de América Latina. Desafío utópico necesario para romper con la trampa, pero que obliga a que la gente realmente quiera una utopía alternativa.

Para ver realidades nuevas hay que necesitarlas. Para forjar utopías se requiere de esta necesidad por una realidad diferente, lo que supone reconocer a esta, saber distanciarse de lo establecido. Simplemente eso: distanciarse. Hay que saber reconocerla. Pero, pregunta: ¿reconocemos a la realidad que nos circunda?

Reconocer a la realidad significa algo más que conocerla. Exige saber ubicarse en el momento histórico que se vive, el cual es una forma de asombro que obliga a colocarse en un umbral desde el cual poder mirar, no solamente para contemplar sino también para actuar; la utopía, antes que nada, es la tensión del presente.

Notas

*. Profesor e investigador de "El Colegio de México". Coordinador Grupo de Trabajo de Teoría y Metodología de las Ciencias Sociales de CLACSO.

1. Zemelman Hugo. "Sobre bloqueo histórico y utopía en América Latina". Revista Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Vol. 10. N° 30. 1992.

Trabajo, clase y estado en el capitalismo global*

Por Ellen Meiksins Wood

El movimiento obrero estadounidense nunca ha tenido realmente su propia organización política, ya fuera un partido socialista fuerte, socialdemócrata, o al estilo del laborismo Británico. El partido demócrata tiene en la actualidad menos aun que ofrecer al movimiento obrero que en el pasado. Pero hoy el caso norteamericano parece menos excepcional de lo que pareció alguna vez, en la medida en que los partidos de la clase trabajadora mejor establecidos -comunista, socialista, socialdemócrata, y obrero- se han separado efectivamente de sus raíces de clase, especialmente en Europa.

Los partidos comunistas y socialistas europeos, por ejemplo, abandonaron la política y el lenguaje de la lucha de clases, mientras que la elección del New Labor en Gran Bretaña llevó al poder a un liderazgo basado en cortar los lazos históricos del partido con el movimiento sindical, dejando a Gran Bretaña, al menos por el momento, en una situación similar a la del modelo norteamericano: un estado de partido único, o como lo enunciara Gore Vidal, un partido con dos alas derechas.

Es posible que incluso esta ambigua victoria para la izquierda, o la subsiguiente elección de gobiernos socialdemócratas en Francia y Alemania, abran nuevas perspectivas políticas. Pero por el momento, muchas personas parecen dar por hecho que la desaparición de la política de la clase trabajadora es algo natural, y que el terreno político sobre el cual los partidos revolucionarios y electorales de la clase trabajadora operaban, sencillamente ya no existe. Ese terreno ha sido más o menos obliterado, en gran medida por la globalización. O al menos eso es lo que se nos dice.

Necesitamos detenernos más de cerca sobre tal presunción. Debemos explorar de manera más crítica las consecuencias políticas de la globalización, y lo que éstas significan para el movimiento obrero y la lucha de clases.

■ ¿Qué es la globalización?

La actual crisis global ha empañado la entera idea de globalización hasta un punto tal que quienes solían ser sus más entusiastas defensores están ahora cuestionando sus



principios más básicos. Los hechiceros financieros neoliberales no sólo están contemplando medidas como el control del capital, que apenas ayer les habrían parecido horribles violaciones a la ley natural, sino que incluso están planteando nerviosamente ciertas preguntas acerca del capitalismo “de libre mercado” en general. Mientras que una significativa revisión teórica es previsible como consecuencia de la crisis, la idea de globalización, sin embargo, no está muerta, y representa una seria preocupación para los movimientos obreros en todas partes.

¿Qué significa entonces la globalización? Los rasgos básicos de la concepción convencional, o lo que algunos han dado en llamar la “tesis de la globalización”, son lo suficientemente conocidos: a principios de los ‘70 el mundo entró en una nueva época de “globalización”, marcada por una creciente internacionalización del capital -no sólo un mercado global sino una producción internacionalizada, e incluso una clase capitalista internacionalizada; el creciente poder de las agencias internacionales del capital como el FMI, Banco Mundial, y la World Trade Organization; rápidos movimientos del capital financiero acelerados por las nuevas tecnologías de la información; la transferencia de capitales desde economías con altos costos de mano de obra a economías de bajos salarios – que sirve como justificación para la disminución de salarios y los ataques a los beneficios sociales en países capitalistas avanzados; y un desplazamiento de la soberanía hacia afuera de los límites del estado-nación.¹

La concepción general de globalización no es, por supuesto, universalmente aceptada.² Nadie duda que el capitalismo se ha vuelto un sistema más *universal* que nunca, y

tampoco que estamos viviendo en una economía “global” con mercados cada vez más internacionales y transacciones económicas de todo tipo que abarcan al planeta entero. Pero algunos escritores de izquierda han expresado dudas acerca de cuánta producción se ha internacionalizado en realidad, acerca de cuán móvil es verdaderamente el capital industrial, y acerca de la existencia misma de corporaciones “multinacionales”. Tales críticas han señalado que la vasta mayoría de la producción aún sucede en compañías de base nacional, en locaciones únicas. Han argumentado también que no existe lo que se ha dado en llamar corporaciones “multinacionales”, y que sólo hay corporaciones de base nacional con alcance transnacional.

Los críticos de las ideas convencionales sobre la globalización también han señalado que mientras que las fugas de capital hacia las economías de bajos salarios podrían constituir un serio problema, la inversión extranjera directa se ha concentrado de manera abrumadora en países capitalistas avanzados, con el capital moviéndose entre éstos. Existen diferencias entre las grandes economías capitalistas, con algunas más expuestas que otras a las presiones competitivas internacionales. Los Estados Unidos, por ejemplo, están protegidos de algunas formas de competencia porque una proporción relativamente pequeña de su economía esta dedicada a la manufactura, y la fracción de la fuerza laboral norteamericana empleada en la manufactura es aún menor. Más del 70 % del empleo total en los Estados Unidos se encuentra en el sector de servicios, la mayoría en industrias que simplemente no pueden relocalizarse en otras economías con fuerzas laborales baratas y desorganizadas.

Pero cualquiera sea la proporción de la industria manufacturera en la economía norteamericana (o en otros países capitalistas avanzados), ésta constituye todavía -y probablemente lo siga haciendo- una cantidad desproporcionadamente grande de la producción mundial total. En este sector la competencia ciertamente se ha intensificado, generalmente al interior de los países capitalistas avanzados entre sí. Los Estados Unidos, en particular, han sido profundamente afectados por la competencia de Japón y Alemania. Al mismo tiempo, la solución preferida no ha consistido simplemente en exportar industrias a los países del Tercer Mundo. Las industrias manufactureras son mucho menos móviles de lo que el saber convencional acerca de la globalización sugiere -no en escasa medida debido a que las inversiones de capital de gran escala y a largo plazo son difíciles de abandonar. En esta situación, las estrategias competitivas no tienen muchas posibilidades de basarse en el traslado del capital a otros lugares, por lo que la opción más corriente es la de tratar de reducir los costos laborales en las propias economías avanzadas. De hecho, una de las más notables características de la actual economía global no es la industrialización y enriquecimiento de los países más pobres del Tercer Mundo, sino por el contrario, un creciente empobrecimiento de las economías dejadas en los márgenes de la globalización y una creciente polarización entre ricos y pobres.

Resulta entonces difícil formular cualquier proposición simple acerca de la competencia entre economías de bajos salarios y de altos salarios, o de los peligros de las fugas de capital en respuesta a la organización y lucha de la clase trabajadora. En términos más generales, no existe una correlación simple entre las políticas o la ideología de la “globalización” y la actual exposición de las economías capitalistas avanzadas a la competencia internacional, al menos a la competencia por parte de las economías de bajos salarios. La “globalización” es ciertamente una amenaza efectiva, y por ende una estrategia política poderosa. Pero no debemos equiparar acríticamente amenaza con realidad.

Más allá de estos desafíos empíricos a la noción convencional de globalización, existen preguntas más amplias, dos de las cuales debemos esbozar aquí. En primer lugar, debiéramos preguntarnos cuán nuevo es este fenómeno. De acuerdo con la tesis de la globalización, hemos estado viviendo en una nueva época desde inicios de los ‘70. Sin embargo, nada más obvio que la improbable semejanza entre el mundo burgués tan vívidamente retratado por el *Manifiesto Comunista* en 1848 y la “época de la globalización” en la que estamos viviendo hoy:

“Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía dio un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. ... Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose continuamente. Son suplantadas ... por industrias que ya no emplean materias primas indígenas, sino materias primas venidas de las más lejanas regiones del mundo y cuyos productos no sólo se consumen en el propio país sino en todas las partes del globo. En lugar de las antiguas necesidades, satisfechas con productos nacionales, surgen necesidades nuevas, que reclaman para su satisfacción productos de los países más apartados. ... En lugar del antiguo aislamiento de las regiones y naciones que se bastaban a sí mismas, se establece un intercambio universal, una interdependencia universal de las naciones”.

Y todas las crisis del siglo veinte, hasta la reciente en Asia inclusive, se anticipan aquí:

“(T)oda esta sociedad burguesa, que ha hecho surgir tan potentes medios de producción y de cambio, se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros. ... Basta mencionar las crisis comerciales que, con su retorno periódico, plantean, en forma cada vez más amenazante, la cuestión de la existencia de toda la sociedad burguesa. ... Durante las crisis, una epidemia social, que en cualquier época anterior hubiera parecido absurda, se extiende sobre la sociedad: la epidemia de la superproducción.”

En vista de la presciencia de Marx, ¿cómo podemos sostener la noción de que la “globalización” marca una nueva época que comenzó a principios de los ‘70? Una explicación

mucho más plausible para la conexión entre el mundo de Marx y el nuestro es que la globalización no es una nueva época, sino un proceso de largo plazo; no se trata de un nuevo tipo de capitalismo, sino de la lógica del capitalismo tal como éste ha sido desde el principio.

Este punto de vista, por supuesto, no ignora los cambios masivos que han acontecido en el siglo y medio pasado. Por el contrario, las “leyes de movimiento” capitalistas –como Marx sabía mejor que nadie– son precisamente leyes del cambio *constante*. Pero cómo interpretemos dichos cambios depende en gran parte de las coordenadas desde las cuales los observamos. Por ejemplo, vista como una época, desde la perspectiva de las teorías convencionales de la globalización, ésta tiende a percibirse como una era totalmente nueva, en la cual el triunfo final del capitalismo ha clausurado todas las alternativas. Vista desde la perspectiva de Marx, como un proceso de largo plazo, la globalización aparece como algo profundamente contradictorio, en el cual cada avance en la expansión del capitalismo ha traído consigo desde el principio nuevas inestabilidades y nuevas posibilidades de lucha.

Esto nos lleva a la segunda gran pregunta acerca de la globalización, que concierne al papel de la competencia en la tesis de la globalización. Bajo su luz, la competencia parece estar en el corazón mismo de la tesis: para la derecha, porque cada esfuerzo del capital destinado a empeorar las condiciones de los trabajadores, cada ataque al “estado benefactor” se justifica en nombre de la competitividad y los rigurosos nuevos requerimientos de la competencia en una economía globalizada; para la izquierda, porque muchas de las mismas presunciones han llevado al derrotismo y la convicción de que lo único que podemos hacer es desarrollar nuestras propias estrategias, más humanas, de competitividad.

Aún así, existe una curiosa contradicción en la tesis de la globalización, y aunque parezca extraño, dicha contradicción es más visible en algunas variantes de izquierda. La tesis está basada en la premisa –y ésta es la razón por la cual tiene implicancias *políticas* de tan amplio alcance– de que el efecto de la globalización es la formación de un capital internacional cada vez más unido y todopoderoso, contra el cual las fuerzas anticapitalistas serían poco menos que impotentes. Pero al examinar dicha presunción encontramos algunas inconsistencias. Pareciera como que en la tesis de la globalización la transnacionalización del capital no significara la *intensificación* de la competencia sino, por el contrario, su *declinación* entre las mayores potencias capitalistas. En suma: esto significaría la *interpenetración* de capitales nacionales, y su creciente colaboración, aparentemente *en lugar de* la competencia.³

Ahora bien, aún el teórico más extremo de la globalización jamás diría que la globalización está creando un solo capital internacional unificado. Obviamente, la globaliza-

ción todavía tiene un largo camino por recorrer, y en el futuro, hasta donde resulta predecible, todos los que participan en el mercado tendrán que pelear para permanecer en la cima. Pero la implicancia más fuerte de la tesis de la globalización es que existe una relación inversa entre globalización y competencia: cuanto más globalmente integrado se vuelve el capitalismo, más unificada estará la clase capitalista. Esto pareciera implicar que la globalización no es el *crecimiento* de la competencia, sino su supresión.

De acuerdo con dichos argumentos, es verdad que un capital altamente móvil se mueve libremente a través de las fronteras nacionales en busca de mano de obra barata, y al mismo tiempo hace descender los salarios en su país de origen. Pero esto aparentemente no sucede debido a los antiguos imperativos de competencia entre capitalistas, que *siempre* los han llevado a aumentar la rentabilidad y la participación en el mercado por medio de la baja de los costos laborales. Sucede simplemente porque el capital es ahora libre de hacer sentir su gravitación por doquier, ejerciendo sin cortapisas su poder. La tesis de la globalización, entonces, que constantemente invoca la necesidad de competencia, también remite a una internacionalización del capital que expulsa la competencia, une al capital formando una única clase internacional, y desarticula toda oposición.

Pero vista desde un enfoque diferente la globalización significa exactamente lo contrario. En primer lugar, no debemos olvidar que el capitalismo siempre e indefectiblemente comporta competencia. La competencia está en el corazón mismo del sistema. Esto obviamente no significa que el capital no hará lo posible para evadir la competencia. Por el contrario, es una ley de la competencia que el capital procurará *evadirla*. La competencia capitalista significa tratar siempre de mantener e incrementar la participación en el mercado, y una manera clásica de hacerlo es cooperar secretamente con los competidores, crear monopolios –como bien lo sabía ya Adam Smith– o dejar fuera a los rivales por la pura fuerza del tamaño y las economías de escala. Y, por supuesto, una de las consecuencias de la competencia es que los perdedores serán tragados por los ganadores –aún cuando los ganadores de hoy podrían ser los perdedores de mañana. Por consiguiente, el aumento en la concentración y centralización del capital no es la *antítesis* de la competencia sino una de sus expresiones. Los competidores pueden haberse ampliado: no sólo enormes compañías domésticas sino firmas transnacionales (y esto, nuevamente, no suele significar empresas *no-nacionales*, sino compañías *nacionales* con alcance transnacional). Pero todo esto ciertamente que no ha disminuido la competencia. Por el contrario, la competencia entre economías capitalistas avanzadas se ha intensificado a medida que nuevos y agresivos jugadores han ingresado al juego.

Tomemos por ejemplo el caso clásico de un capitalismo hegemónico y monopolístico –los Estados Unidos en los inicios del período de posguerra. La economía de EE.UU. era tem-

poralmente hegemónica y prácticamente no enfrentaba desafíos, en gran medida debido a la guerra. Pero la recuperación de las potencias vencidas pronto incorporó nuevos y más dinámicos competidores al juego (y aquí, el período de hegemonía de los EE.UU. podría incluso haberse tornado un handicap competitivo). El resultado fue sin duda más “monopolios” capitalistas –no sólo norteamericanos, sino también japoneses y alemanes- que de ninguna manera significaron menos competencia. Por el contrario, unidades mayores han hecho a la competencia más feroz y destructiva. Por un lado este tipo de competencia significa el colapso de las compañías pequeñas; y por el otro vemos ahora nuevas formas de macro-competencia, por llamarla de alguna manera, con economías nacionales enteras envueltas en implacables rivalidades y nuevas formas de intervención estatal para asistir-las.

Por lo tanto, la colaboración capitalista nunca ha sido incompatible con la competencia. De hecho, la interacción entre ambas es otra de esas contradicciones características del capitalismo. Aún la más avanzada colaboración transnacional convive mano a mano con la competencia más feroz. Basta con echar una mirada a la Unión Europea en la actualidad. La Unión tiene como objetivo precisamente fortalecer a las economías europeas en su competencia con los EE.UU. y Japón. Pero es también el terreno de la competencia *entre* estados europeos. De hecho, uno de los resultados esperados, incluso deseados, de la Unión Monetaria Europea y la moneda común, es la intensificación de la competencia al interior de las economías europeas e incluso entre sí, en la medida que las diversas economías nacionales son despojadas de sus protecciones nacionales (por ejemplo, política monetaria y manipulación de las tasas de cambio) contra la fuerza arrolladora del mercado competitivo.

¿Qué conclusiones debiéramos sacar entonces de esta competencia intensificada entre los países capitalistas avanzados? Una conclusión obvia es que la globalización podría significar menos y no más unidad capitalista. De manera tal que por lo menos la parte de la tesis de la globalización que postula la existencia de un capital internacional cada vez más unificado se ve desmentida por la competencia capitalista.

Pero esta intensificación de la competencia: ¿significa que los teóricos de la globalización están en lo correcto al invocar los requerimientos de la competitividad? Más de un texto en este volumen expondrá los defectos de las estrategias competitivas de izquierda y explicará por qué son malas para los trabajadores. Por eso limitaré mis argumentos a un único punto, a saber: la principal conclusión que el movimiento obrero y la izquierda debieran extraer de la globalización, o la universalización del capitalismo, es que el capitalismo se encuentra hoy más que nunca abrumado por sus contradicciones internas, y que ésta es una razón para intensificar, no abandonar, las luchas anticapitalistas.

La universalización del capitalismo significa que más economías capitalistas están ingresando a la competencia global; que las mayores economías capitalistas están dependiendo de las exportaciones hasta grados casi suicidas; y que las crisis de sobreproducción son cada vez más severas. Al mismo tiempo, para hacerse competitivas, dichas economías capitalistas restringen la capacidad de compra de los propios consumidores que están compitiendo para alcanzar. La máxima rentabilidad para el capital hoy depende cada vez menos del crecimiento absoluto o de la expansión hacia afuera, y más de la redistribución y de una brecha cada vez más extensa entre ricos y pobres, tanto al interior de las naciones-estado como entre ellas.

La situación difícilmente podría ser más contradictoria de lo que ya es. El punto, entonces, es que las fortalezas del capitalismo son también sus debilidades, y que la globalización podría estar ampliando, y no restringiendo, el espacio para las políticas de oposición.

■ El Estado y la lucha de clase

Esta argumentación acerca de las nuevas posibilidades políticas sería hueca si la tesis de la globalización estuviera en lo cierto en lo tocante a sus supuestos básicos sobre el estado y la transferencia de soberanía de éste al capital global. Repetidas veces se nos dice que la globalización ha tornado irrelevantes a los estados nacionales. Para algunos, esto significa que nada queda por hacer, que no existe un espacio real para las políticas socialistas, porque su blanco tradicional, el estado-nación, se ha desvanecido. Para otros, significa que la lucha debe trasladarse de inmediato al plano internacional. En ambos casos, una política reconocible como propia de la clase trabajadora parecería estar fuera de toda posibilidad.

Esta es, entonces, la presunción que quiero desafiar ahora. Pretendo argumentar que la globalización ha hecho a la política de la clase trabajadora –una política dirigida al estado y al poder de clase concentrado en el estado- más, y no menos, posible e importante.

Los marxistas solían enfatizar las maneras en que el crecimiento del capitalismo alienta el desarrollo de la conciencia y la organización de clase. La socialización de la producción y la homogeneización del trabajo, y la interdependencia nacional, supranacional e incluso global de sus partes constituyentes, se suponía que creaban las condiciones para la emergencia de la conciencia de clase y la organización en escala masiva, e incluso para la solidaridad internacional. Pero los desarrollos a lo largo del siglo XX han socavado dicha convicción de manera creciente y, algunos dirían, de modo irreparable.

La incapacidad de la clase trabajadora para satisfacer las expectativas del marxismo tradicional es típicamente citada por intelectuales izquierdistas como la razón principal para abandonar el socialismo, o por lo menos para buscar actores alternativos. En décadas recientes, el marxismo occidental, luego el post-marxismo y el postmodernismo han, uno tras otro, asignado esta responsabilidad histórica (si es que todavía creen, siquiera mínimamente, en la historia o en sus agentes) a los intelectuales, a los estudiantes, a los “nuevos movimientos sociales” –a cualquiera excepto a la clase trabajadora. Hoy, el movimiento obrero casi ha desaparecido de las variantes más de moda entre los teóricos y políticos izquierdistas. Y la globalización pareciera haber dado el último golpe.

La mayoría de los que hablan acerca de la globalización, por ejemplo, probablemente digan que en la era del capitalismo global la clase trabajadora, si es que aún existe, está más fragmentada que nunca. Y si están en la izquierda, es probable que digan que no hay alternativa, que lo mejor que podemos hacer es liberar un poco más de espacio en los intersticios del capitalismo por medio de muchas luchas particulares y separadas –el tipo de luchas que a veces se denomina “políticas de la identidad”.

Ahora bien, existen muchas razones para esta tendencia a repudiar la política de clases en favor de la fragmentación política y las políticas de la identidad. Pero sin duda una razón de peso es el supuesto de que, cuanto más *global* se torna el capitalismo, más global deberá ser la *lucha* contra él. Después de todo, reza el argumento, ¿acaso no es cierto que la globalización ha transferido el poder desde los estados nacionales a las instituciones y fuerzas transnacionales? ¿Y no es obvio que ello significa que cualquier lucha en contra del capitalismo deberá operar en ese nivel transnacional?

Entonces, dado que la mayoría de las personas tienen dificultades razonables para creer en tal grado de internacionalización y en la posibilidad misma de organizarse a ese nivel, naturalmente llegan a la conclusión de que en realidad el juego se ha terminado. Concluyen que el capitalismo llegó para quedarse, que ya no tiene ningún sentido tratar de construir un movimiento político masivo, o una fuerza política inclusiva y de amplio alcance como las que los antiguos partidos de la clase trabajadora aspiraban a ser. En otras palabras: la clase como fuerza política ha desaparecido, y junto a ella el socialismo como un objetivo político. Si no podemos organizarnos a escala global, lo único que nos queda es ir al otro extremo. Todo lo que podemos hacer, aparentemente, es volvernos hacia adentro, concentrándonos en nuestras propias opresiones locales y particulares.

En el otro extremo se encuentra un tipo de internacionalismo abstracto carente de bases materiales. Una cosa es reconocer la importancia de la solidaridad internacional y la cooperación entre movimientos obreros nacionales. Ese tipo de internacionalismo no sólo es esencial para los valores so-

cialistas sino también estratégicamente indispensable para el éxito de muchas luchas de clase a nivel nacional. Pero algunos en la izquierda invocan una “sociedad civil internacional” como la nueva arena de lucha, o la “ciudadanía global” como la base para una nueva solidaridad –y eso suena menos como una estrategia anti-capitalista que como un silbido en la oscuridad. Cuando dicen que la arena internacional es la *única* para los socialistas, que el capital global *sólo* puede enfrentarse con una respuesta auténticamente global, parecerían estar diciendo –con no menos certeza que los abogados de la política fragmentada– que la lucha contra el capitalismo efectivamente se ha terminado.

Mi propia conclusión es diferente, porque parto de premisas diferentes. Permítaseme decir en primer lugar que siempre he tenido reservas respecto de la relación directa entre el crecimiento del capitalismo y la unidad de la clase trabajadora. Unos diez y siete años atrás, en un artículo titulado “La separación de lo económico y lo político en el capitalismo”, me referí a la fuerza centrífuga del capitalismo, a las maneras en que, contrariamente al saber convencional del marxismo, la misma estructura de producción y explotación en un capitalismo completamente desarrollado tiende a *fragmentar* la lucha de clase y a *domesticarla*, a volcarla hacia adentro, a hacerla sumamente local y particularista.⁴ El capitalismo ciertamente tiene efectos homogeneizantes, y la integración de la economía capitalista provee las bases materiales para la solidaridad de la clase trabajadora más allá de los muros de la empresa individual e incluso de las fronteras nacionales. Pero el efecto más inmediato del capitalismo es limitar el conflicto de clase a las unidades individuales de producción, descentralizando y localizando la lucha de clase.

Debemos enfatizar que este desenlace no es producto de una falla en la conciencia de clase de los trabajadores. Es una respuesta a una realidad material, a la forma en que el mundo social es realmente organizado por el capitalismo. Vale agregar aquí que pese a que los conflictos de clase son localizados de esta manera la clase trabajadora es, paradójicamente, dividida aún más por la competencia entre las empresas, en la cual los trabajadores son llevados a verse como aliados de sus explotadores en contra de sus competidores, tanto capitalistas como trabajadores. Esta es una tendencia que la ideología de la globalización está tratando de promover por todos los medios.

El repliegue hacia adentro de la lucha de clases también significa, como sugerí, que en el capitalismo los asuntos políticos son en cierta forma privatizados. Los conflictos sobre la autoridad y la dominación, que en las sociedades pre-capitalistas están directamente dirigidos a los poderes jurisdiccionales o políticos de señores y estados, en el capitalismo se han desplazado hacia la empresa capitalista individual. Si bien el capital continúa dependiendo del poder del estado para sustentar el sistema de propiedad y mantener el orden social, no es en el estado sino en el proceso de producción, y

en la organización jerárquica de éste, que el capital ejerce su poder sobre los trabajadores más directamente.

Pensé también que esto tenía algo que ver con el hecho de que las revoluciones modernas han tendido a ocurrir donde el capitalismo estaba *menos*, y no más, desarrollado. Donde el estado mismo es el explotador de primer orden –por ejemplo, explotando a los campesinos por medio de los impuestos– las luchas económicas y políticas son difíciles de separar, y en casos así, el estado puede fácilmente volverse el foco de luchas masivas. Es, después de todo, un enemigo de clase mucho más visible y centralizado de lo que el capital en sí mismo podría nunca llegar a ser. Cuando en cambio la gente confronta directamente con el capital generalmente lo hace sólo oponiéndose a capitales individuales y separados, o a empleadores concretos. Es por ello que incluso las revoluciones proletarias han tendido a ocurrir allí donde los conflictos de la clase trabajadora con el capital se fusionaron con otras luchas pre-capitalistas, principalmente la de los campesinos contra los terratenientes y los estados explotadores.

Pero mientras planteaba que el capitalismo tiene una tendencia a fragmentar y privatizar las luchas, también me parecía que se presentaban algunas nuevas tendencias compensatorias: la creciente integración internacional del mercado capitalista estaba desplazando los problemas de la acumulación de la empresa individual a la esfera macroeconómica, y el capital estaba siendo forzado a confiar más y más en el estado para crear las condiciones adecuadas para la acumulación. De modo que sugerí que la creciente complicidad del estado en los propósitos antisociales del capital puede eventualmente significar que el estado se tornaría cada vez más en un blanco primario de la resistencia en los países capitalistas avanzados, y podría empezar a contrarrestar algunos de los efectos centrífugos del capitalismo, tales como su tendencia a fragmentar y domesticar a la lucha de clases.

Ahora bien, por ese entonces yo nunca había oído hablar de la globalización, y no sabía que bien pronto la gente estaría dando por hecho que la integración internacional del mercado capitalista debilitaría a los estados-nación, desplazando el foco del poder capitalista fuera del estado. En los últimos tiempos, cuando la globalización está en boca de todos, me he descubierto argumentando en contra del supuesto ampliamente difundido de que la globalización está tomando al estado-nación cada vez más irrelevante. He estado argumentando que, cualesquiera fueran las funciones que el estado podría estar perdiendo, está ganando otras nuevas como conducto principal entre el capital y el mercado global. Ahora quiero sugerir que este desarrollo podría estar comenzando a generar las consecuencias para la lucha de clase que, allá por 1981, vislumbraba como una perspectiva para el futuro.

Podemos debatir cuánta globalización ha tenido lugar efectivamente; o qué se ha internacionalizado verdaderamente o no. Pero una cosa está clara: en el mercado global,

el capital *necesita* al estado. Lo necesita para mantener las condiciones de acumulación y competitividad en varias formas, incluyendo subsidios directos y operaciones de rescate financiadas por los contribuyentes (México, los Tigres Asiáticos). Necesita al estado para preservar la disciplina laboral y el orden social frente a la austeridad y la “flexibilidad”, y para acrecentar la movilidad de capital al tiempo que bloquea la movilidad de los trabajadores.

Detrás de cada corporación transnacional hay una base nacional que depende de su estado local para sustentar su viabilidad, y de otros estados para darle acceso a otros mercados y otras fuerzas de trabajo. “Los ejecutivos”, escribe el periodista del New York Times Thomas L. Friedman, “dicen cosas como ‘No somos una compañía americana. Somos IBM USA, IBM Canadá, IBM Australia, IBM China’. ¿Ah, sí? Bueno, entonces la próxima vez que se meta en problemas en China, llame a Li Peng para que lo ayude. Y la próxima vez que el Congreso cierre otra base militar en Asia ... llame a la marina de Microsoft para que le asegure las rutas marítimas de Asia”⁵

En cierta forma, el punto central de la globalización consiste en que la competencia no es tan sólo –ni siquiera mayormente– entre firmas individuales, sino entre economías nacionales. Y en consecuencia, el estado-nación ha adquirido nuevas funciones como un instrumento de la competencia. En todo caso, el estado-nación es el *agente principal* de la globalización. El capital estadounidense, en su cruzada por la competitividad, requiere un estado que mantenga los costos sociales en su mínima expresión a la vez que mantiene en caja el conflicto social y el desorden generados por la ausencia de prestaciones sociales. En la Unión Europea, que se supone es el modelo de organización transnacional, cada estado europeo es el agente principal en la imposición a sus ciudadanos de las austeridades y padecimientos necesarios para cumplir con los severos requerimientos planteados por la unión monetaria, y cada estado es el principal instrumento de contención de los conflictos engendrados por estas políticas –el principal agente para mantener el orden y la disciplina laboral. Aún si los impulsos fuertemente nacionalistas de los estados europeos permiten que la integración continúe, una vez que estos estados ceden sus instrumentos tradicionales para absorber los shocks económicos, tales como el déficit público y las devaluaciones de moneda, el estado será aún más necesario para mitigar el malestar social (o, como muchos críticos esperan, los estados individuales simplemente violarán las reglas de la Unión). La unión monetaria podría entonces hacerse añicos contra las rocas de la convulsión social. Si sobreviviera a estas acechanzas es más probable que en el futuro estos estados-nación continúen jugando un rol central en el mantenimiento del entorno adecuado para la acumulación de capital y la competitividad.

En varios países el estado juega también otros roles. En particular, nuevamente, mantiene a la mano de obra inmobilizada mientras que el capital se mueve a través de las fron-

teras nacionales, o en los capitalismos menos desarrollados actúa como una correa de transmisión para otros estados capitalistas más poderosos. Por supuesto, es posible que el estado cambie su forma, y que el tradicional estado-nación dé lugar, por un lado, a estados más estrechamente locales y, por otro, a autoridades políticas regionales más amplias. Pero sea cual sea su forma, el estado continuará siendo crucial, y es probable que por un largo tiempo aún el viejo estado-nación siga jugando su rol dominante.

¿Cuál ha sido entonces el efecto de las nuevas funciones del estado? ¿Cuáles han sido las consecuencias para la lucha de clases? ¿Es cierto que, tal como lo sugerí anteriormente, las nuevas funciones del estado en un capitalismo “globalizado”, “flexible”, están haciendo de él el blanco de la lucha de clase y el nuevo foco de la unidad de la clase trabajadora? Es muy pronto aún para juzgar, pero para empezar podemos tomar nota de la creciente cantidad de protestas masivas y demostraciones callejeras en Francia, Alemania, Canadá, Corea del Sur, Polonia, Argentina, México, y en algunos otros lugares. Sin avanzar sobre ellas o sus posibles efectos, es válido de todos modos considerar su denominador común.

Sin duda la mayoría de las personas aceptarían que tienen algo que ver con la globalización. Aún si tenemos nuestras dudas acerca de ciertos aspectos de la globalización, consideremos apenas aquellos sobre los cuales estamos de acuerdo: se trata de una reestructuración que está teniendo lugar en cada país capitalista avanzado, y como una parte importante de dicha reestructuración se cuentan los esfuerzos para eliminar varios tipos de prestaciones sociales en aras de la competitividad. Este es exactamente el tipo de complicidad entre estado y capital al que me estaba refiriendo: no sólo la retirada del estado de sus funciones paliativas sino su cada vez más activo papel en la reestructuración de la economía en pos de los intereses del capital y en detrimento de todos los demás. Las acciones del estado han empujado a la gente a las calles para oponerse a las políticas del estado en países tan diversos como Canadá y Corea del Sur.

En este volumen, Sam Gindin sugiere que de hecho la globalización ha creado nuevas oportunidades para la lucha. Con la “reestructuración económica nacional e internacional viene un grado más alto de integración de componentes y servicios, especialización e inventarios muy ajustados”, escribe, y esto hace a las corporaciones más vulnerables a ciertos tipos de luchas locales, regionales y nacionales. Lo que estoy diciendo es que precisamente este tipo de integración ha vuelto al estado, en muchos sentidos, más importante que nunca antes para el capital. De esta y otras formas, la simbiosis entre capital y estado es *más estrecha* que nunca, y eso convierte a cada estado en un foco potencial de conflicto y lucha de clases en un grado más alto que nunca antes en las economías capitalistas avanzadas.

Por lo tanto difícilmente sea ahora el momento para que la izquierda abandone este terreno político en favor de polí-

ticas fragmentadas o un internacionalismo completamente abstracto. Si el estado es el principal agente de la globalización, de la misma manera y muy en especial en los países capitalistas avanzados, aquél aún posee las armas más poderosas para *bloquear* la globalización. Si el estado es el canal a través del cual el capital se mueve en la economía globalizada, entonces es igualmente el medio por el cual una fuerza anticapitalista podría cortar de raíz esa línea de vida capitalista. Viejas formas keynesianas de intervención podrían ser aún menos efectivas hoy de lo que fueron antes. Pero lo que esto significa es que la acción política ya no puede sencillamente tomar la forma de *intervenir* en la economía capitalista. Ahora se trata más bien de *separar* la vida material de la lógica del capitalismo.

En el corto plazo, esto significa que la acción política no puede dirigirse tan sólo a ofrecer incentivos de capital para hacer cosas socialmente productivas, o a compensar los estragos del capital por medio de “redes de seguridad”. La política debe dirigirse cada vez más a utilizar el poder del estado para *controlar* los movimientos del capital y para colocar su asignación y la disposición del superávit económico cada vez más bajo el alcance de una *accountability* democrática y en concordancia con una lógica social diferente de la lógica de la competencia y la rentabilidad capitalista.⁶

■ Conclusión

Uno de los principales problemas que dificultan la organización de las luchas anticapitalistas siempre ha sido que el capital no presenta un blanco único y visible. Y la separación formal entre las esferas económica y política que es característica del capitalismo —en la cual la explotación tiene lugar mediante un intercambio aparentemente libre entre “iguales” jurídicos, en un contrato entre capital y mano de obra, y la relación entre ellos es mediada por un “mercado” impersonal— ha creado lo que superficialmente se percibe como un estado “neutral” que no interviene de manera visible en los enfrentamientos cotidianos entre capital y mano de obra. Pero dado que el capital depende del estado para abrirse camino a través de la economía global, ya sea por medio de políticas neoliberales o apelando a otros recursos, el poder del capital se vuelve más concentrado en el estado, y la connivencia de éste con el capital se torna cada vez más transparente.

Esta es una importante razón por la cual necesitamos ser cuidadosos acerca de cómo usamos el término “globalización”. Debemos evitar tratar a las tendencias que se asocian a dicho término como si fueran procesos naturales inevitables, en vez de procesos *capitalistas* históricamente específicos: la explotación capitalista de seres humanos y recursos naturales, ayudados e instigados por una colaboración directa entre estado y capital. De hecho, el concepto de globalización juega hoy un rol tan prominente en la ideología capita-

lista precisamente porque ahora se necesitan poderosas armas ideológicas para enmascarar y mistificar esta cada vez más directa y obvia connivencia.

Si el estado puede hoy más que nunca servir como blanco de la lucha anticapitalista, puede también, en tanto foco de las luchas de clase locales y nacionales, ser una fuerza unificadora al interior de la clase trabajadora en contra de su fragmentación interna, y también entre el movimiento obrero y sus aliados en la comunidad. Al mismo tiempo, mientras la lógica destructiva del capitalismo se torna cada vez más universal, las luchas nacionales contra aquélla pueden constituirse en la renovada y fortalecida base de un nuevo internacionalismo. Éste no reposaría sobre una noción abstracta y poco realista de una sociedad civil internacional o ciudadanía global, ni en la ilusión de que podemos mejorar las cosas incrementando la representatividad de la izquierda en organizaciones transnacionales como el FMI, sino en el apoyo mutuo entre varios movimientos locales y nacionales en sus luchas contra sus propios capitalismo y estados nacionales.

Esto no significa que no haya lugar para esfuerzos comunes a nivel transnacional, o que el movimiento obrero deba descuidar las organizaciones transnacionales como la Unión Europea, en las que podría marcar una diferencia. Pero los esfuerzos colaborativos de este tipo en última instancia dependen de un movimiento obrero nacional fuerte y bien organizado. De haber un lema para resumir este tipo de internacionalismo el mismo bien podría ser "Trabajadores de todos los países, uníos –pero la unión empieza por casa".

Aún cuando, como ahora parece posible, la actual crisis global ponga un freno a la globalización neoliberal, la misma no terminará con la universalización del capitalismo y las crecientes contradicciones que resultan de ella, y el capital seguirá necesitando la ayuda del estado para navegar las turbulentas aguas de la economía global. La organización política de la clase trabajadora es ahora más importante y potencialmente efectiva que nunca.

Notas

Tomado de *¿Resurgiendo de las cenizas? El trabajo en la era del capitalismo "global"*

Editado por Ellen Meiksins Wood, Peter Meikins, y Michael Yates, Monthly Review Press, New York

Traducción de Florencia Enghel

Revisión Técnica de Atilio A. Boron

1. Los lectores estarán sin duda familiarizados con las versiones convencionales de la tesis de la globalización, por el mero hecho de leer los diarios. Existen también varias versiones de izquierda de dicha tesis. Para una expresión moderada y relativamente juiciosa, véase Richard B. DuBoff y Edward S. Herman, "A Critique of Tabb on Globalization", *Monthly Review* 49 (November 1997): 27-35. Una versión algo más exagerada puede encontrarse en A. Sivanandan, "Capitalism, Globalization and Epochal Shifts: An Exchange", *Monthly Review* 48 (February 1997): 19-21. Para una versión particularmente extrema, ver Roger Burbach, "The Epoch of Globalization", *URPE Newsletter* 29 (Fall 1997): 3-5.

2. Ver, por ejemplo, Greg Albo, "The World Economy, Market Imperatives, and Alternatives", *Monthly Review* 48 (December 1996): 6-22; Doug Henwood, "Post What? *Monthly Review* 48 (September 1996): 1-11; Harry Magdoff, "Globalization: To What End?" (New York: Monthly Review Press, 1992); L. Panitch, "Globalisation and the State", in R. Miliband and L. Panitch, eds., *Socialist Register 1994: Between Globalism and Nationalism* (London: Merlin, 1994), 60-93; William K. Tabb, "Globalism Is an Issue, The Power of Capital Is the Issue", *Monthly Review* 49 (June 1997): 20-30.

3. Para el alegato más explícito y extremo sobre esta posición, ver Burbach, "The Epoch of Globalization".

4. Ese artículo, publicado en 1981 en la *New Left Review*, ha aparecido más recientemente en mi libro *Democracy Against Capitalism: Renewing Historical Materialism* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 19-48.

5. New York Times, 10 de abril de 1998.

6. Sobre estos temas ver Albo, "The World Economy".



Para una definición del concepto de “movimiento social”

Por René Mouriaux* y Sophie Beroud**

Después de varios trabajos de investigación¹ sobre las huelgas del servicio público francés del otoño del '95 y sobre las movilizaciones de los desocupados del invierno del '97 y del '98, quisimos orientar nuestra reflexión sobre un segundo enfoque: cuestionar la definición misma del concepto de movimiento social, a partir de las principales teorías que se enfrentan en este terreno, con el objetivo de entender en sus relaciones dinámicas el sentido de las palabras y de las cosas, el carácter multidimensional y conflictivo del objeto de estudio.

La necesidad de esta reflexión se entiende, por lo menos, en tres niveles. En primer lugar, durante las huelgas referidas anteriormente se inició una polémica sobre la forma de calificarlas. Por ejemplo, el historiador François Furet las designó como una simple “suma de movimientos sociales corporativos” en su último artículo. Polarizada en la confrontación entre dos peticiones², la batalla semántica participó no solamente en la comprensión de la realidad sino también en su desarrollo, lo que influyó en las diferentes maneras de vivir, de relatar y de analizar el evento.

En segundo lugar, esta mediación por el lenguaje siempre en situación incita a romper con las representaciones dadas por el sentido común en el reto de “comprender la lógica que es propia al objeto en lo que este objeto es propio”.³ Como la comprensión del concreto pasa por la abstracción, y la del movimiento por sus rasgos constantes, el problema concierne a la “falsa abstracción”: al hecho de formalizar ciertas propiedades de la realidad para establecer un concepto intemporal que permite, en seguida, clasificar lo real desviándonos de un conocimiento concreto en el que lo real sanciona justamente, y hace evolucionar, la propia definición. “Todo concepto” escribe Lucien Sève, “mas allá de sus aspectos abstractos, generales, intemporales, es el producto de un momento preciso del conocimiento, el cual refleja a su vez un momento preciso del desarrollo de los hechos”.⁴ Parte integrante de la vida social, el pensamiento, gracias al ejercicio de la definición, procura al mismo tiempo explicar las estructuras históricas del conocimiento e iluminar la génesis propia del objeto.



En tercer lugar, y como lo apunta Michel Verret, no hay “definición que no implique, de manera implícita o explícita, su teoría de la definición”.⁵ Definir el concepto de movimiento social con la ambición de entenderlo en su forma contemporánea consiste en proponer un abordaje de la problemática de las luchas sociales. En este sentido, la definición será distintiva en un doble sentido: en su esfuerzo de confrontación con las teorías existentes, y en la propia construcción del objeto que propone.

■ 1. Entender las contradicciones del movimiento social a la luz de sus interpretaciones

Durante las huelgas del otoño del '95, la batalla entre dos peticiones fue reducida por los medios de comunicación a un enfrentamiento entre la revista *Esprit* y el sociólogo Pierre Bourdieu. Se puede presentar, más precisamente, como una oposición entre varios intelectuales cercanos a la CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) de Nicole Notat quién aprobó el proyecto de reforma de la protección social lanzado por el gobierno de derecha, entre quienes se encontraba Alain Touraine, y otros intelectuales, opuestos a esta reforma y deseosos de sostener a los sindicatos que protagonizaban las huelgas, a través de la asociación Ressay. En este sentido, las dos peticiones representaban análisis opuestos de una fase muy importante – la más grande en términos cuantitativos de manifestantes y de huelguistas desde mayo del '68 – de las luchas sociales en la Francia contemporánea. Respecto a este conflicto interpretativo que se desarrolló a partir del conflicto laboral propiamente dicho, parece pertinente cuestionar las teorías del mundo social elaboradas por Pierre Bourdieu y por Alain Touraine.

Es verdad, sin embargo, que la oposición entre los dos sociólogos franceses no resume, por sí sola, la variedad de las problemáticas sobre los movimientos sociales. Se sabe que la sociología de la acción colectiva tiene varias ramificaciones en el campo científico que algunas obras de síntesis han intentado clasificar de manera racional,⁶ continuando el trabajo de comparación efectuado por François Chazel en un capítulo del *Traité de Sociologie* dirigido por Raymond Boudon.⁷ Hemos elegido no tener en cuenta las distinciones propuestas entre las teorías psicológicas y comportamentales, las teorías de la construcción identitaria y la de la movilización de recursos por varias razones. Además de ser fragmentarias e inspiradas por una visión utilitarista de las relaciones humanas, estas teorías tienen como objetivo principal el hecho de explicar el paso de lo individual a la dimensión colectiva en la medida en que ven a la acción colectiva como algo artificial, construido y, como continuación de la paradoja de Mancur Olson, la interpretan como una especie de milagro.⁸ Es únicamente bajo la referencia a una estructura de las “oportunidades políticas”, como la fórmula Sidney Tarrow,⁹ que se permite integrar la teoría de la movilización de los recursos en una visión dinámica y mucho más larga de las relaciones entre clases sociales, de los mecanismos de explotación, de subordinación y de dominación. Pero, aún en este último caso, la reflexión teórica queda centrada en la figura del “empresario” de la movilización colectiva (el que la fabrica y la pone en marcha), en la necesidad de tener recursos efectivos y simbólicos, en la descripción de las formas de acción (acto público, petición, marcha, etc.) y deja siempre de lado lo que nos parece fundamental, es decir, la posibilidad estructural de la acción colectiva.

Otro tipo de advertencia, de naturaleza metodológica, concierne al *corpus* por comparar. El libro *Le Grand refus* acaba de formalizar la visión defendida por Alain Touraine de lo que es un movimiento social: se apoya en una reflexión abierta desde mayo del '68 que, paso a paso, fue elaborada a través de varias investigaciones prácticas y teóricas.¹⁰ En este camino intelectual, la obra *Le Mouvement ouvrier* que insistió en el tema de la institucionalización definitiva del movimiento obrero y sindical constituye un punto decisivo, sin retorno, cuando afirmó claramente que el antagonismo capital / trabajo pertenecía al pasado de la sociedad industrial, y no al presente del cambio social. El título del libro sobre el '95, *Le Grand refus*¹¹ (El gran rechazo) designa justamente una de las etapas que marcan el paso de la sociedad industrial a la sociedad post-industrial, “programada” en el vocabulario de Alain Touraine. Así, la interpretación que da de las huelgas del otoño del '95 no rompe la homogeneidad general de su teoría, sino que al contrario, la confirma.

Esta visión coherente no existe en la sociología de Pierre Bourdieu. Con esto no pretendemos subrayar una ausencia, sino apuntar que hasta ahora el sociólogo no quiso elabo-

rar una concepción sistematizada de los movimientos sociales. Claro que esta diferencia de *corpus* - de un lado, unas diez obras que se suceden y se responden, y del otro, apenas unos textos y discursos públicos sin vocación científica¹² - podría invalidar nuestra comparación. Sin embargo, las entrevistas presentadas en 1993 en *La Misère du monde*¹³ y la voluntad, a través de esta investigación, de constituir un “intelectual colectivo” demostró una real evolución, que ya estaba presente de cierta manera en la ambición general de la sociología de la dominación. En su estudio sobre *Pierre Bourdieu et la théorie du monde social*, su discípulo Louis Pinto no vacila en cuestionar los fundamentos teóricos de las tomas de posición políticas del Profesor del Colegio de Francia¹⁴. La lectura que propone justifica que podamos proponer otra y, sobre todo, nos ayuda a confrontar nuestras críticas a las suyas.

Las manifestaciones y huelgas de noviembre y diciembre del '95 dejaron por lo menos sin respuestas tres problemas que conciernen plenamente a las sociologías de Pierre Bourdieu y de Alain Touraine. Se trata de la forma en sí misma del movimiento, de las clases o fracciones de clases sociales comprometidas en la lucha, y por fin, del contenido político tanto implícito como explícito de ésta.

¿En qué medida se puede hablar de *un* movimiento social? ¿Indica el uso del singular que se puede entender a través de una sola denominación el conjunto de las luchas sociales en un momento dado? ¿Es admisible, desde un punto de vista de un análisis concreto, unificar las distintas manifestaciones de la conflictividad que marcan una coyuntura? ¿Se puede considerar como un objeto a la vez único y múltiple la lucha de los trabajadores en situación ilegal (los “Sin papeles”) desde el verano del '96 para obtener el derecho a una residencia legal, la lucha de los desocupados durante los inviernos del '97 y del '98 que pedían trabajo, la movilización del cuerpo docente, de los alumnos y de sus familias en la primavera del '98 en el departamento de la Seine-Saint-Denis en favor de una igualdad real respecto a las condiciones de estudio con el resto de Francia y la huelga general de los trabajadores de Renault Vilvorde después de la noticia del cierre de la fábrica?

Frente a este primer problema, la respuesta formalizada por la sociología de Alain Touraine es muy clara, puesto que concierne a una de sus temáticas principales. Se supone que la unicidad del espacio político y social existe en cada una de las sucesivas fases históricas y resulta de manera sistemática de la oposición central entre dos actores que luchan con la finalidad de obtener el control social del sistema de conocimiento y de imponer un cierto tipo de consumo del producto del trabajo. Alain Touraine propone un esquema del desarrollo histórico en el cual privilegia las nociones de dualidad y de identidad: en cada momento, uno de los dos protagonistas del conflicto central se vuelve el único capaz de asumir el nuevo rumbo de la acción histórica.

En relación con las hipótesis del sociólogo estadounidense Daniel Bell, la perspectiva avanzada por Alain Touraine tiene algo de profético: el declive del conflicto central de la sociedad industrial descalifica al movimiento obrero de manera irremediable y da por segura la posibilidad de su institucionalización y de su integración en el aparato del Estado. Corresponde al sociólogo la tarea de descubrir los nuevos actores del conflicto estructural de la sociedad aún en gestación y, sobre todo, de distinguir el momento del “gran rechazo” que es solamente un momento de transición en el proceso de desestructuración y de reconstrucción, de la expresión de un conflicto pasado y del verdadero movimiento social.

Esta lectura introduce un sesgo normativo. En efecto, importa más el hecho de descalificar ciertas formas de contestación social como formas arcaicas (la lucha del '95 en el sector público, por ejemplo), o de subrayar la novedad de otras (la movilización de los desocupados) que de pensar la unidad concreta que existe en el movimiento social. “Para que se forme un movimiento”, escribe Alain Touraine, “no basta que se oponga a una dominación; debe reivindicar en nombre de un atributo positivo”.¹⁵ Retoma así la triple calificación que ya había enunciado para todo movimiento social: los principios de identidad, de oposición y de totalidad.¹⁶

La cuestión de los protagonistas del conflicto y de su contenido político también se ve determinada por esta búsqueda de lo inédito. Si las luchas de los “Sin” (“Sin papeles”, “Sin alojamiento”, “sin trabajo” ... al ejemplo de los “Sin tierra”) conforman, en la concepción defendida por Alain Touraine, los “nuevos movimientos sociales”, la presencia de militantes políticos en su seno les hace correr el riesgo de una desviación. Lejos de representar una riqueza potencial, el acercamiento con las luchas laborales parece mutilar la dimensión cultural, es decir su posibilidad de contribuir a una regeneración del sujeto, de estos “nuevos movimientos sociales”. La frontera entre luchas sociales y luchas laborales es vista tan necesaria como insuperable.

¿Permite el constructivismo estructural de Pierre Bourdieu entender, por su parte, las articulaciones y las imbricaciones entre los conflictos del trabajo y los conflictos más transversales? “La única totalización posible” señala Louis Pinto cuando comenta la referencia que hace Pierre Bourdieu al móvil de Calder, “pasa por el conocimiento científico de la totalidad de los puntos y no por una consciencia que revele los fines últimos”.¹⁷ La teoría de los campos contribuye a poner en claro los fenómenos de dominación que actúan en el espacio social pero la ausencia de un orden de determinación entre los diferentes campos no ayuda a explorar la interdependencia entre estos fenómenos en el marco de un proceso general de reproducción del capital.¹⁸ Pierre Bourdieu justifica una triple ruptura con la teoría marxista en su concepción de las clases sociales; preten-

de romper, en particular, con una visión “economicista” que reduciría el espacio social multidimensional al único campo económico.¹⁹ La hipótesis de una autonomía de los campos sociales proviene de la idea que en cada uno de ellos juegan mecanismos de diferenciación a la vez similares y particulares, en el reto de obtener un capital específico. Además de esta segmentación del mundo social, el uso único del concepto de dominación en perjuicio de la noción de explotación prohíbe una concepción dinámica de las determinaciones sociales. De este modo, la unicidad de las luchas sociales es vista más bien como el resultado artificial de una coyuntura política - hoy el neoliberalismo - que como el producto de las relaciones sociales estructuradas por el modo de producción.

Nos parece que la perspectiva de la homología estructural otorga más importancia a la posición ocupada por el sujeto-agente - el que se fija en las posibilidades existentes en un campo dado en función del tipo y de la cantidad de capital que posee y en función de su propia interiorización de las prácticas y de las situaciones²⁰ - que en las condiciones de la lucha colectiva. Se pueden subrayar dos límites de esta perspectiva: si “el mundo social es dicho y construido de diferentes maneras”²¹ en la medida en que las clases sociales no existen por sí mismas (“en el papel”) sino por la mediación de la construcción política, la denuncia de los principios que permiten legitimar el orden social se impone como algo previo. El hecho de deshacer los mecanismos de alienación, los cuales se entienden en la sociología de Pierre Bourdieu como el resultado de la división social, como la objetivación no objetivada por el agente de una serie de pre-disposiciones; funciona gracias al entendimiento de “las luchas por clasificar” individuos y objetos. ¿Pero después qué? ¿Se puede considerar la alienación únicamente como el producto de una lucha de dominación simbólica? “Las relaciones de fuerzas se reproducen en parte en las visiones del mundo social que fortalecen, a su vez, la permanencia de esas relaciones. Por lo tanto los principios que estructuran las visiones del mundo se enraizan en las estructuras objetivas del mundo social así como las relaciones de fuerza están también presentes en las consciencias bajo la forma de categorías de percepción de estas relaciones”²². Como esta perspectiva percibe como único objetivo de la lucha política la voluntad de cambiar las categorías de percepción del mundo, el análisis solo puede dar cuenta de un aspecto fragmentario del problema y, en el peor de los casos, se confunde con una visión tautológica. Respecto a una perspectiva marxista, esta posición nos limita al campo de las formas tal como son creadas por la imposición de la forma mercancía y es notable su renuncia a remitir a la génesis de las relaciones sociales, es decir a entender como la ideología viene de y participa en las contradicciones del modo de producción capitalista.

Con la homología de las posiciones y la invariabilidad de la relación de dominación en un campo, se puede pro-

yectar unas alianzas temporales entre grupos pero sobre la base de “un malentendido más o menos consciente”.²³ En este sentido, se puede hablar sobre las luchas sociales después del otoño del '95 como luchas giratorias, “en la búsqueda de una unidad teórica y sobre todo práctica”.²⁴ Pero Pierre Bourdieu no oculta que esta unidad viene más bien de una causa externa, la ofensiva neoliberal, y no de condiciones estructurales únicas. Como las clases sociales aparecen solamente cuando se da una “representación y una voluntad de acción”, se entiende porqué para el sociólogo francés y sus discípulos, reunidos en la asociación “Raisons d’agir”, el riesgo consiste sobre todo en la posibilidad de una recuperación política, pues el portavoz de un grupo dice y muestra lo que es el grupo, que no existe sino a través de esta voz. La mediación política es entonces siempre sinónimo de una desviación en una lucha simbólica que acaba por existir por sí misma.

“No digan que el movimiento social excluye el movimiento político. No existe movimiento político que no sea social al mismo tiempo” decía Carlos Marx en las últimas líneas de *Miseria de la filosofía*. La limitación de todo conflicto a su única dimensión simbólica oculta una gran parte de la realidad y permite, solamente por un razonamiento lógico, superar la aparente fragmentación de las luchas sociales.

122

■ 2. Definir para abstraer, abstraer para entender el concepto

La consciencia ordinaria no percibe siempre la realidad de los hechos. El fenómeno puede no ser más que una apariencia: el bastón puesto en el agua aparece roto, para un observador del sentido común, el sol da vueltas alrededor de la tierra, se levanta y se acuesta. La ciencia va más allá de lo que la percepción propone, al comprender las ilusiones que puede contener. La física establece las leyes de la refracción, la astronomía opera la revolución copernicana con el heliocentrismo.

Los “hechos humanos”, individuales o colectivos, según el precepto de Durkheim tienen que ser analizados “como cosas”. Esta regla, que se puede entender de forma bastante diversa, incita a pensar, en prolongación con lo que se acaba de decir, que la evidencia social tiene trampas análogas, o por lo menos comparables, a las del mundo físico. La hegemonía del poder se confunde con un orden natural que propicia a algunos la autoridad *de jure*. Estas evidencias han evolucionado con el tiempo. Los Españoles perdieron su imperio por considerar que la riqueza se asimilaba al oro. Al principio del siglo XX, el desempleo era considerado como inevitable y sin paliativo, y según el *Grand Larousse*, en su edición de 1899, “el único remedio a este problema que se puede avanzar es la previsión”.

Para romper con las pre-nociones, un primer trabajo consiste en definir. Se trata de delimitar el objeto que se pretende analizar a través de la indicación de lo que lo es específico, y así decir lo que no es. “Omnis determinatio est negatio” afirmaba Spinoza²⁵: lo impreciso de lo que pensamos conocer bien, las confusiones y las selecciones arbitrarias son reemplazadas por una noción coherente, clara y distintiva. Estamos frente a un trabajo de abstracción.

La palabra y la cosa. Es útil recapitular rápidamente la historia del término, para tomar consciencia de su carácter polisémico y de los diversos sentidos que lo atraviesan.

Inicialmente, en griego antiguo existe la palabra *ap-hairesis*. Compuesta del prefijo *ápó* que marca la distancia y de *airéō* que significa tomar (y que dió herejía). En el *Critias* de Platón, está presente el sentido de reducción. Con Aristóteles, en sus *Analíticos posteriores*, se designa la abstracción.²⁶

El término, y su sentido, evolucionaron hasta tomar dos sentidos en la época contemporánea, en la cual se entiende por operación intelectual y resultado de ésta, con los sentidos negativos de “lo que elimina”, “lo que no toma en cuenta”. Pero este sentido no muestra toda la diversidad de los sentidos que los filósofos le han dado. El realismo especulativo de Aristóteles, se basa en la capacidad de la inteligencia para entender la esencia de las cosas, con una graduación del conocimiento que va de la sensación a lo teórico. Kant opera una revolución copernicana al poner en el centro de la problemática el ser-sujeto cuyas formas de la sensibilidad y las categorías del entendimiento estructuran el fenómeno. Hegel trata de ir más allá de la oposición entre fenómeno y noumeno gracias a una lógica en tres momentos, el momento abstracto del entendimiento, el momento dialéctico o negativamente racional, y el momento especulativo o positivamente racional. En este pensamiento en movimiento, hay varios niveles de abstracción, positivos y negativos. El más abstracto es el más concreto. En el curso de su historia, la consciencia se objetiva (exteriorización, *Veräusserung*) y a veces se pierde (alienación, *Entfremdung*).

Se puede descartar el idealismo hegeliano y el empirismo al preferir una perspectiva genético-estructuralista, en continuidad y en ruptura con Hegel, tal y como está expuesta en la *Introducción general a la crítica de la economía política*, en la cual el establecimiento de determinaciones abstractas definidas con precisión y puestas en relación conlleva a la reproducción de la situación concreta por la vía del pensamiento. Los mecanismos de la explotación son ocultados en el capitalismo y esta invisibilidad conduce a ilusiones. La abstracción está utilizada en sentidos progresivos y diferentes: proceso general del pensamiento, conceptos más sencillos, realidades fetichizadas, posibilidades teóricas, abstracciones reales (el tiempo de trabajo socialmente necesario), totalidad concreta.

Para construir el objeto “movimiento social”, una doble perspectiva es necesaria, diacrónica y sincrónica. El primer eje se centra en el proceso. Por su carácter factual, contingente, lo que significa sin causa, el movimiento social no está programado. Su acontecer no sigue un camino uniforme, lineal o circular, sino que se expresa a través de una espira²⁷ de forma irregular. Un primer trabajo consiste en establecer una periodización para señalar las etapas principales. Cada una de ellas tiene una extensión propia y una estructuración particular. Es posible entenderlas según el esquema que emplea Aristóteles para analizar la acción en una tragedia, principio, medio y final. La dificultad reside en la designación de las rupturas pertinentes y de los momentos ejes.

En el caso de la historia social reciente de Francia, se podrían distinguir siete espiras y ocho picos de huelgas. Entre 1945 y '49 se desarrollan los conflictos de la inmediata posguerra, las luchas de la esperanza, la penuria y la decepción, con dos picos en 1947 y '49. Entre 1950 y '58, los conflictos salariales se inscriben en un contexto de trabajo desdeñado, con un auge particular en 1953. Las huelgas del crecimiento económico se desarrollan de 1959 a '65, donde la movilización de los mineros constituye el punto fuerte. Del '66 al '73 se dan a lugar las huelgas del crecimiento perturbado, con el acontecimiento histórico del '68. Entre el '75 y el '85, el nivel de conflictividad baja, después del '76, en el momento de la crisis perturbadora, a la que prolonga el período del rigor difícilmente repartido (1986-94). El sector público muestra un nivel de conflictividad más fuerte que el privado y participa en el pico del '89. El año 1995 constituye un momento importante y probablemente una ruptura. Desde esa fecha, estamos en el período del rechazo del liberalismo desenfundado. La victoria electoral de la izquierda en el '97 es en parte un resultado de las luchas sociales del '95. Pero paradójicamente, la acción del gobierno socialista ha contribuido a frenar el movimiento social que permitió su regreso al poder. La periodización muestra las continuidades y las rupturas, las singularidades de una fase y su ritmo específico.

Tres tendencias importantes pueden observarse en las luchas sociales del último período. Primero, una gran variación coyuntural de los temas de reivindicación. En el '94-'95, las movilizaciones se centran en la cuestión salarial, pues los trabajadores del sector privado reivindican un aumento generalizado de 1500 F. El movimiento de noviembre-diciembre de 1995 se da sobre el plan de reforma del seguro social propuesto por el Primer Ministro Juppé, y sobre los regímenes específicos de jubilaciones. Los transportistas en huelga en el '96 y '97 reclaman mejores condiciones de trabajo y una alza de salarios, temas que los trabajadores de las empresas públicas de transportes urbanos completan con la creación de empleos y la jubilación a los 55 años. En el '98 y '99 los docentes reclaman más puestos y recursos suplementarios para mejorar la escuela pública. Los traba-

jadores del transporte público en París hacen huelgas frecuentes sobre el tema de la seguridad. No se puede entender este período únicamente como irregular. Las encuestas muestran que los principales temas de preocupación siguen siendo el empleo, el salario y la protección social. El descontento social está limitado por el nivel de desocupados y la división sindical, y se puede hablar de una conflictividad contenida. La ausencia de una estrategia unificadora, como lo muestran las negociaciones y los conflictos localizados sobre la aplicación de las 35 horas semanales, proyecta a cada uno sobre su situación personal y lo lleva a utilizar los conflictos del momento para la satisfacción de sus necesidades personales, en un proceso de desvalorización de los movimientos de masa y de la reivindicación profesional corporativa. En un período en el cual se busca institucionalizar cada vez más el recurso de la huelga, y en el cual la observación de las relaciones sociales se ha profundizado, en particular por el recurso a las encuestas de opinión, se nota una imprevisibilidad mayor por la utilización de las oportunidades o por las transversalidades inéditas entre estudiantes y trabajadores, desocupados, empleados permanentes o precarios.

La segunda característica de la conflictividad actual está en la extensión de las formas de acción. Cesar el trabajo cuesta, y no es eficaz si no es colectivo. Esto favorece otras formas de lucha, micro-huelgas, trabajadores que se encadenan a las puertras de las fábricas, ocupaciones de edificios públicos, secuestros de dirigentes, manifestaciones con nuevas formas, huelgas de hambre. La preocupación por atraer la atención de los medios de comunicación es constante.

El último elemento es la diversificación de los niveles de acción. Entre lo local y lo nacional, los niveles regionales y europeos se han desarrollado, sin prescindir de las dinámicas mundiales. Pero una distancia permanece entre el registro de acción de un capitalismo globalizado y la referencia al territorio que sigue siendo la norma en el mundo sindical.

Una tal enumeración de conflictos puede dar el sentimiento de una fragmentación que corresponda únicamente a la realidad social. La decisión de clasificarlos puede tener por único motivo la voluntad de descripción, pero también puede ayudar a revelar las tendencias y servir a lecturas comprensivas. Afirmar que existen vínculos estructurales entre los conflictos laborales y las luchas más transversales no lleva a negar que las organizaciones sindicales encuentran dificultades para dar un sentido colectivo a un movimiento cuya cualificación no es evidente. La unidad a geometría variable se substituyó por la guerra de posiciones: el camino que conduce al restablecimiento de una fuerza colectiva parece aún largo.

Notas

* Cientista Político. Integrante del CEVIPOF (Centre d'Etudes de la Vie Politique Française). Director del Ressay (Recherche Sociétés et Syndicalisme) y de la Revista francesa Mauvais Temps. Autor, junto a Sophie Beroud del libro *Le Mouvement Social en France*, ed. La dispute, Francia, 1998.

** Cientista Político. Profesora en el Instituto de Estudios Políticos de París. Miembro del CEVIPOF y de la Revista francesa Mauvais Temps.

1. BEROUD (Sophie), MOURIAUX (René), *Le Souffle de décembre, le mouvement de décembre 1995, continuités, singularités, portée*, Paris, Syllepse, 1997 ; BEROUD (Sophie), MOURIAUX (René), VAKALOULIS (Michel), *Le Mouvement social en France, essai de sociologie politique*, Paris, La Dispute, 1998 ; BEROUD (Sophie), MOURIAUX (René), "Le Décembre des chômeurs ou la force des faibles" in MOURIAUX (René), dir, *L'Année sociale*, Paris, Editions de l'Atelier, 1999.

2. El movimiento de huelgas del otoño del '95 se desarrolló, entre otras cosas, en reacción al plan del gobierno de derecha de Alain Juppé de reformar el sistema público de seguridad social, y de introducir una privatización parcial de este sistema. Este plan será apoyado rápidamente por Nicole Notat, dirigente de la CFDT, que critica las reacciones sindicales como arcaicas. El 30 de noviembre, la revista *Esprit* publica una petición de apoyo a la posición asumida por Nicole Notat y el gobierno. Alain Touraine aparece como la figura central de esta petición. En reacción el 15 de diciembre, un grupo de intelectuales publica en el diario *Le Monde* un manifiesto de apoyo a los huelguistas, grupo constituido alrededor de Pierre Bourdieu. Sobre la constitución de estas peticiones ver *Le décembre des intellectuels français*, Paris, Raisons d'agir, 1998.

3. "Saisir la logique qui est propre à l'objet en ce que cet objet est propre", MARX (Karl), *Critique du droit politique hégelien*, Paris, Editions sociales, 1975, p. 49.

4. SEVE (Luvien), "La 'mauvaise' abstraction", *Une introduction à la philosophie marxiste*, Paris, Editions Sociales, 1980, p. 72.

5. VERRET (Michel), "Pour une définition distinctive de la classe ouvrière", *Chevilles ouvrières*, Paris, Editions de l'Atelier, 1995, p. 41.

6. FILLIEULE (Olivier), PECHU (Cécile), *Lutter ensemble. Les théories de l'action collective*, Paris, L'Harmattan, 1993 ; LAFARGUE (Jérôme), *La Protestation collective*, Paris, Nathan, 1998 ; NEVEU (Eric), *Sociologie des mouvements sociaux*, Paris, La Découverte, 1996.

7. CHAZEL (François), "Mouvements sociaux" in BOUDON (Raymond), *Traité de sociologie*, Paris, PUF, 1992, pp. 263-312.

8. En un estudio dedicado a la movilización de los extranjeros en situación irregular – los dichos "Sin papeles" – Johanna Siméant no comparte en nada nuestro punto de vista. Le parece pertinente, al contrario, utilizar un modelo "empresarial" de la movilización colectiva para entender la lucha de los "Sin papeles", aunque reconoce que se trata de una visión individualista, utilitarista y "muy poco preocupada por una concepción socializada de las relaciones humanas". Escribe que se debe reconocer que la teoría de movilización de los recursos ha favorecido un nuevo descubrimiento del "milagro" de lo colectivo (en contra de la corriente organicista de la sociología del comportamiento colectivo a la cual sucede) in SIMEANT (Johanna), *La Cause des sans-papiers*, Paris, Presses de Sciences-Po, 1998, p. 53.

9. TARROW (Sidney), *Power in movement, social movements, collective action, and politics*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.

10. TOURAINE (Alain), *Le mouvement de mai ou le communisme utopique*, Paris, Seuil, 1968 ; *Production de la société*, Paris, Seuil, 1973 ; *La voix et le regard. Sociologie des mouvements sociaux*, Paris, Seuil, 1978 ; *Le Retour de l'acteur*, Paris, Fayard, 1985 ; con DUBET (François), WIEVORKA (Michel), *Le Mouvement ouvrier*, Paris, Fayard, 1984.

11. TOURAINE (Alain), dir, *Le Grand refus. Réflexions sur les grèves de décembre 1995*, Paris, Fayard, 1996.

12. BOURDIEU (Pierre), *Contre-feux, propos pour servir à la résistance contre l'invasion néo-libérale*, Paris, Liber-Raisons d'agir, 1998, 125p.

13. BOURDIEU (Pierre), dir, *La Misère du monde*, Paris, Seuil, 1993.

14. PINTO (Louis), *Pierre Bourdieu et la théorie du monde social*, Paris, Albin Michel, 1998, 263p.

15. TOURAINE (Alain), *Comment sortir du libéralisme ?*, Paris, Fayard, 1999, p. 72.

16. TOURAINE (Alain), *La Voix et le regard. Sociologie des mouvements sociaux*, op. cit. .

17. PINTO (Louis), op. cit, p. 188.

18. ANDREANI (Tony), "Bourdieu au-delà et en deça de Marx", *Actual Marx*, n° 20, Paris, PUF, 1996, p. 51.

19. BOURDIEU (Pierre), "Espace social et genèse de classe", *Actes de la recherche en sciences sociales*, n° 52-53, 1984, p. 3.

20. BOURDIEU (Pierre), "Espace social et pouvoir symbolique", *Choses Dites*, Paris, Editions de Minuit, 1987, p. 152.

21. BOURDIEU (Pierre), "Espace social et genèse de classe", op. cit, p. 4.

22. *Ibid*, p. 6.

23. *Ibid*, p. 10.

24. BOURDIEU (Pierre), "Les chercheurs, la science économique et le mouvement social", *Contre-feux*, op. cit., p. 10.

25. SPINOZA (Baruch), "Lettre à Jaring Jelles du 2 juin 1674", en *Œuvres complètes*. Paris, Gallimard, La Pléiade, 1954, p. 1230.

26. ARISTOTELES, *Organon IV. Los segundos analíticos*, I.18.81 b Edición francesa : París, Vrin, 1995, p. 95

27. Es más usual utilizar la metáfora del ciclo para avocar una secuencia política o económica. Preferimos la de espira que tiene como ventaja el mostrar que el fin de un periodo no significa el regreso al punto de partida.

